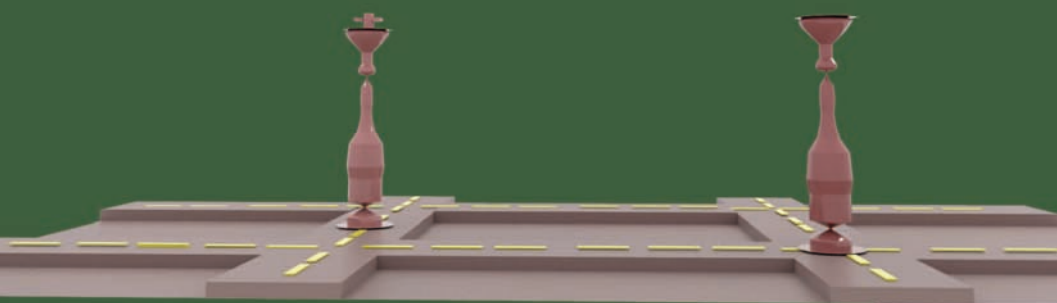


Conflicto interno y normatividad jurídica

Doscientos años de
evolución paralela



Daniel José Vásquez Hincapié

Conflicto interno
y normatividad:
doscientos años de evolución
paralela

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Daniel José Vásquez Hincapié

Vásquez Hincapié, Daniel José / autor

Conflicto interno y normatividad : doscientos años de evolución paralela -- / autor Daniel José Vásquez Hincapié -- Bogotá: Fundación Universitaria del Área Andina, 2020.

ISBN (impreso): 978-958-5539-93-8

ISBN (digital): 978-958-5539-94-5

280 páginas : tablas; 27 cm.

Incluye índice

.

1. Colombia - historia. -- 2. Colombia - periodo de violencia. -- 3. Economía - historia - Colombia.
Catalogación en la fuente Biblioteca Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá)

330.6 -- scdd22

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

© Fundación Universitaria del Área Andina. Bogotá, mayo de 2020.

© Daniel José Vásquez Hincapié.

ISBN (impreso): 978-958-5539-93-8

ISBN (digital): 978-958-5539-94-5

Fundación Universitaria del Área Andina

Calle 70 No. 12-55, Bogotá, Colombia

Tel: +57 (1) 7424218 Ext. 1231

Correo electrónico: publicaciones@areandina.edu.co

PROCESO EDITORIAL

Director editorial: Omar Eduardo Peña Reina

Coordinación Editorial: Camilo Andrés Cuéllar Mejía, Héctor Alfonso Gómez Sánchez

Diseño de cubierta: Stephanie Lizeth Alvis Garzón

Correo electrónico: lizalvis93@hotmail.com

Corrección de estilo, diagramación e impresión:

Proceditor Ltda.

Calle 1C No. 27A-01, Bogotá, Colombia

Tel.: 757 9200

Correo electrónico: proceditor@yahoo.es

Impreso en Bogotá, Colombia.

Depósito legal según Decreto 460 de 1995.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra y su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método sin autorización escrita de la Fundación Universitaria del Área Andina y sus autores.

BANDERA INSTITUCIONAL

Pablo Oliveros Marmolejo †
Gustavo Eastman Vélez
Miembros Fundadores

Diego Molano Vega
Presidente de la Asamblea General y Consejo Superior

José Leonardo Valencia Molano
Rector Nacional y Representante Legal

Martha Patricia Castellanos Saavedra
Vicerrectora Nacional Académica

Ana Karina Marín Quirós
Vicerrectora Nacional de Experiencia Areandina

María José Orozco Amaya
Vicerrectora Nacional de Planeación y Calidad

Darly Escorcía Saumet
Vicerrectora Nacional de Crecimiento y Desarrollo

Erika Milena Ramírez Sánchez
Vicerrectora Nacional Administrativa y Financiera

Felipe Baena Botero
Rector - Seccional Pereira

Gelca Patricia Gutiérrez Barranco
Rectora - Sede Valledupar

María Angélica Pacheco Chica
Secretaria General

Omar Eduardo Peña Reina
Director Nacional de Investigaciones

Luis Alfonso Lizcano Higuera
Decano Facultad de Derecho

Frank Jimmy González Sánchez
Director Programa de Derecho, sede Bogotá

Camilo Andrés Cuéllar Mejía
Subdirector Nacional de Publicaciones

Contenido

Presentación _____	9
Precisiones necesarias para entender el papel de las Fuerzas Militares _____	15
Lucha por el poder entre el español europeo y el español criollo como antecedente del conflicto armado _____	21
La guerra por el poder para los criollos y la independencia política de España _____	45
Los conflictos para definir el dominio entre criollos _____	105
Obreros y campesinos se interesan por el poder _____	131
De nuevo la guerra de los representantes comunistas por el poder _____	159
Del objetivo político al objetivo económico para alcanzar el poder _____	225
El inicio de la construcción de un nuevo Estado _____	241
Conclusión general _____	255
Referencias _____	261

Índice de tablas y figuras

Tabla 1.	Regimiento de milicias de caballería _____	48
Tabla 2.	Regimiento de voluntarios de infantería de Santafe _____	49
Tabla 3.	Batallón de infantería de guardias nacionales de Santafe del Nuevo Reino de Granada _____	52
Tabla 4.	Fusilamientos del nuevo régimen _____	62
Tabla 5.	Reinicio de la guerra a partir de 1817 _____	67
Tabla 6.	Número de prisioneros en manos de la guerrilla de las FARC _____	209
Tabla 7.	Cifras de acciones violentas, por característica _____	236
Tabla 8.	Cifras de acciones violentas, por año _____	236
Tabla 9.	Cifras de acciones violentas, por gastos _____	237
Tabla 10.	Aprobación de normatividad, vía <i>fast track</i> _____	242
Tabla 11.	Conformación de los tribunales para la Justicia Especial para la Paz _____	249
Tabla 12.	Participación militar en decisiones políticas del Estado vs. resultados operacionales _____	259
<hr/>		
Figura 1.	Gráficas del gasto militar (% del PIB) desde 1960 hasta el 2016. Punto más bajo y punto más alto. _____	238
Figura 2.	Grupos disidentes de las FARC, presuntos y confirmados en el 2017 _____	252

Presentación

Realizar un trabajo que recoge trozos de historia es una dificultad mayor para quien no es historiador. Por tanto, de quien lea este libro solo espero que sienta recibir una información que le permita conocer cómo hemos sido, cómo nos han gobernado y qué podemos esperar de nuestra sociedad, si se tiene bien presente que el antecedente ha sido de violencia y la historia la han escrito no los vencedores, que nunca han existido, sino, de manera alterna, los dominadores apoyados en la fuerza de las armas.

Se considera imperativo realizar una síntesis histórica con visión militar de los diferentes periodos del conflicto porque se busca observar que, a la par con la lucha violenta, se han desarrollado instituciones y normas que avanzan en paralelo, sin tocarse ni dañarse, en una especie de macabro acuerdo de mantenimiento del *statu quo*, mediante el cual cambian unos y otras sin beneficio para el ciudadano. También podrá estudiarse el mismo objetivo tan solo desde un punto de vista político, pero cuando lo que se busca es relevar la participación de los militares en nombre de la política, el conocimiento de la actividad militar se convierte en una necesidad para entender el por qué debe ser una preocupación, incluso para los militares, la falta de delimitación de atribuciones bajo la condición de respeto al Estado y al pueblo en su condición de soberano.

La historia de la patria se encuentra ligada a la de un conflicto permanente de su sociedad, y la forma en que se escribió es como la aceptamos, de manera que a fin de hacer útil este trabajo se ha procurado acudir en cada momento histórico al relato que nos parece coherente con las consecuencias producidas, hasta llegar al hecho notable de la posibilidad de la comunicación inmediata de todas las posturas posibles ante una situación presentada (lo cual nos puede facilitar mejores apreciaciones sobre el desarrollo de nuestra vida como comunidad).

Por lo general, se ha dicho que la historia es una verdad oficial y, por tanto, aceptemos que hasta la aparición de los medios masivos de comunicación ha sido la de los gobernantes. Sin embargo, de ahí en adelante, en especial a partir del advenimiento del Estado social de derecho —que determinó la posibilidad de juzgar y criticar a los gobernantes, sumado a que los jueces se sintieron independientes del Ejecutivo administrador y político—, hemos adquirido una mayor posibilidad de acercarnos a la verdad de lo que pasa. Esta razón, además, nos acerca a las sentencias judiciales antes de que el ganador de la guerra política ordene el cambio de la historia como vencedor con responsabilidades solo atribuibles a los vencidos, en pretensión de un reinicio con previsión de resultados cíclicos, porque solo se han cambiado las modalidades de la violencia.

La investigación inicia con un relato del periodo correspondiente al antecedente bicentenario de vida independiente de Colombia, el cual se refiere a los cincuenta años que constituyen el preámbulo de violencia iniciada con la Revolución de los comuneros. Esta no fue la revolución de un pueblo, sino la de su clase dirigente intermedia contra los gobernantes superiores españoles, es decir, no se trató de liberar al pueblo del oprobio de una dominación abusiva, sino el deseo de acceder a ese domi-

nio. Este es el periodo en el que, finalmente, quedó planteada la guerra entre los españoles y sus descendientes americanos.

La segunda parte trata sobre el periodo que corresponde a la lucha por el cambio de las clases gobernantes españolas por criollas. Su estudio permite observar la manera como los descendientes españoles alcanzaron su objetivo, sin que significara para el resto de los pobladores indígenas, negros y mestizos un logro que mejorara de manera ostensible su modo de vida, pues la tenencia de la tierra y los medios de producción no sufrieron cambio alguno.

El conocimiento de ochenta años de guerras conforma la tercera parte, la cual abarca de 1819 hasta 1903. Estos años no presentan cosa distinta a la guerra de independencia, en la que solo cambió el enemigo en confrontación —que no era el español europeo, sino el mismo criollo con el cual debía disputarse la supremacía en el orden gobernante—, con intereses más difusos a los que obligaba el mayor número de habitantes que ocupaban territorios generadores de nueva riqueza y poderes que requerían consolidarse.

El ciclo histórico se ve repetido en la cuarta parte con otros actores, esta vez dirigentes o líderes obreros interesados en participar en el poder, influenciados ideológicamente por el socialismo que irrumpe en el mundo con la Revolución rusa. Lo que tardó para los españoles criollos trescientos cincuenta años, les llevó cincuenta a los nuevos aspirantes al gobierno del Estado, pues en la guerra de las élites liberales y conservadoras por la dominación del poder del Estado dejaron sin atención el bienestar de la población, y se centraron fielmente en el objetivo de la soberanía del Estado y su engrandecimiento, entendiendo, claro está, por Estado al gobernante. Así como en la revolución

comunera, el liderazgo obrero y campesino hicieron su revolución, negociaron sus aspiraciones y recibieron frustraciones que, posteriormente, fueron las motivaciones para una nueva guerra por el cambio de la clase gobernante.

En la quinta parte encontramos el relato de la guerra de guerrillas por el dominio del poder con una multiplicidad de actores e intereses de gran complejidad, en cuyo pleno desarrollo aparece el narcotráfico como actor indirecto que alimenta el conflicto con su poder corruptor y económico.

La sexta parte nos conduce a un enfrentamiento entre las fuerzas del Estado, los paramilitares y las guerrillas fortalecidas por el poder económico, hasta llegar a la situación en la que ya no se trata del dominio del poder político del Estado, sino de su poder económico, a fin de alcanzar mediante este el dominio político, de nuevo sin dar importancia a la suerte de los gobernados.

Finalmente, en la séptima parte se desarrolla una reseña histórica de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que luego se presentan como un nuevo partido político, aunque se mantiene la organización narcoterrorista FARC en guerra contra el Estado, junto con el ELN, y proliferan los pequeños ejércitos de señores feudales del narco, lo cual tanto en el Gobierno como en los políticos profesionales se evidencia en sus prácticas corruptas con lo público ante la inoperancia de jueces, instalados en sus cargos para ejercer la justicia selectiva que atiende solo a la delincuencia de ruana y se hace la de la vista gorda con la de cuello blanco.

Concluye el trabajo con algunas apreciaciones sobre lo que es visible sin pretender realizar proyecciones ni prospectivas, porque los gobiernos diseñan normas sobre el orden público cuyo

propósito no es solucionar los problemas, sino reaccionar ante las realidades de cada momento, de manera que nuestro futuro es tan incierto como nuestra capacidad o interés para forzar cambios beneficiosos que nos ilusionen y lleven a pensar que, finalmente, podemos legar un futuro promisorio a las próximas generaciones.

Daniel José Vásquez Hincapié

Precisiones necesarias para entender el papel de las Fuerzas Militares

No se puede manifestar que los presidentes jamás tuvieron intenciones de solucionar los conflictos que afectaron al pueblo durante sus gobiernos, pero es necesario entender que, una vez se alcanzó la independencia, en 1819, y por lo menos hasta 1930, los gobernantes de entonces orientaron el esfuerzo militar a consolidar, primero, su dominio personal, y luego el de sus partidos, pues fue a partir de esta última fecha que la política intervino en el manejo de la fuerza armada del Estado. De esta manera, el ejercicio de sus funciones fue la expresión de las medidas tomadas en su búsqueda de alcanzar la paz entre los colombianos, desde la violencia partidista, pasando por la guerrillera y terrorista hasta la del dominio económico, aunque dichas políticas no hayan señalado derroteros claros a las Fuerzas Militares, sino más bien funciones casi siempre controversiales.

Cuando apenas se discutía y se procuraba organizar el Estado, los políticos provenientes de la monarquía asumieron la forma

presidencial para gobernar la nueva república, y el presidente fungió inicialmente como comandante militar con atribuciones de conductor de las operaciones de la guerra, hasta que, por medio de la Constitución de 1821, se le atribuyó la función de dirección de las Fuerzas Militares: “Tiene en toda la República el mando supremo de las fuerzas de mar y tierra, y está exclusivamente encargado de su dirección, pero no podrá mandarlas en persona sin previo acuerdo y consentimiento del Congreso”¹.

Los caudillos militares gobernantes tuvieron aquí la primera y definitiva separación entre el ejercicio de dirigir y el de mandar, y se estableció así a partir de esto que el presidente proporciona las políticas y direcciona el quehacer militar, pero no dirige operaciones militares en el terreno.

Posteriormente, la Constitución de 1886 le otorgó la calidad de “Jefe de los Ejércitos de la República”, como suprema autoridad administrativa², y en 1944 se le dio carácter legal a dicha función al determinarlo como “Jefe Supremo de las Fuerzas Militares”³. Hasta entonces no se hablaba de políticas de seguridad y defensa nacional, sino de que las Fuerzas Militares habían actuado de acuerdo con el mandato constitucional, bajo las órdenes del presidente, ante las amenazas tanto internas como externas, pues su función era la defensa del Estado contra todo ataque e invasión enemiga, así como evitar disturbios y desórdenes públicos dentro de las fronteras y garantizar el acatamiento de la ley.

A partir de 1951 se dispuso que el mando militar lo ejercía el presidente con una sucesión de mando definida en el ministro

¹ CONSTITUCIÓN de 1821, Art. 117.

² *Ibídem*, art. 120.

³ DECRETO 102 del 31 de diciembre de 1944.

de Guerra, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Militares, el inspector general de las Fuerzas Militares, los directores del Ejército, de la Armada y de la Aviación, y los comandantes de unidades operativas. Todos ellos militares, lo cual constituía una evidente muestra de la ausencia de participación y de la subordinación militar al poder civil en las decisiones militares⁴, ya que el ministro de Guerra, al ser un general en servicio activo, ejercía funciones políticas, mientras el jefe del Estado Mayor General se constituía en un órgano de mando del Gobierno⁵.

En 1965, luego del nacimiento formal de los principales grupos subversivos que habrían de afectar violentamente el orden público nacional, por medio del Decreto 3398, el presidente fue investido como suprema autoridad administrativa responsable de la defensa nacional, con funciones de decretar la movilización y la desmovilización nacional, dirigir las operaciones de la guerra y determinar en estas las funciones de entidades públicas y particulares, además de presidir cuando lo estimara conveniente el Consejo Superior de Defensa Nacional, integrado este por el ministro de Defensa —quien lo presidía en ausencia del presidente, en un ejercicio que, como general activo, lo ubicaba en posición de superioridad jerárquica frente a los demás integrantes—, el ministro de Gobierno, de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Hacienda, de Trabajo, de Comunicaciones y Obras Públicas, el comandante general de las Fuerzas Militares —a quien correspondía preparar la apreciación estratégica nacional-APEN (documento primario), el plan de guerra, el plan de defensa y seguridad interior y la conducción de las operaciones militares, y el jefe del Estado Mayor Conjunto⁶, organización y

⁴ DECRETO 835 del 16 de abril de 1951, Art. 3.

⁵ DECRETO 835 del 16 de abril de 1951, Art. 12.

⁶ DECRETO 3398 del 24 de diciembre de 1965.

funciones que fueron ratificadas en 1968⁷. Se evidenció de nuevo, entonces, que el ministro fungía como coordinador entre el Gobierno y las Fuerzas Militares, es decir, ejercía funciones políticas.

El presidente volvió a ser investido en 1971 como comandante en jefe de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con las funciones de presidir el Consejo Superior de Defensa Nacional y de aprobar los documentos primarios de seguridad nacional, los cuales debía preparar la Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Defensa Nacional (CSDN), ejercida por el jefe del Estado Mayor Conjunto, quien además cumplía funciones de ejecutar las disposiciones del consejo y de coordinación y control de las tareas impuestas a los frentes del poder⁸. Es decir, para la fecha, la milicia definía los objetivos nacionales e intervenía en la conducción del poder civil.

Mediante el Acuerdo n.º 1 de 1975, firmado por el presidente López Michelsen, se fijó que el Consejo Superior de Defensa Nacional debía elaborar los documentos primarios, mientras el ministro de Defensa debía elaborar los documentos secundarios. Luego, en el mandato de Belisario Betancur Cuartas, en 1984, de nuevo se asignan al comandante general de las Fuerzas Militares funciones de preparar los documentos primarios y secundarios, así como de ejercer el mando y la conducción estratégica⁹, es decir, se le devolvió a los militares el ejercicio de facultades de poder político.

Con la nueva Constitución política, fundamentada en el respeto por la dignidad humana en una nación con crecientes índices

⁷ LEY 48 de 1968.

⁸ DECRETO 2335 de 9 de diciembre de 1971.

⁹ DECRETO 2218 de 1984.

de violencia, en 1992 se creó el Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional (CSSDN) mediante una fusión del Consejo Nacional de Seguridad (creado por la Ley 52 de 1990), el Consejo Superior de Defensa Nacional (creado por el Decreto 3398 de 1965) y la Comisión Asesora y Coordinadora de las Acciones contra los Escuadrones de la Muerte (creada por el Decreto 813 de 1989), nuevo organismo que sería integrado por el Ministerio de Gobierno, los órganos de seguridad y el consejero presidencial para la defensa y la seguridad nacional con funciones de oficiar como secretario permanente, con lo cual se deslindaba de nuevo a los militares de la función política. A sus deliberaciones podían ser invitados los ministros de Relaciones Exteriores o el de Justicia, dependiendo de si el tema trataba sobre asuntos externos o internos, o al procurador u otros funcionarios según la situación en estudio¹⁰.

En el 2000, el Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional (CSSDN) se incluyó dentro de la organización del Ministerio de Defensa¹¹ que, por medio del Decreto 4748 de 2010 pasó a denominarse “Consejo de Seguridad Nacional”¹². Con el Decreto 469 de 2015 se realizó su última modificación, en la cual se determinan como sus miembros al presidente de la República, los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa y Hacienda, el jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, el ministro Consejero para el Posconflicto, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el comandante general de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional¹³.

¹⁰ DECRETO 2134 de 1992.

¹¹ DECRETO 1512 de 11 de agosto de 2000, Art. 6.

¹² DECRETO 4748 de 23 de diciembre de 2010, Art. 3.

¹³ DECRETO 469 de 17 de marzo de 2015, Art. 1.

A pesar de los cambios en su denominación y en su conformación, lo evidente es que son las Fuerzas Militares el único organismo interesado en planear y desarrollar estrategias para la defensa y la seguridad interna de la nación. El Gobierno señala las políticas y son aún los generales quienes señalan, de acuerdo con las capacidades que le otorga el Estado a las Fuerzas Militares, cómo y hasta dónde pueden llegar a cumplirse.

Lucha por el poder entre el español europeo y el español criollo como antecedente del conflicto armado

Revolución de los comuneros

La primera causa de conflicto en la Colonia se generó por el distanciamiento entre los criollos poseedores del poder económico, heredado de las encomiendas recibidas por los conquistadores, y los españoles poseedores del poder político —al que añadieron también las riquezas recibidas por encomiendas y mayorazgos—. Esto en razón a que los primeros alegaban poseer la misma hidalguía de los segundos, y a que estos no aceptaban el trato igualitario al aducir que los criollos tenían su heredad manchada con la sangre de negros o de indios, es de-

cir, por su carácter de mestizos. Esta diferencia entre las clases dominantes no afectaba al pueblo porque la Corona intervenía y lo defendía de los abusos de la oligarquía criolla por intermedio de sus representantes en el Gobierno, pero el transcurrir pacífico lo rompió la propia política colonial que desconectó al pueblo de la Corona y desconoció las aspiraciones del pueblo de adquirir tierras o disfrutar de sus resguardos.

A pesar de la situación, el detonante de la revuelta comunera que puso en tímido contacto a la oligarquía criolla con el pueblo fue la puesta en ejecución de la Real Orden del 17 de agosto de 1870, divulgada por el regente visitador general Juan Bautista Gutiérrez de Piñeres, mediante la cual, “con motivo de las urgencias de la guerra (entre España e Inglaterra) se aumenta en 2 reales cada libra de tabaco y otros 2 al azumbre (medida de líquidos) de aguardiente”.

También con la misma motivación se aumentó el porcentaje de las alcabalas mediante una “instrucción general para el más exacto y arreglado manejo de las reales rentas de Alcabala y Armada de Barlovento”. Manuel Briceño (1880) describió el contenido de las disposiciones de impuestos en los siguientes términos¹⁴:

El doctor Piñeres la restableció y ordenó que se cobrara “de aquellos géneros y efectos que en cada distrito se gravaron al tiempo de su imposición, y en la cantidad que entonces acordaron los respectivos Cabildos y determinaron los Ministros Reales comisionados para el asunto”.

¹⁴ BRICEÑO Manuel, (1880), Los Comuneros, Primera Edición Imprenta de Silvestre y Compañía, editado por Carlos Valencia Editores, Litografía Paloquemao, Marzo de 1977, Segunda Edición, págs. 2-3.

Dividió la-Alcabala en quince clases o ramos:

1a. Efectos de Castilla-Comprendía todos los géneros, frutos o efectos que se introducían de España, y que debían pagar o asegurar la Alcabala al hacerse la introducción,

2a. Efectos de la tierra-Comprendía todos los géneros y ropas de cualquiera clase que se fabricasen en el país; el azúcar, conservas, panelas, miel y toda clase de dulces; el cacao y demás frutos; el jabón, los cueros y cordobanes,

3a. Las pulperías-Debían pagar no sólo las tiendas a que se daba este nombre, sino también todo puesto donde se vendieran géneros, frutos, carnes y cualquiera otra clase de efectos.

4a. Las tiendas de mercaderes-Comprendía a todos los que vendían mercancías compradas a los introductores.

5a. Las carnicerías-Se debía pagar por la venta de carne, sebo, cueros, etc.

6a. Los ganaderos y-Comprendía toda venta o cambio que se hacía en las haciendas, estancias o trapiches.

7a. Las fincas y heredades-Debía pagarse por la venta o cambio de toda finca raíz.

8a. Los censos-Se debía pagar por la imposición de todo censo, y se cobraba al imponerlo o al redimirlo.

9a. Las almonedas y contratos públicos-Comprendía toda venta judicial.

10a. Del viento-Los traficantes, transeúntes o forasteros, que no tenían domicilio fijo, pagaban en el lugar donde hacían sus tratos. Pertenecían a esta clase todos los cambios de bienes muebles o inmuebles no comprendidos en las otras.

11a. Los artistas y menestrales-Debían pagar por el arte u oficio que ejercieran.

12a. Las administraciones foráneas-Comprendía la cuota que pagaban los administradores subalternos de las rentas.

13a. Los arriendos-Comprendía el pago de la contribución que debían satisfacer los rematadores de las rentas.

14a. Los comisos y condenaciones-Comprendía la parte que tenía la Real Hacienda en los comisos y penas pecuniarias.

15a. Falta de torna-guías-Contribución que pagaban los que no las tenían en la conducción de sus frutos, mercancías, etc.

Estaban exentos del pago de la Alcabala: los caballos ensillados y enfrenados-los libros en latín o romance-los halcones y alzones-el maíz y otras semillas que se vendieran al por menor en los mercados-el oro, plata, cobre y rasuras que se compraran para la fábrica de moneda-los bienes muebles y raíces dados en dote-las armas ofensivas y defensivas-las pinturas-las medicinas-los sombreros de la fábrica real de Madrid-los trapos recogidos para enviarlos a España.

Todo individuo estaba obligado a llevar una cuenta comprobada de lo que producía, compraba o vendía, y esta cuenta tenían derecho de examinada los administradores de las rentas. Estos ejercían una autoridad verdaderamente despótica, siendo superiores a los Jueces ordinarios en el conocimiento de las causas por defraudación de las rentas e imposición de los castigos. A todo esto se agregaba la incomodidad que proporcionaba la indispensable formalidad de las guías y torna-guías.

La guía era “un documento auténtico con que se compraba la legitimidad con que se conducían los efectos que en ella se expresaban”.

En la guía debía especificarse con claridad y precisión el número y calidad de los géneros, frutos, etc. para que se daba, y el que la pedía debía acreditar la procedencia de los efectos. La torna-guía

era una certificación que comprobaba haberse satisfecho la Alcabala en el punto en donde se hacía la venta, certificación que debía presentarse en la oficina que extendía la guía.

A las contribuciones de Armada de Barlovento y Alcabala se agregaban el monopolio de la sal, el aguardiente, el tabaco y las barajas; los peajes, tributos, correos, papel sellado y el “gracioso donativo”. Multitud de empleados estaban encargados del cobro de estas contribuciones y de la administración de los estancos. La conducta de estos empleados hacía insoportable la vida.

Los comuneros los conformaron campesinos, indígenas, negros, labriegos, arrieros, mineros y artesanos que se sublevaron contra la corona española ante la excesiva carga de tributos impuestos, infuenciados por las noticias de similares reacciones en el pueblo inca bajo la dirección de José Gabriel Tupac-Amaro. Sobrevino entonces la protesta y la vía de hecho el 16 de marzo de 1871, cuando Manuela Beltrán, en El Socorro (Santander), arrancó y destruyó el edicto colocado en la puerta de la Recaudación de Alcabala, gesto que más tarde fue emulado por Manuela Cumbal en Nariño cuando arrebató al cura párroco de Guaitarilla y destruyó en el altar el decreto de aumento de diezmos, hecho con el que se exaltó a los indígenas del sur, quienes emprendieron la llamada insurrección de Los Clavijos. También en Los Llanos un individuo conocido como Francisco Javier de Mendoza, autoproclamado lugarteniente de Tupac-Amaro, con el motivo de los impuestos hizo conocer la sublevación hasta en las regiones venezolanas.

A partir del hecho protagonizado por Manuela Beltrán se exaltaron los ánimos, se produjeron asaltos a los almacenes de estancos, la persecución sobre los funcionarios por las calles y el saqueo de sus casas, y se multiplicaron los motines y los levantamientos en otras provincias como San Gil, Simacota, Cha-

ralá y Mogotes, hasta que fue necesario darle un comando y unos objetivos a la revuelta. Esto sucedió el 16 de abril de 1781 con el nombramiento de Juan Francisco Berbeo, quien solicitó nombrar una junta asesora, compuesta por Salvador Plata, José Monsalve, Francisco Rosillo, Ramón Ramírez, Antonio Molina y Manuel Ortiz. Sin embargo, Berbeo era un oligarca criollo que buscaba para sus iguales el favor de la Corona y, al ver la magnitud del suceso que iniciaba, escribió al virrey Flórez informándole la situación y pidiéndole que accediera a algunas peticiones del pueblo a fin de calmarlos. Añadió en su comunicación que su nombramiento como jefe de la revuelta había sido obligado por la necesidad de proteger sus vidas y sus bienes, que nunca se había opuesto a la Corona y, si se hubiera negado la soberanía y la potestad de su majestad, habrían dado la vida en su defensa, pidiendo finalmente piedad y remedio a sus solicitudes.

Los lemas de la sublevación fueron “Muera el rey de España” y “Viva el rey y muera el mal gobierno”, dependiendo del lugar donde se expresara la consigna. Su ejecución comprendía la expulsión de los españoles, quienes ante los plazos de tres días para su salida debían abandonarlo todo, y la negativa a pagar más impuestos. El mensaje fue entendido así en Santa Fe y enviaron cincuenta soldados y treinta de la guardia del virrey con doscientas armas para entregar a vasallos leales que pudieran reclutar durante la marcha, hecho del que se enteró la población y exigió a Berbeo acciones de respuesta. Ordenó entonces la creación de batallones con gentes de Oiba, Monquirá y Mogotes para enfrentar las tropas del virrey y dispuso crear más batallones en las provincias, así como recolectar fondos para la revolución. Las tropas comuneras chocaron con las del virrey en el Puente Real y fue esta la primera derrota española ante el

pueblo. La derrota preocupó al virrey, quien ordenó conformar batallones para defender Santa Fe mientras llegaban refuerzos.

Galán no centró su accionar en el objetivo recibido de capturar al visitador Gutiérrez de Piñeres y atacó las tropas españolas en Facativá, Villeta y Guaduas, continuó hacia el río de La Magdalena e incursionó en el centro minero de Ambalema, y de allí pasó a Mariquita. Las noticias de estos sucesos motivaron la sublevación de negros e indígenas en Antioquia, en donde se exigió que se limitara la extensión de las minas, la abolición del impuesto al mazamorreo, la extinción de tiendas en las minas y su reemplazo por el libre comercio, la rebaja a impuestos al aguardiente, la licencia para portar armas, el castigo a los guardas que atropellaran a la población y el acceso de los criollos a cargos de jueces y administradores de rentas reales¹⁵. En junio, también en el Valle del Cauca, los negros libres armados de Puerto Tejada, Candelaria, Llanogrande y Tuluá permitieron la siembra de tabaco pese a su prohibición, y en Cartago atacaron los estancos por no derogar el Gobierno las medidas fiscales. En Neiva, Aipe, Caguán, Villavieja, Fortalecillas y El Volcán, indios y libertos protestaron por las medidas sobre la siembra de tabaco y el estanco de aguardiente. En Casanare, el ganadero Francisco Javier de Mendoza organizó un ejército de indios de Pore, Támara, Ten, Manare y otros pueblos, e instó atacar al clero y obedecer a los comuneros, mas fue reducido cuatro meses después por unas tropas privadas financiadas por el marqués de San Jorge de Santa Fe¹⁶.

¹⁵ LIÉVANO Aguirre Indalecio, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. La revolución de los comuneros, Capítulo XVI, www.banrepcultural.org

¹⁶ RUEDA Santos Rigoberto, La rebelión de los Comuneros, Biblioteca Nacional de Colombia–Ministerio de Cultura, www.bibliotecanacional.gov.co

Mientras España enviaba tropas de Cartagena caminando por las orillas del río de La Magdalena, los alzados se encaminaban hacia la capital del Virreinato bajo las órdenes de Francisco Berbeo, Salvador Plata, Antonio Monsalve y Diego de Ardila, armados de sables, chuzos, palos y unas escasas armas de fuego; así llegaron al Puente Real y allí los esperaban los comisionados de la Real Audiencia de Santa Fe para convencerlos de no proseguir hacia la capital.

El pueblo exaltado pedía la cabeza del visitador Gutierrez de Piñeres, quien asustado buscó huir hacia Honda para encontrarse con la protección de las tropas españolas que marchaban hacia Santa Fe, lo que obligó a Berbeo a designar a José Antonio Galán como comandante de un contingente de tropa encargado de perseguirlo y evitar su contacto con las tropas españolas. Mientras tanto, la Junta de Tribunales encargada del Gobierno decidió negociar con los rebeldes en procura de dilatar al máximo las conversaciones, las cuales se realizaron al llegar los comuneros a Zipaquirá, donde presentaron propuestas y realizaron diálogos que dieron como resultado las llamadas “Capitulaciones”, documento redactado por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de Tunja, el cual fue parcialmente modificado por Berbeo y Jorge Lozano de Peralta.

Las “Capitulaciones” contenían treinta y cinco puntos: veinticinco trataron sobre la reducción y la supresión de tributos, ocho sobre cuestiones administrativas y dos sobre política: que los criollos ricos tuvieran acceso a los cargos públicos y se mantuvieran las milicias comuneras, a las que se les permitiera realizar ejercicios militares dominicales. Su contenido fue remitido a la Real Audiencia, que lo devolvió a la junta para que lo confirmaran, hecho realizado en misa solemne oficiada por el señor

arzobispo el 8 de junio, y el día 15 de junio la junta anunció que se había logrado la pacificación y la disolución del ejército rebelde, y ordenó remitir textos de las capitulaciones a los cabildos y a las cabeceras de provincia¹⁷.

De acuerdo con Manuel Briceño (1880), en la primera edición de su libro *Los comuneros*¹⁸, de la imprenta Silvestre y Compañía, el contenido inicial de las capitulaciones fue el siguiente:

Muy Poderoso Señor:-El Capitán General, Comandante de las 29 ciudades, villas, parroquias y pueblos por comunidades, que componen la mayor parte de este Reino, y en nombre de los demás restantes, por los cuales presto voz y caución, mediante la inteligencia en que me hallo de su concurrencia, para que unánimes y todos juntos como a voz de uno, se solicitase la quitación de derechos y minoración del exceso que insoportablemente padecía este mísero Reino, que no pudiendo tolerarlos ya por su monto, ni tampoco los rigurosos modos instruidos para su exacción, se vio precisada la villa del Socorro a sacudirse de ellos del modo que ya es notorio, a lo cual se unieron las demás parroquias, ciudades, pueblos y lugares, por ser en todos ellos uniforme el dolor, y como haya mediado para su intermedio, y se acelerase por la convención a que todos los principales unívocamente propendemos, parezco ante V. A. con el mayor rendimiento por mí, y en nombre de todos los que para dicha Comandancia me eligieron, y de los demás que para este fin se han agregado, presentes y ausentes, y en virtud de lo que se nos ha prevenido por los señores Comisionados, expongo y propongo las Capitulaciones siguientes:

¹⁷ PÉREZ Silva Vicente, *Revolución de los comuneros*, Credencial Historia, Edición 240 Diciembre de 2009, www.banrepcultural.org.

¹⁸ BRICEÑO Manuel, (1880), *Los comuneros*, Primera Edición Imprenta de Silvestre y Compañía, editado por Carlos Valencia Editores, Litografía Paloquemao, Marzo de 1977, Segunda Edición, págs. 30 a 38.

1a. Primeramente, que ha de fenecer en el todo el ramo de Real Hacienda titulado Barlovento, tan perpetuamente, que jamás se vuelva a oír semejante nombre.

2a. Segunda. Que las guías que tanto han molestado desde el principio de su establecimiento a todo el Reino, cese para siempre jamás su molestia.

3a. Tercera. Que el ramo de barajas se haya también de extinguir y solo quede por el comercio.

4a. Cuarta. Que el papel sellado, atenta la miseria a que está constituido este Reino, sólo quede corriente el pliego de medio real para los eclesiásticos, religiosos, indios y pobres, y el pliego de dos reales para los Títulos y litigantes de personas de alguna comodidad, y no otro de ningún Sello.

5a. Quinta. Que en cuanto los más Jueces, que nombran de Alcaldes Ordinarios de la hermandad y pedáneos, es su nombramiento contra su voluntad por el abandono en que dejan sus casas, y cortos haberes de su manutención, y que a más de esa incomodidad se les exigen cantidades para ellos muy crecidas de medias anatas, es expresa Capitulación como las antecedentes, cese su contribución en el tiempo venidero. Por no reportar en semejantes empleos, ningún commodo ni para su manutención. Ni sufragarle el oficio para las pérdidas de la casa que abandona.

6a. Sexta. Que en el todo y por todo se haya de extinguir la renta frescamente impuesta del estanco del tabaco, que aun en tiempo del Excelentísimo señor don Sebastián de Eslava que entraban chorros de oro y ríos de plata, en la garganta de la plaza de Cartagena, con su sabia Inspección y notoria prudencia, conociendo la deficiencia del Reino, no tuvo por conveniente su imposición, ni los dos Excelentísimos Señores don José Alfonso Pizarro y don José Solís. Por el práctico conocimiento que tuvieron de su miseria. Hasta que el Excelentísimo señor don Pedro Mesía de la Cerda, con

el título de proyecto experimental, aparentando beneficio al público, fue la vara en que cimentaron tamaños perjuicios como se han experimentado, para los que le beneficiaban, y con los canjes de estos frutos con otros de este Reino, los traficaban los pobres que alcanzaban a tener cinco cabalgaduras para ello, y que si se miran las cuantiosas asignaciones a los arrendadores para esta administración, los remedios correspondientes para ella, y la alcabala, que en tantas ventas, reventas y cambios, y la muchedumbre de cargas que se han quemado, se hallará que S. M. (que Dios guarde) poco o nada ingresaba en su erario, y los míseros vasallos tuvieron con este establecimiento tan imponderables amarguras, que no cupieran en los volúmenes del Tostado si se hubieran de referir.

7a. Séptima. Que hallándose en el estado más deplorable la miseria de todos los indios, que si como la escribo porque la veo y conozco, la palpase V. A., creeré que, mirándolos con la debida caridad, con conocimiento que pocos anacoretas tendrán más estrechez en su vestuario y comida, porque sus limitadas luces y tenues facultades de ningún modo alcanzan a satisfacer el crecido tributo que se les exige con tanto apremio, así a éstos como a los mulatos requintados, sacándoles los Corregidores los tributos con tanto rigor, que no es creíble, a lo que concurren sus Curas por el interés de sus asignados extipendios; que, atenta la expresada miseria, solo quede la contribución total y anual de cuatro pesos, los indios; y los requintados, de dos pesos, y que los Curas no les hayan de llevar plata por los derechos, por sus obvenciones de oleos, entierros y casamientos, ni precisarlos con el nombramiento de alférez para sus fiestas, pues éstas, en caso que no haya devoto que las pida, las costeen las Cofradías, cuyo punto pide necesario y pronto remedio, como asimismo, que los indios que se hayan ausentado del pueblo que obtenían, cuyo resguardo no se haya vendido, ni permitido sean devueltos a sus tierras de inmemorial posesión, y que todos los resguardos que de presente posean les queden, no solo en el uso, sino en cabal propiedad para poder usar de ellos como tales dueños.

8a Octava. Que habiéndose establecido la renta de aguardiente con la prevención de los ingenieros de trapiches de ocho pesos por botija, a cuyo método se varió con el acrecentamiento en que hoy se halla este Reino, sólo haya de tener el precio de seis pesos por botija de los frascos bocones, y dos reales por botella, y de superior aguardiente, precio perpetuo, sobre cuyo pie se saque a pregón, y rematados si lo quisieren por el tanto las ciudades, villas, lugares, etc., puedan encabezarse en él según las disposiciones reales de Castilla, sexta, séptima y octava de las condiciones reales generales de los arrendamientos, y la municipal sobre el tanto de los diezmos, estancos, ventas, capitulando con la debida exposición su cumplimiento; y si esta renta quedase por arrendamiento, haya de ser penada la persona que la defraudase, y si fuese persona miserable, que no tenga con que satisfacer la multa, que se le den tantos días de prisión como pesos había de pagar, y que no se les imponga otra pena alguna.

9a. Novena. Que la alcabala, desde ahora para siempre jamás, no haya de seguir su recaudación de todos los frutos comestibles, y sí solo se deberá pagar el dos por ciento de la venta de granos de Castilla, lienzo, mantas, cacao, azúcares, conservas, tabaco, cabalgaduras, ventas de tierra, casas, ganados y demás de comercio, y que se exceptúen de esta contribución los algodones, por ser fruto que propiamente solo los pobres lo siembran y cogen, y pedimos que así se establezca por punto general.

10a. Décima. Que hallándose la entrada a la ciudad de Santa Fe con demasiada incomodidad a su tráfico, se solicitó por el Cabildo de aquella ciudad. Ante el Excelentísimo señor don José Alfonso Pizarra, se estableciese un nuevo impuesto de tres cuartillos por el piso de las bestias, y un real la carga de negociación, desde el año pasado de 1750; e importando la cuenta dada por el Administrador de Alcabalas más de 4,000 pesos en cada un año: es preciso que ascienda su contribución desde aquel tiempo al presente a más de 130,000 pesos, y siendo el mayor avalúo que en aquel tiempo

se le dio, el de setenta y tantos mil pesos, deberán sobrar cerca de sesenta mil pesos y haber cesado esta exacción, para que de este modo, y con el sobrante, se hubiesen contribuido otras obras públicas, que hay en el resto de las ciudades y pueblos contribuyentes, pues no es justo que llevando el mayor gravamen los vecindarios de Vélez, Socorro y Tunja, hayan quedado sin parte alguna en la composición de sus caminos, por lo que es muy conforme el que cese la circular contribución, y que si la de Santa Fe la necesita, sólo lo haga con su demarcación.

11a. Undécima. Que habiéndose establecido el correo en el año pasado de mil setecientos y cincuenta, por el Excelentísimo señor don José Pizarra, en aquel principio no causó las incomodidades que con su reforma impuso el Director general Panda, el cual instruido por personas inexpertas de las distancias que hay de los lugares de su carrera ni de la de sus colaterales, les asignó crecidos e indebidos portes, por lo que han resultado continuadas extracciones en los pliegos; y para que los vasallos no sean incomodados, tanto en sus intereses como en la disminución de sus comunicaciones, debe arreglarse del modo siguiente: las cartas de Tunja, Villa de Leiva, Chiquinquirá, Puente Real de Vélez, y los lugares de igual distancia, la sencilla a medio real, la doble a real, la onza a 1 ½ vellón, y las que excediesen para adelante a real cada una. Las de Pamplona, San Gil, Girón, Socorro y lugares de igual distancia, la sencilla a real, la doble dos reales y la onza tres reales, y del mismo modo, con equiparación, las demás circunferencias, declarándose que no sea precisado el sujeto que escribe cartas sencillas, ni papeles a que los sellen, ni si se les precise mandar algún chasqui, pensión gravosa, pedimos se observe, cumpla y ejecute esta Capitulación, pues cede en beneficio público y de la Real Hacienda.

12a. Duodécima. Que por cuanto la solicitud de la concesión de la Santa Bula de la Cruzada, es dirigida en utilidad espiritual y corporal de los vasallos de nuestro Soberano, y por su precio asignado en un Reino de limitadas comodidades, por cuya escasez no será

ni aun la décima parte de sus habitantes los que la toman, y será duplicado, si se les minora su precio a la mitad del que al presente tiene, como se experimentará en la siguiente publicación, pues o se nos ha de dar al que ofrecemos, o nos privaremos del beneficio que entonces la reportábamos.

13ª. Décima tertia. Que habiéndose publicado la Real Orden para que los principales de las comunidades se internen en Cajas reales y allí se le contribuya con un cuatro por ciento, esta disposición es de notorio gravamen a las comunidades y vecindarios; a las comunidades les es, porque para recaudar sus réditos anuales a más de un peso menos del cinco por ciento, y gustosamente por todos recibido, tienen la incomodidad “de tener su apoderado en esta capital. gastar sin necesidad papel para el escrito, para la solución de su rédito, la dilatoria del informe de oficiales reales y decrete del Superior Gobierno, sin los costos que en ellos se impenden, riesgo de su conducción, gratificación al apoderado y conductor, y que no es lo más lo referido, sino que cuando llega un tiempo como el presente de guerras, durante él cesa su satisfacción, careciendo de sus precisos alimentos, se ven las comunidades precisadas a consumir algunos principales contra sus estatutos, o pedirlos a rédito, y así no reportarían ningún comodo, sino palpable perjuicio, y los vecindarios serían en ello notablemente perjudicados, pues casi todos los hacendados y toda clase de negociaciones que se versa en este Reino es dimanada de los censos que de dichas comunidades tienen, que si se verificase sería su total destrucción, y S. M. quedaría comprendido en ello, por la minoración de los contribuyentes de la alcabala, en cuya inteligencia debe cesar perpetuamente dicho pensamiento.

14a. Décima cuarta. Que siendo el principal y tan necesario e inexcusable renglón el de la sal, éste, ni en la fábrica de Zipaquirá, ni en la de Chita haya de exceder de dos y medio reales la arroba, en cuyo precio y compra queda beneficiado este Reino, y se hace presente que habiéndose estancado, se acabó su consecución, y

comprándola el vasallo a dos reales arroba, y aun esto no solo a dinero, que en cada día está más escaso, sino a cambio de todas y cualesquiera clase de efectos que cada necesitado de ellos tenía, y al presente haya de ser a dinero, que tan difícilmente se encuentra al precio de tres y medio reales la arroba, cuya fábrica y beneficio debe quedar en sus antiguos dueños los indios, y si éstos en sus traslaciones gozan de iguales comodidades de las que antes tenían, las benefician los vecindarios de las salinas, dándole a S. M. un peso por cada carga, cuyo importe se saque al pregón y lo pidan, si lo quieren, por el tanto de su remate, y lo afiancen en sus respectivos Cabildos para evitar las esportiquices de Oficiales Reales, que son insoportables, y que nunca se trabaje ni deshaga el mineral de la vija, pues de continuarse, los presentes disfrutaremos abundancia y los venideros padecerán escasez, y que todas las salinas que en el Reino se hallen las trabajen los dueños de las tierras en que se hallen, con la pensión de un peso por carga a S. M.

15a. Décima quinta. Que novísimamente se ha pregonado un Real Orden, por la cual pide S. M. que cada persona blanca le contribuya con dos pesos, y los indios, negros y mulatos con un peso, expresando en ella ser éste el primer pecho o contribución que se haya impuesto, y siendo tantos con los que nos han oprimido, no parece de ningún modo compatible esta expresión, por lo que en el todo nos denegamos a ella, y por el contrario ofrecemos, como leales vasallos, que siempre y cuando se nos haga ver legítima urgencia de S. M. para conservación de la fe o parte, aunque sea la más pequeña parte de sus dominios, pidiéndonos donativo, lo contribuiremos con grande gusto, no solo de este tamaño, sino hasta donde nuestras fuerzas alcanzaren, ya sea en dinero, ya en gentes a nuestra costa, en armas o víveres, como el tiempo lo acreditará.

16a. Décima sexta. Que habiendo sido causa motiva de los circulares disgustos de este Nuevo Reino y el de Lima, la imprudencial conducta de los Visitadores, pues quisieron sacar jugo de la sequedad y aterrar hasta el extremo con su espótica conducta, pues en

este Nuevo Reino, siendo la gente tan dócil y sumisa, no pudo con el complemento de su necesidad y aumento de extorsiones tolerar ya más su despótico dominio, que cuasi se han semejado sus circulares hechos a deslealtad, y para que en lo venidero no aspire, si encuentra resquicio a alguna venganza: que sea D. Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, Visitador de esta Real Audiencia, extrañado de todo este Reino para los dominios de España, en el cual nuestro católico Monarca, con refexión a los resultados de sus inmoderadas operaciones, dispondrá lo que corresponde a su persona, y que nunca para siempre jamás se nos mande tal empleo, ni personas que nos manden y traten con semejante rigor e imprudencia, pues siempre que otro tal así nos trate, juntaremos todo el Reino, ligado y confederado, para atajar cualquiera opresión que de nuevo por ningún título ni causa se nos pretenda hacer.

17a. Décima séptima. Que el Común del Socorro pide que en aquellas villas haya un Corregidor, Justicia mayor, al cual se le ponga el sueldo de un mil pesos en cada un año, y que en éste no haya de haber jurisdicción de la capital de Tunja con tal que quienes ejerzan este empleo deban ser criollos nacidos en este Reino, sin que pretenda primacía alguna de estas villas, sino que asista en una de las dos, que son San Gil y Socorro.

18ª. Décima octava. Que todos los empleados y nombrados en la presente expedición de Comandante general, Capitanes generales, Capitanes territoriales, sus Tenientes, Alféreces, Sargentos y Cabos hayan de permanecer en sus respectivos nombramientos, y éstos cada uno en lo que le toque, hayan de ser obligados en el Domingo en la tarde de cada semana a juntar su compañía y ejercitarla en las armas, así de fuego como blancas, defensivas y ofensivas, tanto por si se pretendiere quebrantar los concordatos que de presente nos hallamos afrontados a hacer de buena fe, cuanto por la necesidad en que contemplamos se halla S. M. necesitada de socorro para debatir a sus enemigos.

19a. Décima nona. Que los Escribanos hayan de llevar solo derechos la mitad de los arancelados, y que en sus márgenes hayan de poner indispensablemente su importe en plata, y el por qué, y si se les justificase tercera vez haberse excedido de su arancelamiento, por el mismo hecho sean sin otra causa depuestos de sus oficios, como también los Notarios eclesiásticos que sin ningún coste en la adquisición de sus oficios ni igual fe quebrantan lo preceptuado por S. M. en sus Reales Ordenes, y lo nuevamente ordenado por la Real Audiencia para su cumplimiento, el que no lleven más derechos por las informaciones para los casamientos, que lo escrito en ellas, que es un real por foja, teniendo ésta 33 renglones por plana, y cada renglón dos partes, como lo previene la ley castellana; y no cumpliendo con dicha Orden Real ni la de la Real Audiencia, por la que sólo importarían dos reales, cuando más, las citadas informaciones llevan generalmente doce reales, lo que debe atajarse y de ningún modo permitirse; y al que de hoy en adelante lo hiciere, severamente castigarse, por ser esta clase de oficiales la carcoma, polilla o esponja de todos los lugares, y que como tienen menos que perder que los Escribanos reales, que son los que ha mandado S. M. que ejerzan estas Notarías, con más facilidad quebrantan cuanto en contrario de lo que hacen no les tenga cómodo.

20a. Vigésima. Que de ningún modo, por ningún título ni causa se continúe el quebranto de las leyes y repetidas cédulas sobre la internación, mansión y naturaleza de los extranjeros en ninguna parte de este Reino, por el perjuicio que trae al presente, y en lo futuro pueda tener su internación tanto en lo secular como en lo eclesiástico, y que los que haya de presente salgan dentro de dos meses, y que al que no lo hiciere, se le dé el trato y pena de espía en guerra viva.

21a. Vigésima prima. Que habiéndose construido, de orden de nuestro Monarca y Señor, la fábrica de la pólvora y puéstole el precio de ocho reales por libra, con la venida del señor Regente se subió el precio a diez reales, y siendo el mencionado estanco de

pólvora a beneficio de la Real Hacienda, que por ahora ni en ningún tiempo valga más que a ocho reales por libra que se puso en su primer asiento.

22a. Vigésima segunda. Que en los empleos de primera, segunda y tercera plana hayan de ser antepuestos, y privilegiados los nacionales de esta América a los europeos, por cuanto diariamente manifiestan la antipatía que contra las gentes de acá conservan, sin que baste a conciliarles correspondida voluntad, pues están creyendo ignorantemente que ellos son los amos y los americanos todos sin excepción sus inferiores criados; y para que no se perpetúe este ciego discurso, sólo en caso de necesidad, según su habilidad, buena inclinación y adherencia a los americanos, puedan ser igualmente ocupados, como que todos los que estamos sujetos a un mismo Rey y Señor debemos vivir hermanablemente; y al que intentare señorearse y adelantarse a más de lo que corresponde la igualdad, por el mismo hecho sea separado de nuestra sociabilidad.

23a. Vigésima tercia. Siendo la más pesada carga sobre todas, la que se padece en cuasi todas las ciudades, parroquias, villas, pueblos y lugares, la exacción de derechos eclesiásticos, de la cual ni el más mísero se libra, por la inobservancia del Concilio, de los Síodos, leyes y cédulas; lo que en la presente Capitulación pedimos es que se libren los más precisos oficios al Illmo. Señor Arzobispo, para que, en cumplimiento de su paternal oficio, ponga un total remedio.

24a. Vigésima cuarta. Que los Visitadores eclesiásticos se arreglen, en sus comisiones, a las preventivas leyes, no siendo congojosos a los Curas visitados, tanto en su mansión como en los derechos que exigen de visitas, de libros de Cofradías, pila, sagrario y visitas de testamento, sobre que, en conformidad de la Real Cédula se tiene mandado por este superior Gobierno, sólo se les contribuya con las vituallas del país durante la visita, y que todos los demás gastos

sean de cargo de los señores Arzobispo u Obispos que los comisionan, cuando por sí no las hacen, como es de su cargo.

25a. Vigésima quinta. Que los Jueces de diezmos y sus Notarios hacen indebidos percibos por las escrituras, de las cuales no hay ejemplar se compulse testimonio, y por cada una de ellas y el recudimiento y anotación de hipoteca, exigen cinco pesos cuatro reales, no siendo necesario el recudimiento, pues por fuerza de costumbre sabe todo fiel cristiano lo que debe pagar, y se experimenta que un solo diezmo que se remataba en un solo postor, y contenía su extensión las dos villas de San Gil y el Socorro, hoy se halla dividido en sesenta y más partidos y veinte casas excusadas, por cada escritura y recudimiento se exigen cinco pesos cuatro reales, siendo esta exacción un peso tan insoportable, que no es posible sobrellevado, y que aun queriendo cohonestar con su trabajo la exacción, pues los Jueces particulares tienen sueldo fijo por la mesa capitular y el dos por ciento de pensión; pedimos cese esta exacción, y que tan excesivos derechos se minoren, y que se declare que por la escritura solo se pague diez reales, y ocho reales por cada un recudimiento, y éste solo sea uno para cada iglesia y no para cada partido, como lo tenía establecido la codicia de los Jueces particulares de diezmos, y que si se considerase preciso el recudimiento, solo se libre uno para cada lugar, y no para cada partido, y que por éste no se le den ocho reales que nos llevaban.

26a. Vigésima sexta. Que los dueños de tierras por las cuales median y sigan los caminos reales para el tráfico y comercio de este Reino, se les obligue a dar francas las rancherías y pastos para las mulas, mediante a experimentarse que cada particular tiene cercadas sus tierras, dejando los caminos reales sin libre territorio para las rancherías; para evitar este perjuicio se mande, por punto general, que puntualmente se franqueen los territorios, y que de no ejecutado el dueño de tierras, pueda el viandante demoler las cercas.

27a. Vigésima séptima. Que a beneficio público se distribuya el salitre que se halla en los territorios de Paipa, en la hacienda de

D. Agustín de Medina, al precio de dos reales carga, entregado y pesado por sus Administradores.

28a. Vigésima octava. Que habiendo muchos pasos y puentes pensionando a los viandantes con alguna exhibición, a beneficio de particulares, pedimos que del todo queden libres de esta pensión los pasajeros, y sólo deban pagar a beneficio de los propios de las villas y ciudades.

29a. Vigésima nona. Que el puente de Chiquinquirá quede con la pensión de un cuartillo, para que del producto se construya un puente de calicanto en el mencionado río, y que esta contribución y construcción del puente corra por orden del Cabildo de Tunja, y que la que hoy existe se deba restablecer por los vecinos y comarcanos.

30a. Trigésima. Que para el reparo de los malos resultados que se han experimentado en las exacciones que indebidamente exigen los Jueces de residencia, pedimos que no los haya por siempre jamás, y que el vecino que se hallare quejoso ocurra a los superiores tribunales.

31a. Trigésima primera. Que ref exionando la miseria de muchos hombres y mujeres que con muy poco interés ponen una tiendecilla de pulpería, pedimos que ninguna ha de tener pensión, y sí solo la de alcabala y propios.

32a. Trigésima segunda. Que experimentando que a muchos hombres y mujeres los reducen a prisión, no tanto por delito cuanto por la utilidad que tienen los castellanos o porteros de la cárcel, pedimos que solo se les exija dos reales por la puerta de su salida, y que si fuere larga la prisión no pague nada, como que no se les permita volver bodega la cárcel para destruir los presos y haya varios alborotos.

33a. Trigésima tercia. Pedimos que no tengan los Fieles-ejecutores de las ciudades y villas la menor intervención en los pesos y

medidas, ni que éstos hagan visita de ellos, sino que los Cabildos diputen dos miembros de él para que lo ejecuten, los que correrán con la cobranza del mismo derecho que deberán pagar por el sello de las varas, pesos y medidas.

34a. Trigésima cuarta. Que como de resultas de las rigorosas providencias del señor Regente haya muchos particulares apercibidos para la exhibición de la multa que se les ha aplicado por comisos, pedimos que los hasta aquí conocidos hayan de quedar enteramente libres, sin que ahora ni en ningún tiempo se les haya de hablar ni hacer cargo sobre el asunto de su diligencia.

35a. Trigésima quinta. Que habiendo sido nuestro principal objeto el libertarnos de las cargas impuestas de Barlovento y demás pechos impuestos por el señor Regente-Visitador general, lo que tanto ha exasperado los ánimos, moviéndose a la resolución que a V. A es notorio, y que nuestro ánimo no ha sido faltar a la lealtad de leales y fieles vasallos, suplicamos rendidamente a V. A que se nos perdone todo cuanto hasta aquí hemos delinquido; y para que su real palabra quede del todo empeñada, impetramos el que, para mayor solemnidad, sea bajo juramento sobre los cuatro Evangelios, y verificado que sea en el Real Acuerdo, se remita a los señores Comisionados, para que aquí se vuelva a ratificar en presencia del Illmo. Señor Arzobispo, para que todos los Comunes queden enterados de su real e inviolable palabra, por cuyo medio han de quedar firmes y subsistentes, ahora y en todo tiempo, los Tratados-Capitulaciones, y pedimos se nos admitan y acepten, y que su aprobación sea sin ambigüedad.

“Campamento de guerra en territorio de Zipaquirá, 5 de Junio de 1781.

M.P. S. Puesto a los pies de V. A. El más rendido vasallo,

JUAN FRANCISCO BERBEO.”

Principiaron a discutir artículo por artículo. En el 1º, 2º y 3º no admitieron ninguna variación; en el 4º, agregaron que no debía proceder información de pobreza para usar del papel de oficio, bastando la boleta del respectivo Juez; en el 5º estipularon que los Alcaldes pedáneos pagaran dos pesos por media anata y otros dos para gastos de posesión, y que a los Alcaldes ordinarios se les cobrara la media anata; en el 6º insistieron; en el 7º convinieron en que se arreglase lo referente a los tributos entre don Ambrosio Pisco y el Fiscal, y ninguna variación quisieron introducir en los marcados con los números 8º a 15º.

Con participación de la Iglesia se procuró que los pueblos se arrepiñaran del acto de sublevación, y con la ayuda de vecinos de El Socorro se dio captura a Galán en Onzaga (Santander), el 13 de octubre de 1781, acusado por todos los hechos ocurridos a lo largo de la rebelión. Fue ejecutado en la plaza mayor de Santafé el 1 de febrero de 1782, junto con Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz. Restaurado el orden, el virrey Flores restableció también los impuestos motivo de los levantamientos. Luego, en su calidad de virrey, Caballero y Góngora concedió, el 7 de agosto de 1782, un perdón general a los involucrados en la insurrección.

Al término de la Revolución de los comuneros se puede concluir lo siguiente:

- La revolución fue de españoles criollos contra españoles europeos gobernantes.
- No se realizó para el derrocamiento de un gobierno despótico, sino para participar en él con el fin de mejorar sus propias condiciones.

- El capitán general de la revolución, José Antonio Galán, negó ser revolucionario y reconoció solo que actuó como representante de los criollos y no del pueblo.
- Las capitulaciones para dar término a la revolución no beneficiaron al pueblo.
- Las capitulaciones se hicieron sobre asuntos a los cuales de antemano el gobernante no daría solución, a fin de ganar tiempo y exponer a sus líderes.
- La intervención de la Iglesia en la negociación de las capitulaciones fue determinante dado su poder y su influencia ideológica, pero insuficiente como garantía ante el poder político imperante.
- El engaño del español europeo al criollo creó una desconfianza tal que fue la motivación para la guerra de independencia.
- Era evidente que con algunos criollos en el Gobierno y las milicias organizadas practicando ejercicios militares periódicos el gobernante español estaría bajo amenaza permanente de la pérdida de su poder.

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política de España

Es históricamente correcto afirmar que la búsqueda de la independencia nacional se inició en 1780 con la aversión contra los impuestos, lo que, en 1781, se convirtió en protesta pública al grito de “Viva el rey y abajo el mal gobierno”, y luego pasó a ser la “Revolución de los comuneros”, la cual después de ser sofocada mediante negociaciones con sus líderes —a quienes traicionó y sacrificó el Gobierno— tuvo su manifestación definitiva el 20 de julio de 1810, cuando se dio origen a la Guerra de Independencia¹⁹.

Ejecutada la Revolución comunera, traicionados sus organizadores y ejecutores, sucedió la Revolución francesa, de cuyas

¹⁹ PARDO RUEDA, Rafael, (2004): *Historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S.A., págs. 77 a 88. RAMSEY W., Russell (2000): *Guerrilleros y Soldados*, TM Editores, Segunda edición, pág. 59.

fuentes don Antonio Nariño, en 1793, realizó la primera traducción en castellano de los "Derechos del Hombre y del Ciudadano"²⁰, hasta la presentación del "Memorial de Agravios del Cabildo de Santafé" a la Suprema Junta Central de España del 20 de noviembre de 1809, escrito por don Camilo Torres, en el cual se cuestiona al soberano español por no tener en cuenta a los criollos americanos en la conformación de la junta por no considerarlos ciudadanos españoles²¹.

Con ocasión de la prisión y el destierro del rey de España por Napoleón, luego de los triunfos militares franceses en Almonacid, Gerona, Alba de Tormes y Tomanes, así como en Ocaña, el 10 de febrero de 1810 el Consejo de Regencia de España e Indias invitó desde la isla de León a los americanos a nombrar diputados a las Cortes Extraordinarias, declaró a los americanos españoles como hombres libres y los invitó también a participar contra los usurpadores franceses²². Lo declarado por el Consejo de Regencia fue tomado en serio en Santafé, y el 20 de julio de 1810 se realizó un cabildo extraordinario que decidió la conformación de un gobierno federal independiente en la Nueva Granada, condicionando su gobierno a que el rey Fernando VII viniese a reinar aquí y quedara mientras tanto el gobierno en manos de la Suprema Junta de Regencia en la península, pero con unos representantes criollos encabezados por don Juan Bautista Pey, entre otros²³.

²⁰ HERNÁNDEZ de Alba, Guillermo (1978) Banco de la República, *Cómo nació la República de Colombia, Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano*, págs. 33 a 36.

²¹ Ib. MEMORIAL DE AGRAVIOS DE CAMILO TORRES, págs. 37 a 63.

²² Ib. Proclama, págs. 65 a 71.

²³ Ib. ACTA DE INDEPENDENCIA, págs. 73 a 84.

A fin de obtener seguridad de que lo hecho no fuese destruido por los representantes del Gobierno español, el Congreso pidió a Antonio Amar que dispusiese en manos de este el parque de artillería, pero se le respondió que las tropas tenían órdenes de no hacer ningún movimiento para seguridad y confianza del Congreso. No obstante, se le respondió también que el pueblo no se aquietaba, por lo que el mismo virrey hubo de ordenar la entrega a don José de Ayala de dicha guarnición, mientras que el Batallón Auxiliar, bajo órdenes de Antonio Baraya, había sido comprometido por su comandante a obrar solo en la causa de la libertad y así se mantuvo, hecho que le valiera para que la Suprema Junta lo designara teniente coronel del Batallón de Voluntarios de la Guardia Nacional. Sin poder militar que los pusiera en peligro procedieron a firmar y jurar sus cargos, y nombraron a don Antonio Amar como presidente y como vicepresidente al señor alcalde José Miguel Pey de Andrade²⁴, además de haber sido nombradas otras autoridades, entre las cuales se cuentan:

La Junta Suprema se dividió en secciones de gobierno a saber: Estado, Gracia y justicia, Hacienda, Negocios eclesiásticos y Guerra; el Tribunal de apelación constaba de: Sala de gobierno y hacienda, Sala de justicia; y las milicias de la Revolución fueron organizadas con una Plana Mayor con el Coronel Pantaleón Gutiérrez, 4 escuadrones de caballería, 2 batallones de infantería y el Batallón de Infantería de Guardias Nacionales para la protección de Santafé y del gobierno del estado²⁵.

El 27 de julio de 1810 se definió legalmente la conformación de la Suprema Junta del Nuevo Reino de Granada y, por apro-

²⁴ Ib.

²⁵ Ib. HISTORIA DE NUESTRA REVOLUCIÓN, págs. 91 a 120.

bación de esta, se conformaron las primeras milicias del Estado soberano, tal como se expone en la tabla 1.

Tabla 1. Regimiento de milicias de caballería

Plana mayor			
Cargo		Nombres	
Coronel		Don Pantaleón Gutiérrez	
Teniente coronel		Don Primo Groot	
Sargento mayor		Don Isidro de la Bastida	
Ayudante mayor		Don Francisco Llamas	
Portaestandarte		Don Nepomuceno Torres	
Portaestandarte		Don Francisco Borda	
Primer escuadrón	Segundo escuadrón	Tercer escuadrón	Cuarto escuadrón
Coronel don Pantaleón Gutiérrez	Teniente coronel don Primo Groot	Comandante don Nicolás Ribas	Comandante don Luis Otero
Primera compañía			
Capitán don Pedro Ricaurte	Capitán don Tadeo Cabrera	Capitán Joaquín Hoyos	Capitán Domingo Araos
Teniente don José Nicolás Moreno	Alférez don José María Camacho	Teniente don Vicente Benavides	Teniente don Esteban Quijano
Alférez don José Antonio Sánchez	Teniente don Buenaventura Ahumada	Alférez don Nepomuceno Forero	Alférez don José Antonio Díaz
Alférez don Pedro Rodríguez Correa	Alférez don Javier Rodríguez Correa	Alférez don Ignacio Díaz	Alférez don Francisco Bastidas
	Alférez don José Ardila		
Segunda compañía			
Capitán don Luis Rubio	Capitán don Juan Tobar	Capitán don Antonio Zornoza	Capitán don José Ignacio Umaña
Teniente don Mariano Grillo	Teniente don José Arjona	Teniente don Vicente Umaña	Teniente don José Bastidas
Alférez don Rufino Barros	Alférez don Esteban Pallares	Alférez don Blas Torres	Alférez don Miguel Sánchez

(Continúa)

Segunda compañía			
Alférez don Ignacio Calderón	Alférez don Nicolás Quevedo	Alférez don Manuel Caballero Góngora	Alférez don Narciso Santander
Tercera compañía			
Capitán don Zenón Gutiérrez	Capitán don Telmo Manrique	Capitán don Clemente Malo	Capitán don Luis Tobar
Teniente don Francisco González	Teniente don José María Araos	Teniente don Fernando Rodríguez Correa	Teniente don José Vásquez
Alférez don Toribio Rubio	Alférez don Eugenio Ospina	Alférez don Manuel Vicente Esguerra	Alférez don Nepomuceno Estévez
	Alférez don Javier Rodríguez	Portaestandarte voluntario don Valentín Torres	Alférez don Antonio Mendoza
			Portaestandarte voluntario don Félix Bastidas

Fuente: elaboración propia a partir de información de *Cómo nació la República de Colombia*, editado en 1967, págs. 113 a 120.

Las tropas de caballería fueron alistadas en los diferentes pueblos por los alcaldes de la siguiente manera: en Facatativá, ochenta hombres; Usaquén, cuarenta; Tabio, cincuenta; Chía, cuarenta; Sesquilé, sesenta; Chocontá, cincuenta; Suesca, sesenta; Gachancipá, treinta; Bojacá, cincuenta; Zipaquirá, cincuenta; Guachetá, treinta, y Machetá, cuarenta.

Tabla 2. Regimiento de voluntarios de infantería de Santafe

Primer batallón		Segundo batallón	
Plana mayor		Plana mayor	
Cargo	Nombres	Cargo	Nombres
Coronel	Don Luis Caycedo	Coronel	Don Luis Eduardo de Azuola
Sargento mayor	Don José María Berrueco	Sargento Mayor	vacante

(Continúa)

Primer batallón		Segundo batallón	
Plana mayor		Plana mayor	
Cargo	Nombres	Cargo	Nombres
Ayudante mayor	Don Joaquín de Castro	Ayudante Mayor	Don Vicente Cornejo
Abanderado	Don Fernando Caycedo	Abanderado	Don Joaquín Ricaurte
Primera de granaderos		Segunda de granaderos	
Capitán Juan Gómez		Capitán don Dionisio Caycedo	
Teniente don José Granados		Teniente don Manuel Caycedo	
Subteniente don Carlos Ortega		Subteniente don Vicente Maza	
Primera de fusileros	Segunda de fusileros	Primera de fusileros	Segunda de fusileros
Capitán don Pantaleón Santamaría	Capitán don Luis Sarmiento	Capitán don José Acevedo	Capitán don Santiago Umaña
Teniente don José María Serna	Teniente don José Ignacio París	Teniente don José Arce	Teniente don Ignacio Ricaurte
Subteniente don Eduardo de Elorga	Subteniente vacante	Subteniente vacante	Subteniente don Policarpo Uricoechea
Tercera de fusileros	Cuarta de fusileros	Tercera de fusileros	Cuarta de fusileros
Capitán don Pantaleón Santamaría	Capitán don Juan Vernaza	Capitán don José María Quijano	Capitán don Víctor García del Castillo
Teniente don José María Serna	Teniente don Antonio Licht	Teniente don Joaquín Borrero	Teniente don Francisco Javier González
Subteniente don Eduardo de Elorga	Subteniente vacante	Subteniente don Manuel Samper	Subteniente Manuel Posse
Quinta de fusileros	Sexta de fusileros	Quinta de fusileros	Sexta de fusileros
Capitán don José Camilo Manrique	Capitán don Antonio María Castillo	Capitán don José Antonio Leiva	Capitán don José María Portocarrero
Teniente vacante	Teniente don Manuel Urquinaona	Teniente vacante	Teniente don Juan Granados

(Continúa)

Quinta de fusileros	Sexta de fusileros	Quinta de fusileros	Sexta de fusileros
Subteniente don Ignacio Vergara	Subteniente Alejandro Domenech	Subteniente don Domingo Rosas	Subteniente Santiago Páramo
Séptima de fusileros	Octava de fusileros	Séptima de fusileros	Octava de fusileros
Capitán don José M. García del Castillo	Capitán don José Joaquín Álvarez	Capitán don Manuel Pardo	Capitán don Antonio Nariño
Teniente don Isidro Vergara	Teniente don José Ponce	Teniente vacante	Teniente don Juan Ortega
Subteniente vacante	Subteniente vacante	Subteniente Joaquín Pardo	Subteniente Antonio Nariño y Ortega

Fuente: elaboración propia a partir de información de *Cómo nació la República de Colombia*, editado en 1967, págs. 113 a 120.

El total de hombres del regimiento fue de mil seiscientos quince, entre quienes se incluía a los sargentos, los tambores, los cabos y las demás tropas; su uniforme era de casaca azul, vivos y calzón blancos, vuelta solapa y collarín encarnados, y el último galoneado de oro y botón de oro.

El batallón constaba de cinco compañías, cada una de ciento ochenta personas, para un total de cuatrocientos hombres, incluido el personal de mando. Tal como sucede hasta la fecha, su organización nunca ha estado completa ni en sus cuadros de mando ni en el de su tropa.

Del libro de Julio Mario Luqui-Lagleyze (1995),²⁶ *El ejército realista en la guerra de la independencia*, se incorpora la semblanza del Ejército realista al que se enfrentaban los criollos en América, en aspectos tales como la procedencia geográfica de los oficiales: “Un total de 364 oficiales reseñados [...]. Las cifras

²⁶ LUQUI-LAGLEYZE, Julio Mario-El ejército realista en la guerra de la independencia-Instituto Nacional Sanmartiniano/Fundación Mater Dei, Buenos Aires, 1995, pág. 45.

Tabla 3. Batallón de infantería de guardias nacionales de Santafe del Nuevo Reino de Granada

Plana mayor			
Cargo		Nombres	
Comandante coronel		Don Antonio Baraya	
Sargento mayor		Don Joaquín Ricaurte y Torrijos	
Ayudante mayor teniente		Don Pedro María Moledo	
Ayudante segundo teniente		Don Manuel Ricaurte y Lozano	
Abanderado		Don Francisco de Paula Santander	
Capellán cirujano doctor		Don José Joaquín García	
Armero		Ignacio Muñoz	
Primera de fusileros	Segunda de fusileros	Tercera de fusileros	Cuarta de fusileros
Capitán don Francisco de Paula Morales	Capitán don José María Olano	Capitán don Domingo Montenegro	Capitán don José Ortega
Teniente don Carlos Salgar	Teniente don Antonio Ricaurte	Teniente don José Nicolás Moreno	Teniente don Agustín Velasco
Subteniente don Joaquín Ortega y Santamaría	Subteniente Pedro Rocha	Subteniente don Mariano París	Subteniente don Mariano Álvarez Lozano
Subteniente don Lino Ramírez	Subteniente don Miguel Malo	Subteniente don Pedro Acevedo	Subteniente don Juan Pardo

Fuente: elaboración propia a partir de información de *Cómo nació la República de Colombia*, editado en 1967, págs. 113 a 120.

indican un 63 % de oficiales americanos y un 35 de peninsulares en tanto que solo un 1 % es extranjero”.

Con respecto a la experiencia de combate de los oficiales realistas, el mismo autor investiga sobre aquellos oficiales “de línea” y “de milicias”:

La operatividad de los oficiales: Como último punto a tener en cuenta en este estudio sociológico de los oficiales estimamos de interés estudiar cual era la experiencia bélica de ellos, tanto en las guerras de la península como en las de América [...]. Una gran parte

de los oficiales peninsulares fueron prisioneros en Francia y vueltos a España se los destinó al Depósito de Ultramar donde sirvieron para aumentar los cuerpos expedicionarios [...]. Hay también algunos veteranos de las Invasiones del Río de la Plata.

Tomando la totalidad de las fojas estudiadas y realizando un recuento de acciones bélicas en que se hallaron cada uno de ellos el promedio general de ellas indica que los oficiales habían participado en dos acciones militares en América y una en España. El promedio es aparentemente bajo debido a la gran cantidad de oficiales sin experiencia bélica que se hallaban en las milicias autónomas del virreinato. Así la experiencia bélica de los oficiales de línea se convierte en seis acciones militares en América y ninguna en España [...]. En los de milicias la experiencia es casi nula con sólo una acción en América y ninguna en España. La inmensa mayoría de ellos carecía absolutamente de experiencia bélica.

Los conflictos en el siglo XIX

Los primeros gobiernos conformados en la nueva nación fueron declarados de forma provisional, no a la espera de fortalecer su posición independiente, sino hasta que el Rey Fernando VII de España decidiera venir a gobernar directamente en América. Asumieron en su concepción el sistema presidencial de organización del poder público a imitación de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo un régimen o una filosofía política democrática, al cual no supieron darle distancia con la forma de jefatura de Estado de las monarquías, de manera tal que las nuevas fuerzas armadas recibieron el encargo de defender el gobierno establecido, misión que como veremos se ha cumplido con pocas variaciones hasta hoy.

Entre los días 10 y 11 de julio de 1810, según relata Juan Camilo Rodríguez Gómez (2010)²⁷, hubo combates en El Socorro en los que murieron varios pobladores, razón por la que decidieron conjuntamente con los Cabildos de Vélez y de la Villa de San Gil, con dos diputados por cada pueblo, sentar las bases de su Constitución Política del 15 de agosto de 1810, que entre sus artículos señala:

1. La Religión cristiana que uniendo a los hombres por la caridad, los hace dichosos sobre la tierra, y los consuela con la esperanza de una eterna felicidad.
2. Nadie será molestado en su persona o en su propiedad sino por la ley.
3. Todo hombre vivirá del fruto de su industria y trabajo...
4. La tierra es el patrimonio del hombre que debe fecundar con el sudor de su frente, y así una generación no podrá limitar o privar de su libre uso a las generaciones venideras con las vinculaciones, mayorazgos y demás trabas contrarias a la naturaleza y sagrado derecho de propiedad y a las leyes de la sucesión. [...]
7. Toda autoridad que se perpetúa está expuesta a erigirse en tiranía.
14. El Gobierno del Socorro dará auxilio y protección a todo pueblo que quiera reunirse a gozar de los bienes que ofrecen la libertad e igualdad que ofrecemos como principios fundamentales de nuestra felicidad.

²⁷ RODRÍGUEZ GÓMEZ Juan Camilo, La independencia del Socorro en la génesis de la emancipación colombiana, Revista Credencial, Edición 242 Febrero 2010, <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2010/socorro.htm>

Sin haberse alcanzado la independencia, se dio el intento de organizar políticamente la República, y para esto se reunieron en Cartagena los delegados de la mayoría de las provincias. Mientras Camilo Torres planteó una Constitución federal, los delegados santafereños, con don Antonio Nariño, defendieron la instauración de un Estado unitario. Dado que no hubo acuerdo entre los representantes de las provincias, los santafereños regresaron y decidieron empezar a llamarse provincia de Cundinamarca, y redactaron la Constitución de 1811,²⁸ de carácter provincial y monárquica.

De su articulado se transcriben los asuntos de mayor interés para la investigación:

-De la forma de gobierno y sus bases

Artículo 9.-Habrà un Senado de Censura y Protección, compuesto de un Presidente, que lo será el Vicepresidente de la Representación Nacional, y cuatro miembros, para sostener esta Constitución y los derechos del pueblo, a fin de que de oficio o requerido por cualquiera ciudadano, reclame cualquiera infracción o usurpación de todos o cada uno de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que sea contra el tenor de la Constitución.

Artículo 12.-La reunión de dos o tres funciones de los Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una misma persona, o corporación, es tiránica y contraria por lo mismo a la felicidad de los pueblos.

-Del poder Ejecutivo

²⁸ CONSTITUCIÓN DE CUNDINAMARCA DE 30 DE MARZO DE 1811 PROMULGADA EL 4 DE ABRIL DE 1811, articulado tomado de <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-de-cundinamarca-30-de-marzo-de-1811-y-promulgada-el-4-de-abril-de-1811--0/html/>

Artículo 6.-Si los Consejeros notan que el Presidente quiere tomar o toma providencias directa o indirectamente subversivas de esta Constitución, no cubrirán su responsabilidad únicamente con ser de contraria opinión; sino que estarán obligados bajo la misma responsabilidad a dar inmediatamente parte al Senado, para que éste, en uso de sus facultades, tome las medidas que estime oportunas.

Artículo 7.-En los asuntos en que se trate de reunir en un punto la Fuerza Armada, de aumentarla considerablemente, hacerla marchar, ponerla en acción, bien sea dentro de la capital o en cualquiera parte de la provincia, tendrán los Consejeros voto deliberativo, y la pluralidad decidirá si deben o no tomarse tales providencias; pero una vez acordado el asunto y su objeto, podrá el Presidente solo continuar dirigiéndolo, arreglándose a lo resuelto.

Artículo 11.-También queda a su disposición la Fuerza Armada de la provincia con arreglo al Artículo 7 de este Título pero por ningún caso podrá el Presidente ni sus Consejeros tomar el mando de las tropas durante el tiempo que ejerciten el Poder Ejecutivo; sino que para este efecto nombrarán el oficial u oficiales militares de su mayor satisfacción.

-Del senado

Artículo 18.-Los jefes y cuerpos militares, sin perjuicio de que por lo general estén subordinados al Presidente del Estado, quedarán constitucionalmente sometidos para este caso a las órdenes de la Representación Nacional.

-De la Fuerza Armada

Artículo 1.-El objeto de la Fuerza Armada es el de defender al Estado de todo ataque y toda irrupción enemiga, evitar conmociones y desórdenes en lo interior, y celar el cumplimiento de las leyes.

Artículo 2.-Por tanto, todo ciudadano es soldado nato de la patria mientras que sea capaz de llevar las armas, sin distinción de clase,

estado o condición; y nadie puede eximirse del servicio militar en las graves urgencias del Estado cuando pelagra la patria.

Artículo 3.-En este caso, todo hombre, sin distinción de clase, estado o condición, está obligado, no sólo a militar, sino a vestirse, armarse y mantenerse a su costa, y el Estado cuidará de socorrer a aquellos que indispensablemente necesiten auxilios. Este estado de armamento general se llama leva en masa de la nación.

Artículo 4.-Para los casos comunes y la policía interior tendrá la provincia un número de tropas veteranas proporcional a su población y a los ingresos del Erario público; y para reforzar un número competente, y también proporcional, de tropas de milicias.

Artículo 5.-Para reponer y completar tanto las tropas veteranas como las milicias, se deroga perpetuamente el arbitrio del enganchamiento, y en su lugar sólo quedará el de las quintas, en que cada población contribuirá con el número de tropas que proporcionalmente le toquen. Cualquiera persona que voluntariamente quiera servicio, se le dará sin premio ni gratificación alguna de enganchamiento.

Artículo 6.-Todo hombre que ha militado diez años en tiempo de paz y seis en el de guerra ha cumplido su servicio, y sólo en extrema necesidad podrá ser obligado nuevamente a tomar las armas mientras dure la urgencia.

Artículo 7.-Ningún ciudadano podrá gozar de los derechos de tal si no acredita estar alistado en la leva general del distrito de su domicilio.

Artículo 8.-Para el sorteo de la quinta se formará un reglamento en que se exprese la forma y el modo de hacerse este sorteo; en el orden que deben entrar todos los ciudadanos en él según su edad, estado y condición, y la proporción en que cada poblado debe dar su contingente.

Artículo 9.-La Fuerza Armada es esencialmente obediente y por ningún caso tiene derecho de deliberar, sino que siempre debe estar sumisa a las órdenes de sus jefes.

Artículo 10.-Para evitar que estos jefes abusen de su autoridad en perjuicio de los derechos del pueblo y en trastorno del Gobierno, se dividirán, tanto las tropas de milicias como las veteranas, en muchas porciones, independientes unas de otras, y cuyo número sea proporcional a la totalidad de la Fuerza Armada.

Artículo 11.-Para el mismo efecto se prohíbe absolutamente y sin la menor dispensa, el que la totalidad de la Fuerza Armada de la provincia se ponga a las órdenes de un solo hombre, sea el que fuere, ni aun con el pretexto de ser un gran General, pues en caso de guerra se formarán Cuerpos de ejércitos independientes unos de otros, y la dirección de su totalidad estará al cuidado del Gobierno por medio de una comisión militar, y así la alta dirección de las armas pertenece al Gobierno y el mando inmediato de las tropas de guarnición o acuarteladas dentro de la ciudad y sus arrabales, al Comandante de las armas de ella, como a cada jefe en su respectivo departamento.

Artículo 12.-Desde ahora se formará esta comisión militar compuesta de los oficiales más inteligentes que hubiere, sean del grado que fueren, para que trabajen el plan de defensa de la provincia, y en vista de él formen el definitivo reglamento y pie de fuerza en que deban quedar tanto las tropas veteranas como las milicias, economizando todo lo posible en las plazas de oficiales que sean innecesarias, y proporcionando los sueldos de las tropas al jornal usual que ganan en esta provincia los labradores y artesanos, sujeto todo a la aprobación del Poder Legislativo.

Artículo 13.-Las tropas veteranas en tiempo de paz no podrán estar acantonadas en un solo punto y para que no se enerven con la ociosidad, después de dejar en las poblaciones principales el nú-

mero de tropas que se considere bastante para conservar su orden y policía, el resto podrá aplicarse en trabajos vigorosos y útiles que les conserven la salud, quedando sus rebajas a beneficio del Tesoro Público, y turnando en sus destinos la guarnición y los trabajadores.

Artículo 14.-Las tropas quedan sujetas a la ordenanza militar, que tendrá toda su fuerza y vigor, en todo lo que no se reforme por la comisión militar y que no contrarie a este Título de la Constitución. Ninguna tropa extraña podrá transitar por el territorio de esta provincia, ni mucho menos acamparse o acantonarse en ella, sin previo expreso consentimiento del Senado y pasaporte formal del Poder Ejecutivo, en que se haga expresa mención de dicho consentimiento y del número de tropas que deben transitar, acantonarse o acamparse.

Con referencia a la administración de la justicia, Carlos Gabriel Salazar Cáceres (2016)²⁹ observa que hubo reconocimiento de los pronunciamientos sobre derechos humanos expuestos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así, la Constitución de Cundinamarca de 1911 extinguió la tortura, declaró la inviolabilidad del domicilio y ordenó que la libertad solo fuera coartada cuando un juez decretara la pena de arresto; la Constitución de Tunja sumó a sus disposiciones penales que la pena fuera para el autor y no también para sus familiares, y la Constitución de Antioquia, en 1812, introdujo el principio de favorabilidad o benignidad en las penas y el *habeas corpus*.

Por su parte, en noviembre de 1811 se reunió en Santafé el Congreso de las Provincias y se generó el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada, considerada ésta

²⁹ SALAZAR CÁCERES Carlos Gabriel (2016), Revista Principia Iuris, ISSN Impreso 0124-2067/ISSN En línea 2463-2007, Julio-Diciembre 2016, Vol. 13, N.º 26, pág. 37.

la primera constitución de carácter nacional³⁰. Desde 1811 hasta 1814, en un periodo que se conoce como “La Patria Boba”, se presentó la primera guerra civil entre tropas de la temporalmente independiente Cundinamarca, presidida por Antonio Nariño, y la Unión Federalista de varias provincias, presidida por Camilo Torres, con un número aproximado de 1224 muertos.³¹ La conformación de esa primera república, según expresa Ibáñez Sánchez (2010)³², tuvo su desenlace mediante acciones militares en tres teatros geográficos de operaciones: 1) la capital y las provincias de Tunja y El Socorro; 2) Popayán y Pasto; y 3) Cartagena, Santa Marta y Venezuela.

Al primer escenario Nariño envió tropas sobre Tunja y El Socorro al mando de los generales Ricaurte y Baraya, quienes lo traicionaron y lo derrotaron en Ventaquemada el 12 de diciembre de 1812. Posteriormente, Nariño los derrotó a inicios de 1813, y gobernó en paz hasta 1814 con la llegada de Bolívar a Santafé.

En el sur la guerra inició con el triunfo de Baraya en la Batalla del Bajo Palacé el 28 de marzo, lo que permitió a los vallecaucanos avanzar y ocupar Pasto, recuperado luego por tropas de Caicedo y Cuero y Macaulay en 1813, hecho que permitió a Juan Sámano ocupar de nuevo el Valle del Cauca, lo que obligó a la reacción de Nariño, quien lo derrotó en el Alto Puracé el 30 de diciembre de 1813 y en Calibío el 15 de enero de 1814, acciones

³⁰ REDONDO Barraza Lourdes Paola, Historia política y constitucional de Colombia, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 2001, www.todacolombia.com/historia-de-colombia

³¹ RAMSEY W. Russell, (1981) Guerrilleros y soldados, Ediciones Ter-cer Mundo, pág. 59.

³² IBÁÑEZ Sánchez José Roberto (2010), Panorama militar de la guerra de independencia, Banco de la República, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Revista Credencial-Historia, Edición 244, abril de 2010, www.banrepultural.org

con las que de nuevo se recuperó Popayán. Para recuperar el dominio sobre Pasto, Nariño debió combatir contra Aymerich en el río Juanambú el 28 de marzo de 1814, con triunfos continuados en Cebollas y Tacines, con los cuales Nariño consideró seguro entrar a Pasto con su grupo de mando y sin tropas, pero fue hecho prisionero y enviado a Cádiz, donde permaneció prisionero hasta 1821.

En la costa Atlántica la lucha empezó en Cartagena y Mompox contra Santa Marta para lograr el control del río Magdalena. Hubo acciones armadas en Corozal y Mompox con triunfo del patriota Pantaleón de Germán Ribón el 19 de octubre de 1812. A Cartagena llegó Bolívar desde Europa y le fue asignada la guarnición de Barrancas, desde donde —ignorando las órdenes— inició ofensiva y ocupó Tenerife, Plato, Zambrano y Mompox, pasó a Guamal y Chiriguaná, siguió a Tamalameque, Puerto Real y Ocaña, y en 1813 atacó la guarnición de Cúcuta y derrotó a Ramón Correa el 23 de febrero.

La contienda fratricida a la postre conduciría a facilitar la reconquista española, razón por la cual el primer periodo revolucionario de nuestra historia fue llamado “Patria Boba”³³. Esta política federalista era contraria a las ideas de los independentistas Bolívar, Castelli en el alto Perú, Yegros en Paraguay y Egaña en Chile, quienes proponían la unidad para enfrentar la previsible reconquista española luego de la derrota de Francia en Europa.

Liberado el rey de España del temor al poder de Napoleón, se propuso realizar la reconquista americana con un ejército que

³³ BUSHNELL, David (2006) *Colombia una nación a pesar de sí misma*, Planeta, Quinta edición, págs. 62 a 70. ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999), *Historia Política de Colombia*, Planeta, págs. 41 a 44.

resumía la experiencia de más de cien combates con las fuerzas francesas. La expedición con más de cien mil hombres debía desembarcar contra las provincias independientes del Río de La Plata al mando de don Pablo Morillo. Antes de partir de España, se conoció que las tropas de Buenos Aires habían tomado Montevideo, y entonces se cambió el rumbo de la expedición para que llegase primero a la Capitanía de Venezuela, a fin de pasar de allí a Cartagena y pacificar el Nuevo Reino de Granada. Se cumple el objetivo de instalarse en Venezuela y se efectúa luego el sitio a Cartagena, en el cual mueren más de seis mil habitantes por hambre y otros cientos por las armas, y de allí se pasa a la reinstauración del Virreinato en 1816 en Santafé. El nuevo régimen ocasionó, según Hernández de Alba (1981)³⁴, el exilio de líderes y en él se decretó, en 1816, el fusilamiento de los alzados que se relacionan en la tabla 4.

Tabla 4. Fusilamientos del nuevo régimen

Nombres	Cargo
5 de junio	
Antonio Villavicencio	Capitán de fragata
19 de junio	
Ignacio Vargas	Dr. miembro del Colegio Electoral
José de la Cruz Contreras	Capitán
José María Carbonell	Primer presidente de la junta tumultuaria
José Ramón de Leyva	Teniente coronel
6 de julio	
Crisanto Valenzuela	Dr. Agente fiscal de la Sala de Justicia
Miguel Pombo	Dr. abogado de la antigua Real Audiencia
Francisco Javier García Evia	Dr. de la antigua Real Audiencia

(Continúa)

³⁴ HERNÁNDEZ De Alba Guillermo, (1981) *Cómo nació la República de Colombia*, Talleres Gráficos Banco de la República págs. 72 a 88.

Nombres	Cargo
Jorge Tadeo Lozano	Oficial de Guardias Españolas
Emigdio Benítez	Dr. de la antigua Real Audiencia
José Gregorio Gutiérrez	De la Sala de Gobierno, Sala de Apelaciones y Corte de Alta Justicia
20 de julio	
Antonio Baraya	Capitán
Pedro La Lastra	Contador del Tribunal de Cuentas del gobierno rebelde
3 de agosto	
Custodio García Rubira	Dr. Gobernador y capitán general del Socorro
Hermógenes Céspedes	Oficial de la independencia
José Gabriel Peña	Dr. Gobernador y capitán general de Pamplona
3 de agosto	
Agustín Zapata	Cabecilla revolucionario en Zipaquirá
Juan Nepomuceno Tigarana	Revolucionario alborotador
Francisco Carate,	Revolucionario alborotador
José Gómez	Revolucionario alborotador
Luis Sánchez	cabecilla revolucionario en Zipaquirá
José Riaño Cortez	Revolucionario alborotador
13 de agosto	
José Ayala	Teniente Coronel
29 de agosto	
Joaquín Hoyos	Dr. del Tribunal de Vigilancia
31 de agosto	
José Nicolás Rivas	Gobernador y capitán de Cundinamarca
Mariano Grillo	Capitán del gobierno insurgente
Joaquín Grillo	Sargento primero
Joaquín Camacho	Dr. Diputado del Congreso Rebelde
3 de Septiembre	
José Antonio Ardila	Dr. Teniente Coronel
Miguel Angulo	Gobernador y capitán general de la Provincia del Socorro
Pedro Monsalve	Comandante del Batallón del Socorro
Juan José Monsalve	Oficial en la revolución

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Nombres	Cargo
Emigdio José Troyano	Coronel jefe de Brigada de Insurgentes
Pedro Ramírez	Capitán pardo de los rebeldes
Carlos Montúfar	Teniente coronel español que llegó a ser jefe de Brigada y mayor general del Ejército de Popayán
Liborio Mejía	Presidente de gobierno rebelde y general en jefe en acciones contra Juan Sámano
Silvestre Ortiz	Mayor general interino del Ejército
Andrés Linares	Teniente coronel comandante del Batallón de Soberbios de Antioquia
Félix Pelgrón	Capitán insurgente de Venezuela
Rafael Niño	Capitán insurgente de Venezuela
Pascual Andreu	Cabo español
Martín Cortez	Dr. Auditor de guerra del Ejército
José María Cabal	General rebelde
10 de septiembre	
José María Arrublas	Negociante de Santafé
Manuel Bernardo Álvarez	Contador mayor del Tribunal de Cuentas
Manuel García	Escribano de la Real Hacienda
Dionisio Tejada	Gobernador y capitán general de la Provincia de Antioquia
19 de septiembre	
José María Ordoñez	Capitán de insurgentes
Antonio José Vélez	Teniente coronel rebelde
José María Gutiérrez	Coronel rebelde
24 de Septiembre	
Manuel Santiago Vallecilla	Gobernador y capitán general de la Provincia de Popayán
Luis José García	Dr. gobernador de la Provincia de Neiva
José Díaz	Brigadier del Ejército rebelde
Benito Salas	Teniente coronel y comandante de Armas de Neiva
Fernando Salas	Administrador de alcabalas y luego coronel insurgente
Francisco López	Teniente coronel comisario de guerra

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Nombres	Cargo
José María López	Administrador de correos y capitán insurgente
Santiago Abdón Herrera	Guerrillero del Opón
Antonio Palacio	Venezolano gobernador y capitán general de la Provincia de Tunja
André Rosas	
José España	
Rafael Lataza	
José María Quijano	Mayor general del Ejército rebelde del sur
26 de septiembre	
Mariano Matute	Oficial rebelde
5 de octubre	
Manuel Rodríguez Torices	Dr. presidente del Congreso y uno de los primeros revolucionarios de Cartagena
Camilo Torres	Dr. diputado del Congreso por la Provincia de Popayán
José María Dávila	Dr. diputado del Congreso por la Provincia de Antioquia
Pedro Felipe Valencia	Coronel de los Reales Ejércitos ayudó desde París a la causa
7 de octubre	
Francisco Julián Olaya	Teniente del gobierno revolucionario
Andrés Quijano	Alférez rebelde
12 de octubre	
Salvador Rizo	Proveedor del Ejército de Ricaurte y capitán
18 de octubre	
Joaquín Morillo	Oficial rebelde
22 de octubre	
Francisco Cabal	Gobernador y capitán general de la Provincia de Popayán
25-October	
Francisco de Paula Aguilar	Español subteniente del batallón auxiliar y luego capitán insurgente
26 de octubre	
Manuel José Sánchez	Conspirador en Villa de Leyva
Juan Bautista Gómez	Conspirador en Villa de Leyva

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Nombres	Cargo
Francisco Olmedilla	Coronel rebelde
Juan Salías	Sargento Mayor del Batallón de la Guayra
Frutos Joaquín Gutiérrez	Dr. secretario del Congreso, Luis Báez español que fue capitán y edecán de Bolívar
Luis Abad	Español rebelde
Joaquín Cerda	Corregidor de los pueblos del Meta, comandante de Escuadrón de Indios
29 de octubre	
Miguel Montalvo	Dr. gobernador de la Provincia del Chocó
Miguel Busch	Dictador de la Provincia del Chocó y general en jefe del ejército rebelde
Francisco Caldas	Dr. ingeniero general del ejército rebelde y general de Brigada
Francisco Antonio Ulloa	Dr. general de Brigada
José León Armero	Gobernador y capitán general de la Provincia de Mariquita
Agustín Calambazo	Coronel y cacique de indios en el Valle del Cauca
6 de noviembre	
José Chacón	Teniente coronel rebelde
Ramón Villamizar	Fiscal del Tribunal de Policía del gobierno insurgente en Cúcuta
José Javier Gallardo	Del Colegio Electoral de Pamplona
Luis Mendoza	Perseguidor de los vasallos del rey
Agustín Navia	Alcalde de la Santa Hermandad de Caloto
José María Pino	Cabecilla de la contrarrevolución de 1813 en el Valle del Cauca
Pedro López	Teniente rebelde
23 de noviembre	
Francisco Morales	Contador de la Renta de Aguardientes alborotador en el 20 de julio
29 de noviembre	
Juan Nepomuceno Niño	Gobernador y capitán general de la Provincia de Tunja
José Ramón Lineros	Teniente coronel rebelde teniente gobernador de la Provincia del Socorro

(Continúa)

Nombres	Cargo
José Cayetano Vásquez	Gobernador y capitán general de la Provincia de Tunja
Nicolás María Buenaventura	Teniente coronel insurgente comandante de Escuadrón de Caballería en Ibagué
Miguel Gómez Plata	Comisionado por el Gobierno para viajar a Londres a comprar municiones
12 de diciembre	
Egidio Ponce	Comandante militar de Ambalema

Fuente: elaboración propia a partir de información de fusilamientos en el Nuevo Reino de Granada, del Libro *Cómo nació la República*, Serie documental 1812-1817, editado en 1981 págs. 72 a 88

Hubo entonces motivos suficientes para decidirse con plena convicción a pelear por la independencia, e iniciar así la preparación del Ejército para la campaña libertadora en Casanare por parte de Santander, mientras Páez combatía en Apure y Bolívar gestionaba ayudas en otras naciones. En medio de tal situación, Inglaterra proporcionó apoyo con armas y tropas, presentándose un reinicio violento de la guerra a partir de 1817³⁵ con las batallas, entre otras, en la tabla 5 enumera Simón Harker (2017).

Tabla 5. Reinicio de la guerra a partir de 1817

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Pueblo de Cartagena	Pablo Morillo	Sitio a la ciudad por 106 días. Dio inicio al Régimen del Terror	Ago. 1815	Derrota por hambre
Simón Bolívar	Franco Fernández Vinoni	Puerto Cabello. Siendo Bolívar coronel y estando al mando del	Jun. 30 de 1812	Derrota

(Continúa)

³⁵ WWW.COLOMBIA.COM, Patria Boba (1810-1815).

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
		fuerte de San Felipe, en Puerto Cabello, tuvo que rendir la fortaleza y prisión después de que unos reos partidarios de Fernando VII se escapasen y la tomaran desde su interior.		
Simón Bolívar	Antonio F. Rebustillo	Tenerife. Bolívar con doscientos hombres entrenados en tres semanas tomó el considerado inexpugnable fuerte sobre el río Magdalena ^a .	Dic. 23 de 1812	Triunfo
Simón Bolívar	Vicente Capmani	El Banco	Dic. 27 de 1812	Triunfo
Simón Bolívar	N. Capdevila	Chiriguaná	Ene.19 de 1813	Triunfo
Simón Bolívar	Valentin Capmani	Tamalameque	Ene. 3 de 1813	Triunfo
Simón Bolívar	Ramón Correa y Guevara	San José de Cúcuta. El triunfo de Bolívar significó el principio de la libertad colombiana y venezolana y la caída del Ejército español.	Feb. 28 de 1813	Triunfo
Simón Bolívar	Antonio Tiscar	Barinas	Jul. 05 de 1813	Triunfo
Simón Bolívar	Julián Izquierdo	Tinaquillo y Taguanes	Jul. 31 de 1813	Triunfo

^a IBAÑEZ Jose Roberto, El río Magdalena en la guerra de independencia, Banrepcultural, <http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-291/el-rio-magdalena-en-la-guerra-de-independencia>

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Simón Bolívar	Domingo Monteverde	Cercanías de Puerto Cabello	Ago. 29 de 1813	Triunfo
Simón Bolívar	Antonio Zuazola	Mirador de Solano	Ago. 31 de 1813	Triunfo
Simón Bolívar	Remigio Bobadilla	Bárbula. Campaña Admirable. Muerte de Atanasio Girardot. Primer mártir de la patria	Sep. 30 de 1813	Triunfo
Simón Bolívar	José Ceballos	Barquisimeto. Allí se perdieron dieciocho oficiales y trescientos cincuenta soldados, quedando prisioneros cuatrocientos hombres, contándose entre	Nov. 10 de 1813	Derrota
		ellos trece oficiales. Las dos piezas de batalla, seiscientos fusiles, el parque de reserva y tres banderas fueron los trofeos del enemigo (pág. 87) ^b .		
Simón Bolívar	José Miguel Salomón	Vigirima. Con el triunfo se evitó la toma de Caracas por parte de los realistas obligando a éstos a volver a Puerto Cabello.	Nov. 23 de 1813	Triunfo

^b DE MOSQUERA Tomás Cipriano, Memoria sobre la vida del general Bolívar, http://bdigital.unal.edu.co/4/154/capitulo_7.pdf

(Continúa)

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Simón Bolívar	José Ceballos	Araure. En este choque perecieron lanceados más de quinientos jinetes de Yáñez. La batalla fue decisiva al acabar con el proyecto de los españoles de marchar a Valencia vía San Carlos.	Dic. 5 de 1813	Triunfo
Simón Bolívar	José Tomás Boves	San Mateo. Allí fue herido Boves y se retiró dejando en el campo de batalla entre ochocientos y mil muertos y heridos.	Feb. 28 de 1814	Triunfo
Simón Bolívar	José Tomás Boves	San Mateo	Mar. 11 de 1814	Triunfo
Simón Bolívar	José Tomás Boves	San Mateo. El capitán Antonio Ricaurte, al observar las tropas realistas bajar por la colina, ordenó rápidamente el desalojo de la casa y esperó su ingreso, por lo que prendió fuego a la pólvora haciendo estallar el depósito. Falleció en tal hazaña heroica ^c .	Mar. 25 de 1814	Triunfo

^c INFORME21.COM, (2016), Hace 202 años la Batalla de San Mateo inmortalizó lucha de Antonio Ricaurte, <https://informe21.com/actualidad/hace-202-anos-la-batalla-de-san-mateo-inmortalizo-lucha-de-antonio-ricaurte>

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Simón Bolívar	Juan Manuel Cajigal	Carabobo. Inf uyoó en la recuperación moral de oficiales y tropas patriotas que venían sufriendo considerables derrotas dirigidos por el jefe realista José Tomás Boves ^d .	May. 28 de 1814	Triunfo
Simón Bolívar	José Tomás Boves	La Puerta	Jun. 15 de 1814	Derrota
Simón Bolívar	José Tomás Boves	San Mateo. No fue posible liberar a Venezuela.	Dic. 12 de 1814	Derrota
Simón Bolívar	Francisco Tomás Morales	Aragua de Barcelona	Ago. 18 de 1814	Derrota
Simón Bolívar	Andrés Martínez	Campano	Jun. 18 de 1816	Triunfo
Simón Bolívar	Francisco Jiménez	Clarines	Ene. 9. De 1817	Derrota
Simón Bolívar	Jesús Alemán	Cercanías de Guaicupa	Abr. 27 de 1817	Triunfo
Simón Bolívar	Juan Cornos	Caño de Casacoima	Jul. 4 de 1817	Derrota
Simón Bolívar	Pablo Morillo	Calabozo	Feb.12 de 1818	Triunfo
Simón Bolívar	Pablo Morillo	La Uriosa	Feb.15 de 1818	Triunfo
Simón Bolívar	Pablo Morillo	El Sombrero Semen	Feb.16 de 1818 Mar.16 de 1818	Derrota Derrota
Simón Bolívar	Miguel Latorre	Ortiz	Mar. 26 de 1818	Derrota
Simón Bolívar	Antonio Pla	Rincón de los Toros	Abr. 17 de 1818	Derrota

^d GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA, VICEPRESIDENCIA, Hoy se cumplen 204 años de la "Primera Batalla de Carabobo, <http://www.vicpresidencia.gob.ve/index.php/2018/05/28/hoy-se-cumplen-204-anos-de-la-primera-batalla-de-carabobo/>

(Continúa)

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Simón Bolívar	José Ma. Barreiro	Pantano de Vargas. La carga de Rondón y trescientos jinetes lanceros de Llano Alto salvaron al Ejército libertador.	Jul. 25 de 1819	Triunfo
Simón Bolívar	José M ^a . Barreiro	Molinos de Bonza	Ago. 3 de 1819	Triunfo
Simón Bolívar	José M ^a . Barreiro Francisco Jiménez	Boyacá. Dos batallas. El Cnel. Jiménez contra el General Santander en el puente sobre la quebrada Teatinos y a un kilómetro y medio el general Barreiro contra el general Antonio José Anzoátegui.	Ago. 7 de 1819	Triunfo
		Un total de ochenta y seis muertos, treinta heridos y mil seiscientos prisioneros españoles, y trece muertos, cincuenta y tres heridos patriotas sellaron la libertad de Colombia.		
Simón Bolívar	Miguel Latorre	Carabobo. Confirmó la independencia de Venezuela.	Jun. 24 de 1821	Triunfo

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Simón Bolívar	Basilio García	Bomboná. Esta logra que los realistas de Pasto no salieran a defender Quito. Le da la libertad al actual departamento de Nariño.	Abr. 7 de 1822	Triunfo
Simón Bolívar	Agustín Agualongo	Ribera de Tahuando	Jul. 17 de 1823	Triunfo
Simón Bolívar	José Cantera	Junín. Combate de sables, lanzas y bayonetas. Selló la independencia de Perú.	Ago. 6 de 1824	Triunfo
Fco. de Paula Santander	Bartolomé Lizón Ildefonso Casas	Llano de Carrillo San Faustino	Oct. 12 de 1813. Feb. 6 de 1814	Derrota Triunfo
Fco. de Paula Santander	Juan Tolrá	Paya. Permitió el avance hacia el páramo de Pisba por tres caminos.	Jun. 27 de 1819	Triunfo
Fco. de Paula Santander	José M ^a . Barreiro	Puente de Gameza. Barreiro no pudo evitar la invasión de Tunja.	Jul. 11 de 1819	Triunfo
Antonio José de Sucre	Francisco González	Yaguachi	Ago. 19 de 1821	Triunfo
Antonio José de Sucre	Melchor Aymerich	Guachi	Sep. 12 de 1821	Derrota
Antonio José de Sucre	Nicolás López	Riobamba	Abr. 21 de 1822	Triunfo
Antonio José de Sucre	Melchor Aymerich	Pichincha. Produjo la liberación de Ecuador y fue definitiva para liberar al Perú.	May. 21 de 1822	Triunfo

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Antonio José de Sucre	J. Benito Boves	Cuchilla de Taindala	Nov. 24 de 1822	Derrota
Antonio José de Sucre	J. Benito Boves	Cuchilla de Taindala	Dic. 23 de 1822	Triunfo
Antonio José de Sucre	J. Benito Boves	Quebrada de Yacuanquer	Dic. 23 de 1822	Triunfo
Antonio José de Sucre	J. Benito Boves	Alturas de Pasto	Dic. 24 de 1822	Triunfo
Antonio José de Sucre	Jerónimo Valdés	Paso de Corpahuaico	Dic. 3 de 1824	Triunfo
Antonio José de Sucre	José Laserna	Ayacucho. Mil ochocientos muertos, setecientos heridos y dos mil doscientos cincuenta y dos prisioneros	Dic. 09 de 1824	Triunfo
		determinaron la caída del poder español en Perú.		
Antonio Nariño	Juan Sámano	Alto Palace. Campaña del sur.	Dic. 30 de 1813	Triunfo
Antonio Nariño	Juan Sámano	Calibío. Campaña del sur.	Ene.15 de 1814	Triunfo
Antonio Nariño	Melchor Aymerich	Tacines. Campaña del sur.	May. 09 de 1814	Triunfo
Antonio Nariño	Pedro Noriega	Ejido de Pasto. Campaña del sur.	May. 10 de 1814	Triunfo
Antonio Nariño	Pueblo de Pasto	Tacines. Campaña del sur. Nariño fue apresado y luego llevado a la prisión de Cádiz.	May. 11 de 1814	Derrota

(Continúa)

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
José Antonio Páez	Miguel Marcelino	Las Matas Guerrerreñas. Páez con ciento veinte jinetes derrotan a cuatrocientos jinetes españoles ^e .	Oct. 27 de 1813	Triunfo
José Antonio Páez	Bartolomé Lizón	Cercanías de Estanques	Feb. 18 de 1814	Triunfo
José Antonio Páez	Vicente Peña	Paso del Palmarito	Feb. 2 de 1816	Triunfo
José Antonio Páez	Francisco López	Mata de la Miel. Combate nocturno de infantería	Feb. 16 de 1816	Triunfo
José Antonio Páez	Francisco López	El Paso del Frío (Apure). Se enfrentaron mil cien lanceros contra cuatro mil setecientos hombres entre infantería y caballería.	Jun. 13 de 1816	Triunfo
José Antonio Páez	Fecundo Mirabal	Los Cocos. Páez le arrebató a un destacamento del ejército realista dos mil cabezas de ganado a orillas del río Arauca.	Oct. 6 de 1816	Triunfo

^e ESTEVES GONZÁLEZ Edgar, Los libros de El Nacional (2004), Batallas de Venezuela desde 1810 hasta 1830, Colección Ares N.º 46.

(Continúa)

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
José Antonio Páez	Francisco López	El Yagual. El general Santander decide quedar a órdenes de Páez con el fin de evitar división de la fuerza libertadora, Páez triunfa contra un número superior de enemigos con mayor poder de fuego y movilidad.	Oct. 8-11 de 1816	Triunfo
José Antonio Páez	Juan Reyes Vargas	Achaguas. El coronel español José Francisco López es derrotado y pierde trescientos hombres y quinientos caballos a manos de quinientos llaneros a caballo.	Oct. 14 de 1816	Triunfo
José Antonio Páez	Francisco López	El Paso de San Así (Apure).	Nov. 6 de 1816	Triunfo
José Antonio Páez	Francisco López	Banco Largo. El Ejército nacionalista derrota por sorpresa a un destacamento del Ejército realista.	Nov. 7 de 1816.	Triunfo
José Antonio Páez	Salvador Gorrín	Laguna de Palital. Morillo asaltó la ciudad. Los habitantes se defendieron tenazmente y fueron obligados a retirarse mal heridos a la laguna donde fueron asesinados.	Dic. 18 de 1816	Derrota

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
José Antonio Páez	Miguel Latorre	Mucuritas. Páez destroza el grueso de las fuerzas realistas.	Ene. 28 de 1817	Triunfo
José Antonio Páez	Remigio Ramos	Barinas. Un total de ciento cincuenta y tres lanceros ganan la batalla contra mil doscientos jinetes de caballería de las fuerzas españolas, siendo la más famosa batalla comandada por Páez.	Ago. 31 de 1817	Triunfo
José Antonio Páez	Pablo Morillo	Biruaca. El comandante Juan Nepomuceno resiste tres días valientemente con sus hombres sitiados en la plaza, y en el tercer día se rinde al Ejército realista y muere al siguiente día producto de dos impactos de bala de mosquete.	Mar. 6 de 1818	Triunfo
José Antonio Páez	José María Quero	San Fernando Páez. En bocas de Cople, frente a San Fernando, sorprende a tropas realistas a las cuales enfrenta y hace huir.	Mar. 07 de 1818	Triunfo

(Continúa)

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
José Antonio Páez	Miguel Latorre	Cogedes. Páez arrasa en el río con los realistas y comienza el ascenso de las montañas para acabar con batallones que huyeron de la batalla inicial.	May. 2 de 1818	Triunfo
José Antonio Páez	Francisco Tomás Morales	El Guayabal. Recibiendo órdenes por parte de Bolívar se asalta el apostamiento realista en Borbón que protegía las comunicaciones en Apure.	May. 28 de 1818	Triunfo
José Antonio Páez	Francisco Tomás Morales	El Hato de Cañafístola. En la quebrada de La Puerta, junto al río Sémen y San Juan de los Morros, en el departamento de Guárico, cerca de dos leguas de Villa de Cura de Aragua.	Feb. 11 de 1819	Derrota
José Antonio Páez	Pablo Morillo	Las Cocuisas	Abr.18 de 1819	Indecisa
José Antonio Páez	Pablo Morillo	Las Queseras del Medio. Ciento cincuenta lanceros de propósito deliberado atacaron de frente y derrotaron al Ejército español de Morillo.	Abr. 2 de 1819	Triunfo

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
José Antonio Páez	Juan Durán	Pueblo de la Cruz	Jul. 22 de 1819	Triunfo
José Antonio Páez	Simón Sicilia	Vigirima. Derrota del poderoso regimiento de Granada a manos de tan solo doscientos venezolanos.	Feb. 26 de 1822	Triunfo
José Antonio Páez	Simón Sicilia	Patanemo. Los realistas venían de Puerto Cabello, al coincidir con el Ejército de los criollos, se situaron sobre una de las sierras del valle de Vigilia, el Ejército patriota los derrotó en la falda de la sierra.	Mar. 8 de 1822	Triunfo
José Antonio Páez	Raimundo Montero	Vigía	Abr. 24 de 1822	Triunfo
José Antonio Páez	Tomás García	Cercanías de Puerto Cabello	May. 5 de 1822	Triunfo
José Antonio Páez	Sebastián Calzada	Vigía Baja	May. 30 de 1822	Indecisa
José Antonio Páez	Francisco Tomás Morales	Llanura de Naganagua	Ago. 11 de 1822	Triunfo
José Antonio Páez	Pedro Calderón	Mirador de Solano El temible Antonio Zuluaga es derrotado por el Ejército patriota, capturado y encerrado.	Oct. 28 de 1823	Triunfo

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
José Antonio Páez	Sebastián Calzada	Puerto Cabello. Era el último baluarte español en Venezuela, el brigadier Sebastián calzada ofreció feroz resistencia al Ejército patriota. El general Paez logra infiltrar ciento cincuenta lanceros e igual número de fusileros en el reducto.	Nov. 7 de 1823	Triunfo
Antonio Baraya	Miguel Tacón y Cospique	Bajo Palace. Primera batalla contra el Ejército español	Mar. 28 de 1811	Triunfo
Francisco Toro	José Ceballos	Coro	Nov. 28 de 1810	Derrota
Francisco Toro	Femando Miyares	Sabaneta de Coro	Nov. 30 de 1810	Triunfo
Francisco Toro	Jacinto Iztueta	Cerro de los Corianos	Jul. 19 de 1811	Derrota
José María Córdoba	Francisco Warleta	Chorrosblancos	Feb. 12 de 1820	Triunfo
José María Córdoba	Francisco Warleta	Agustín Agualongo	Oct. 11 de 1823	Derrota
Francisco Miranda	Melchor Somomba	Morro de Valencia	Jul. 23 de 1811	Triunfo
Francisco Miranda	N. Landaeta	Valencia	Ago. 12 de 1811	Triunfo
Francisco Miranda	Domingo Monteverde	La Victoria	Jun. 20 de 1812	Triunfo
José María Cabal	Antonio Tenorio de	Popayán	Abr. 26 de 1812	Triunfo
José María Cabal	Aparicio Vidaurrázaga	El Palo	Jul. 5 de 1815	Triunfo

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Santiago Mariño	Juan Gabazo	Guiripa	Ene. 13 de 1813	Triunfo
Santiago Mariño	Eusebio Antoñanzas	Cumaná	Ago. 2 de 1813	Triunfo
Santiago Mariño	José Tomás Boves	Bocachica	Mar. 31 de 1814	Derrota
Santiago Mariño	José Ceballos	Arao	Abr. 16 de 1814	Derrota
Santiago Mariño	Juan Bautista Pardo	Cumaná	Ene. 19 de 1817	Derrota
Santiago Mariño	Pablo Murillo	Cariaco	Jun. 10 de 1817	Derrota
Santiago Mariño	Francisco Jiménez	Cariaco	Mar. 12 de 1818	Derrota
Santiago Mariño	Agustín Noguera	Cariaco	Oct. 31 de 1818	Derrota
Santiago Mariño	Eugenio Arana	Cantaura	Jun. 12 de 1819	Triunfo
Atanasio Girardot	Manuel Cañas	Carache	Jun. 19 de 1813	Triunfo
Atanasio Girardot	Domingo Monteverde	Las Vigías	Ago. 20-26 de 1813	Triunfo
José Francisco Bermúdez	Francisco Cerveriz	Irapa	Ene. 16 de 1813	Triunfo
José Francisco Bermúdez	Francisco Rósete	Los Pilones	Mar. 12 de 1814	Triunfo
José Francisco Bermúdez	Francisco Tomás Morales	Maturín	Sep. 7-12 de 1814	Triunfo
José Francisco Bermúdez	José Tomás Boves	Magueyes	Nov. 9 de 1814	Derrota
José Francisco Bermúdez	Manuel Cañas	Yaguaraparo	Sep. 2 de 1816	Triunfo
José Francisco Bermúdez	Miguel Latorre	Angostura	Jul. 10 de 1817	Triunfo
José Francisco Bermúdez	Tomás Cires	Puerto de la Madera	May 30 de 1818	Derrota

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
José Francisco Bermúdez	José Guerrero	Guiria	Ago.25 de 1818	Triunfo
José Francisco Bermúdez	Ramón Anes	Río Caribe	Sep. 13 de 1818	Derrota
José Francisco Bermúdez	José Pereira	Alturas de Conoma	Ago. 13 de 1819	Derrota
José Francisco Bermúdez	José Izturriz	Chuspita	May. 11 de 1821	Triunfo
José Francisco Bermúdez	J. M. Monagas	Rodeo de Guatira. Hizo parte de los movimientos de distracción de Bermúdez que permitieron la victoria final en Carabobo.	May. 12 de 1821	Triunfo
José Francisco Bermúdez	Ramón Correa	El Consejo	May. 20 de 1821	Triunfo
José Francisco Bermúdez	Francisco Tomás Morales	Las Cocuisas	May. 21 de 1821	Derrota
José Francisco Bermúdez	Lucas González	Alto de Macuto	Jun. 14 de 1821	Triunfo
José Francisco Bermúdez	José Pereira	Alturas del Calvario	Jun. 24 de 1821	Derrota
Custodio García Rovira	Sebastián Calzada	Alto Cachiri	Feb. 8 de 1816	Triunfo
Custodio García Rovira	Sebastián Calzada	Cachiri	Feb. 21-22 de 1816	Derrota
Manuel Piar	Lorenzo F. de la Hoz	Maturín	Mar. 20 de 1813	Triunfo
Manuel Piar	Lorenzo F. de la Hoz	Maturín	Abr. 11 de 1813	Triunfo

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Manuel Piar	Domingo Monteverde	Maturín. Fue uno de los cinco intentos realistas de tomar la región y fue notable la participación de mujeres en el combate, tales como Juana Ramírez <i>La Avanzadora</i> .	May. 25 de 1813	Triunfo
Manuel Piar	Bartolomé Martínez	Barcelona	May. 15 de 1814	Triunfo
Manuel Piar	N. Pineda	Quebrada de los Frailes	Sep. 29 de 1814	Triunfo
Manuel Piar	Francisco Tomás Morales	El Juncal. Luego de la batalla, Piar se junta con las fuerzas de Manuel Cedeño e inician la Campaña de Guayana.	Sep. 27 de 1815	Triunfo
Manuel Piar	Lorenzo Fitzgerald	Paso del Caura	Ene. 8 de 1817	Triunfo
Manuel Piar	Lorenzo Fitzgerald	Angostura. La ciudad se encontraba rodeada de un parapeto y de un pozo de agua, y poseían unos de treinta cañones que hicieron imposible su acceso.	Ene. 18 de 1817	Derrota
Manuel Piar	Lorenzo Fitzgerald	Misiones del Caroni	Feb. 7. de 1817	Triunfo

(Continúa)

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Manuel Piar	Miguel Latorre	San Félix. Los realistas quedaban en buena parte sin un punto de abastecimiento para su Ejército y en peligro de hambruna. Aceleró la rendición de Angostura.	Abr. 11 de 1817	Triunfo
José Padilla	Antonio Quintana	Arsenal de Cartagena	Jun. 24 de 1821	Triunfo
José Padilla	Francisco Tomás Morales	Barca de Maracaibo	May. 8 de 1823	Triunfo
José Padilla	F. de S. Echeverría	Punta de la Palma	May. 20 de 1823	Triunfo
José Padilla	Jaime Moreno	Maracaibo	Jun. 16 de 1823	Triunfo
José Padilla	Francisco Tomás Morales	Embocadura del Garabulla	Jun. 29 de 1823	Derrota
José Padilla	Ángel Laborde	Lago de Maracaibo. Batalla naval	Jul. 24 de 1823	Triunfo
José Félix Rivas	José Martí	Niquitao	Jul. 1 de 1813	Triunfo
José Félix Rivas	Francisco Oberto	Horcones	Jul. 22 de 1813	Triunfo
José Félix Rivas	José I. del Valle Miramón	La Guaira	Sep. 13 de 1813	Triunfo
José Félix Rivas	José Tomás Boves	La Victoria. Esta batalla impide el intento realista de cortar las comunicaciones entre Caracas y Valencia.	Feb. 12 de 1814	Triunfo
José Félix Rivas	Francisco Rósete	Charallave	Feb. 20 de 1814	Triunfo

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
José Félix Rivas	Francisco Rósete	Ocumare	Mar. 20 de 1814	Triunfo
José Félix Rivas	José Tomás Boves	Urica. En esta batalla murió José Tomás Boves.	Dic. 5 de 1814.	Triunfo
José Félix Rivas	Francisco Tomás Morales	Maturín	Dic. 11 de 1814	Derrota
Hermógenes Maza	José Tomás Boves	San Mateo	Mar. 17 de 1814	Triunfo
Hermógenes Maza	Vicente Villa	Tenerife	Jun. 25 de 1820	Triunfo
Rafael Urdaneta	Juan Reyes Vargas	Baragua	Ene. 21 de 1814	Triunfo
Rafael Urdaneta	José Ceballos	Barquisimeto	Mar. 11 de 1814	Derrota
Rafael Urdaneta	José Ceballos	Valencia	Abr. 2 de 1814	Triunfo
Rafael Urdaneta	Remigio Ramos	Las Brujitas	Jul. 30 de 1814	Triunfo
Rafael Urdaneta	Sebastián Calzada	Mucuchies	Sep. 17 de 1814	Derrota
Rafael Urdaneta	Sebastián Calzada	Chitagá	Nov. 25 de 1815	Derrota
Rafael Urdaneta	Sebastián Calzada	Los Callejones de Mérida	Dic. 27 de 1816	Derrota
Rafael Urdaneta	Juan Saint Just	Morro de Barcelona	Jul. 18 de 1819	Triunfo
Rafael Urdaneta	Tomás Cires	Aguasanta	Ago. 5 de 1819	Triunfo
Joaquín Ricaurte	Sebastián Calzada	Chire	Oct. de 31. 1815	Triunfo
Joaquín Ricaurte	Miguel Rodríguez	San Juanito	Sep. 29 de 1819	Triunfo
Mariano Montilla	José Tomás Boves	Cagua	Feb. 27 de 1814	Derrota
Mariano Montilla	José Solís	Riohacha	Mar. 13 de 1820	Triunfo

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Mariano Montilla	Vicente Sánchez Lima	Lagunasalada	May. 25 de 1820	Triunfo
Mariano Montilla	Esteban Díaz	Sitionuevo	Jun. 30 de 1820	Triunfo
Mariano Montilla	Gabriel Torres	Balerías de la Redención	Sep. 17 de 1821	Sus.de armas
Mariano Montilla	F. Labarcés	Cercanías de Santa Marta	Ene. 22 de 1823	Triunfo
Mariano Montilla	Narciso López	Voladorcito	Mar. 24 de 1823	Triunfo
Liborio Mejía	Juan Sámano	Cuchilla del Tambo	Jun. 29 de 1816	Derrota
Liborio Mejía	Carlos Toirá	La Plata	Jul. 10 de 1816	Derrota
Juan B. Arizmendi	Fabio Rósete	Ocumare	Mar. 16. 1814	Derrota
Juan B. Arizmendi	Joaquín Urreiztieta	Juan Griego	Nov. 16. de 1815	Triunfo
Juan B. Arizmendi	Joaquín Urreiztieta	Casafuerte de Villa del Norte	Nov. 16. de 1815	Triunfo
Juan B. Arizmendi	Francisco Maya	Castillo de Santa Rosa	Dic. 15 de 1815	Derrota
Juan B. Arizmendi	Joaquín Urreiztieta	Cercanías de Santa Rosa	Ene. 5 de 1816	Derrota
Juan B. Arizmendi	Joaquín Urreiztieta	Castillo de Santa Rosa	Ene. 25 de 1816	Derrota
Juan B. Arizmendi	Juan Bautista Pardo	Pampatar	Nov. 13 de 1816	Triunfo
Luciano D'Elhuyar	Domingo Monteverde	Las Trincheras	Oct. 3 de 1813	Triunfo
José Tadeo Monagas	Juan Sánchez	Maitaco	May. 26 de 1815	Triunfo
José Tadeo Monagas	Manuel Vaca	San Pedro	Jul. 9 de 1815	Triunfo

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
José Tadeo Monagas	Rafael López	Punche	Jun.30 de 1816	Derrota
José Tadeo Monagas	Rafael López	Piritu	Sep.12 de 1816	Triunfo
José Tadeo Monagas	Eugenio Arana	Santa Clara	Mar. 17 de 1820	Triunfo
José Tadeo Monagas	Francisco Guzmán	Quiamare	Nov. 2 de 1820	Triunfo
Antonio Obando	Sebastián Calzada	Popayán	Ene. 24 de 1820	Derrota
Antonio Obando	J. Benito Boves	Margen del Guáitara	Oct. 28 de 1822	Derrota
Manuel Cedeño	Antonio Puch	Orocopiche	Jun. 9 de 1815	Derrota
Manuel Cedeño	Salvador Gorriñ	Santa Bárbara	Jun. 19 de 1815	Derrota
Manuel Cedeño	Salvador Gorriñ	Banco de Angostura	Jun. 20-22 de 1815	Derrota
Manuel Cedeño	Salvador Gorriñ	Caraqueño	Jun. 30 de 1815	Derrota
Manuel Cedeño	Nicolás Cerruti	El Tigre	Mar. 8 de 1816	Triunfo
Manuel Cedeño	Nicolás Cerruti	Caicara	Mar. 12 de 1816	Triunfo
Manuel Cedeño	Francisco Tomás Morales	Laguna de los Patos	May. 20 de 1818	Derrota
Alejandro Macaulay	Antonio Tenorio	Ejido de Popayán	Abr. 27 de 1812	Triunfo
Alejandro Macaulay	Antonio Tenorio	Puente del Cauca	Abr. 27 de 1812	Triunfo
Alejandro Macaulay	Estanislao Merchancano	Juanambú	Jul. 17 de 1812	Triunfo
Alejandro Macaulay	Juan Villota	Ejido de Pasto	Jul. 26 de 1812	Derrota
Carlos Soubllette	J. M. Villavicencio	La Popa	Nov. 11 de 1815	Triunfo

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Carlos Soubllette	Francisco Tomás Morales	Maracay	Jul. 8 de 1816	Derrota
Carlos Soubllette	Francisco Tomás Morales	Aguacates	Jul. 14 de 1816	Derrota
Carlos Soubllette	Juan Nepomuceno Quero	Quebradahonda	Ago. 2 de 1816	Triunfo
Carlos Soubllette	Miguel Latorre	Alto de las Cruces	Sep. 24 de 1819	Triunfo
Carlos Soubllette	Simón Sicilia	El Pedregal	May. 16 de 1822	Triunfo
Carlos Soubllette	Francisco Tomás Morales	Dabajuro	Jun. 7 de 1822	Derrota
Pedro Labatut	Tomás Pacheco	Sitionuevo	Nov. 7 de 1812	Triunfo
Pedro Labatut	Pedro Domínguez	Guáimaro	Nov. 18 de 1812	Triunfo
Pedro Labatut	Pedro Domínguez	Cerro de San Antonio	Dic. 12 de 1812	Triunfo
Pedro Labatut	Vicente Taliedo	La Ciénaga	Dic. 13 de 1812	Triunfo
Pedro Labatut	Antonio F. Rebustillo	San Juan	Dic. 15 de 1812	Triunfo
Pedro Labatut	Antonio Núñez	Santa Marta	Mar. 5 de 1813	Triunfo
Pedro Zaraza	Manuel G. Luna	El Butaque	Mar. 21 de 1816	Derrota
Pedro Zaraza	Miguel Latorre	La Hogaza	Dic. 2 de 1817	Derrota
N. Zaraza	Pablo Morillo	Maracay	Mar. 14 de 1818	Derrota
Manuel R. Serviez	Juan Sámano	Cañas	Jul. 26 de 1813	Derrota
Manuel R. Serviez	Antonio Gómez	Cabuya de Cáqueza	May. 11 de 1816	Derrota

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Manuel R. Serviez	Miguel Latorre	Upía	Jun. 22 de 1816	Derrota
Bartolomé Salom	Agustín Agualongo	Pasto	Ago. 23 de 1823	Triunfo
Bartolomé Salom	Agustín Agualongo	Calambuco	Sep. 13 de 1823	Triunfo
Bartolomé Salom	José Ramón Rodil	El Callao	Ene. 22 de 1826	Triunfo
José Sarda	Manuel Canalete	San Juan	Oct. 7 de 1821	Triunfo
José Sarda	Francisco Tomás Morales	Sabana de Garabulla	Nov. 13 de 1822	Derrota
Gregorio MacGregor	Juan Nepomuceno Quero	Valle de Onoto	Jul. 18 de 1816	Triunfo
Gregorio MacGregor	Tomás García	Chaguaramas	Jul. 28 de 1816	Derrota
Gregorio MacGregor	Rafael López	Hato de Alacranes	Sep. 6 de 1816	Triunfo
Gregorio MacGregor	Alejandro Hore	Portobelo	Abr. 30 de 1819	Derrota
Gregorio MacGregor	Vicente Sánchez Lima	Riohacha	Oct. 5 de 1819	Triunfo
Vicente Sucre	Salvador del Hoyo	Castillo de Cumaná	Mar. 6 de 1811	Triunfo
Carlos Winnelt	Manuel Astor	Barrancas	Abr. 8 de 1811	Triunfo
Francisco González M.	José Salcedo	Santacruz	May. 8 de 1811	Triunfo
José Salcedo	Juan Díaz Flórez	El Teque	Jul. 11 de 1811	Triunfo
Felipe Estévez	Juan Gabazo	Ensenada de Chichiriviche	Ago. 23 de 1811	Derrota
Felipe Estévez	Francisco Quevedo	Macareo	Feb. 27 de 1812	Triunfo

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Felipe Estévez	José Chartre	Sorondo	Mar. 26 de 1812	Derrota
Pedro María Freytes	Francisco Quevedo	Soledad y Santa Cruz	Sep. 5 de 1811	Derrota
Pedro María Freytes	Francisco Quevedo	Inmediaciones del Pao	Sep. 20 de 1811	Derrota
Pedro María Freytes	Juan Aldama	Casafuerte de Barcelona	Abr. 7 de 1817	Derrota
Pedro Montúfar	Tomás Santacruz	Guapuscal	Sep.12 de 1811	Triunfo
Agustín Arrijoja	Francisco Quevedo	Uracoa y Tabaica	Sep. 15 de 1811	Derrota
Agustín Arrijoja	Eusebio Antoñanzas	Calabozo	May.20. 1812	Derrota
Agustín Arrijoja	Alejo Mirabal	Cabruta	Mar. 5 de 1814	Triunfo
Manuel Villapol	Lorenzo de la Hoz	Caratal	Nov. 28 de 1811	Triunfo
Antonio Morales	N. Salcedo	Simaña	Nov. 30 de 1811	Triunfo
Antonio Morales	Nicolás López	Ría de Guayaquil	Jul. 17 de 1821	Triunfo
Mariano Escobar	Juan José Caicedo	Guavito	Dic. 24 de 1811	Derrota
José Ignacio Rodríguez	Miguel Tacón	Río Iscuandé	Ene. 29 de 1812	Triunfo
José Ignacio Rodríguez	Joaquín Paz	Popayán	Oct. 9 de 1812	Triunfo
Pedro León Torres	Juan Reyes Vargas	Siquisique	Mar. 15 de 1812	Derrota
Pedro León Torres	Basilio García	Popayán	Jun. 15 de 1821	Triunfo
Manuel Marín	Domingo Monteverde	Carora	Mar. 23 de 1812	Derrota
Florencio Palacios	Domingo Monteverde	Araure	Abr. 7 de 1812	Derrota

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Miguel Ustariz	Domingo Monteverde	Pueblo de San José	Abr. 25 de 1812	Derrota
Miguel Ustariz	Domingo Monteverde	Morro de Valencia	May. 3 de 1812	Derrota
Antonio Flórez	Domingo Monteverde	Guayos	May. 8 de 1812	Derrota
J. Domingo Monasterio	Domingo Monteverde	Güique	May. 13 de 1812	Derrota
Juan Paz del Castillo	Domingo Monteverde	Güique	May. 14 de 1812	Triunfo
Joaquín Caicedo	Juan José Caicedo	Pasto	May. 21 de 1812	Derrota
Juan Pablo Ayala	Domingo Monteverde	Guaica	May. 26 de 1812	Triunfo
Juan Pablo Ayala	Domingo Monteverde	Pantanero	Jun. 29 de 1812	Triunfo
Joaquín Groira	Eusebio Antoñanzas	San Juan de los Morros	May. 28 de 1812	Derrota
José Gabriel Peña	Ramón Correa	San Antonio de Táchira	Jun. 13 de 1812	Derrota
Fernando Carabaño	Domingo Monteverde	Los Corianos	Jun. 17 de 1812	Derrota
Fernando Carabaño	Ignacio Larrús	Mompós	May. 24 de 1815	Derrota
Francisco Calderón	Melchor Aymeriche	Verdeloma	Jun. 25 de 1812	Derrota
Francisco Calderón	Toribio Montes	Mocha	Sep. 02 de 1812	Derrota
José Ducaylá	Domingo Monteverde	Guaica	Jul. 12 de 1812	Triunfo
Diego Jalón	Domingo Monteverde	San Esteban	Jul. 19 de 1812	Derrota
Agustín Salazar	Joaquín Paz	Pupiales	Ago. 17 de 1812	Triunfo

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Manuel Mateus	E. Eagard	San Miguel del Chimbo	Ago. 17 de 1812	Derrota
Carlos Montúfar	Toribio Montes	Quito	Nov. 3 de 1812	Derrota
Carlos Montúfar	Juan Sámano	Ibarra	Dic. 1 de 1812	Derrota
Manuel Cortés Campomar	Antonio F. Rebustillo	Mancomoján	Nov. 12 de 1812	Triunfo
Manuel Cortés Campomar	Antonio F. Rebustillo	Ovejas	Nov. 14 de 1812	Triunfo
Miguel Carabaño	Tomás Pacheco	Sispatá	Nov. 26 de 1812	Triunfo
Manuel del Castillo y Rada	Ramón Correa	Piedecuesta	Ene. 9 de 1813	Triunfo
Manuel del Castillo y Rada	Ramón Correa	Angostura de la Grita	Abr. 13 de 1813	Triunfo
Bernardo Bermúdez	Antonio Zuazola	Magüelles	Mar. 15 de 1813	Derrota
J. Francisco Ascué	Antonio Zuazola	Aragua de Cumaná	Mar. 16 de 1813	Derrota
Luis F. Chatillón	Tomás Pacheco	Papares	May. 10-11 de 1813	Derrota
Antonio María Briceño	José Yáñez	Guas dualito	May. 16 de 1813	Derrota
José Rafael Guevara	Pascual Martínez	Pampatar	Jun. 3 de 1813	Triunfo
Francisco Mantilla	N. Palomo y N. Colmenares	Güiripa	Sep. 1 de 1813	Triunfo
Ramón García del Sena	Juan Reyes Vargas	Cerritos Blancos	Sep. 13 de 1813	Triunfo
Ramón García del Sena	Miguel Puy	Barinas	Ene. 19 de 1814	Derrota
Carlos Padrón	José Tomás Boves	Santa Catalina	Sep. 21 de 1813	Derrota

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Pedro Martínez	José Yáñez	Achaguas	Sep. 29 de 1813	Derrota
Antonio Castillo	Antonio Millet	San Felipe	Oct. 11 de 1813	Triunfo
Vicente Campo Elías	José Tomás Boves	Mosquitero	Oct. 14 de 1813	Triunfo
Vicente Campo Elías	José Tomás Boves	La Puerta	Feb. 3 de 1814	Derrota
Juan Manuel Aldao	José Ceballos	Bobare	Oct. 17 de 1813	Derrota
Manuel Valdés	José Ceballos	Yaritagua	Oct. 23 de 1813	Derrota
Manuel Valdés	José Ibarrolaburu	Lezama	Mar. 14. de 1814	Triunfo
Manuel Valdés	Nicolás López	Pitayó	Jun. 06 de 1820	Triunfo
Manuel Valdés	Basilio García	Genoy	Feb. 2 de 1821	Derrota
Gabriel Liendo	José Yáñez	Nutrias y Guanare	Oct. 26 de 1813	Derrota
Pedro Aldao	José Tomás Boves	El Guárico	Dic. 8 de 1813	Derrota
Francisco Conde	Miguel Puy	Pueblo de Taluz	Dic. 27 de 1813	Triunfo
Francisco Conde	Miguel Puy	Nutrias	Ene. 14 de 1814	Derrota
Francisco Conde	Bartolomé Lizón	Estanques	Feb. 16 de 1814	Triunfo
José María Rodríguez	José Yáñez	Ospino	Feb 2 de 1814	Triunfo
Juan Escalona	José Ruíz	Herbor	Feb.15 de 1814	Triunfo
Juan Escalona	José Tomás Boves	Valencia	Jul. 10 de 1814	Derrota

(Continúa)

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Juan Escalona	Pedro Luis Inchauspe	Cumarebo. Permitió que Coro fuera retomada poco después por el Ejército de Colombia.	Jul. 11 de 1821	Triunfo
Juan Escalona	Pedro Luis Inchauspe	Cumarebo	Ago. 8 de 1821	Triunfo
Pablo Arambarri	Sebastián Calzada	San Carlos	Mar. 12-17 de 1814	Derrota
N. Núñez	Ignacio Larrús	Isla de Enmedio	Mar. 28 de 1814	Derrota
Tomás Montilla	José Tomás Boves	Magdaleno y Yuma	Abr. 1 de 1814	Triunfo
Francisco Vanegas	Melchor Aymerich	Platanar de Chaves	Abr. 19 de 1814	Derrota
Guillermo E. Virgo	Melchor Aymerich	Buesaco	Abr. 28 de 1814	Derrota
Guillermo E. Virgo	Melchor Aymerich	Cahcapamba	May. 4 de 1814	Triunfo
José María Fernández	José Tomás Boves	La Cabrera	Jun. 17 de 1814	Derrota
José María Hernández	Francisco Tomás Morales	Cercanías de Urica	Sep. 12 de 1814	Triunfo
Francisco Olmedilla	Tomás Pacheco	Guas dualito	Ene. 29 de 1815	Triunfo
J. Bautista Videau	Francisco Tomás Morales	Soto	Feb. 14 de 1815	Derrota
Pantaleón Germán Ribón	Esteban Fernández de León	Mompós	Oct. 19 de 1812	Triunfo
Pantaleón Germán Ribón	Valentín Capmani	Barranquilla	May. 18 de 1815	Derrota
Pantaleón Germán Ribón	Julián Bayer	Chima	Sep. 23-26 de 1815	Derrota

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Francisco Vicente Pareja	Salvador Gorriñ	Morichal de Becerro	Jun. 27 de 1815	Derrota
Francisco Vicente Pareja	Juan Soto	Morechito	Ago. 2 de 1815	Derrota
Pedro Monsalve	Aparicio Vidaurrázaga	Ovejas	Jun.30. 1815	Derrota
Basilio Belisario	Manuel García Luna	Medrano	Ago. 9 de 1815	Derrota
Francisco Peñalosa	Juan Soto	Río Caribe	Sep. 1 de 1815	Derrota
N. Rivero	Miguel Domínguez	Punta de Piedra	Sep. 11 de 1815	Derrota
Luis Aury	Juan Camacho	Santa Ana (Isla de Barú)	Sep. 25 de 1815	Derrota
Pedro Villapol	Vicente Sánchez Lima	Nechi	Oct. 20 de 1815	Derrota
Antonio Palacios	Sebastián Calzada	Balágula	Nov. 4 de 1815	Triunfo
Rafael Tono	Francisco Tomás Morales	Boquilla	Nov. 7 de 1815	Triunfo
Rafael Tono	Francisco Tomás Morales	Tierrabomba	Nov. 11-13 de 1815	Derrota
José Zata y Boussy	Francisco Tomás Morales	Castillo del Ángel	Nov. 15 de 1815	Triunfo
Miguel Guerrero	Ildefonso Arce	Mata de la Miel	Dic.14. 1815	Triunfo
Miguel Guerrero	Ramón Correa	El Rabanal	Dic. 20 de 1815	Derrota
Miguel Guerrero	Ramón Correa	El Rabanal	Ene. 8 de 1817	Derrota
N. Torres	Juan Reyes Vargas	Seibitá	Dic. 24 de 1815	Derrota

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
José María Mantilla	Francisco Delgado	Cúcuta	Feb. 22 de 1816	Derrota
Manuel Linares	Francisco Warleta	Ceja Alta	Mar. 22 de 1816	Derrota
Jesús Barrete	José Moles	Ceiba	Mar.24 de 1816	Triunfo
Francisco Aguilar	Donato Santacruz	Angostura de Carare	Abr. 23 de 1816	Derrota
Renato Beluche	Rafael Iglesias	Isla de Santacruz	May. 2 de 1816	Triunfo
Miguel Buch	Julián Bayer	San Pablo	May. 29 de 1816	Derrota
Miguel A. Vásquez	Andrés Torrellas	Mantecal	Jun. 9 de 1816	Derrota
Francisco Alcántara	Tomás Cires	Inmediaciones de Carúpano	Jun. 19 de 1816	Derrota
Antonio Ranjel	Andrés Torrellas	Achaguas	Jun. 19 de 1816	Derrota
Juan Nepomuceno Moreno	Manuel Villavicencio	Guachiría	Jun. 29 de 1816	Triunfo
Ramón Nonato Pérez	N. Ampueda	Betoyes	Jul. 25 de 1816	Triunfo
Tomás Villasal	Miguel Antonio León	Morrones	Dic. 22 de 1816	Derrota
Juan Galea	Antonio Pía	Camino de Guasdalito	Mar. 4 de 1817	Triunfo
Juan Galea	Manuel Jiménez	Chire y Pore	Mar. 27 de 1817	Triunfo
Rafael Jugo	Pablo Morillo	Carúpano	Jun. 13 de 1817	Derrota
Vicente Peña	Dionisio Orono	Paso del Apurito	Jun.18 de 1817	Triunfo
Juan José Ramírez	Dionisio Orono	Paso de Utreras	Jun. 20 de 1817	Derrota
Juan Galea	Juan Cornos	Pagallos	Jul. 8 de 1817	Triunfo

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Juan Galea	Miguel Latorre	Apostadero de la V. Guayana	Ago. 3 de 1817	Triunfo
Juan Galea	Dionisio Orono	Apure Seco	Sep. 30 de 1819	Triunfo
Leonardo Infante	Bartolomé Martínez	Chaguaramas	Jul. 8 de 1817	Derrota
Leonardo Infante	José María Obando	Quilcacé	Jul. 15 de 1821	Derrota
Joaquín Maneiro	Pablo Morillo	Enicas	Jul. 17 de 1817	Derrota
Joaquín Maneiro	Francisco Jiménez	Camino de la Aguada	Ago. 8 de 1817	Derrota
Francisco Esteban Gómez	Pablo Morillo	Matasiete. Murieron cuatrocientos hombres en ambos bandos y con la victoria que propició la retirada por siempre de España de la tierra neoespartana. Participaron mujeres como, por ejemplo, Tomasa Feliciana Vicuña.	Jul. 31 de 1817	Triunfo
Francisco Esteban Gómez	José Navas	Los Robles	Ago. 3 de 1817	Triunfo
Juan Fermín	Pablo Morillo	Juan Griego	Ago. 8. 1817	Derrota
Francisco Campos	Dionisio Orono	Paraguachi	Ago. 8 de 1817	Triunfo
José María Hermoso	Francisco Jiménez	Yaguaraparo	Ago. 27 de 1817	Derrota
Julián Infante	Blas Vega	Algarrobo	Sep. 3 de 1817	Derrota
Julián Infante	Bartolomé Martín (?)	Lagunaseca	Sep. 14 de 1817	Derrota

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Hipólito Cuecas	J. J. López	Rionegro	Oct. 3 de 1817	Triunfo
Ambrosio y Vicente Almeiti	Carlos Tolrá	Chocontá	Nov. 21 de 1817	Derrota
Juan José Rondón	Rafael López	Ribera de Santiago	Ene. 5 de 1818	Derrota
Domingo Montes	Eugenio Orana	Cumanacoa	Ene. 7 de 1818	Triunfo
Pedro Valcán	José Guerrero	Puente de Araya	Nov. 21 de 1818	Derrota
José J. Angulo	Sebastián Calzada	Laguna de Galápagos	Dic. 15 de 1818	Derrota
J. Francisco Blanco	Rafael López	Antón Pérez	Mar. 18 de 1818	Derrota
J. Francisco Blanco	Bartolomé Martínez	San Rafael de Orituco	Ago. 5 de 1820	Triunfo
Antonio Ranjel	Juan Reyes Vargas	Nutrias	May. 19 de 1818	Derrota
Antonio Ranjel	Narciso López	Trapiche de Alejo	Abr. 10 de 1819	Triunfo
Antonio Ranjel	Pedro Luis Inchauspe	Pedregal y Mitare	Jun. 18 de 1821	Triunfo
Francisco Aramendi	Miguel Latorre	Inmediaciones de S. Fernando	Ene. 26 de 1819	Triunfo
Francisco Aramendi	Antonio Ramos	Paso de Caujaral (Arauca)	Feb. 8 de 1819	Derrota
N. Chazu	N. Abreu	Izquierda del Apure	Ene. 30 de 1819	Triunfo
Fernando Figueredo	José Pereira	Paso del Jobo (Arauca)	Feb. 4 de 1819	Derrota
Fernando Figueredo	Javier Álvarez	Ocaña	Nov. 17 de 1820	Derrota
Comelio Muñoz	José Pereira	Sacrafamilia	Mar. 14 de 1819	Derrota

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Comelio Muñoz	Francisco Porras	Surero	Mar. 17 de 1819	Derrota
Ambrosio Plaza	José Pereira	Trapiche de la Gamarra	Mar. 27 de 1819	Derrota
Justo Briceño	José María Barreiro	Corrales y Gámeza	Jul. 10 de 1819	Derrota
Justo Briceño	Manuel Carrera y Colina	Coro	Sep. 18 de 1821	Triunfo
N. Ospina	Antonio Pía	Inmediaciones de Guasca	Ago. 10 de 1819	Triunfo
Juan M. Álvarez	Pedro Domínguez	Guanábano	Sep. 2 de 1819	Triunfo
José Antonio Maíz	Isidro Barrada	Peñón de Barbacoas	Ene. 23 de 1820	Triunfo
José María Gómez	Francisco Warleta	Remedios y Zaragoza	Feb. 5 de 1820	Triunfo
Miguel Montilla	Claudio Peraza	Paso de Las Garzas	Feb. 22 de 1820	Derrota
Miguel Montilla	Antonio Ramos	Quitacalzón	Feb. 27 de 1820	Derrota
Francisco Carmona	N. Jácome	Ocaña	Mar. 10 de 1820	Triunfo
Francisco Carmona	Vicente Sánchez Lima	Chiriguaná	Jun. 24 de 1820	Triunfo
Francisco Carmona	J. Bustamante	La Ciénaga	Ene. 23 de 1823	Triunfo
Francisco Abreu	Domingo Loyola	La Cruz	Mar. 16 de 1820	Derrota
José Mires	Juan Domínguez	La Plata	Mar. 28 de 1820	Triunfo
José Mires	Agustín Agualongo	Tausava	Oct. 14 de 1823	Triunfo
Francisco Rojas	José Guerrero	Güiria	May. 16 de 1820	Triunfo

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
John Illingworth	José Villegas	Punta Galera	May. 16 de 1820	Indecisa
Manuel Corral	N. Guerrero Cabero	Majagual	Jun. 11 de 1820	Triunfo
N. Mendoza	Vicente Villa	El Banco	Jun. 21 de 1820	Derrota
Francisco Gutiérrez	José Guerrero	Costas de Santafé	Ago. 25 de 1820	Derrota
Luis Urdaneta	Francisco González	Guachi	Nov. 12 de 1820	Derrota
Luis Urdaneta	José Ramón Rodil	Bellavista	Oct. 25 de 1824	Derrota
Ramón Ayala	Miguel Valbuena	Turbaco	Sep. 1 de 1820	Derrota
Felipe Macero	José Izturiz	Tacarigua	Oct. 19 de 1820	Triunfo
Felipe Macero	Ramón Avoy	El Rincón	Jun. 8 de 1821	Derrota
José María Carreño	Vicente Sánchez Lima	Río de la Fundación	Oct. 21 de 1820	Triunfo
José María Carreño	Francisco Labarcés	Riofrío	Nov. 8 de 1820	Triunfo
José María Carreño	Esteban Díaz	Puebloviejo y La Ciénaga	Nov. 10 de 1820	Triunfo
Juan Gómez	Pablo Morillo	Carache	Nov. 18 de 1820	Derrota
Juan Gómez	Manuel Carrera y Colina	Coro	Nov. 6 de 1821	Triunfo
Juan Gómez	Miguel Latorre	Villa de Coro	Dic. 29 de 1821	Derrota
Juan Gómez	Miguel Latorre	Vela de Coro	Ene. 9 de 1822	Derrota
Miguel Letamendi	Francisco González	Verdeloma	Dic. 20 de 1820	Derrota
José García	Miguel de la Piedra	Tanasigua	Dic. 26 de 1820	Derrota

(Continúa)

La guerra por el poder para los criollos y la independencia política

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Jacinto Lara	José Candamo	Boca del Sinú	Abr. 20 de 1821	Triunfo
Juan E. Castañeda	José Iztyurriz	Márgenes del Guapo	May. 8 de 1821	Derrota
Carlos Núñez	José Iztyurriz	Márgenes del Guapo	May. 10 de 1821	Triunfo
N. Cora	José Pereira	Dos Caminos	Jun. 19 de 1821	Derrota
José Laurencio Silva	Gaspar Ramírez	Camino de Tinaquillo	Jun. 19 de 1821	Triunfo
Cruz Carrillo	Manuel Lorenzo	San Felipe	Jun. 21 de 1821	Derrota
Cruz Carrillo	N. Crespo	Bailadores	Ene. 23 de 1823	Triunfo
Matías Padrón	José Pereira	La Guaira	Jun. 24 de 1821	Derrota
Manuel Rolando	Pedro Luis Inchauspe	La Sabánela	Jun. 24 de 1821	Derrota
Federico Rash	Nicolás López	Babahoyo	Jul. 19 de 1821	Triunfo
Pedro Murgueitio	Manuel M. Córdoba	Popayán	Ago. 13 de 1821	Triunfo
Manuel Manrique	Tomás García	Inmediaciones de Pto. Cabello	Ago. 21 de 1821	Triunfo
Judas Tadeo Piñango	Antonio Ramos	Calabozo	Ago. 27 de 1821	Triunfo
Francisco Gilí	Manuel Tello	Chipare	Abr. 17 de 1822	Triunfo
Guillermo Iribarren	Alejo Mirabal	Cercanías de Guardatinaja	Ago. 21 de 1821	Triunfo
León Pérez	Manuel Carrera y Colina	Coro	Sep. 6 de 1821	Triunfo
Francisco Gilí	Manuel Carrera y Colina	Santa Ana	Sep. 23 de 1821	Derrota

(Continúa)

Conflicto interno y normatividad: doscientos años de evolución paralela

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Francisco Gilí	Manuel Carrera y Colina	San Francisco	Sep. 26 de 1821	Triunfo
Juan Reyes Vargas	Manuel Carrera y Colina	Baragua	Oct. 1 de 1821	Derrota
Francisco Gilí	Lorenzo Morillo	Baragua	Ene. 16 de 1822	Derrota
Lino Clemente	Juan Ballesteros	Juana de Ávila	Abr. 24 de 1822	Triunfo
Lino Clemente	Lorenzo Morillo	Perijá	May. 4 de 1822	Triunfo
Lino Clemente	Francisco Tomás Morales	Salinarica	Sep. 6 de 1822	Derrota
Francisco Mana Parías	Francisco Tomás Morales	Sinamaica	Sep. 2. 1822	Derrota
Carlos Castelli	Francisco Tomás Morales	Paso de Zuleta	Sep. 4 de 1822	Derrota
Natividad Villamil	Francisco Tomás Morales	Castillo de San Carlos	Sep. 8. 1822	Derrota
Andrés Torrellas	Francisco Tomás Morales	Curimagua	Dic. 5 de 1822	Derrota
John Daniela	Ángel Laborde	Costa de Palito	May. 1 de 1823	Derrota
F. Carmesa y Luis Rieux	F. Labarcés	Santa Marta	Ene. 3 de 1823	Derrota
Julio A. Reimbolt	J. Bustamante	La Ciénaga	Ene. 20 de 1823	Triunfo
Camilo Mendoza	Pedro Fiallo	Valledupar	Ene. 23 de 1823	Triunfo
P. Crespo	N. Crespo	Cerro Marino	Ene. 23 de 1823	Triunfo

(Continúa)

Jefe patriota	Jefe realista	Acción de guerra	Fecha	Resultado
Manuel León	Francisco Tomás Morales	Gibraltar	Abr.17 de 1823	Triunfo
Reyes González	Antonio Gómez	El Tanque	May. 1 de 1823	Triunfo
Reyes González	Manuel Lorenzo	Cumarebo	Jun. 10 de 1823	Triunfo
Juan J. Flórez	Agustín Agualongo	Catambuco	Jun. 12 de 1823	Triunfo
Juan J. Flórez	José María Benavides	Sucumbíos	Jun. 12. de 1825	Triunfo
Alejandro Blanco	James Lameson	Puerto de Corona	Jun. 6 de 1823	Derrota

Fuente: complementación del autor al escrito de Simón Harker, *Batallas de la Independencia*, www.banrepcultural.org, Biblioteca Virtual- Credencial Historia N.º 61.

La confrontación de independencia, en la que se desarrollaron las batallas enumeradas hasta 1824, logró la participación plena por parte de los españoles criollos en el gobierno del Estado, y el inicio de la confrontación entre estos. Del periodo se concluyen los siguientes puntos:

- La guerra dejó unos doscientos mil muertos, lo cual es indicador de una violenta lucha en la que pereció, aproximadamente, el 4 % de la población.
- Fue un logro de los españoles criollos frente a los colonizadores europeos, pero no representó un avance social significativo para los indígenas de América ni para los negros esclavos, pues no hubo un cambio en la estructura social dominante, bajo lo cual se continuó gobernando mediante los descendientes de españoles poseedores de la tierra, sin ánimo de compartirla.

- Marcó el comienzo de una nueva confrontación, esta vez entre los criollos gobernantes, con un periodo que se denominó “La Patria Boba”, cuya continuidad quedó velada por la confrontación de la reconquista española.
- Se plantearon algunas divisiones políticas en el Estado, especialmente de los entonces amplios territorios del Cauca, con una sociedad esclavista de élites poderosas y Nariño con indígenas que recibían protección, frente a los demás territorios.
- La no intervención activa de Panamá hace notoria la escasa importancia que se le daba a dicho Estado.
- La apatía militar en Antioquia puede explicarse en una menor injerencia española en sus actividades políticas, dada su marginalidad respecto al poder, y explicado también en el hecho de que esa provincia hizo grandes aportes a la guerra contra Francia y en el esfuerzo de restituir al amado rey Fernando VII³⁶.

³⁶ REYES CÁRDENAS, Ana Catalina, La independencia en las provincias de Antioquia y Chocó, Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, Revista Credencial, <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/marzo2010/antioquia.htm>

Los conflictos para definir el dominio entre criollos

Si bien es cierto que en el siglo XIX, a pesar del espíritu antimilitarista heredado de la guerra de independencia y de la participación de los militares venezolanos en la vida republicana, el acontecer nacional estuvo marcado por la disputa armada entre caudillos militares con pretensiones de imponer los intereses políticos partidistas a los ciudadanos, en ejercicio pleno de convivencia del poder militar con el poder político, el siglo XX significó un cambio en su cultura al hacerse dependiente en lo político y autónomo en lo militar, hasta llegar a nuestros días en una separación del poder traducida en cooperación armónica, dentro de la cual ni los políticos intervienen en lo militar ni los militares interfieren en la política. A esta última forma de convivencia se llegó porque los dirigentes civiles eludieron su responsabilidad de fijar las directrices sobre el papel de las Fuerzas Militares dentro del Estado, actuación que es aún cierta cuando el manejo del Estado depende de los resultados de las políticas elaboradas por los altos mandos y aprobadas por el Gobierno.

La reseña histórica nos pondrá entonces en situación de conocimiento de cómo el papel de las fuerzas militares en los con-

factos no se circunscribe al manejo de las armas, sino al juego del poder, y cómo su cultura y sus actitudes son determinantes para mantener las situaciones de paz o de guerra.

Después de la Batalla de Boyacá en 1819, mediante la Constitución de 1821 se reafirmó la libertad y la independencia de España, así como se determinó el sistema presidencial de gobierno con tridivisión del poder en la Constitución. Sin embargo, dado que todavía no estaba consolidada de forma definitiva la independencia y, en el momento se preparaba la campaña del sur para dar libertad a Ecuador y Perú, el Ejército y sus generales constituían el eje del poder, de manera que el presidente era apenas un administrador con el encargo de suministrar a las fuerzas los hombres y los bienes necesarios para el ejercicio de la guerra.

Con respecto al manejo del orden público, el presidente de la República recibió la función de la dirección de las Fuerzas Militares desde los inicios de la vida de Colombia como república independiente. La Constitución de 1821³⁷, entre otros artículos, determinó:

Art. 2-La soberanía reside esencialmente en la nación. Los magistrados y oficiales del Gobierno, investidos de cualquiera especie de autoridad, son sus agentes o comisarios, y responden a ella de su conducta pública.

Art. 55-Son atribuciones exclusivamente propias del Congreso:

13. Decretar la conscripción y organización de los ejércitos, determinar su fuerza en paz y guerra y señalar el tiempo que deba existir;

³⁷ CONSTITUCIÓN DE 1821, del 30 de agosto de 1821, articulado tomado de <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/Colombia%201821.htm>

14. Decretar la construcción y equipamiento de la marina, aumentarla o disminuirla;

15. Formar las ordenanzas que deben regir las fuerzas en mar y tierra;

16. Decretar la guerra en vista de los datos que le presente el Poder Ejecutivo;

17. Requerir al Poder Ejecutivo para que negocie la paz;

18. Prestar su consentimiento y aprobación a los tratados de paz, alianza, de amistad, de comercio, de neutralidad y cualesquiera otros que celebre el Poder Ejecutivo;

Art. 113-El Presidente es Jefe de la Administración General de la República. La conservación del orden y de la tranquilidad en lo interior y de la seguridad en lo exterior le está especialmente cometida.

Art. 117-Tiene en toda la República el mando supremo de las fuerzas de mar y tierra, y está exclusivamente encargado de su dirección; pero no podrá mandarlas en persona sin previo acuerdo y consentimiento del Congreso.

Art. 169-Nunca podrá ser allanada la casa de ningún colombiano sino en los casos determinados por la ley, y bajo la responsabilidad del Juez que expida la orden.

Art. 176-Los militares en tiempo de paz no podrán acuartelarse ni tomar alojamiento en las casas de los demás ciudadanos, sin el consentimiento de sus dueños; ni en tiempo de guerra, sino por orden de magistrados civiles, conforme a las leyes.

La pretensión de Bolívar de consolidar una sola gran nación latinoamericana lo llevó a pretender anexionar al territorio de La Gran Colombia las regiones de Tumbes, Jaén y Maynas, pertenecientes al Perú, lo que generó una confrontación que se llevó a cabo

por mar y tierra. La Gran Colombia fue derrotada por la Armada peruana dirigida por el almirante inglés Jorge Martín Guisse en los combates marítimos de Malpelo y Cruces, a partir de lo cual los peruanos ocuparon Guayaquil y bloquearon a la Armada Nacional. Por su parte, en los combates terrestres se obtuvieron triunfos en las batallas de San José de Saraguro el 13 de febrero de 1829, y en Portete de Tarqui el 27 de febrero, lo que obligó a La Mar a negociar con Sucre el llamado “Convenio de Girón” del 28 de febrero de 1829, con el cual se acordó que los peruanos desocupaban Guayaquil y el territorio colombiano, además de pagar una indemnización a Colombia y comprometerse a cesar hostilidades. El tratado definitivo para cesación de la guerra, llamado “Larrea-Gual”, se firmó en Guayaquil el 21 de septiembre de 1829, por el que renunció Colombia a sus pretensiones sobre las tres regiones en disputa y Perú renunció para siempre a reclamar derechos sobre Guayaquil³⁸.

Transcurridos apenas diez años de vida independiente, en 1829 las rivalidades entre el coronel Tomás Cipriano de Mosquera y el general José María Córdova, a quien se le había involucrado injustamente en el atentado a Bolívar en 1828, lo cual convirtió el amor al libertador en odio mortal, dieron origen a la revuelta de 1829 en Antioquia con el ofrecimiento de liberar a la República del poder de Bolívar. La revuelta ocasionó doscientas ochenta muertes³⁹ y terminó con la muerte de Córdova, así como sirvió, a su vez, al Coronel Páez en Venezuela, con pretexto en la proyectada monarquía de Bolívar para declararse en guerra y convencer a los suyos de la necesidad de establecer una nación independiente, iniciándose de manera resuelta la separación

³⁸ HISTORIADELPERU.CARPETAPEDAGOGICA.COM, Guerra con La Gran Colombia (1828-1829).

³⁹ Ib, pág. 59.

de Venezuela, luego emulada por Quito que hacía otro tanto. Bolívar renunció entonces a aceptar la presidencia y manifestó su intención de ausentarse para siempre del país por el bien de la patria, con lo que calmó los ánimos temporalmente.

Celebradas las elecciones en un ambiente extraordinariamente acalorado, las ganó Joaquín Mosquera, quien en una carta dirigida a Antonio Cuervo⁴⁰ hizo perfecta descripción del desánimo del país de entonces:

La elección ha recaído en mí y aunque muy honrosa usted sabe que debe atribularme por el aspecto horroroso que presenta esta pobre república llena de divisiones y de partidos, pero me he resignado con mi suerte y marcharé a Bogotá.

La crisis que llevó a la disolución de la Gran Colombia se inició a principios de 1826 cuando se produjo la quiebra de la casa londinense Goldschmidt que administraba los fondos del empréstito⁴¹, hecho por el cual el crédito externo de la República entró en un colapso total, a lo que se suma que en Caracas y Valencia se inició el llamado movimiento de “La Cosiata”, encabezado por el general José Antonio Páez y el letrado Miguel Peña,⁴² con

⁴⁰ PARDO RUEDA, Rafael (2004): La historia de las guerras, Ediciones B Colombia S.A., págs. 214 a 217.

⁴¹ BANCO DE LA REPÚBLICA, La misión Hurtado y el préstamo de 1824. El empréstito se destinó para la atención de la guerra, el mantenimiento de los ejércitos, el pago a militares que sirvieron en la guerra, las deudas a extranjeros, el cuerpo diplomático y los sueldos del ejecutivo, por \$4.475.000 libras en barras de oro, al 6 % de interés anual, descontados comisiones de agentes, deudas y obligaciones, descuento del 15 % inicial y deducción de intereses anticipados, gestionado por Manuel Antonio Arrubla y Francisco Montoya con supervisión de Manuel José Hurtado.

⁴² PETIONHISTORIADEVENEZUELA.BLOGSPOT.COM.CO, Disolución de La Gran Colombia.

el propósito exigir la reforma de la Constitución de Cúcuta y el rompimiento con las autoridades de Bogotá, a cuyas decisiones se encontraban subordinados⁴³.

Se presentó entonces la revuelta de 1830 a 1831, causada por la expedición de la Constitución Política por parte del presidente Joaquín Mosquera, sin asegurarse la aceptación de Venezuela. Con esta se hizo distinción entre los delitos comunes y los otros, aún sin una referencia expresa al concepto de *delito político*. Se creó también el régimen de descentralización administrativa y centralización política, el cual causó la insubordinación en Bogotá de dos batallones compuestos por soldados venezolanos, lo que luego de la agitación y los enfrentamientos llegó a alcanzar la suma de mil ochocientos muertos⁴⁴ y el desconocimiento de la Constitución por varias provincias. Esto generó la solicitud de anexión de Pasto a Ecuador, aceptada por el general Flórez y controlada e impedida por el general Obando, además de las solicitudes de anexión de Cúcuta y Casanare a Venezuela y de Buenaventura a Ecuador, hechos que terminaron por hacer renunciar al presidente Joaquín Mosquera. El general Urdaneta asumió la presidencia en nombre de Bolívar y se enfrentó a los generales Mosquera y Obando, quienes obligaron también su renuncia, y fue reemplazado por el general Domingo Caicedo como presidente provisional designado por el Consejo de Estado, reemplazado luego de elecciones por el general Santander⁴⁵.

⁴³ WWW.VENELOGÍA.COM, La Cusiata: La revolución de los morrocayos (1826).

⁴⁴ RAMSEY W. Russell, (1981), Guerrilleros y soldados, Ediciones Tercer Mundo, pág. 59.

⁴⁵ ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs. 157 a 162. PARDO

Con la disolución de la Gran Colombia, la Nueva Granada se apresuró a redactar su nueva constitución y, en 1832, con ella fijaron sus límites de acuerdo con el principio *Uti possidetis juris*, que se había establecido en 1810. Otros contenidos esenciales fueron:

Artículo 74.- Son atribuciones exclusivas del congreso:

12. Fijar todos los años la fuerza de mar y tierra, y el modo de levantarla, determinando la que haya de haber en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra, o en el caso de una conmoción interior a mano armada, o de invasión exterior repentina; decretar su organización y reemplazo, e igualmente que la construcción y equipo de la marina;
13. Decretar la guerra ofensiva en vista de los fundamentos que le presente el Poder Ejecutivo, y requerirlo para que negocie la paz;
14. Prestar su consentimiento y aprobación a los tratados públicos, y convenios celebrados por el Poder Ejecutivo;
16. Conceder indultos generales cuando lo exija algún grave motivo de conveniencia pública;
19. Permitir o no, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República;
20. Permitir o no, la estación de escuadra, o escuadrilla de otra nación en los puertos de la República por más de dos meses;
21. Decretar el alistamiento y organización de la guardia nacional, y su servicio activo cuando sea necesario.

Sección II. De las funciones, deberes y prerrogativas del Presidente de la República

RUEDA, Rafael (2004): *La historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S.A., págs. 217 a 221.

Artículo 105.-El Presidente es el jefe de la administración de la República, y como a tal le corresponde conservar el orden y la tranquilidad interior, y asegurar el Estado contra todo ataque exterior.

Artículo 106.-Son atribuciones del Poder Ejecutivo:

4. Dirigir las fuerzas de mar y tierra, y disponer de ellas para la defensa y seguridad del Estado; pero no podrá nunca mandarlas en persona;

5. Declarar la guerra previo el decreto del congreso;

7. Nombrar con previo acuerdo y consentimiento del senado los jefes del ejército desde teniente coronel inclusive hasta el más alto grado;

8. Nombrar con arreglo a la ley los demás oficiales del ejército;

10. Dirigirlas negociaciones diplomáticas, celebrarlos tratados públicos y convenios, y ratificarlos con previo acuerdo y consentimiento del congreso;

11. Nombrar, con previo acuerdo y consentimiento del Consejo de Estado y a propuesta en terna de la corte suprema de justicia, los magistrados de los tribunales de distrito judicial;

14. Conceder retiros y licencias a los militares, y admitir o no las renuncias que hagan desde alférez hasta el más alto grado, según lo determine la ley;

15. Conceder patentes de corso, cuando así lo determine el congreso;

18. Conmutar, con previo consentimiento del Consejo de Estado, la pena capital en otra grave, siempre que así lo exija alguna razón especial de conveniencia pública; y a propuesta de los tribunales que decreten las penas;

Artículo 108.-En los casos de grave peligro por causa de conmoción interior, o de ataque exterior, que amenace la seguridad de la República, el Poder Ejecutivo ocurrirá al congreso, y en su receso,

al Consejo de Estado, para que, considerando la urgencia, según el informe del ejecutivo, le conceda, con las restricciones que estime convenientes, en todo o en parte, las siguientes facultades:

1. Para llamar al servicio aquella parte de la guardia nacional que se considere necesaria;
2. Para negociar la anticipación que se juzgue indispensable, de las contribuciones y rendimientos de las rentas nacionales, con el correspondiente descuento, o para negociar o exigir por vía de empréstito una suma suficiente, siempre que no puedan cubrirse los gastos con las rentas ordinarias, designando los fondos de dónde, y el término dentro del cual deba verificarse el pago;
3. Para que, siendo informado de que se trama contra la tranquilidad o seguridad de la República, pueda expedir órdenes de comparecencia o arresto contra los indiciados de este crimen, interrogarlos o hacerlos interrogar, debiendo ponerlos dentro de setenta y dos horas a disposición del juez competente, a quien pasará los documentos que dieron lugar al arresto, junto con las diligencias que se hayan practicado;
4. Para conceder amnistías o indultos generales o particulares.

Título IX. De la fuerza armada

Artículo 169.-La fuerza armada es esencialmente obediente: ella no tiene facultad de deliberar.

Artículo 170.-El objeto de la fuerza armada es defender la independencia y libertad del Estado, mantener el orden público, y sostener la observancia de la constitución y de las leyes.

Artículo 171.-No habrá más fuerza armada permanente que la indispensablemente necesaria.

Artículo 172.-Los individuos de la fuerza armada de mar y tierra, cuando se hallen en campaña, serán juzgados por las ordenanzas

del ejército; pero estando de guarnición, solamente lo serán en los delitos puramente militares.

Artículo 173.-Cuando los individuos de la guardia nacional estén en actual servicio, quedan sujetos a las ordenanzas militares, en los mismos términos que expresa el Artículo anterior; y se entenderá que se hallan en actual servicio, cuando estén acuartelados, y deban ser pagados por el Estado, aunque algunos le sirvan gratuitamente.

Artículo 174.-La guardia nacional en cada provincia estará a las órdenes de su respectivo gobernador, quien la llamará al servicio en los casos que determine la ley, o cuando el Poder Ejecutivo lo ordene con acuerdo del congreso, o del Consejo de Estado en receso de aquél; o sin estos requisitos, para obrar dentro de la provincia, en caso de conmoción súbita, o de invasión exterior repentina.

Artículo 175.-Los oficiales del ejército y armada han de ser granadinos, y los generales granadinos de nacimiento.

Artículo 176.-El mando militar no afectará nunca al territorio, sino a las personas puramente militares y en actual servicio.

Artículo 177.-La ley no creará otros empleos militares que los que sean indispensablemente necesarios; y no se concederá ningún grado, ni ascenso, sino para llenar una plaza creada por ella.

Otras disposiciones

Artículo 194.-Los militares no se acuartelarán, ni tomarán alojamiento en las casas de los demás granadinos, sin el consentimiento de estos. Las autoridades civiles prepararán, conforme a las leyes, casas para oficiales y cuarteles para la tropa.

Artículo 201.-No podrá ser allanada la casa de ningún granadino, sino en aquellos casos, y con los requisitos prevenidos por las leyes.

Como aporte importante a la jurisprudencia nacional dicha Constitución fijó el *habeas corpus* (art. 186) en doce horas como límite máximo de detención para que se formularan cargos al detenido, que de no cumplirse determinaban cargos al juez o al carcelero por detención arbitraria⁴⁶, mientras que el 27 de junio de 1837 se publicó el primer Código Penal⁴⁷ que derogaba la legislación penal española aún vigente, y en el cual se erigió la pena capital con toda su ritualidad.

Desde 1839 hasta 1841 sucedió la Guerra de los Supremos o Guerra de los Conventos, originada por la orden gubernamental de cerrar todos los conventos que tuviesen menos de cinco religiosos, hecho que motivó a fray Francisco Villota, superior de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri a declarar la guerra santa contra el Gobierno, seguida por más de cinco mil devotos bajo conducción del general José María Obando, quien se declaró supremo director de la guerra con el apoyo de las guerrillas del Patía, y se declararon anexados a Ecuador; sin embargo, el presidente de esa nación, el general Juan José Flórez, en conjunto con el neogranadino general Herrán, sofocaron la rebelión.

Esa alianza disgustó a los líderes de las provincias del interior y desató una revolución liberal que incluyó la rebelión de los generales venezolanos, radicados en Colombia, Santiago Mariño y Francisco Carmona, quienes pusieron sitio a Cartagena, ciudad

⁴⁶ ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs.166 a 171. BUSHNELL, David (2006): *Colombia una nación a pesar de sí misma*, Planeta, Quinta edición, págs. 123 a 131.

⁴⁷ SALAZAR CÁCERES Carlos Gabriel (2016), Revista Principia Iuris, ISSN Impreso 0124-2067/ISSN En línea 2463-2007 Julio-Diciembre 2016, Vol. 13, N.º 26, pág. 40.

que fue protegida por barcos ingleses anclados en la bahía y permitieron la entrada de remesas para los sitiados. La rebelión en el norte terminó con la intermediación del plenipotenciario inglés Robert Stewart, quien convenció a los rebeldes y al Gobierno de firmar un armisticio⁴⁸.

La Constitución de 1832 fue reformada en 1842 por “graves inconvenientes en la práctica”, de manera que quedaron algunas disposiciones que eran facultad del Congreso en manos del Ejecutivo:

Sección III. De las atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 101.-Son atribuciones del Poder Ejecutivo:

1. Mantener el orden y tranquilidad interior de la República, repeler todo ataque o agresión exterior, y reprimir cualquiera perturbación del orden público en el interior;
4. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra para la defensa y seguridad de la República, para mantener o restablecer el orden y tranquilidad en ella, y para los demás objetos que exija el servicio público; pero ni el Presidente de la República mientras dure en su destino, ni el que se halle encargado del Poder Ejecutivo, podrán entre tanto mandarlas personalmente;
5. Suspender o remover libremente de sus destinos a todos sus agentes políticos, y a los empleados en las oficinas de éstos o en la administración de la hacienda nacional.

Artículo 102.-Son atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo:

⁴⁸ CASTILLO Freddy, La guerra de los supremos (2013), gradooctavo-2.blogspot.com.co

2. Dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados o convenios públicos con otros gobiernos o naciones, y ratificarlos previa aprobación del Congreso;
3. Declarar la guerra a otra potencia o nación, previa autorización para ello del Congreso;
5. Nombrar, con previo consentimiento del Senado, los generales y jefes del ejército y marina, desde teniente coronel inclusive hasta el más alto empleo;
6. Nombrar los demás jefes y oficiales del ejército y marina;
8. Conceder retiros a los generales, jefes y oficiales del ejército y marina; y admitir o no las dimisiones que los mismos hagan de sus empleos;
10. Conceder patentes de corso, cuando lo estime conveniente, contra alguna Nación con quien se esté en guerra declarada;
12. Conmutar la pena de muerte por otra grave a los que hayan sido condenados a ella, cuando haya suficiente motivo de conveniencia pública para la conmutación

Título XII. Disposiciones varias

Artículo 153.-El objeto de la fuerza armada es el defender la independencia y dignidad de la República, contra toda fuerza o agresión exterior, y mantener el orden constitucional y legal en el interior; obrando siempre bajo la dependencia y dirección del Poder Ejecutivo. Por tanto, es esencialmente obediente y nunca deliberante.

Artículo 154.-Los generales, jefes y oficiales, del ejército y marina serán granadinos; pero con especial permiso del Congreso, podrán admitirse generales, jefes u oficiales extranjeros al servicio de las armas de la República.

Artículo 158.-Ningún granadino será obligado a comparecer en juicio sino ante los tribunales o juzgados competentes, establecidos por esta Constitución o la ley; ni condenado sin ser oído y vencido en juicio; ni podrá imponérsele pena que no esté señalada al hecho porque se le juzga, por ley anterior al mismo hecho.

Artículo 159.-Ningún granadino podrá ser arrestado, detenido o reducido a prisión, sino por la autoridad, en los casos y modo prevenidos por la ley.

Artículo 160.-Ningún granadino está obligado a dar testimonio en causa criminal contra sí mismo, ni contra su consorte, ascendientes, descendientes o hermanos.

Artículo 161.-Ningún delito se castigará en lo sucesivo con pena de confiscación; pero esta disposición no comprende los comisos ni las multas que las leyes asignan a algunas culpas o delitos.

Artículo 164.-Todos los granadinos tienen la facultad de reclamar sus derechos ante los depositarios de la autoridad pública, con la moderación y respeto debidos; y todos tienen el derecho de representar por escrito al Congreso o al Poder Ejecutivo, cuanto consideren conveniente al bien público; pero ningún individuo o asociación particular podrá hacer petición a las autoridades en nombre del pueblo, ni menos arrogarse la calificación de pueblo. Los que contravinieren a esta disposición serán juzgados conforme a las leyes.

Artículo 165.-La casa de ningún granadino será allanada, ni su correspondencia o papeles interceptados o registrados, sino por la autoridad, en los casos y con las formalidades prescritas por la ley.

Obando perdió la guerra y la revolución terminó por mediación de la Iglesia, sin embargo, su principal consecuencia fue que determinó la renuncia del presidente Márquez en favor del general Domingo Caicedo. De esta guerra —considerada

inútil— se rescata que, por primera vez, los caudillos políticos se alinearon en bandos de acuerdo con sus ideales políticos, de modo que formaron los bolivarianos el Partido Conservador y los santanderistas el Partido Liberal⁴⁹. La participación de grupos de malhechores en la contienda hizo que el Código Penal de 1836 se reformara y estableciera penas especiales para ellos, y en 1849 se abolió la pena de muerte, los trabajos forzados y las penas para el delito político, las cuales se reemplazaron por el destierro del territorio nacional⁵⁰.

Una vez ganó la presidencia el Gobierno liberal del General José Hilario López, que tomó posesión de la República seguido de innumerables atentados y violencia contra las personas, la propiedad y aun con crímenes atroces, se originó la Guerra civil de 1851 porque los conservadores reaccionaron ante lo que llamaron “la violencia del Gobierno”, pero en realidad se trató de la reacción a la constitución de resguardos indígenas y a la libertad definitiva de los casi 20 000 esclavos que aún existían en la República. Los historiadores consideran tres las causas principales de la guerra: 1) la excitación del espíritu partidista; 2) los intereses afectados de los dueños de los esclavos; y 3) el rechazo del clero a las reformas.

La división política que vivía el país generaba que cualquier desavenencia partidista ocasionara la respuesta de las armas, y a esto se suma la libertad de los esclavos en momentos en que

⁴⁹ ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs.175 a 178. BUSHNELL, David (2006): *Colombia una nación a pesar de si misma*, Planeta, Quinta edición, págs.132 a 143. PARDO RUEDA, Rafael (2004): *La historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S.A., págs. 222 a 244.

⁵⁰ SALAZAR CÁCERES Carlos Gabriel (2016), *Revista Principia Iuris*, ISSN Impreso 0124-2067/ISSN En línea 2463-2007 Julio-Diciembre 2016, Vol. 13, N.º 26, págs. 41-44.

el Congreso tenía mayoría liberal. Se decretó el cumplimiento a la libertad de los esclavos menores de treinta años, decretada el 21 de julio de 1821 en el Congreso de Cúcuta. A fin de cumplirlo se tasó el valor de los esclavos para compensación a sus dueños así: varones menores de cuarenta y cinco años a \$160, y mayores a \$120; mujeres menores de cuarenta y cinco años a \$120, y mayores a \$80. Estos pagos los consideraron insuficientes los esclavistas y generaron una desbandada del trabajo agrícola con perjuicios económicos graves para los propietarios. Finalmente, las reformas religiosas del Congreso incluyeron la abolición del diezmo, la abolición del fuero eclesiástico, el apoyo civil en favor de que quienes fueran mantenidos en clausura o votos eclesiásticos contra su voluntad, así como la facultad a los cabildos parroquiales de nombrar y presentar curas entre las propuestas de los diocesanos.

Julio Arboleda, uno de los más perjudicados por la abolición de la esclavitud, con el apoyo evidente de Ecuador —que le proporcionó armas y resguardo— inició la campaña en el sur con el coronel Manuel Ibáñez en Pasto, seguida por líderes de Antioquia con el general Tomás Herrera y de don Mariano Ospina en Bogotá, quienes lideraron una revolución que terminó vencida en el Campo de Garrapata el 6 de agosto de 1851⁵¹. Producto de la guerra fue la Constitución de 1853, la cual dio al país una forma unitaria de República con provincias autónomas pero no federales, elecciones por sufragio universal masculino y el decreto de la libertad de cultos⁵².

⁵¹ ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs. 211 a 213. BUSHNELL, David (2006): *Colombia una nación a pesar de sí misma*, Planeta, Quinta edición, págs. 151 a 155. PARDO RUEDA, Rafael (2004): *La historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S.A., págs. 248 a 256.

⁵² ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs. 219 a 222.

La fuerza militar de entonces era de dos mil soldados que fueron aumentando a partir del primer alzamiento en marzo en Túquerres, hasta llegar a los 10 000 autorizados por la ley. Tuvo un alto costo para el Estado mantener uniformes, municiones, marchas y sanidad a razón de casi un peso diario, que a la postre en seis meses serían \$1 800 000. Los muertos en combate no pasaron de 300, pero las causadas por heridas, marchas y enfermedades pasaron de 1500, daño al que debemos sumar el abandono de empresas, trabajos y hogares, además del arraigo de sentimientos brutales generados por causa del denominado “espíritu político”⁵³.

Las elecciones de 1853 las ganó el general José María Obando, candidato del sector militarista liberal y de los artesanos, lo que no fue obstáculo para que el presidente olvidara sus compromisos con el pueblo y se declarara a favor de la economía de mercado y, a instancias del Legislativo, decidiera reducir en su gobierno el ejército a mil hombres, lo que ocasionó el descontento del general José María Melo y de los artesanos. La Constitución Política de la República de Nueva Granada, proclamada en 1853⁵⁴ —porque la de 1843 “no satisface cumplidamente los

⁵³ CAMACHO Roldán Salvador, *Mis Memorias*, Banco de la República, Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, [www. Banrepcultural.org/ blaavirtual/](http://www.Banrepcultural.org/blaavirtual/)

⁵⁴ CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE NUEVA GRANADA DE 1853. Artículo 5: “La República garantiza a todos los Granadinos: [...] 8. El derecho de reunirse pública o privadamente, sin armas; para hacer peticiones a los funcionarios o autoridades públicas, o para discutir cualesquiera negocios de interés público o privado, y emitir libremente y sin responsabilidad ninguna su opinión sobre ellos. Pero cualquiera reunión de ciudadanos que, al hacer sus peticiones, o al emitir su opinión sobre cualesquiera negocios, se arrogue el nombre o la voz del pueblo, o pretenda imponer a las autoridades su voluntad como la voluntad del pueblo, es sediciosa; y los individuos que la compongan serán perseguidos como culpables de sedición. La voluntad del Pueblo

deseos ni las necesidades de la nación”—, pasó de un gobierno republicano a uno popular (art. 10), y redujo su articulado a sesenta y cuatro (en su mayoría disposiciones administrativas sobre el gobierno de la república, el poder público y el régimen municipal); además, incluyó el concepto de *sedición* en la distinción entre los delitos comunes y los otros, aún sin una referencia expresa al concepto de *delito político* que tuvo orígenes en la Constitución de 1830. Allí también se incluyó la figura jurídica de delito político⁵⁵.

Se produjo entonces la llamada “Revuelta de Melo” con ocasión del golpe de Estado propinado por el general José María Melo al general José María Obando el 17 de abril de 1854, el cual duró un lapso de siete meses y motivó la unión de tres expresidentes para combatirlo y recuperar la legitimidad. Se considera que esta revolución tuvo como causa la amenaza que representaba la existencia de un ejército permanente que disminuía el poder local. Tras su rendición con cuarenta y nueve oficiales y cerca de mil soldados, quedó prisionero y fue enviado al exilio en El Salvador, al igual que cerca de trescientos o cuatrocientos de sus seguidores que fueron enviados a Panamá⁵⁶. La revuelta dio

sólo puede expresarse, por medio de los que lo representan, por mandato obtenido conforme a esta Constitución”.

⁵⁵ CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE NUEVA GRANADA DE 1853. Artículo 5: “La República garantiza a todos los Granadinos: [...] 11. El juicio por jurados, en todos los casos en que se proceda judicialmente por delito o crimen que merezca pena corporal o la pérdida de la libertad del individuo, por más de dos años, con la excepción que puede hacer la ley, de los casos de responsabilidad de los funcionarios públicos, y de los procesos por delitos políticos”.

⁵⁶ BUSHNELL, David (2006): *Colombia una nación a pesar de sí misma*, Planeta, Quinta edición, págs. 156 a 163. ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs. 223 a 228. PARDO RUEDA, Rafael (2004): *La historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S.A., págs. 257 a 270.

origen a la Constitución Granadina del 22 de mayo de 1858, de carácter federal, como consecuencia de las variaciones hechas en la organización política de la Nueva Granada que incluyó en el articulado temas referentes al gobierno de la confederación, al Ministerio Público (art. 55) y a los derechos individuales (art. 56, 57 y 58).

El conservador Manuel María Mallarino asumió la presidencia en 1860. En su gobierno se dictaron dos leyes que afectaron la tranquilidad del Estado, que entonces era federal: la Ley de Elecciones, por la cual se establecieron distritos federales para la elección de congresistas, cosa que disgustó a los liberales, y la Ley Orgánica de la Fuerza Pública, que otorgaba al Gobierno central la facultad de nombrar jefes, oficiales y un inspector militar de las fuerzas en cada estado a fin de tener el control sobre los ejércitos de los estados. Los gobernadores liberales encendieron la revuelta en 1860 hasta 1862 contra el régimen conservador, lo que produjo cerca de 6000 muertes en combate y, bajo el liderazgo del general Mosquera, dieron origen a la llamada “República Radical”⁵⁷.

La Constitución de 1863 o Constitución de Rionegro produjo el cambio de la Confederación Granadina al de Estados Unidos de Colombia, en la que cada estado tenía autonomía, ejército propio y administración independiente del poder central, y en la cual se homologaban los conceptos de *rebelde* y de *combatiente* que provenía del derecho internacional humanitario. La máxima autoridad era el Parlamento, el cual representaba a los ciudadanos, y el Estado debía vigilar el orden público, así como

⁵⁷ ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs. 241 a 249. PARDO RUEDA, Rafael (2004): *La historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S.A., págs. 271 a 290.

garantizar el respeto a las libertades individuales. Aunque instituyó la libertad de comercio, de opinión, de imprenta, de enseñanza y de asociación, concedió a los ciudadanos el derecho de portar armas y comerciarlas, produjo la separación de la Iglesia y el Estado, así como modificó de paso el sistema de educación sobre el que la Iglesia católica tenía gran influencia⁵⁸.

Revolución de 1876: la República Liberal

La lucha por el control de la educación de los conservadores contra los radicales resultó en la Revolución de 1876 a 1877. Los conservadores crearon en Bogotá una sociedad llamada “La Regeneración” y nombraron director de la guerra y presidente provisorio del Cauca a Sergio Arboleda. La revolución se extendió a Antioquia, Caldas y Cundinamarca, con tropas comandadas por los generales Marceliano Vélez y Joaquín Córdova, mientras por el Gobierno actuaron los generales Aquiles Parra y Julián Trujillo. Perdieron los conservadores porque tenían menos fusiles de repetición y ametralladoras que los del Gobierno, y la presidencia recayó en manos del general Julián Trujillo, elegido por los estados sin oposición. En veinte años de gobierno radical hubo cuarenta revoluciones locales, veinte gobiernos estatales derrocados por la fuerza y la mencionada guerra civil de 1876⁵⁹.

⁵⁸ ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs. 252 a 254. BUSHNELL, David (2006): *Colombia una nación a pesar de sí misma*, Planeta, Quinta edición, págs. 173 a 179.

⁵⁹ ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs. 290 a 293. PARDO RUEDA, Rafael (2004): *La historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S.A., págs. 291 a 303. BUSHNELL, David (2006): *Colombia una nación a pesar de sí misma*, Planeta, Quinta edición, págs. 180 a 182.

La elección de gobernador la ganó en Santander el conservador Francisco Ordóñez ayudado por las trampas del general Solom Wilches, quien cometió en la lucha electoral cuanto atropello es imaginable, como, por ejemplo, anulación de registros, votaciones falsas, violación de urnas, etc. Esto originó una nueva guerra civil en 1885, con la que se reconoce el fin del liberalismo radical. La guerra fue iniciada por los radicales y se extendió al Huila, al Valle, a la costa Caribe y la ciudad de Panamá hasta alcanzar toda la nación, y el presidente Núñez mantuvo el poder vinculando al ejército a las filas conservadoras y entregándoles a sus jefes las armas del Gobierno central. Su régimen se conoció como “La Regeneración”, cuya pieza maestra fue la Constitución de 1886⁶⁰.

Sobre materia de orden público la Constitución de 1886 recogió los desarrollos que en materia de delito político se habían dado a nivel constitucional, y planteó cláusulas distintivas frente a los delitos comunes, los privilegios, las garantías, los indultos y las amnistías⁶¹. Acerca de las Fuerzas Militares, en su Título IX señala que su objeto es la defensa del Estado contra todo ataque e invasión enemiga, evitar disturbios y desórdenes públicos dentro de las fronteras y garantizar el acatamiento de la ley. Agrega que, por tanto, todo ciudadano nace soldado de su patria sin distinción de clase, estado o condición, y señala que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes, en ningún

⁶⁰ ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, pp. 314 a 318. PARDO RUEDA, Rafael (2004): *La historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S.A., págs. 304 a 327.

⁶¹ TARAPUÉS Diego Fernando, El delito político en la Constitución de 1991: una herencia constitucional como herramienta en la búsqueda de la paz, Papel Político Bogotá (Colombia), Vol. 16, N.º 2, julio-diciembre 2011, pág. 387.

caso tienen el derecho a deliberar y siempre deben obedecer las órdenes de sus jefes. De esta parte de la Constitución podemos señalar: 1) la misión de seguridad externa continúa siendo la del Estado nación; 2) la misión de seguridad interna dada a las Fuerzas Armadas es la correspondiente a una fuerza policial, explicable porque la Policía apenas estaba en planes de conformación; (3) se hizo el primer intento por separar a los militares de la política partidista.

Acerca de la autoridad del presidente sobre las Fuerzas Armadas, el artículo 120 expresa la función de disponer de la Fuerza Pública y conferir grados militares con las formalidades de la ley que regule el ejercicio de esta facultad; conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado; dirigirlo cuando lo estime conveniente, dirigir las operaciones de la guerra como jefe de los Ejércitos de la República en calidad de suprema autoridad administrativa⁶², y si ejerciese el mando militar más allá de los límites de la capital, el vicepresidente se hará cargo de las otras ramas de la administración. Además, proveer la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y el honor de la nación y la inviolabilidad del territorio. Como se puede confrontar, estas atribuciones son aún las mismas, con excepción de lo referido al ejercicio del mando fuera de los límites de la capital al encargar de sus funciones presidenciales al vicepresidente, pero persiste la atribución de dirigir las operaciones de la guerra que algunos presidentes han asumido sin diferenciar la estrategia política de la estrategia militar.

Sobre las funciones del Congreso con respecto a las Fuerzas Armadas, el artículo 76 señala la facultad de determinar el tamaño

⁶² CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1821, Art. 120.

del Ejército cada dos años en sus sesiones ordinarias, y el artículo 98 expresa la función de aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno desde teniente coronel hasta el más alto grado del Ejército y la Armada. Estas funciones continúan en nuestra Constitución con algunas modificaciones, como, por ejemplo, que el tamaño del Ejército no se determina cada dos años y que la aprobación o improbación de ascensos solo se hace para los grados de general u oficial de insignia⁶³.

El Ejército elevó el número de hombres a 6000 y, desde 1891, se fundó una Escuela Militar de Cadetes con el fin de adiestrar un cuerpo apolítico de oficiales con asignaturas tales como topografía, ingeniería civil y agronomía, y la participación de alumnos liberales y conservadores. Ese mismo año Rafael Núñez nacionalizó la Policía de Bogotá bajo la dirección de un oficial de la Policía francesa, Jean Marie Marcelino Gilibert, quien ejerció el cargo durante ocho años.

En el ámbito internacional se presentó para el Gobierno nacional de Colombia el primer revés jurídico cuando se produjo el laudo arbitral español del 14 de septiembre de 1891, el cual definió las fronteras terrestres con Venezuela y fue aprobado por medio de la Ley 3 de 1882, con el cual Colombia perdió parte de su territorio. Este hecho motivó reclamaciones del Gobierno nacional, resueltas por sentencia del Consejo Federal Suizo en 1922 en favor de Venezuela⁶⁴.

⁶³ ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs. 320. PARDO RUEDA, Rafael (2004): *La historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S. A., págs. 327 a 330. RAMSEY W., Russell (2000): *Guerrilleros y Soldados*, TM Editores, Segunda edición, págs. 75 a 77.

⁶⁴ Sociedad Geográfica de Colombia, Tratado, www.sogeocol.edu.co/documentos/arreglo_limites_colombia_venezuela1.pdf

Los artesanos bogotanos convocaron el motín de 1893 en contra de las difamaciones incluidas en la publicación *Colombia Cristiana*, escritas por Ignacio Gutiérrez, en las que atribuía conductas viciosas a los artesanos. A esto siguió la conspiración de 1894, liderada por el sastre Antonio Cárdenas, la cual pretendía tomarse los cuarteles del Ejército, la Policía y el Palacio Presidencial, interrumpir los telégrafos y el correo, cortar las líneas de teléfonos y detener con grupos especiales al vicepresidente Caro y al ministro de Gobierno, a fin de que conformaran un gabinete con participación liberal. Este hecho se frustró porque la Policía detuvo la noche anterior al ebanista Bernardino Rangel, quien confesó el plan. Dicha conspiración originó la guerra de 1895, esencialmente liberal y de carácter militar, con un plan parecido al anterior que fracasó por la intervención del general Rafael Reyes, quien se convirtió en presidenciable. La guerra produjo la división conservadora y fue el primer antecedente a la Guerra de los Mil Días⁶⁵.

Las elecciones de 1898 las ganó el conservador Manuel Antonio Sanclemente y los liberales no vieron otra opción que la movilización armada para acceder al gobierno, pues a pesar de constituir el 20 % del electorado solo tenían un representante a la Cámara y no tenían senadores. El país estaba en quiebra económica, el cambio del dólar subió un 450 %, el Gobierno disminuyó su número de empleados, redujo el Ejército de 10 000 a 2000 hombres y ordenó la venta de dos buques de guerra. En

⁶⁵ ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs. 327 a 328. PARDO RUEDA, Rafael (2004): *La historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S.A., págs. 331 a 337. RAMSEY W., Russell (2000): *Guerrilleros y soldados*, TM Editores, Segunda edición, págs. 67 a 68.

esta situación, el general Juan Francisco Gómez Pinzón inició la Guerra de los Mil Días en Santander, y le siguieron Valle, Tolima, Boyacá, Bolívar y Cundinamarca.

El general Uribe Uribe, quien al principio trató de aplazar la guerra, se convirtió en comandante de las tropas. Los revolucionarios de Uribe ganaron en Peralonso y perdieron en la más encarnizada batalla de la guerra, en Palonegro, donde tras dieciséis días de lucha —casi toda a machetazos— hubo entre ambos bandos 2500 muertos y 4882 heridos. La derrota trajo como consecuencia para los rebeldes que cambió la modalidad de la guerra y pasó a una etapa de guerrillas por todo el país, de modo que se concentró la guerra en Cundinamarca, Tolima, la costa Caribe y Panamá, donde finalmente se firmó el acuerdo de paz en 1902 a bordo del acorazado Wisconsin que comandaba el vicealmirante Silas Casey. Hubo entre 100 000 y 150 000 muertos en estos mil días de guerra,⁶⁶ y se perdió el departamento de Panamá, el cual logró su independencia gracias a la ayuda de los Estados Unidos.

De la observación de las guerras sucedidas en el siglo XIX nos queda la confirmación de lo siguiente:

- Las guerras se presentaron porque los caudillos políticos pretendían definir la forma territorial del Estado como centralista o como federalista.

⁶⁶ ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs. 332 a 335. PARDO RUEDA, Rafael (2004): *La historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S.A., págs. 338 a 366. RAMSEY W., Russell (2000): *Guerrilleros y soldados*, TM Editores, Segunda edición, págs. 68 a 74. BUSHNELL, David (2006): *Colombia una nación a pesar de sí misma*, Planeta, Quinta edición, págs. 205 a 213.

- En la confrontación entre el Ejército centralista y los ejércitos estatales de hacendados y generales caudillos, el primero tuvo amplia participación de indígenas y negros, a quienes se les ofreció a cambio la libertad, constituyéndose el Ejército en un mecanismo de ascenso social y de formación de otras clases sociales diferentes a las de los esclavos.
- Los caudillos eran, a su vez, los jefes militares, quienes para detentar el poder hicieron uso de las armas e impusieron sus ideas sin importar la suerte de la nación.
- Las Fuerzas Militares cumplieron la función que históricamente se les había asignado: defender al Gobierno. Esto, pues aún entonces, constitucionalmente, el soberano era el Estado y los ciudadanos estaban allí para su engrandecimiento.
- El Ejército apoyaba siempre al presidente de la nación o de su Estado para ganar el poder de la nación sin una idea de fortalecimiento económico y social, sino de alcanzar la unidad ideológica de sus partidos.
- El Ejército solo tenía capacidad para actuar internamente pero carecía de cualquier capacidad de enfrentar a un enemigo externo por falta de medios económicos de la nación, empobrecida por los efectos de la guerra permanente.

Obreros y campesinos se interesan por el poder

Después de la pérdida del territorio panameño asumió como presidente el general Rafael Reyes, desde 1904 hasta 1909, quien al entender la centralización administrativa y política existente quiso evitar la amenaza de otras pretensiones autónomas de las regiones. A causa de esto debió disolver el Congreso, formar una Asamblea Nacional y reformar la Constitución de 1886⁶⁷, caso que solo se presentó en 1910 bajo el gobierno de Carlos Eugenio Restrepo.

El triste fin de la Guerra de los Mil Días, en la que todos los colombianos fueron perdedores, obligó al primer cambio notorio en la relación de los poderes Ejecutivo y militar, con las reformas militares del presidente general Rafael Reyes a unas Fuerzas Armadas que, por la Constitución de 1886, debían estar despolitizadas. Redujo el ejército de 50 000 a 5000 hombres y, bajo

⁶⁷ RAMÍREZ QUINTERO Clímaco, (2012) El conflicto colombiano: Génesis de decisiones políticas de Colón a Juan Manuel Santos Calderón, Universidad Militar Nueva Granada, pág. 196.

el entendido de que el Ejército debía servir a la patria y no a los partidos, ordenó la dedicación inmediata de batallones enteros a la construcción de obras públicas, ordenó recolectar el armamento en manos de los particulares y, por iniciativa de los miembros de la Misión Chilena, el Ejército fue llamado a desempeñar el papel contra el analfabetismo⁶⁸.

La segunda reforma incorporó la acción cívica, como, por ejemplo, el servicio social del Ejército; la tercera estableció el control en la selección y la promoción de oficiales y reformó la administración, las compras y los transportes; la cuarta creó la Escuela Militar de Cadetes y la Escuela Superior de Guerra el 1 de junio de 1907; la quinta estableció modelos de batallones de infantería y artillería; y la sexta consistió en el contrato de una misión del Ejército chileno para entrenar el funcionamiento de las unidades⁶⁹.

El general Rafael Reyes, en unión con su rival Rafael Uribe Uribe⁷⁰, buscaron crear un modelo militar apartado de las doctrinas liberal y conservadora, para lo cual adoptaron el modelo militar prusiano y, a fin de ponerlo en práctica, tuvieron la asesoría de una misión militar del Ejército de Chile, presidida por los capitanes Arturo Ahumada y Diego Guillén, quienes sentaron los pilares fundamentales del nuevo Ejército y de la Armada Nacional con la creación de la Escuela Militar de Cadetes, organizada por medio del Decreto 434 del 13 de abril de 1907, de los batallones

⁶⁸ ATEHORTUA CRUZ Adolfo León y VELEZ RAMÍREZ Humberto, (1994), *Estado y Fuerzas Armadas en Colombia*, TM Editores, Universidad Javeriana Cali, pág. 56-75.

⁶⁹ RAMSEY W., Russell (2000): *Guerrilleros y soldados*, TM Editores, Segunda edición, págs. 78 a 82.

⁷⁰ BUSHNELL David, 1996, *Colombia, una nación a pesar de sí misma*, págs. 345-346.

modelos, de la Escuela Naval de Cadetes que empezó a funcionar a bordo del crucero Marroquín —según Decreto 793 de 6 de julio— y de la Escuela Superior de Guerra. La organización de las unidades militares fue hecha por divisiones compuestas por tres regimientos de infantería y una de artillería a la usanza prusiana, mientras la caballería y los ingenieros eran tropas de Ejército, y el servicio de salud para la Escuela Militar se contrató con la Casa de Salud Marly (Resolución 42 del 8 de junio del Ministerio de Guerra)⁷¹.

La reforma constitucional planteada por Rafael Reyes fue ejecutada en el gobierno de Carlos Eugenio Restrepo Restrepo y tuvo como hechos relevantes la abolición de la pena de muerte, la delimitación de las funciones del poder público, la expedición del Código Contencioso Administrativo, la supresión de la vicepresidencia, la reducción a cuatro años del periodo presidencial, fijó límites para la declaratoria de los estados de sitio⁷² y reglamentó el servicio militar con la Ley 1146 de 1911, por la cual se establecía además el “rescate por dinero” que, según las *Memorias de la I División del Ejército*, en 1913⁷³ perjudicó el reclutamiento, pues el Ejército no recibía hombres aptos:

No al personal sano, de 21 años y de todas las clases sociales, a que tenía y tiene derecho la institución, sino todo lo contrario, a un personal compuesto de inútiles, de conducta dudosa, de diferentes edades, hasta de 35 años, casados, con hijos y aún varios idiotas,

⁷¹ ATEHORTUA CRUZ Adolfo León y VELEZ RAMÍREZ Humberto, (1994), *Estado y Fuerzas Armadas en Colombia*, TM Editores, Universidad Javeriana Cali, págs. 56 a 62.

⁷² RAMÍREZ QUINTERO Clímaco, (2012) *El conflicto colombiano: Génesis de decisiones políticas de Colón* a Juan Manuel Santos Calderón, Universidad Militar Nueva Granada, pág. 206.

⁷³ EJÉRCITO DE COLOMBIA, *Memorias de la I División del Ejército*, 1914, original en la Biblioteca Luis Ángel Arango.

gente toda paupérrima, sucia, haraposa, lo que dice a las claras de donde salió este contingente.

El presidente José Vicente Concha (1914-1918), civilista y anti-militarista, pretendió que este inicio de profesionalización militar no tuviera continuidad, pero la acción de monseñor Bernardo Herrera Restrepo de donar dinero de la Iglesia católica le permitió a las escuelas militares sobrevivir hasta el cambio de gobierno⁷⁴. La historia de la fundación de las escuelas militares nos proporciona la visión panorámica de la realidad, en la cual se desarrollaba la actividad militar con tanta influencia en la vida de los ciudadanos y con tantas consecuencias negativas por el enfrentamiento permanente de sus líderes. La revista *Seguridad y Defensa* de la Escuela Superior de Guerra⁷⁵ relata:

Pero con el devenir de las guerras civiles, degradado el espíritu militar y olvidado este manual, se relegó a segundo plano la actividad de los Estados Mayores, cuyo pobre desempeño, estuvo entonces destinado a dar refugio a algunos oficiales estudiosos pero sobre todo a servir de pantalla a doctores y gamonales políticos con ínfulas de estrategias, que en esta organización esperaban turno para obtener el mando en unidades de combate. Razón para que al fundarse en 1909 la Escuela Superior de Guerra, bajo la dirección del distinguido Mayor del Ejército chileno, Pedro Charpin Rival, se diera comienzo a la genuina capacitación profesional de verdaderos oficiales de Estado Mayor, asesores del Mando Militar en sus más altos niveles.

⁷⁴ PINZÓN CAICEDO ARMANDO, La segunda reforma militar, Revista Tribuna del Infante, ISSN 24223964, edición 111 de agosto de 2017, pág. 19.

⁷⁵ IBÁÑEZ SÁNCHEZ José Roberto, Centenario de la Escuela Superior de Guerra, Revista Estudios en Seguridad y Defensa, Edición, 6 Noviembre de 2008.

Para 1914 el servicio militar cambió el rescate por dinero por el rescate por reemplazo, igualmente abominable, con lo que se determinaba que el servicio militar no era en realidad obligatorio como lo mandaba la ley, sino una burla al principio de igualdad ante ella. En su base social el Ejército perdió como institución nacional y desde entonces el reclutamiento recaerá sobre los obreros y los campesinos. Para 1918 la Escuela Superior de Guerra suspendió su funcionamiento debido a la falta de presupuesto.

Tampoco la Policía Nacional se salvaba de la crisis institucional porque, argumentando déficit presupuestal, el Gobierno, mediante el Decreto 308 del 20 de febrero de 1918, liberó a la Policía de la prestación de todos los servicios que no corrieran a cargo de la nación, excepto la seguridad de Bogotá, con lo cual impulsó el establecimiento de cuerpos especiales de Policía departamental y municipal para esos otros servicios prestados bajo la influencia política correspondiente al lugar de su ejercicio.

Mientras la economía se encontraba en ruinas y el país no estaba en capacidad de soportar un Ejército con capacidad de defender su integridad territorial, los vecinos aprovecharon las circunstancias y produjeron reclamos por delimitación de fronteras que llevaron al país a perder casi un tercio de su territorio, por medio de los tratados y laudos que se relacionan a continuación:

-El 04 de noviembre de 1903 se produjo la independencia de Panamá y la negociación con éste país inició en 1904 logrando el acuerdo definitivo de delimitación de fronteras el 20 de agosto de 1924 con el Tratado Jorge Vélez-Nicolás Victoria⁷⁶.

⁷⁶ CANCELLERÍA, Frontera terrestre Colombia-Panamá, <https://www.cancilleria.gov.co/colombia/sovereignty/boundary/panama>

-El Tratado Alfredo Vasquez Cobo-Eneas Martins de 24 de abril de 1907⁷⁷ fijó los límites con el Brasil entre Piedra del Cocuy y la desembocadura del Río Apaporis en el Caquetá y se terminó de delimitar con el Tratado Laureano García Ortiz- Octavio Mangabeira de 15 de noviembre de 1928⁷⁸ aprobado por ley 43 de 1929 que definió límites y navegación fluvial fijando la cobertura territorial desde la confluencia del Río Apaporis con el Río Caquetá hasta Tabatinga en la margen izquierda del Río Amazonas.

-Tratado Marco Fidel Suárez Muñoz- Alberto Muñoz Vernaza de 1916⁷⁹ delimitó fronteras con Ecuador obteniendo según los historiadores ecuatorianos más de 180.000 km² en la región nororiental, correspondientes a los afluentes de los ríos Putumayo, Napo y Caquetá.

-El Tratado Fabio Lozano Torrijos-Alberto Salomón de 24 de marzo de 1922⁸⁰ hizo fijación de límites entre Colombia y Perú, que según la historiografía colombiana generó la pérdida de 150.000 kilómetros entre los ríos Putumayo, Napo y Amazonas ganados frente a Ecuador, mientras los peruanos dicen haber perdido 100.000 kilómetros entre Tarapacá y Puerto Arica, en un tratado que tuvo como único fin otorgar a Colombia una salida propia al Amazonas. Las fronteras fueron delimitadas en forma definitiva por el Protocolo

⁷⁷ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Arreglo de límites entre la República de Colombia y la República de los Estados Unidos del Brasil, https://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_evolucion/documentos/arreglo_limites_colombia_brasil.pdf

⁷⁸ SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA, Tratados, Fronteras de Colombia, https://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_colombia/fronteras/brasil/brasil_tratados.html

⁷⁹ AVILÉS PINO EFRÉN, Enciclopedia del Ecuador, Tratado Muñoz Vernaza-Suarez <http://www.encyclopediadelecuador.com/historia-del-ecuador/tratado-munoz-vernaza-suarez/>

⁸⁰ Academic, Tratado Salomón-Lozano, <http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1166626>

de Río de Janeiro de 24 de mayo de 1934⁸¹, luego de la confrontación armada por invasión de Perú a Colombia en intento de ocupar el territorio que consideraba suyo.

Desde el inicio de la reestructuración de las Fuerzas Armadas se empleó el Ejército para acallar las protestas populares: el 11 de diciembre de 1910 fue reprimida a fuego de fusil la protesta de los cartageneros contra la venta de la casa arzobispal a una compañía norteamericana, como también se pretendieron resolver con los fusiles las protestas por la nueva división territorial en Popayán, Buga y Cúcuta y las huelgas de obreros en Barranquilla y Calamar. El Gobierno conceptuaba que las relaciones capital-trabajo se gestaban en el libre mercado y, desde luego, la solución de los diferendos salariales debían solucionarse en vía privada, de modo que cuando el problema pasaba a ser de orden público era obligatoria la intervención de las Fuerzas Armadas.

Bajo ese precepto Suárez (1918-1921) reprimió a sangre y fuego una marcha de protesta de los artesanos el 16 de marzo de 1919 contra un decreto que autorizaba la importación de uniformes y botas militares. El mismo tratamiento tuvieron luego las huelgas de mineros de la Compañía Inglesa de Segovia (agosto de 1919), el paro general de trabajadores ferroviarios de La Dorada y la movilización campesina del Sinú. Para 1920, asalariados y trabajadores independientes desarrollaron un total de treinta y un huelgas⁸². También estallaron los conflictos por la tierra en Cauca, Bolívar, Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle.

⁸¹ BANCO DE LA REPÚBLICA, Protocolo de Río de Janeiro, www.banrepultural.org/sites/default/files/83078/brblaa856184.pdf

⁸² ARCHILA Mauricio, (2013) Movimiento obrero y protesta social en Colombia, 1920-1950, <https://www.researchgate.net/publica->

Mediante Ley 126 del 31 de diciembre de 1919 se constituyó la aviación militar que, según Aristóbulo Archila (1922), inició bajo el mando del coronel Efraín Rodríguez Acevedo y se contrató una misión militar francesa comandada por el capitán René Adolphe Dominique Guichard, cuyo fin fue crear y dirigir la Escuela Militar de Aviación⁸³.

La elección de Pedro Nel Ospina (1922-1926) tuvo al parecer una actitud parcializada de las Fuerzas Armadas, cuyo ministro fue citado al Congreso a explicar la participación en las elecciones. Sin embargo, Ospina llevó a cabo una reorganización fiscal, reformó el sistema bancario, creó el Banco de la República y el Banco Central Hipotecario. Además, en el periodo el país recibió una inversión millonaria que se difuminó con importaciones de maquinaria, equipo y obras públicas, lo cual generó la incorporación de más trabajadores que abandonaron la labor agrícola, presentándose como consecuencia un aumento en el costo de vida con escasez de alimentos y productos agrícolas, al punto que el Estado se vio obligado a decretar la emergencia para importar alimentos⁸⁴.

La Policía Nacional se fortaleció con la creación de la Escuela de Investigación Criminal, y en 1925, con la organización de la Policía Judicial. También se reabrió la Escuela Superior de Guerra (Decretos 965 y 1738 de 1925), se abrió una escuela para suboficiales y en la hacienda La Picota se creó la Escuela de Enferme-

tion/263845251_Movimiento_obrero_y_protesta_social_en_Colombia_1920-1950, pág. 177.

⁸³ ARCHILA Aristóbulo, (1922), Memorias del Ministro de Guerra, Bogotá, Publicaciones del Ministerio.

⁸⁴ ATEHORTÚA CRUZ Adolfo León y VÉLEZ RAMÍREZ Humberto, (1994), Estado y Fuerzas Armadas en Colombia, TM Editores, Universidad Javeriana Cali, pág. 103.

ría, de Veterinaria, Herrería y Adiestradores de Ganado (Decreto 1733 de 1925). Asimismo, en 1926 se creó la Escuela de Radio-telegrafía, Telegrafía y Tranviarios (Decretos 41 y 68 de 1926).

En Rusia se desarrollaba la Revolución bolchevique y en Colombia el Gobierno intentaba la industrialización en medio de temores porque los trabajadores tomaran el ejemplo revolucionario, temor que empezó a hacerse realidad con la huelga de trabajadores de la Tropical Oil Company en 1924, la de los trabajadores del Ferrocarril del Pacífico en 1926 y de nuevo la de Tropical Oil Company en 1927 en Barrancabermeja.

En el gobierno de Miguel Abadía Méndez, entre 1926 y 1930, se presentó la huelga de trabajadores de la United Fruit Company, compañía creada en Boston (Estados Unidos) y que había llegado a Colombia en 1899 a realizar la explotación masiva del banano mediante la modalidad de subcontrato, con posición dominante por razón de su capital, con el cual se apoderó de la tierra y de la producción quebrando a los pequeños productores. La huelga la iniciaron en Ciénaga (Magdalena) unos 10 000 trabajadores sin protección social, sin otras alternativas de trabajo, con sentimientos antiestadounidenses por la pérdida de Panamá y motivados por activistas del Partido Socialista Revolucionario, el 11 de noviembre de 1928 con unas peticiones⁸⁵ que incluían: 1) indemnizaciones por accidentes de trabajo; 2) seguro colectivo; 3) descanso dominical remunerado; 4) libertad para adquirir víveres fuera de los comisariatos de la compañía; 5) prohibición de pago con vales para cambio en los comisariatos; 6) pago semanal; 7) incremento salarial del 50 % a

⁸⁵ EL TIEMPO, Clave 1928. Masacre de las bananeras, 28 de noviembre de 1991, www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-198424

quienes ganaban menos de 100 pesos; 8) mejor servicio hospitalario; y 9) habitaciones higiénicas.

La huelga tuvo un desarrollo trágico durante los días 5 y 6 de diciembre de ese año, lo cual ha sido examinado y distorsionado de acuerdo con los intereses de cada narrador. Mauricio Archila⁸⁶ describe que ante rumores de una entrevista del gobernador con los huelguistas en la estación del tren que estos acudieron en masa, pero el gobernador nunca apareció, lo que motivó la exacerbación de los ánimos y el enfrentamiento con las fuerzas del orden con un saldo de entre siete a nueve muertos, aunque algunos aseguran que fueron cientos.

Armando Caicedo Garzón⁸⁷ relata que con el mismo motivo de reunión con el gobernador, los trabajadores, en número aproximado de dos mil, acudieron a la plaza de la población donde el Ejército había instalado ametralladoras en los costados. Se relata que el general Carlos Cortes Vargas leyó el decreto de estado de sitio, el corneta tocó la retirada y, dado que los trabajadores permanecieron inmóviles ante la orden de desalojo, ordenó disparar sobre ellos.

El relato de la masacre por la Central Unitaria de Trabajadores⁸⁸ habla del hallazgo de fosas comunes con saldo hasta mil quinientos muertos, atribuidos a dicha matanza. Entre tanto, el

⁸⁶ ARCHILA Mauricio, (1999) Masacre de las bananeras: diciembre 6 de 1928, Revista Credencial Historia, Biblioteca Virtual Luis Ángel Árago, Septiembre de 1999 N.o 117, www.banrepcultural.org.

⁸⁷ CAICEDO GARZÓN Armando, El Tiempo, Clave 1928. Masacre de las bananeras, 28 de noviembre de 1991, www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-198424

⁸⁸ CUT, Masacre de las bananeras. Diciembre 6 de 1928, cut.org.co/wp-content/uploads/2013-12/MASACRE-DE-LAS-BANANERAS.pdf

relato hecho por *Las 2 Orillas*⁸⁹ da cuenta de hasta treinta mil manifestantes a los que dispararon por aire y tierra con un saldo de cuarenta y siete muertos. Señala también que el presidente Abadía Méndez reconoció trece muertos y diecinueve heridos, motivados por el temor que generó en el Gobierno la amenaza del presidente John Calvin Coalidge de enviar *marines* si no se solucionaba la amenaza que se presentaba sobre los intereses de empresas estadounidenses en Colombia.

Finalmente, no está claro cuántos muertos hubo en este suceso, pero su ocurrencia ha servido para documentar y motivar como punto de partida las luchas de clases y la oposición contra los gobiernos.

Después de ocurrida la masacre de las bananeras en 1928 y con una agitación cada vez más creciente de los obreros golpeados por la crisis que generó la gran depresión mundial de 1929, para 1930 la población colombiana era casi un 80 % de naturaleza campesina y, por tanto, su manutención se sostenía, en gran parte, por la producción cafetera que para esos años había bajado a los precios de 1928, lo que ocasionó menos ingresos con una consecuente parálisis de los préstamos y, en general, una grave crisis económica.

En 1930 Enrique Olaya Herrera asumió el poder con su programa de “Concentración nacional” con un gobierno “de garantía para todos, de adelanto para el país, de conciliación y de paz”⁹⁰, dirigido a un país que venía de cuarenta años de hegemonía

⁸⁹ LAS 2 ORILLAS, La masacre de las bananeras 88 años de impunidad, www.las2orillas.co/la-masacre-las-bananeras-88-años-impunidad-2/

⁹⁰ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, *Enrique, Olaya Herrera, un liberal visionario*, www.partidoliberal.org.co, consultada el 24-May-2008.

conservadora en la que los entes burocráticos, el Ejército y la Policía tenían esa orientación ideológica. Esto fue, precisamente, motivo de confrontación armada entre conservadores y liberales durante los dos primeros años de gobierno. Unos buscaban mantener su dominio y otros su victoria, o bien defender los cargos públicos contra las nuevas autoridades. Con un creciente descontento de los conservadores, el escritor Abel Carbonell explicaba las causas de la violencia creciente en la población y manifestaba las deficiencias en la educación, la crisis económica y el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas⁹¹.

Mediante la Ley 72 de 1930 se buscó alejar a los militares activos de la contienda política y se prohibió el voto, actitud que, según Agustín Morales (1931)⁹², fue respaldada por la oficialidad manifestada en los generales José María Forero, Gregorio Victoria, Manuel Benalcázar, Manuel Castro, José Joaquín Villamizar, Manuel Arturo Dousdebés y Aníbal Ángel, además de catorce coroneles, diez mayores, diecinueve capitanes y siete tenientes.

Con el inicio del gobierno de Olaya Herrera también surgió el Partido Comunista, a partir de lo que era en la década de 1920 el Partido Socialista Revolucionario, e iniciaron inconvenientes con los campesinos también golpeados en sus ingresos por los bajos precios del café y la crisis en las exportaciones como consecuencia de las políticas proteccionistas adoptadas por el Gobierno. Esta situación se vio agravada por la incursión militar del Perú en el puerto de Leticia (Amazonas) en 1932, la cual debió atenderse inclusive con el sacrificio voluntario de los bienes

⁹¹ ATEHORTÚA Adolfo León y VÉLEZ Humberto, (1994), *Estado y Fuerzas Armadas en Colombia*, TM Editores, Universidad Javeriana, Cali, pág. 124.

⁹² MORALES Agustín, (1931), *Informe del Ministro de Guerra*, Bogotá, Publicaciones del Ministerio.

de los colombianos, hasta que se firmó el protocolo de Río de Janeiro en 1934 para el término de la confrontación.

La guerra con el Perú fortaleció a las Fuerzas Militares y, según Atehortúa y Vélez⁹³:

Se adquirieron los destructores Caldas y Antioquia, contruídos en Inglaterra; los transportes Cúcuta, General Mosquera y Boyacá; el buque petrolero Cabinas y los cañoneros Mariscal Sucre, Córdoba y Bogotá. Los cañoneros de mar Pichincha, Carabobo y Junín fueron traspasados del Ministerio de Hacienda al de Guerra.

Para la creación de la nueva marina, los oficiales del Ejército en la contienda del sur pasaron al arma naval y se contrataron los oficiales británicos, contralmirante Basil Bell Salter y el capitán de navío Ralph Binney, primer director de la Escuela Naval reactivada en 1934 en Cartagena y reconocida por la Ley 105 del 29 de abril de 1936.

Por su parte al Ejército se le dotó de mejor equipamiento bélico. Se construyeron las bases naval de Cartagena y f uviales del Magdalena y de Putumayo, y se inició la construcción de los aeródromos de Palanquero, Tres Esquinas y Buenaventura. La Escuela de Madrid se trasladó a El Guabito, en Cali, bajo el nombre de Escuela Militar de Aviación Ernesto Samper (Hoy Marco Fidel Suarez), con un equipo en donde sobresalían 15 aviones Trainer NK-1, 30 Falcon de tipo F-8E, 17Hawks y 10 Fledling.

A partir de la experiencia del conflicto con el Perú se ordenaron estudios sobre el desempeño del Ejército, sus fallas técnicas y tácticas, y el presidente Olaya Herrera ordenó la creación de una Escuela de Aplicación de Infantería en la que fuera posible

⁹³ ATEHORTÚA Adolfo León y VÉLEZ Humberto, (1994), Estado y Fuerzas Armadas en Colombia, TM Editores, Universidad Javeriana, Cali, págs. 126-127.

preparar mejor la oficialidad, pero la iniciativa fue negada por el Estado Mayor Conjunto que no lo consideró necesario.

De tal estado de crisis surge en Cundinamarca la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), fundada en 1933 por Jorge Eliécer Gaitán, con un programa agrario antilatifundista, socialista, antiimperialista, calificado por comunistas y capitalistas como "fascista". En respuesta, los hacendados fundaron el Sindicato de Propietarios y Empresarios Agrícolas para luchar contra los enemigos de la propiedad y contra las doctrinas comunistas. El Gobierno contaba con 6500 efectivos en el Ejército, insuficientes para controlar el orden público, y la Policía tenía la mayoría de sus fuerzas en Bogotá, mientras el orden en el campo correspondía a la Policía Departamental, altamente politizada, cuyos dirigentes eran elegidos por los políticos locales.

El programa político de Alfonso López Pumarejo de 1934 a 1938 se denominó "La Revolución en Marcha", la cual él definió como "el deber del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por medios violentos"⁹⁴. Con esta se alivió un tanto el problema de los obreros al lograr que el sindicalismo laboral pudiera funcionar de manera abierta. Con fuerte oposición del Partido Conservador, se apartó del bipartidismo en la conformación de su gobierno y gobernó con una mayoría burocrática liberal.

Su gobierno cambió el concepto del Estado gendarme por uno capaz de obligar al ciudadano al cumplimiento de sus deberes sociales. Con el Acto Legislativo N.º 1 de 1936 realizó la reforma constitucional que definió la propiedad por su función social;

⁹⁴ BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO, Ficha bibliográfica, Título Alfonso López Pumarejo, Edición en la biblioteca virtual 2004-12-13, www.lablaa.org, consultada el 24 de mayo de 2008.

integró al archipiélago de San Andrés y Providencia y demás islas a los límites del Estado; realizó la reforma tributaria que aplicó mayores impuestos a las grandes industrias y empresas (el impuesto a la renta, al patrimonio y a la posesión de capital); con la reforma agraria buscó redistribuir la propiedad de la tierra colocándola en manos de quienes la trabajaban y suspendió el apoyo del Estado con su fuerza pública a los patronos para despedir a colonos y arrendatarios; y con la reforma laboral propició el sindicalismo y garantizó el derecho a la huelga.

La soberanía se confirmó al mantener una política internacional independiente; también organizó la Armada Nacional y modernizó al Ejército y la Policía Nacional⁹⁵. En 1935 dio inicio a la Escuela de Aplicación de Infantería ante la insistencia del teniente coronel Carlos Pinzón Azuero, aun contra la voluntad del mando superior. En 1936 creó la Escuela de Artillería y, a su vez, nacionalizó la Policía encargando de su reestructuración a una misión chilena encabezada por el coronel Romo Boza, con el capitán Balarmino Torres Vergara y el teniente Emilio Oelkers Holltein. En 1937 creó la de Caballería y en 1940 la de Ingeniería con sede en Ibagué⁹⁶, y en la estructura organizacional del Ejército generó el cambio más importante hasta la época, pues el presidente ordenó a los generales Rojas, Dousdebés, Valderrama y Díaz⁹⁷ elaborar un estudio para mejorar la distribución del Ejército, quienes recomendaron organizarlo con:

⁹⁵ BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO, Ficha bibliográfica, Título Alfonso López Pumarejo y la revolución en marcha, Credencial Historia N.º 192, www.banrepcultural.org, consultada 07-oct-2016.

⁹⁶ PINZÓN CAICEDO Armando, La segunda reforma militar, Revista Tribuna del Infante, ISSN 24223964, edición 111 de agosto de 2017.

⁹⁷ DÍAZ Francisco, (1934), El Ejército que Colombia necesita, Bogotá, Imprenta de Juan Casís.

Cinco brigadas con tres batallones de infantería, una compañía de lanzaminas, un grupo de caballería y otro de artillería, un batallón de ingenieros y otro de tren, un destacamento especial para la región amazónica y una guarnición para el puerto de Buenaventura, además del batallón de infantería Guardia de Honor. El batallón de infantería tendría sus cuatro compañías; tres de fusileros y una de ametralladoras; el grupo de caballería, dos escuadrones de carabineros y uno de ametralladoras; el grupo de artillería, dos baterías de cañones y una de obuses; el batallón de ingeniería, dos compañías de zapadores, y el de tren, una compañía hipomóvil y otra de automovilismo.

Con respecto a la estructura social intervino mediante la Ley de Tierras,⁹⁸ con la cual pretendía realizar una reforma agraria para titular tierras a los campesinos. Entre otras acciones autorizó la extinción de dominio al cabo de los diez años para aquellas propiedades que no eran debidamente explotadas, mas esto no tuvo resultados efectivos y se generaron mayores tensiones entre los campesinos y los terratenientes, pues al facultar a los invasores para retener las tierras ocupadas se legalizaba la posesión sin que existieran suficientes mecanismos legales para garantizar la efectividad de las normas⁹⁹. Los terratenientes crearon la Asociación Política Económica Nacional (APEN), en oposición a su aplicabilidad mediante distintos mecanismos de presión¹⁰⁰.

A pesar del estado evidente de confrontación que se vivía en el campo, 1938-1942 fue el cuatrienio gobernado por Eduardo Santos, un conciliador siempre dispuesto al diálogo que,

⁹⁸ LEY 200 DE 1936.

⁹⁹ RAMSEY W., Rusell (2000): *Guerrilleros y soldados*, TM Editores, Segunda edición, pág. 96.

¹⁰⁰ PRESIDENCIA, Así es Colombia, Presidentes de la República de Colombia, Alfonso López Pumarejo, wsp.presidencia.gov.co

en lugar de fijar políticas, prefirió no enfrentar al poder militar. Firmó el tratado de límites terrestres con Venezuela pero dejó sin delimitar las áreas marinas que hoy son permanente fuente potencial de conflicto. De todas maneras, el cuatrienio fue de tranquilidad pública a pesar de que decretar el aplazamiento de la fecha en que debían reunirse las asambleas, con el pretexto de que la guerra mundial se acercaba al continente americano y la perturbación del orden público interno podría nacer por acción del grupo conservador constituido como apéndice del franquismo español, le valió una investigación adelantada irregularmente por el Consejo de Estado¹⁰¹.

Durante su gobierno se multiplicaron los convenios militares de ayuda recíproca con Estados Unidos a cambio del rechazo a cualquier ataque extracontinental, creó a su imagen los servicios de inteligencia, aprobó la permanencia de aviones militares norteamericanos en territorio colombiano y permitió que observadores militares y navales norteamericanos se instalaran bajo apariencia de asesores consulares en Barranquilla, Medellín y Cúcuta. Además, el 16 de marzo de 1940 creó la Escuela de Policía General Santander en Muzú, bajo la dirección del jurista Luis Andrés Gómez¹⁰².

En su segunda presidencia, Alfonso López Pumarejo realizó una nueva reforma constitucional en 1945, en la que consagró la prohibición a los militares de sufragar¹⁰³; de hecho, en su go-

¹⁰¹ DECRETO 970 DEL 15 DE ABRIL DE 1942, expedido en uso de facultades extraordinarias recibidas por Ley 128 de 1942, Art. 16.

¹⁰² ATEHORTÚA Adolfo León y VÉLEZ Humberto, (1994), Estado y Fuerzas Armadas en Colombia, TM Editores, Universidad Javeriana, Cali, págs. 126-147.

¹⁰³ BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO, Ficha bibliográfica, Título Alfonso López Pumarejo, Edición en la biblioteca virtual 2004-12-13, www.lablaa.org, consultada el 24 de mayo de 2008.

bierno debió sortear dos rebeliones militares. La primera, por descontento ocasionado a causa del licenciamiento de una gran cantidad de efectivos realizado a fin de reducir el pie de fuerza y quitarle poder a los militares con la excusa de carencia de recursos presupuestales, y el intento de golpe de Estado el 10 de julio de 1944 en Pasto, instigado por las preferencias que atribuía a la Policía Nacional, las indelicadezas administrativas desde el alto gobierno y porque, presuntamente, estaba ciego ante la subversión comunista.

El presidente López nombró en marzo de 1944 a un militar de su confianza como ministro de Guerra, con lo que rompió una larga tradición de predominio de ministros civiles y colocó de forma explícita y directa a los altos mandos militares en atribución de intervenir en los asuntos políticos relacionados con el ejercicio del poder. En ese mismo año se le dio carácter legal a la función presidencial como “jefe supremo de las Fuerzas Militares”¹⁰⁴, dado que hasta entonces no se hablaba de políticas de seguridad y defensa nacional, sino que las Fuerzas Militares actuaban de acuerdo con el mandato constitucional a órdenes del presidente ante las amenazas tanto internas como externas, pues su objeto era la defensa del Estado contra todo ataque e invasión enemiga, así como evitar disturbios y desórdenes públicos dentro de las fronteras y garantizar el acatamiento de la ley. Como órgano asesor del presidente para el cumplimiento de su función existía el Consejo Superior Militar, integrado por el comandante general de las Fuerzas Militares, el jefe del Estado Mayor General, los generales de la guarnición de Bogotá, los comandantes de fuerza y el secretario general de Guerra¹⁰⁵.

¹⁰⁴ DECRETO 102 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1944.

¹⁰⁵ DECRETO 835 DEL 16 DE ABRIL DE 1951.

El tesón de los simpatizantes del Partido Comunista, desde 1920 hasta 1945, por lograr su reconocimiento, las acciones en la búsqueda del mejoramiento del salario para los trabajadores del campo y de la industria, además del empeño por un mejor reparto de la propiedad y de la tierra en un país gobernado por una minoría plutocrática, fundamentó la violencia social en Colombia para el periodo que los historiadores han denominado “de violencia política”. En efecto, los más ricos aceptaron las ideologías liberal y conservadora que no afectaron sus intereses, pero hicieron proscripción de los portadores de nuevas ideas acerca del reparto de la tierra y, en general, de la propiedad, además del justo valor del trabajo.

Al resistirse en lenta y dificultosa aceptación a la exigencia social la élite gobernante originó una reacción contra sus políticas, así como contra la expresión liberal y conservadora que limitaba su progreso, razón por la cual, finalmente, se organizaron guerrillas, no para combatir al Estado, sino a sus representantes ideológicos, pues era su objetivo la desaparición física del contrario y no el derrocamiento del Gobierno que era, precisamente, de su misma corriente ideológica. Esto correspondió al periodo de una hegemonía liberal que tuvo como expresión violenta las incursiones de liberales y conservadores a pueblos y veredas ocupadas por el opositor, en abierta lucha por la ocupación de la tierra, mientras los comunistas pasaban de la protesta social en las calles a las escuelas de formación y a los enclaves campesinos con pretensiones de autonomía territorial.

El presidente López renunció en 1945 y su mandato lo terminó Alberto Lleras¹⁰⁶. En ese año se realizaron las elecciones de con-

¹⁰⁶ RAMSEY W., Rusell (2000): *Guerrilleros y soldados*, TM Editores, Segunda edición, pág. 100.

gresistas y el Partido Comunista, que ejercía entonces influencia en la CTC, obtuvo curul para un senador y cuatro representantes a la Cámara, con un total de 27 976 votos. En este periodo se inició lo que históricamente se conoce como la “época de La Violencia partidista”, la cual comprende entre 1945 y 1965. En esta no se enfrentaban ejércitos organizados como, por ejemplo, en las guerras del siglo pasado, ni tenían objetivos políticos señalados, sino que se presentó entre grupos guerrilleros fragmentados levantados en autodefensa contra el Gobierno, o a fin de defenderse como miembros de un partido ante las agresiones de otro opositor, con jefes de extracción popular más bien reconocidos como bandoleros y algunas veces vinculados con los directorios políticos locales o regionales.

La dirección civil del Estado se mantuvo como factor dominante al fijar las políticas de orden público a ejecutar por las Fuerzas Armadas que, a pesar de la orientación represiva del gobierno de Lleras, recibieron mediante el Decreto 385 de 1946 la capacitación para vincularlos a la actividad social de creación de una conexión de solidaridad de acción entre el pueblo y el Ejército, con la organización de cursos especiales para oficiales en la Universidad Militar.

El concepto popular según el cual quien escruta gana, dado que el escrutador es la élite poderosa de la nación, parece tener una confirmación en este momento histórico, pues en un país con mayorías liberales que odiaban a sus opositores ganó la presidencia el Partido Conservador. No podemos llamarnos a engaño, es poco probable que los programas de gobierno o las propuestas presentadas por el candidato hayan sido el factor determinante del triunfo, pues había circunstancias que no lo hacían posible: 1) los votantes lo hacían por su partido, su bandera y su origen ideológico partidista; y 2) la población era,

en su mayoría, campesina y sin información política. De todas maneras, cambió el panorama político en la burocracia pero no en el enfrentamiento violento entre los ciudadanos.

La violencia política era manifiesta en todo el país, y en ese estado de cosas en 1946 asumió la presidencia Mariano Ospina Pérez, quien declaró el estado de sitio y con la justicia militar realizó el juzgamiento de rebeldes (sin resultados porque la confrontación se tornó aún más aguda en las zonas rurales). Para finales de ese año, doscientos dos militares servían como alcaldes en virtud de estado de sitio¹⁰⁷, sin embargo, los civiles creían en el control sobre los militares y al asumir el poder los usaban contra los opositores, hecho posible porque aquellos consideraban que su deber era la defensa del Estado representado en el gobierno.

La actividad violenta llegó a su máximo pico el 9 de abril de 1948 con la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo que ocasionó en Bogotá un estado general de violencia que conocemos como “el Bogotazo”, también con repercusiones en otros lugares del país. Tal es así que el gobernador del Tolima y la Policía se sublevaron en Ibagué y dieron libertad a los presos, entre los cuales estaba un sujeto llamado Pedro Antonio Marulanda Marín, posteriormente conocido como Tirofijo, quien recobrada su libertad partió hacia las montañas del Huila¹⁰⁸ y, posteriormente, se erigiría como la principal figura de la subversión comunista en el país. La asonada multitudinaria en Bogotá se manifestó en incendios y saqueos de edificios públicos, iglesias, colegios, conventos, almacenes y residencias particulares;

¹⁰⁷ Ibídem, p. 118.

¹⁰⁸ RAMSEY W., Rusell (2000): *Guerrilleros y soldados*, TM Editores, Segunda edición, pág. 158.

se presentaron asesinatos y masacres colectivas, y aun cuando los combates y saqueos se prolongaron durante la semana, con el batallón Bolívar de Tunja y la Escuela Militar de Cadetes se detuvo la amenaza que hizo la Quinta División de la Policía de tomarse el palacio presidencial.

El asesinato, la masacre, la quema de aldeas y pueblos, los secuestros, los robos, las violaciones y toda clase de violencia se enseñoreó en Colombia. Numerosas gentes se escaparon a las montañas y formaron las guerrillas y cuadrillas pensando en su defensa; otros organizaron las guerrillas de los Llanos. La violencia se extendió en los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Valle, Viejo Caldas, Antioquia y otras regiones¹⁰⁹.

El presidente Ospina Pérez, el 22 de febrero de 1949, firmó un pacto de asistencia y asesoría militar con los Estados Unidos que se denominó “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” (TIAR), y este país dotó a las Fuerzas Armadas de aviones Douglas C-47, algunos F-47 (Thunderbolt), varios cazabombarderos y tres B-25 bombarderos livianos¹¹⁰.

Con la expedición del Decreto 3513 de noviembre 9 de 1949 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio la nación. Se suspendieron las sesiones ordinarias del Congreso, de las asambleas departamentales y de los concejos municipales. El Gobierno hizo uso de los decretos-leyes, con los cuales gobernó hasta la culminación del mandato.

Laureano Eleuterio Gómez Castro gobernó desde 1950 hasta 1953. Instituyó políticas de derecha y, en medio de la creciente

¹⁰⁹ BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO, Ospina Pérez Mariano, www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/ospimari.htm

¹¹⁰ RAMSEY W., Rusell (2000): *Guerrilleros y soldados*, TM Editores, Segunda edición, pág. 161.

violencia, suspendió las cortes, redujo las libertades civiles, sindicales y de prensa. La oposición lo acusó de utilizar medidas autoritarias e implementar un esquema de represión contra los liberales y comunistas. El total de las guerrillas en los Llanos Orientales se aproximaba a 20 000 hombres, las guerrillas comunistas de Tolima y Cundinamarca contaban con 6000, los grupos de Antioquia también llegaban a 6000 hombres, y en Viotá empezó a funcionar la Escuela de Cuadros del Partido Comunista, la cual instruía a sus alumnos en marxismo y puntería¹¹¹.

Con la aceptación del presidente Laureano Gómez, la ONU solicitó la participación de Colombia en la Guerra de Corea, presentada bajo la motivación de apoyar a Estados Unidos en representación del hemisferio occidental contra el avance comunista en el mundo y las fuerzas militares. Según Juan David Meléndez Camargo (2015),¹¹² obtuvieron como retribución lo siguiente:

Para Valencia Tovar, las enseñanzas de la Guerra de Corea pueden resumirse en lo que se conoce como la “tercera reforma militar del siglo XX” que incluyó: La introducción de la Plana Mayor, el perfeccionamiento de la táctica de fuego y movimiento, y la técnica, la doctrina defensiva, la introducción de la inteligencia y la contrainteligencia, el orden para el funcionamiento logístico de las tropas tal como transporte, raciones, uniformes, etc., mejoras técnicas en comunicaciones, instrucción mediante visitas, manuales y textos a los miembros del Ejército, avance en la ciencia naval, entre otros.

Desde la presidencia, Laureano Gómez pretendió dar un nuevo orden al país, convocando para esto a una Asamblea Nacional

¹¹¹ RAMSEY W., Rusell (2000): *Guerrilleros y soldados*, TM Editores, Segunda edición, pág. 191.

¹¹² MELÉNDEZ CAMARGO Juan David, “Colombia y su participación en la Guerra de Corea: una reflexión tras 64 años de iniciado el conflicto”, *Historia y Memoria* N.º10 (enero-junio, 2015), págs. 199-239.

Constituyente, con la cual buscó crear mecanismos para desarrollar sus ideas acerca del Estado. Su propuesta podría definirse como la puesta en marcha de un Estado corporativista en el que los poderes Legislativo y Judicial mantuvieran sus acciones claramente delimitadas, mientras al Ejecutivo se le otorgaban poderes especiales para determinar los rumbos a seguir en casos de crisis, propuesta que algunos autores han llamado “la dictadura civil”. En 1951, al sufrir un síncope cardíaco, Gómez se vio obligado a retirarse de la presidencia y el poder quedó en manos del primer designado, Roberto Urdaneta Arbeláez¹¹³.

El 13 de junio de 1953, aclamado por los liberales y por los conservadores no partidarios de Laureano Gómez, asumió la presidencia hasta 1957 el general Gustavo Rojas Pinilla como el único que podría poner fin al derramamiento de sangre y reconstruir el país. De esta manera, prometió amnistía general, rebajó arbitrariamente en un 20 % las condenas por rebelión, trasladó la totalidad de la Policía Nacional del Ministerio de Gobierno al de Defensa y los policías quedaron sujetos al Código de Justicia Penal Militar. También igualó los rangos, la estructura y los salarios con las otras fuerzas. Pretendió la creación de un “Estado cristiano y bolivariano”, con cuyo espíritu de concordia buscó una alianza entre la población, el Gobierno y Fuerzas Armadas en procura del desarrollo y el fin de la violencia, ejecutando programas de acción cívico militar y ofreciendo amnistía a los guerrilleros por entrega de las armas, lo que redujo los alzados en armas a unos 10 000.

El 11 de septiembre de 1953 en Tauramena (Casanare) entregaron las armas 6000 de los 20 000 combatientes de las gue-

¹¹³ REPÚBLICA DE COLOMBIA, Laureano Gómez Castro 1950-1953, http://wsp.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/rc_53.html

rrillas liberales al mando de Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure y Eduardo Fonseca Galán, de manera que unos regresaron a sus casas y otros a las montañas. Sin embargo, se fracasó en el objetivo de alcanzar la paz porque hubo un sector guerrillero obstinado en la guerra, especialmente los reductos comunistas rurales del Alto Magdalena¹¹⁴; Rojas no levantó el estado de sitio y, finalmente, fue depuesto en 1957 por una Junta Militar de Gobierno que restauró el régimen civil en 1958.

Hacia 1956, Laureano Gómez Castro, en compañía del liberal Alberto Lleras Camargo, firmó la Declaración de Benidorm, en España, y posteriormente, en 1957, ambos firmaron el Pacto de Sitges, por medio del cual los dos partidos tradicionales de Colombia se comprometían a trabajar unidos por la restauración del orden democrático, por la paridad en la participación en las corporaciones públicas y en el gabinete ministerial durante un periodo de doce años, e instauraban la carrera administrativa en lo que se llamaría “el Frente Nacional”¹¹⁵.

El 29 de octubre de 1956 Egipto nacionalizó la compañía administradora del Canal de Suez entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, lo que generó la reacción de Francia, Inglaterra e Israel, países que libraron la guerra de las cien horas en defensa de sus intereses. La ONU conformó una fuerza de emergencia para garantizar la estabilidad y la paz regional, y el 10 de noviembre de 1956 un pelotón de soldados colombianos con cascos azules viajó a Gaza y sirvió en tal labor hasta el 13 de mayo de 1958¹¹⁶.

¹¹⁴ BUSHNELL, David (2006): *Colombia una nación a pesar de sí misma*, Editorial Planeta, Quinta edición, págs. 292 a 301.

¹¹⁵ REPÚBLICA DE COLOMBIA, Laureano Gómez Castro 1950-1953, http://wsp.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/rc_53.html

¹¹⁶ CARVAJAL RESTREPO Estefanía, (2016), El Colombiano, ¿Por qué Colombia tiene un batallón en el Medio Oriente?, 27-May-2016, www.elcolombiano.com

La Junta Militar gobernó al país desde el 10 de mayo de 1957 con la promesa, bajo palabra de honor militar, de llamar a elecciones para el siguiente año, hecho que se cumplió y mantuvieron la presidencia hasta el 7 de agosto de 1958 (Presidentes de Colombia, Junta Militar de Gobierno 1957-1958), tras el derrocamiento del general Rojas Pinilla. El presidente de la junta fue el mayor general Gabriel París Gordillo, a quien acompañaron el brigadier general Luis Ernesto Ordoñez Castillo, el brigadier general Rafael Navas Pardo, el mayor general Deogracias Fonseca Espinosa y el contralmirante Rubén Piedrahita Arango. Su gobierno fue organizado con políticos de los dos partidos tradicionales, se estableció además la paridad política para ocupar los cargos públicos y les correspondió atender los problemas relacionados con la estabilización de los precios del café, el manejo de la deuda externa y la puesta en marcha del “Plan Vallejo” para la diversificación de las exportaciones.

El 4 de octubre de 1957 se dictó el Decreto Legislativo 0247¹¹⁷, el cual proponía una reforma constitucional, y el 1 de diciembre de 1957 se convocó a un plebiscito con el fin de, entre otros asuntos, responder sobre los siguientes puntos: 1) responsabilidad conjunta de los partidos tradicionales en el ejercicio del poder; 2) alternación liberal-conservadora en el desempeño de los cuatrienios presidenciales durante dieciséis años: de 1958 a 1974; 3) paridad en el manejo gubernativo y administrativo del Estado, esto es, igualdad burocrática de los partidos tradicionales; 4) a partir de ese momento, las mujeres tendrían los mismos derechos políticos de los varones; y 5) desde el 1 de enero de

elcolombiano.com

¹¹⁷ GÓMEZ LATORRE Armando (1991), La reforma del plebiscito, 1957, El Tiempo, www.eltiempo.com

1958 el Gobierno —todos los gobiernos—deberían invertir el 10 % del presupuesto nacional en la educación pública.

Con el plebiscito (o referendo) se alcanzó a formalizar la alternación política en los siguientes dieciséis años, la cual se denominó “Frente Nacional”. Para las reformas constitucionales se empoderó al Congreso con la exigencia del voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. Al respecto, Elsa María Fernández Andrade¹¹⁸ reseña que con el plebiscito de 1957 se revisó la Constitución de 1886 con trece enmiendas, entre las cuales se cuenta el artículo 13 que originó el artículo 218, el cual facultó al Congreso a reformar la Constitución Política mediante la discusión y aprobación de propuestas de reforma en dos vueltas que corresponden a dos legislaturas ordinarias. A partir de esta reforma se limitó el poder supremo del pueblo en nombre de la cesión de soberanía en los congresistas, con la cual se gobierna dentro de la llamada “democracia representativa”.

El análisis de los hechos ocurridos en el periodo comprendido entre 1903, luego del término de la Guerra de los Mil Días, hasta 1953, nos permite concluir lo siguiente:

- El pueblo obrero y campesino, motivado por los logros del comunismo en la Revolución rusa, toman conciencia e interés en participar del gobierno.
- La clase dirigente política ignoró ese interés y enfrentó sus manifestaciones con el uso de la fuerza.
- El inicio del periodo señala una confrontación influenciada por la ideología comunista, pero la negativa de los gober-

¹¹⁸ FERNÁNDEZ ANDRADE Elsa María, El narcotráfico y la descomposición política y social. El caso de Colombia, 2002, pág. 204.

nantes al reconocimiento de esa nueva expresión de fuerza política obliga a obreros y campesinos a adoptar la forma de oposición contra el Gobierno durante el periodo de hegemonía conservadora, bajo la presentación de guerrillas liberales.

- La conformación de guerrillas hace de este periodo el de mayor número de opositores en armas en la historia de Colombia.
- Las negociaciones de paz entre el Gobierno y las guerrillas liberales de nuevo quedan sin resultados y con compromisos incumplidos, lo que genera las motivaciones para el próximo levantamiento popular.
- La marginación social de los comunistas y la falta de resultados de las negociaciones relegaron a estos dirigentes sociales a la clandestinidad en zonas rurales, donde finalmente se formaron las organizaciones subversivas.
- La participación de las Fuerzas Militares en conflictos internacionales contra países con ideologías comunistas reforzaron su posición de enemigo ante aquellos que profesaran dicha ideología política.

De nuevo la guerra de los representantes comunistas por el poder

El primer presidente del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo, quien gobernó de 1958 a 1962, época en la cual, además de desarrollarse los programas de acción comunal y reforma agraria, se desarrolló una nueva estrategia y equipamiento de las Fuerzas Militares, con lo cual, no obstante, fue incapaz de controlar los enclaves comunistas de los que nacieron las actuales guerrillas subversivas. Durante su gobierno, en un discurso pronunciado en el Teatro Patria, dictó la directriz política en materia militar de obediencia y no deliberación, en la que también reconoció la autonomía militar en sus asuntos.

A partir de 1965, el presidente Guillermo León Valencia adoptó la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional”, creada por los Estados Unidos con el objeto de legitimar las dictaduras militares latinoamericanas. En los enclaves comunistas se crearon los movimientos subversivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

rias de Colombia (FARC) y, posteriormente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como parte de la evolución de la violencia partidista¹¹⁹, en contradicción de la presentación con causas históricas en la lucha por la posesión de la tierra. En ese año de 1965 se presentaron las primeras acciones armadas de las FARC y del ELN en varios sectores de la nación, como lo fueron las tomas de Simacota (Santander) por parte del ELN, y la de Inzá (Cauca) por parte de las FARC¹²⁰, las cuales marcaron su inicio subversivo.

Hubo un endurecimiento en las operaciones militares, en el juzgamiento de los civiles por la Justicia Penal Militar, de la alfabetización de campesinos y obreros se encargó a los militares, se reafirmó la militarización de la Policía y se creó la Defensa Civil bajo la dirección militar. Se implementó el Plan Lazo, ideado por el general Alberto Ruiz Novoa para la pacificación del país, con su componente psicológico representado en la ejecución de tareas de acción cívica militar. Esa autoría le ganó la confianza para ser nombrado ministro de Guerra, aun sin ser afiliado al

¹¹⁹ FLÓREZ MARÍA, El Espectador, 12 de septiembre de 2015, Las Farc no son terroristas ni narcos: Fiscalía. En apartes de su contenido expresa que la Fiscalía se apartó de la mayoría de los análisis, y fue en el de las razones que motivaron el surgimiento de las FARC, en 1965. Entrevistas realizadas por el periodista Carlos Arango en 1983 a Jacobo Arenas, al Mayor Lister y a Tirofijo, tres de los fundadores de esa organización, le bastaron a la entidad para concluir que “su origen se encontró en el desarrollo de la violencia bipartidista y no en el problema de la tenencia de la tierra, como equivocadamente se ha afirmado por parte de algunos”. Una conclusión que contradice informes del calado del ¡Basta ya!, según los cuales los primeros destacamentos guerrilleros tenían entre sus principales reivindicaciones la lucha por la tierra, tal como quedó consignado en el Programa Agrario de los Guerrilleros, de 1964.

¹²⁰ CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (2016), Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013), CNMH-IEPRI, Bogotá, pág. 84.

Partido Conservador, según expresión del propio presidente Valencia en entrevista al diario *El Tiempo*,¹²¹ hasta que llegó la desconfianza por la presunta incidencia de un sector izquierdista con el que Alberto Zalamea indispuso a Ruiz contra el presidente preparándolo para asumir el poder. El retiro de Ruíz Novoa terminó motivado por la renuncia del general Gabriel Reveiz Pizarro al comando del Ejército por la política beligerante de Ruíz, ante lo cual el presidente Valencia le aceptó renuncia y destinó a Reveiz como ministro de Guerra.

El propio presidente Valencia consideró que la adopción del Plan Lazo, de acción combinada entre la actividad militar y la ayuda civil a la población, había sido factor de éxito en la pacificación del país mediante un cambio de la táctica militar, porque su experiencia como cazador le enseñaba que si ubicada la presa, mientras se consultaba la acción por ejecutar, esta ya no estaría disponible. En su entrevista al diario *El Tiempo*¹²² señaló:

Entonces opté por cambiar la táctica en el sentido de responsabilizar aún más a los comandantes locales de lo que ya estaban, pero dándole plena autonomía de decisión sobre el terreno, sin necesidad de consulta, naturalmente dentro de un plan general de orientación, en el sentido primordial de que se mantuviera el rumbo y la dirección general de las operaciones, pero con mucha movilidad para las jefaturas locales.

En 1965 el Presidente fue investido como suprema autoridad administrativa responsable de la defensa nacional, con funciones de decretar la movilización y desmovilización nacional y de determinar en ellas las funciones de entidades públicas y

¹²¹ EL TIEMPO, Tormentoso retiro del General Ruíz Novoa, www.el-tiempo.com, edición del 24 de agosto de 1997.

¹²² *Ibíd.*

particulares, además de presidir el Consejo Superior de Defensa Nacional, integrado por los ministros de Defensa, Gobierno, Relaciones Exteriores, Justicia, Hacienda, Trabajo, Comunicaciones y Obras Públicas, por el comandante general de las Fuerzas Militares y el jefe de Estado Mayor Conjunto.

El surgimiento de los grupos guerrilleros obligó al Estado a declarar turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, y a emitir el Decreto Legislativo 3398 del 24 de diciembre de 1965¹²³ con su artículo 25 y 33 sobre la defensa civil con una vigencia transitoria:

ARTÍCULO 25.-Todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad.

ARTÍCULO 33. Los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Decreto-ley 1699 de 1964, quedan incorporados dentro de las disposiciones referentes a la defensa nacional. Cuando los hechos a que se refieren los citados artículos del Decreto-ley 1699 de 1964, fueren cometidos por militares, las penas se aumentarán hasta el doble.

PARÁGRAFO 1o. Podrá prescindirse de aplicar las sanciones establecidas en este artículo cuando aparezca comprobado que el infractor es persona de reconocida honorabilidad, y sus antecedentes, forma de vida y hábitos de trabajo, den al Juez la convicción de que no ha tenido propósito de violar las normas del presente Decreto, o cuando espontáneamente haya entregado a la autoridad los elementos de que trata este artículo.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno determinará las armas que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

¹²³ DECRETO LEGISLATIVO 3398 DE 1965, Red jurista, Avance jurídico Casa Editorial Ltda,https://www.redjurista.com/Documents/decreto_3398_de_1965_poder_ejecutivo.aspx#/

PARAGRAFO 3o. El Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los Comandos autorizados podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968 y los artículos 25 y 33 del referido decreto legislativo, fue fundamento legal para la creación de “grupos de autodefensa”¹²⁴ con fines de auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros con permisos para el porte y tenencia de armas¹²⁵.

Carlos Lleras Restrepo gobernó entre 1966 y 1970 con un programa de “Transformación nacional” mediante el cual impulsó la reforma agraria, realizó la reforma constitucional de 1968, restableció relaciones con la Unión Soviética —suspendidas desde 1948— y creó el Pacto Andino. Sin embargo, fue este el momento en el que se formalizó la conformación de los grupos subversivos FARC, ELN y EPL.

¹²⁴ Cfr. DECRETO LEGISLATIVO 3398 DE 24 DE DICIEMBRE DE 1965; LEY 48 DE 16 DE DICIEMBRE DE 1968; SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR EL 17 DE MARZO DE 1998; e INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EJECUCIONES SUMARIAS O ARBITRARIAS SOBRE LA VISITA A COLOMBIA REALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 1989, E/CN.4/1990/22/ADD.1 DE 24 DE ENERO DE 1990.

¹²⁵ Cfr. SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL NACIONAL EL 14 DE ABRIL DE 1998; SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR EL 17 DE MARZO DE 1998; SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO REGIONAL DE CÚCUTA EL 28 DE MAYO DE 1997; e INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EJECUCIONES SUMARIAS O ARBITRARIAS SOBRE LA VISITA A COLOMBIA REALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 1989, E/CN.4/1990/22/ADD.1 DE 24 DE ENERO DE 1990.

En el periodo se mantuvo la autonomía militar en el manejo del orden público y en 1968 se expidió la Ley 48 sobre Defensa Nacional. La organización del Consejo Superior de Defensa Nacional fue ratificada en 1968¹²⁶, correspondiéndole entonces al comandante general de las Fuerzas Militares¹²⁷ las misiones de preparar la apreciación estratégica nacional-APEN (documento primario), el plan de guerra y el plan de defensa y seguridad interior (documentos secundarios). El Decreto 3398 y la Ley 48 dieron lugar al fundamento legal para la creación de grupos de autodefensa, pues el decreto en sus considerandos estableció:

Que es perentoria obligación del Estado velar por el bienestar y la protección de los asociados brindándoles el clima de confianza que emana del cumplimiento de las medidas de seguridad nacional;

Que la movilización y la defensa civil, por su importancia y trascendencia, deben ser ampliamente conocidas por la población colombiana, ya que tales aspectos competen a la Nación entera, y no son de incumbencia exclusiva de las Fuerzas Armadas.

De igual manera, la Ley 48 sobre la defensa civil dispuso:

ARTÍCULO 24.-La participación en la defensa civil es permanente y obligatoria para todos los habitantes del país.

ARTÍCULO 25.-Todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad.

ARTICULO 26.-Para los fines de la defensa civil, el Gobierno contará con una Dirección Nacional de Defensa Civil. El Director Nacional

¹²⁶ LEY 48 DE 1968.

¹²⁷ En el Decreto ley 2565 de 1968 el artículo 53 manifiesta que las funciones del Consejo Superior de Defensa Nacional son las señaladas en el artículo 17 del Decreto 3398 de 1965.

de la Defensa Civil será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

De acuerdo con el diario *El Tiempo*¹²⁸, en su gobierno se retiró al general Guillermo Pinzón Caicedo, quien acababa de recibir la Orden Piana máxima del pontificado romano, porque en una editorial de la revista del Ejército, del cual ejercía como comandante, señaló la inconveniencia de la intromisión de otros ministerios y agencias del Estado en el manejo del presupuesto de defensa.

Durante el gobierno del “Frente social” presidido por Misael Pastrana, desde 1970 hasta 1974, se fortaleció la presencia de los grupos guerrilleros y apareció además el Movimiento 19 de Abril (M-19), pretextado con el argumento de unas elecciones manipuladas en contra del candidato perdedor, el general Gustavo Rojas Pinilla. El 7 de octubre de 1971 las FARC realizaron un atentado con explosivos al general Álvaro Valencia Tovar.

La primera organización en emplear el secuestro para financiar su guerra fue el ELN, quien raptó al exministro Fernando Londoño y Londoño el 9 de julio de 1970, cuando se dirigía a su finca, ubicada a 30 kilómetros de Manizales. Tras cinco días de cautiverio, Londoño escribió al presidente Lleras una carta pidiéndole el retiro de la Fuerza Pública de la zona y abstenerse de intentar un rescate militar, con el argumento de la prevalencia de su derecho a la vida, cosa que se cumplió e hizo posible su recate mediante pago económico¹²⁹.

¹²⁸ EL TIEMPO, Otros que hablaron duro y se fueron, www.eltiempo.com, edición del 27 de julio de 1997.

¹²⁹ HEYDICK PUYANA Ana Caterina (2004), Si al acuerdo humanitario. Razones históricas, políticas y jurídicas para realizarlo, Bogotá, Ediciones La Silueta, pág. 174-176.

En 1971 el presidente volvió a ser investido como comandante en jefe de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con las funciones de presidir el Consejo Superior de Defensa Nacional y de aprobar los documentos primarios de seguridad nacional que debían ser preparados por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Defensa Nacional (CSDN), ejercida por el jefe del Estado Mayor Conjunto, quien además cumplía funciones de ejecutar las disposiciones del consejo y de coordinación y control de las tareas impuestas a los frentes del poder¹³⁰, es decir, la milicia definía los objetivos nacionales. Además, en apoyo a las Fuerzas Militares en su gobierno se adquirieron dieciséis aviones Mirage y dos submarinos con el propósito de reforzar la capacidad de confrontación externa.

Mediante el Acuerdo N.º 1 de 1975, firmado por el presidente López Michelsen, se fijó que el Consejo Superior de Defensa Nacional debía elaborar los documentos primarios, mientras el ministro de Defensa debía elaborar los documentos secundarios, es decir, la guía de planeamiento estratégico, el plan de capacidades estratégicas, el plan de desarrollo sectorial, el plan de guerra, el programa de acción conjunta, el plan de seguridad ciudadana y el presupuesto de seguridad y defensa, quitándoles a los militares parte del poder con el cual se interfundaba la política al elaborar también los documentos primarios como, por ejemplo, los objetivos nacionales, los objetivos estratégicos de largo plazo, los objetivos transitorios, la apreciación política estratégica de seguridad y defensa y la estrategia de seguridad y defensa, entre otros.

¹³⁰ El Decreto 2335 de 9 de diciembre de 1971, en el artículo 13, señala que las funciones del Consejo Superior de Defensa Nacional son las señaladas en el Decreto ley 3398 de 1965.

El 14 de enero de 1975 el ELN realizó una emboscada en San Pablo (Bolívar) a tropas del Ejército en la cual murieron catorce soldados. Esto ocasionó su reacción y tendió un cerco militar sobre el ELN en la serranía de San Lucas, el cual el gobierno de Alfonso López Michelsen dio la orden de levantar con el argumento de que los guerrilleros se iban a rendir, orden a la que el general Álvaro Valencia Tovar se opuso recomendando al presidente buscar su rendición, pero este hizo caso omiso y el ELN escapó del encierro. El 22 de mayo de 1975 apareció en el diario *Occidente* de Cali la versión según la cual el general Valencia preparaba un golpe de Estado, razón por la que el presidente lo citó y le pidió que entregara la comandancia del Ejército, hecho al cual el general se negó y el presidente ordenó su retiro en compañía del general Gabriel Puyana García, el coronel Valentín Jiménez y, dos años más tarde, concluyó con el retiro forzado del general José Joaquín Matallana. El 9 de septiembre de 1975 el ELN realizó un atentado terrorista en el cual resultó muerto el general Ramón Arturo Rincón Quiñonez, entonces comandante de la Brigada 13 con sede en Bogotá.

El presidente Julio Cesar Turbay Ayala, entre 1978 y 1982, con el presupuesto de un proyecto que denominó “Plan Nacional de Integración”, un mes después de su posesión expidió el Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978 o “Estatuto de Seguridad”, con el cual se incrementaron las penas por delitos de secuestro, delitos políticos y punibles relacionados con el terrorismo; otorgó facultades a la Justicia Penal Militar para juzgar a civiles por delitos contra la seguridad del Estado, conexos, y relacionados con el narcotráfico; incrementó las penas por porte ilegal de armas, municiones y explosivos; limitó la información relacionada con la situación de orden público, el cese de actividades,

los paros o las huelgas ilegales, o noticias que “inciten al delito o hagan su apología”¹³¹.

En 1978 se diseñó el plan de guerra de las FARC, aprobado en la VII Conferencia, en el que se propuso la disposición de sus fuerzas al concentrar la mitad de los frentes guerrilleros sobre la Cordillera Oriental, de manera que formaran una tenaza militar sobre Bogotá y dispersaran el resto por todo el país en busca del cercamiento de las capitales de departamento y la distracción de la Fuerza Pública (CNMH, 2014a, páginas 115-117). Mientras tanto, el M-19 incursionó en el Cantón Militar Norte el 31 de diciembre de 1978 y robó miles de armas, recuperadas en su mayoría por las Fuerzas Militares.

Luego, el 27 de febrero de 1980, el Comando Jorge Marcos Zambrano, con dieciséis guerrilleros, se tomó la embajada de la República Dominicana con los embajadores de Austria, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Egipto, Guatemala, Haití, México, República Dominicana, Suiza, la Santa Sede, Uruguay, Venezuela y los encargados de negocios de Bolivia y Paraguay; acción que terminó tras sesenta días de negociaciones, el 25 de abril, de manera negociada ante la orden del presidente Julio César Turbay Ayala de no desarrollar acciones militares para el rescate, con la devolución de los rehenes, el canje de veintiún prisioneros subversivos de los trescientos que el M-19 solicitó excarcelar y el viaje a Cuba del grupo secuestrador. Sin embargo, en febrero de 1981 las relaciones con Cuba se rompieron con ocasión de su participación en el entrenamiento táctico y el envío en febrero de sesenta guerrilleros al Chocó y en marzo de ochenta y cinco a Nariño, grupos rápidamente desvertebrados por las Fuerzas Militares.

¹³¹ DECRETO 1923 de 1978.

En el periodo también se produjo el paso de las mafias de la marihuana al de los carteles de las drogas con una poderosa capacidad económica capaz de corromper las estructuras de gobierno. Asimismo, se produjo la “polarización de la sociedad” a favor y en contra de las acciones militares¹³², pero a pesar de esto se logró colocar en la cárcel a gran cantidad de subversivos, especialmente del M-19. No obstante, dado que los subversivos ganaron simpatía frente a la población, Turbay jugó la carta política de una amnistía para delitos políticos, excluyendo el secuestro, la extorsión y el homicidio fuera de combate, mas no logró acuerdos con ningún grupo y antes de finalizar su mandato, el 9 de junio de 1982, levantó el estado de sitio y dejó sin vigencia el Estatuto de Seguridad.

El gobierno del presidente Belisario Betancur, entre 1982 y 1986, intentó de nuevo la solución política. Aunque puede decirse que su gobierno se caracterizó por la relación tirante con los militares, también debe señalarse que en él se creó la Fuerza Elite de Contra-guerrillas y se inició la incorporación de soldados profesionales.

En 1982 la ONU solicitó a Colombia quinientos dos hombres para servir en la misión de seguridad al cuartel general de la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores (MFO) que verifica el cumplimiento de los tratados entre Egipto e Israel, cuyas fuerzas no se agreden pero en cuya área hay en la actualidad presencia de facciones del Estado Islámico Ansar Beit al Maqdis (simpatizantes de Jerusalén), seguidores de los Hermanos Musulmanes, células de Al Qaeda, contrabandistas y criminales en el desierto¹³³.

¹³² LEAL BUITRAGO, Francisco (1994): *El oficio de la guerra*, TM Editores, pág. 56.

¹³³ CARVAJAL RESTREPO Estefanía, (2016), El Colombiano, ¿Por qué Colombia tiene un batallón en el Medio Oriente?, 27-May-2016, www.elcolombiano.com

En el inicio de su gobierno, las FARC realizaron la Séptima Conferencia Nacional Guerrillera, en la cual el ideólogo Jacobo Arenas expresó que serían un “movimiento auténticamente ofensivo” y dio a conocer su Plan Estratégico Político Militar con los siguientes objetivos: 1) ubicar el 50 % de sus integrantes en la Cordillera Oriental; 2) rodear a Bogotá; 3) vencer al gobierno en ocho años; 4) construir un gobierno provisional.

A partir de 1982, con el auspicio del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista (PC), bajo la dirección de Manuel Cepeda, se dispone que los militantes del partido, organizados en estructuras clandestinas, cumplirían tareas militares de apoyo logístico y de inteligencia a la organización armada. Domínguez Cancelado¹³⁴ (2011) lo relata en su entrevista con “Carlos Cuervo”, antiguo militante del PC en la ciudad de Palmira y exmiembro del Comité Ejecutivo Regional del Valle y Cauca:

Los Dirigentes de las FARC, particularmente los comunistas encabezados por Jacobo Arenas, encontraban tropiezos en el Partido, de manera muy especial en el regional del Valle para el desarrollo de su trabajo estrictamente militar. Ellos llegaban a considerar que el partido debía corresponder a la estructura militar del movimiento armado. [...] Es decir que los Dirigentes del Partido que estaban en la vida legal deberían pues, recibir órdenes y cumplir los mandatos que ordenaba la dirección de las FARC. En ese sentido tenían suma resistencia en el regional del Valle y Cauca [...]. Primero entonces, se empezó a crear una cosa que se llamó el trabajo paralelo. El trabajo paralelo era entre el Partido y el trabajo de las FARC en las células del Partido, aprovechando el fenómeno de la solidaridad, sobre todo del proletariado con el campesinado, entonces

¹³⁴ DOMÍNGUEZ CANCELADO José Fernelly, 2011, Las Farc-ep: de la guerra de guerrillas al control territorial, Universidad del Valle, <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3805/4/CB-0450141.pdf>

se empezó a crear la idea de que la solidaridad tenía que llegar a extremos en que había que sostener un compromiso absoluto con el movimiento armado. Esa discusión se empezaba a dar en las células del Partido manejado de tal forma que los militantes del Partido los sacaban e iban haciendo, iban creando células enteras con dirección del movimiento armado. Es decir haciendo el trabajo, prestando la información, llevando elementos, transportando elementos, haciendo todo el trabajo que requería el movimiento armado. Pero ese trabajo era secreto para la Dirección de Partido, es decir, aunque el militante era militante comunista obedecía a una dirección militar. Repito, el militante era un militante comunista, pero llegaba a tal convencimiento en materia de que había que colaborar, que había que prestar la solidaridad efectiva con el movimiento armado, que llegaba a ser puesto a órdenes estrictamente de la dirección militar.

Esta participación del Partido Comunista fue siempre desmentida por ambas organizaciones, la política y la armada. Sin embargo, se confirma y explica, además, el decaimiento progresivo de la autoridad de los agentes políticos frente a los militares, de modo que la organización visible del Partido Comunista no era más que la representación política del grupo armado, con la consideración de que, al ser este subordinado a lo militar, teníamos un grupo armado con partido político. Así, mientras el presidente buscaba el diálogo y el reconocimiento político de la subversión, esta le daba la espalda fortaleciendo su organización militar, de tal forma que entraba en pleno rigor la estrategia del empleo de todas las formas de lucha.

Los impuestos y la extorsión a la producción de la marihuana y al narcotráfico, a la participación en los contratos estatales, a la realización de obras, a las actividades agrícolas y pecuarias, el secuestro, la participación en el contrabando, etc., facilitaron el enriquecimiento de la organización y con él la facilidad para

adquirir armamento y efectuar el control territorial, puesto que si tales ilegalidades se producían con beneficio para la organización, recibían cooperación y no represión —como lo haría el Estado—, aspecto favorablemente aceptado por los ejecutores que se sentían amparados con impunidad.

Para la misma época, con la formación de las autodefensas campesinas la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam) decidió hacer un frente armado ofensivo a las FARC ante el agotamiento y el acoso que les ocasionaban las prácticas extorsivas. Ugarriza y Pabón (2017)¹³⁵ describen cómo la autodefensa pasó a ser criminalizada por el Partido Comunista al permitir la participación de la organización Muerte a Secuestradores (MAS), en una forma de participación de combate jurídico en defensa de las FARC:

Durante 1982, las organizaciones de autodefensa como la entonces legal Acdegam, al ser asociadas con el MAS, empezaron a adquirir connotación negativa en el imaginario social. En julio, el Partido Comunista, en carta al presidente, exigía “la desactivación del MAS” y un debate sobre “el papel de las FFAA”.

A pesar del panorama, Belisario Betancur reconoció a las guerrillas su carácter político y presentó el Plan Nacional de Rehabilitación y la amnistía por delitos políticos a las guerrillas, con la cual se permitía la liberación de guerrilleros presos¹³⁶. Antes de dar inicio a conversaciones creó la Comisión de Paz¹³⁷ con cuarenta integrantes de la sociedad, introdujo mediante Decreto

¹³⁵ UGARRIZA J. E. y PABÓN AYALA N., 2017. Militares y guerrillas. La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958-2016. Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, pág. 156.

¹³⁶ LEY 35 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1982.

¹³⁷ DECRETO 2711 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1982.

240 del 4 de febrero de 1983 la figura del alto comisionado para la Paz con cinco integrantes, creó la Consejería para Asuntos de Paz mediante el Decreto 488 del 23 de febrero de 1983 y el 29 de mayo de 1984 creó la Comisión Nacional de Verificación con cincuenta y tres integrantes.

Posteriormente, en 1984 de nuevo se asignan funciones al comandante general de las Fuerzas Militares mediante el Decreto 2218 del 7 de septiembre, encargándosele de preparar los documentos primarios y secundarios y de ejercer el mando y la conducción estratégica¹³⁸.

Las conversaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que representaba a los grupos guerrilleros FARC, M-19, ELN, EPL, Quintín Lame y PRT, pudo lograr la firma de un cese al fuego con las FARC en Uribe (Meta) el 28 de marzo de 1984, en lo que fue denominado “Acuerdos de la Uribe”, y se logró que las FARC hicieran pública condena al secuestro, la extorsión y el terrorismo. No se incluyó la entrega de armas y plantearon la posibilidad de integrarse en la política, idea de la que posteriormente surgió el movimiento político Unión Patriótica, el cual celebró su Primer Congreso de la UP el 14 de noviembre de 1985 en el Teatro Jorge E. Gaitán. Las FARC hizo el doble juego de impulsar el movimiento político y realizar el desdoblamiento de su agrupación armada pasando de veintisiete a cuarenta y ocho frentes.

Cuando los narcotraficantes accedieron al Congreso de la República con el propósito de participar de forma directa en las discusiones y negar su extradición a los Estados Unidos, y, de otra parte, se visualizó su participación en la vida económica

¹³⁸ DECRETO 2218, DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1984.

y cultural del país con la intervención en actividades industriales, deportivas y sociales, algunos políticos hicieron público su malestar y declararon la guerra a sus organizaciones, de modo que Pablo Escobar Gaviria, entonces congresista, fue obligado a abandonar su curul y el país. En el terreno se logró el 12 de octubre de 1984 la ocupación del complejo cocalero de Tranquilandia, ubicado en los llanos del Yarí, en el cual se fabricaban cerca de 3,5 toneladas de cocaína por mes, y contaba para su operación con tres avionetas, dos helicópteros, centro médico, droguería, corral de animales, comida y cerveza en cantidades extraordinarias, siendo el más duro golpe a las organizaciones narcotraficantes, las cuales huyeron hacia Panamá y otras naciones centroamericanas.

El narcotráfico incidió en el incremento de la violencia, participó en el exterminio de la UP y en el asesinato dos senadores, dos representantes a la Cámara, cinco diputados, cuarenta y cinco concejales y alcaldes y más de quinientos dirigentes, además del asesinato el 30 de abril de 1984 del entonces ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla, hecho que señaló el inicio del terrorismo, ante lo cual el Gobierno implantó la extradición de presos por narcotráfico hacia los Estados Unidos. A partir de 1985 se hizo notorio que muchos “grupos de autodefensa” cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados “paramilitares”. Estos se desarrollaron, primero, en la región del Magdalena Medio, y se fueron extendiendo luego a otras regiones del país¹³⁹.

¹³⁹ Cfr. DECRETO 0180 DE 27 DE ENERO DE 1988, por el cual “se complementan algunas normas del código penal y se dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público”; DECRETO 0815 DE 19 DE ABRIL DE 1989; DECRETO 1194 DE 8 DE JUNIO DE 1989, por el cual “se establecían nuevas modalidades delictivas relacionadas con actividades de grupos armados, comúnmente denominados

El dinero de los capos de la droga en Centroamérica sirvió para adquirir armas a los contras en la revolución nicaragüense y financiaba con impuestos al dictador panameño Manuel Antonio Noriega, puesto bajo sospecha por el gobierno de Ronald Reagan, lo que obligó a este a realizar un decomiso gigantesco de éter en Colón y, posteriormente, a dismantelar un laboratorio de cocaína en la serranía de El Sapo, ubicada en el Darién sobre el océano Pacífico, con el que se estaba supliendo la producción que se hacía en Tranquilandia. Con el objeto de demostrar que Panamá cumplía sus compromisos de lucha antidroga, obligó a los narcos a entablar negociaciones con emisarios del Gobierno colombiano para entregarse a cambio de ser juzgados en Colombia sin posibilidad de extradición, y propuso desmontar el negocio ilícito, repatriar sus capitales, retirarse de la política y colaborar con el Gobierno en la erradicación del consumo de droga, propuesta que no fue aceptada por los políticos que la consideraron inadmisibles porque apenas hacía un mes habían asesinado a Lara Bonilla.¹⁴⁰

También Belisario Betancur logró acercamientos con el M-19, ADO y EPL, quienes negociaron conjuntamente en Corinto (Cauca), en El Hobo (Huila) y Medellín (Antioquia), logrando un acuerdo de cese al fuego el 24 de agosto de 1984. El M-19 propuso un diálogo nacional para la creación del nuevo país en

escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada"; SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR EL 17 DE MARZO DE 1998; e INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EJECUCIONES SUMARIAS O ARBITRARIAS SOBRE LA VISITA A COLOMBIA REALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DE 1989, E/CN.4/1990/22/Add.1 de 24 de enero de 1990.

¹⁴⁰ CARDONA Jorge, El Espectador, El comienzo de un huracán de violencia llamado extradición, <http://www.elspectador.com/noticias/judicial/el-comienzo-de-un-huracan-de-violencia-llamado-extradicion-articulo-708730>

el que querían vivir, y el M-19 propuso una asamblea nacional constituyente, pero los acuerdos se rompieron por ataques en diciembre de 1984 a los campamentos del M-19 en Yarumales, Corinto (Cauca) y Los Robles, Miranda (Cauca), y el atentado a su vocero Antonio Navarro Wolf el 23 de mayo de 1985. El 23 de octubre de 1985 las FARC realizaron un atentado terrorista en Bogotá contra el general Rafael Zamudio Molina, comandante general de las FFMM.

En su gobierno se creó la jurisdicción especial de orden público y se adoptó el procedimiento sumario, al otorgar facultades a inspectores de policía y rebajar las penas a los delatores¹⁴¹; proporcionó a la Justicia Penal Militar al juzgamiento de civiles por delitos de narcotráfico, y la competencia sobre casos de delitos políticos¹⁴². Recibió autorización para conceder indultos por delitos políticos y conexos¹⁴³ y, sin embargo, el 6 de noviembre de 1985 se produjo, por parte del M-19, la toma del Palacio de Justicia, en el que murieron once de los más prestigiosos juristas colombianos. El mayor aporte para la paz fue, sin embargo, que se inició el deslinde de las acciones militares legítimas de las violatorias de los derechos humanos.

En una entrevista de la *Revista Semana* al general (r) Landazábal¹⁴⁴, el periodista Antonio Caballero le preguntó si las Fuerzas Militares estaban interesadas en la paz, y este respondió:

¡Cómo no van a estar interesadas las FF. AA. en el proceso de paz! Si para respaldarlo crearon, a partir del 7 de agosto de 1982, los comandos de desarrollo para el Vichada, el Guainía, el Choco, el

¹⁴¹ LEY 2 DEL 1 DE ENERO DE 1983.

¹⁴² Decretos legislativos 666, 667, 668, 669 Y 670 de 1983.

¹⁴³ LEY 49 DEL 4 DE JUNIO DE 1985.

¹⁴⁴ CABALLERO ANTONIO entrevista a Landazábal. Edición del 10 de junio de 1986.

Magdalena Medio, Caquetá, Putumayo, Urabá. Comandos de desarrollo, montados sobre la base de un batallón de ingenieros, para hacer puestos de salud, escuelas, vivienda campesina, vías de penetración, exclusivamente para apoyar el proceso de paz en las regiones afectadas. Desgraciadamente sólo se hicieron dos, porque una vez hechos los planes, siempre nos hemos encontrado con que la colaboración de otros sectores del Estado se paraliza porque no hay dinero.

El presidente Belisario Betancur indujo al retiro al general Fernando Landazábal Reyes¹⁴⁵ porque había escrito un documento de diecisiete puntos¹⁴⁶ en el que hacía fuertes críticas a posibles diálogos de paz con la guerrilla y anunciaba que las Fuerzas Armadas no aceptarían el cese de fuego, la tregua o la desmilitarización, razón por la cual el presidente convocó al alto mando militar y a sus ministros, ante los cuales señaló que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, mensaje que entendió el general y presentó su renuncia el 18 de enero de 1984.

Durante el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas debió ponerse en práctica la extradición autorizada por la Ley 27 de 1980, tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en mayo de 1985. Entre 1986 y 1990 se creó la Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación Nacional y el Congreso dio al presidente facultad para conceder indultos y expedir autos inhibitorios¹⁴⁷, en busca de reactivar las negociaciones con las FARC y realizar acercamientos con el M-19, el EPL, el Movimiento Quintín Lame y el MRT.

¹⁴⁵ EL TIEMPO, Otros que hablaron duro y se fueron, www.eltiempo.com, edición del 27 de julio de 1997.

¹⁴⁶ EL ESPECTADOR, 9 de febrero de 1984.

¹⁴⁷ LEY 77 de 1989, reglamentada por el Decreto 206 del 22 de enero de 1990.

Con el programa “Iniciativa para la paz” desmovilizó al M-19 el 9 de marzo de 1990 y al EPL el 16 de mayo del mismo año.

En el segundo semestre de 1987 las fuerzas de autodefensa urbana, bajo el liderazgo del jefe paramilitar Carlos Castaño, decidieron atacar a los que para ellos eran los jefes reales de las organizaciones en la guerra o sus ideólogos, de tal manera que en el lapso asesinaron ocho profesores y trece estudiantes universitarios, especialmente de la Universidad de Antioquia, a su vez miembros del Comité de Derechos Humanos, de la Unión Patriótica y del Partido Comunista de Colombia¹⁴⁸.

Con respecto a los grupos delincuenciales paramilitares, durante ese gobierno se adoptaron medidas que incluyeron, entre otras acciones, el aumento de penas de cárcel de veinte a treinta años para quienes promovieran, financiaran, organizaran, dirigieran, fomentaran o ejecutaran actos tendientes a obtener la formación o los ingresos de personas o grupos armados de los denominados comúnmente “escuadrones de la muerte”, “bandas de sicarios” o de “justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares:

El 27 de enero de 1988 Colombia emitió el Decreto Legislativo 0180. En este decreto se tipificó, inter alia, la pertenencia, promoción y dirección de grupos de sicarios, así como la fabricación o tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional. Posteriormente, este decreto fue elevado a legislación permanente mediante el Decreto 2266 de 1991¹⁴⁹.

¹⁴⁸ EL ESPECTADOR, Antioquia bajo el yugo paramilitar, 1987, http://www.elespectador.com/sites/default/files/static_specials/87/1987/index.html

¹⁴⁹ Cfr. DECRETO 0180 DE 27 DE ENERO DE 1988, por el cual “se complementan algunas normas del código penal y se dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público”; y DECRETO 2266 DE 4 DE OCTUBRE DE 1991.

El 19 de abril de 1989 se emitió el Decreto 0815, mediante el cual se suspendió la vigencia del parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo 3398 de 1965, el cual facultaba al Ministerio de Defensa Nacional para autorizar a los particulares el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas (supra párr. 125.1). Posteriormente, mediante sentencia de 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró “inexequible” el referido parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo 3398 de 1965¹⁵⁰.

El 8 de junio de 1989 el Estado emitió el Decreto 1194 “por el cual se adiciona el Decreto legislativo 0180 de 1988, para sancionar nuevas modalidades delictivas, por requerirlo el restablecimiento del orden público”. En este decreto se tipificó, inter alia, la pertenencia, instrucción, entrenamiento, promoción, financiación, organización, dirección, fomento y ejecución de “grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares”. Asimismo, se estipuló como agravante de las anteriores conductas el que fueran “cometidas por miembros activos o retirados de la Fuerzas Militares o de Policía o de organismos de seguridad del Estado”. Posteriormente, este decreto fue elevado a legislación permanente mediante el Decreto 2266 emitido el 4 de octubre de 1991¹⁵¹.

Virgilio Barco inició la creación de la primera brigada móvil del Ejército, pero aun así, en el periodo hubo aumento del parami-

¹⁵⁰ Cfr. DECRETO 0815 DE 19 DE ABRIL DE 1989; Y SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL 25 DE MAYO DE 1989.

¹⁵¹ Cfr. DECRETO 1194 DE 8 DE JUNIO DE 1989, por el cual “se establecían nuevas modalidades delictivas relacionadas con actividades de grupos armados, comúnmente denominados escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de justicia privada”; y DECRETO 2266 DE 4 DE OCTUBRE DE 1991, por el cual “se adoptan como legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del Estado de Sitio”.

litarismo y del narcotráfico. En octubre de 1988 fueron asesinados el dirigente comunista Jaime Pardo Leal y el procurador general de la nación Carlos Mauro Hoyos; el 22 de noviembre se produjo un atentado terrorista contra el general Manuel Jaime Guerrero Paz por el grupo Ricardo Franco, disidente de las FARC, y posteriormente fue secuestrado el candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, por lo que el Gobierno declaró el estado de sitio y promulgó el llamado “Estatuto en Defensa de la Democracia”¹⁵².

Ante el incremento de masacres de civiles se expedieron varios decretos legislativos en materia penal y de procedimiento penal, se creó una Comisión Asesora y Coordinadora de las Acciones contra los Escuadrones de la Muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o de justicia privada, también denominados “paramilitares”¹⁵³, también se creó el Cuerpo Especial Armado de la Policía contra los mismos grupos¹⁵⁴, y además se suspendió la vigencia del artículo 25 del Decreto 3398 de 1965, por el cual se autorizaba la utilización de personal civil en actividades y trabajos para el restablecimiento de la normalidad, el cual se interpretó como una autorización legal para organizar grupos civiles armados¹⁵⁵. Las conductas relacionadas con los delitos políticos y con el narcotráfico pasaron al conocimiento de la Jurisdicción de Orden Público y de los jueces especializados¹⁵⁶. Se dio también la salida del general Rafael Zamudio Molina por diferencias conceptuales frente a la guerra sucia y al paramilitarismo.

¹⁵² DECRETO 180 DEL 27 DE ENERO DE 1988.

¹⁵³ DECRETO 813 DE 1989.

¹⁵⁴ DECRETO 814 DE 1989.

¹⁵⁵ DECRETO 815 DE 1989.

¹⁵⁶ LEY 2 DE 1984, cuya vigencia fue prorrogada por Decreto Legislativo 2026 de 1989.

Durante ese gobierno se produjeron acontecimientos violentos tales como el ataque de las FARC a un convoy militar en Puerto Rico (Caquetá), el 16 de junio de 1987, en el que mataron veintiséis militares, la bomba que destruyó el edificio del DAS, la explosión de un avión de Avianca en pleno vuelo, el asesinato del gobernador y del comandante de la Policía de Antioquia y el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, el 19 de agosto de 1989. El presidente revivió entonces el tratado de extradición con Estados Unidos que se encontraba suspendido legalmente y muchos miembros de los carteles de la droga fueron encarcelados y sus propiedades confiscadas, ofensiva que condujo a la muerte del reconocido narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre de 1989.

El 9 de marzo de 1990, de acuerdo con la Ley 77 de 1989, se desmovilizó el M-19 bajo el mando de Carlos Pizarro Leongómez; novecientos combatientes entregaron doscientas ochenta armas y decidieron entrar en la vida política. En ese mismo mes fue asesinado Bernardo Jaramillo Ossa, el candidato a la presidencia por la Unión Patriótica, y luego en abril el candidato por el M-19, Carlos Pizarro Leongómez. A pesar de la muerte de su líder, el M-19 participó en las elecciones, en las que obtuvo tres alcaldías y un escaño en la Cámara de Representantes.

En referencia a la situación externa se presentó el incidente de la corbeta Caldas que por poco nos lleva a la guerra con Venezuela. Asimismo, en julio de 1987 se presentaron varios incidentes entre buques de la Armada colombiana y pesqueros venezolanos en aguas de la zona económica colombiana. Sin embargo, el 9 de agosto se presentó una medición de fuerzas entre las armadas de ambos países, con la Corbeta ARC Caldas de Colombia y la Cañonera Libertad de Venezuela, ambas reclamando encontrarse en aguas propias y solicitando el retiro

de ellas por su antagonista. El 12 de agosto la situación empezó a agravarse cuando aeronaves venezolanas sobrevolaron la corbeta Caldas mientras otras naves de la armada le cerraron el paso y la obligaron a dirigirse hacia el norte, para luego reclamar la soberanía sobre la zona, a pesar de existir un diferendo no solucionado al que Colombia aspiraba a dar solución por el derecho, el cual resultó a la postre definido por la fuerza en favor de Venezuela¹⁵⁷.

Una vez asumió la presidencia César Gaviria, en 1990, luego de decretarse la autorización de elecciones para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que debía dotar al Estado de los instrumentos jurídicos necesarios para conseguir la paz, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que fueron elegidos en diciembre de ese mismo año entraron a sesionar en febrero de 1991, y en junio entregaron al país una nueva Constitución. En esta se creó la Fiscalía General de la Nación y se implementó el sistema penal acusatorio, así como se impuso limitaciones a la figura de los estados de excepción. Mientras tanto, en el ámbito militar se puso en servicio la primera brigada móvil, se expidió el Estatuto de la Justicia¹⁵⁸ orientado a fortalecer el combate contra la violencia y la impunidad que dio lugar a la conocida “justicia sin rostro”. Se decretaron beneficios de indulto y amnistía por delitos políticos cometidos antes de la promulgación de la Constitución de 1991¹⁵⁹, se estableció el mecanismo de rebaja de penas por confesión de delitos de

¹⁵⁷ REVISTA SEMANA, La verdadera historia, Sección Nación, edición 277, Septiembre 21 de 1987, www.semana.com/nacion/articulo/la-verdadera-historia/9372-3

¹⁵⁸ DECRETO 2790 DE 1990.

¹⁵⁹ DECRETO 1943 DE 12 DE AGOSTO DE 1991.

competencia de los jueces de orden público y especializados¹⁶⁰, así como la reserva de la identidad del testigo por aporte de informaciones para esclarecer los delitos de competencia de estos jueces, a fin de identificar o individualizar sus autores o partícipes. Por medio de la Ley 4 de 1991 también creó el servicio militar obligatorio para bachilleres en la Policía Nacional¹⁶¹, como un mecanismo para fortalecer la acción policial de las administraciones municipales. Se decretó la extinción de la pena y de la acción penal¹⁶². El Gobierno nacional creó un impuesto conocido como “impuesto de guerra”¹⁶³ con el fin de financiar a las Fuerzas Armadas.

Después de promulgada la Constitución Política de 1991, el Gobierno, motivado en las acciones terroristas de las organizaciones guerrilleras y la delincuencia organizada, puso en vigor el estado de conmoción interior¹⁶⁴, se otorgaron facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares¹⁶⁵, lo cual la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada a que “se entienda que las unidades de policía judicial se integran con personal no militar”.

Las guerrillas de las FARC dieron inicio a su actividad estratégica en búsqueda de plantear al Ejército una confrontación militar mediante guerra de movimientos, y el 8 de enero de 1991 la

¹⁶⁰ DECRETO 3030 DE 14 DE DICIEMBRE DE 1990, “por medio del cual se establecen los requisitos para la rebaja de penas por confesión de delitos cometidos hasta el 5 de septiembre de 1990”.

¹⁶¹ LEY 4 de 1991.

¹⁶² DECRETO 213 de 23 de enero de 1991.

¹⁶³ DECRETO 416 de 1991.

¹⁶⁴ DECRETO 1155 DEL 10 DE JULIO DE 1992 y DECRETO 1793 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1992, cuya vigencia fue prorrogada mediante los decretos 261 y 829 de 1993.

¹⁶⁵ DECRETO 810 de 1992.

base militar de Girasoles, ubicada en la serranía de la Macarena (Meta), custodiada por treinta y ocho militares, fue atacada por cuatro frentes guerrilleros y tomada mediante copamiento al agotarse las municiones por parte de las tropas, con un saldo —según video promocional de las propias FARC— de cinco muertos, diecisiete heridos y dieciséis secuestrados¹⁶⁶. El objetivo militar era garantizar el paso de subversivos y material de guerra entre el Meta y la región de Sumapaz.

El 14 de julio de 1991 fue atacada la base militar de Guamuez en Orito (Putumayo), la cual albergaba a veintinueve militares que custodiaban las plantas de Ecopetrol en la zona. Las FARC emplearon trescientos guerrilleros y lograron el copamiento de la base luego de asesinar dieciséis militares, herir a nueve y secuestrar cuatro. Según Jorge Armando Arrieta Méndez (2016), el objetivo militar era el de garantizar el abastecimiento proveniente de su retaguardia estratégica en Caquetá y Putumayo, así como facilitar la movilidad de material de guerra a través de la frontera con Ecuador¹⁶⁷.

En 1992 se creó el Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional (CSSDN) por una fusión del Consejo Nacional de Seguridad (creado por Ley 52 de 1990), el Consejo Superior de Defensa Nacional (creado por Decreto 3398 de 1965) y la Comisión Asesora y Coordinadora de las Acciones contra los Escuadrones de la Muerte (creada por Decreto 813 de 1989), que sería integrado por el ministro de Gobierno, los organismos de

¹⁶⁶ FARC, (21 de marzo de 2011, Ataque a la base militar Girasoles, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=9QC7Znz5NLY>

¹⁶⁷ ARRIETA MÉNDEZ Jorge Armando, (2016), Fracasos operacionales de la Fuerza Pública. El liderazgo promueve la modernización de las Fuerzas Militares, <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14583/3/ArrietaMendezJorgeArmando2016.pdf>

seguridad, el consejero presidencial para la defensa y la seguridad nacional con funciones de oficial como secretario permanente, y a cuyas deliberaciones podían ser invitados el ministro de Relaciones Exteriores o el de Justicia, dependiendo de si el tema trataba sobre asuntos externos o internos, o el procurador u otros funcionarios según la situación en estudio¹⁶⁸.

El 19 de julio de 1994 murió producto de un atentado terrorista en Villavicencio (Meta) el general Carlos Julio Gil Colorado, comandante de la IV División del Ejército. Ante la gravedad de la situación nacional se facultó al comandante general de las Fuerzas Militares y a los comandantes de brigada o sus equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea para suspender la vigencia de los salvoconductos de porte de armas a personas naturales o jurídicas, y al comandante general de las Fuerzas Militares para autorizar la utilización de vehículos blindados, y se dictaron medidas en materia del uso de sistemas de radiocomunicaciones. Sin embargo, la hora del cambio más radical en la historia militar llegó cuando se pasó al retiro al general Oscar Botero Restrepo para nombrar a un ministro de Defensa civil, cargo desempeñado entre 1991 y 1994 por el Dr. Rafael Pardo Rueda, lo cual dio señales inequívocas de la subordinación militar al poder civil.

Ante el aumento excesivo de los casos de secuestro, no solo de parte de los grupos guerrilleros, sino también de la delincuencia común, el Congreso de la República expidió el Estatuto Nacional contra el Secuestro¹⁶⁹ y creó los grupos Unase de la Policía Nacional con el fin de recolectar, analizar, evaluar y difundir la información requerida por la Fiscalía para investigar

¹⁶⁸ DECRETO 2134 de 1992.

¹⁶⁹ LEY 40 DEL 19 DE ENERO 1993, Estatuto contra el secuestro.

y reprimir los delitos de extorsión y secuestro. El artículo 12 de la Ley 40 de 1993 trata sobre la celebración indebida de contratos de seguro, de manera que los familiares o las empresas responsables no pudieran pagar por rescates, con el propósito fundamental de desincentivar esta abominable práctica delictiva. Este artículo fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-542 de 1993¹⁷⁰, la cual en sus argumentos expone:

Se invoca, para prohibir el pago del rescate, el argumento de la primacía del interés general. Pero es menester tener presente que, por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y libremente lo admita. Por tanto, el principio de la primacía del interés general, aceptable en relación con derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad, inherentes a su dignidad.

4a.-El Estado tiene los medios para combatir el delito de secuestro, como los tiene para los demás delitos. Estos medios, en general, implican la investigación y el castigo de los criminales. Y no tienen por qué convertir forzosamente a la víctima o a quienes intenten defenderla, en delincuentes.

5a.-El artículo 12 de la Constitución prohíbe someter a alguien a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y a tales tratos se somete a la víctima de un secuestro y a sus allegados, cuando se les priva de la posibilidad de defenderse por el único medio a su alcance, agravando la situación causada por los secuestradores.

6a.-Quien paga para obtener la libertad de un secuestrado y salvar su vida, lo hace en cumplimiento del deber de solidaridad que la

¹⁷⁰ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-542 de 24 de noviembre de 1993, MP. Jorge Arango Mejía.

Constitución le impone en el artículo 95: "Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas".

Sobre esta decisión tuvo salvamento de voto el magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, quien sobre el contenido de la sentencia, en cuanto a que "los derechos a la vida y a la libertad no pueden sacrificarse por la persona en aras del interés general, salvo cuando la propia persona acepta el sacrificio voluntaria y libremente" (pág. 18), refutó: 1) el interés general debe prevalecer sobre el particular (art. 1 de la Constitución Política); 2) que el interés general no atenta contra el interés particular, porque es el interés de todos; 3) el riesgo (al procedimiento de rescate) no implica renuncia al derecho a la vida sino una actitud mínima exigible de conformidad con el principio de solidaridad; y 4) si la forma de combatir el secuestro es cediendo a las pretensiones del delincuente, entonces el hombre debe ceder ante cualquier peligro eliminando toda acción solidaria. Estas fueron razones que en el futuro de las negociaciones con las bandas criminales tuvieron plena vigencia, aunque no se desconozcan también los beneficios de esas claudicaciones al derecho.

En 1993 se llegó al máximo golpe contra las estructuras criminales del narcotráfico al ser abatido el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, quien se encontraba prófugo de la justicia desde junio de 1992, cuando escapó de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Se había convertido en una vergüenza para el sistema penitenciario porque la cárcel era gobernada por los internos con anuencia del Gobierno.

De nuevo el Gobierno se comprometió a recuperar el monopolio de las armas y el 17 de diciembre de 1993 emitió el Decreto 2535 con el objeto de "fijar normas y requisitos para la tenencia

y el porte de armas, municiones explosivos y sus accesorios y señalar el régimen de los servicios de vigilancia y seguridad privada”, el cual, en el artículo 9, dicta disposiciones sobre porte y tenencia de armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública¹⁷¹.

A finales del Gobierno del presidente Gaviria se expidió, con vigencia de dos años, la Ley 104 de diciembre 30 de 1993, por la cual se consagran unos instrumentos para la “búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia”. Con esta ley,

ordenó a las autoridades garantizar el libre desarrollo y expresión de los movimientos sociales y de las protestas que se realizaran conforme a la Constitución y a la ley; extendió beneficios en materia penal a los miembros de grupos subversivos o de justicia privada que abandonaran voluntariamente la organización y se entregaran a las autoridades; dictó disposiciones para facilitar el diálogo con los grupos guerrilleros, su desmovilización y reinserción; previó beneficios para las víctimas de atentados terroristas; autorizó al Gobierno para conceder indultos por delitos políticos y conexos, siempre que no se tratara de delitos atroces; creó unidades ambulantes para ejercer funciones de policía judicial; creó el Programa de Protección a testigos, víctimas e intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía; autorizó al Gobierno para ordenar auditorías de los presupuestos de las entidades territoriales y descentralizadas para evitar que con recursos públicos se financien actividades subversivas o terroristas; estableció sanciones para los contratistas que en cualquier forma colaboraran con las organizaciones terroristas; ordenó el embargo preventivo y extinción del derecho de dominio de bienes vinculados a la comisión

¹⁷¹ Cfr. DECRETO 2535 DE DICIEMBRE DE 1993, “por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos” (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo 3, anexo H7, folio 3571 bis).

de delitos de competencia de los jueces regionales; contempló restricciones a la información sobre comunicados provenientes de organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo y sobre el uso de sistemas de radiocomunicaciones; previó sanciones para los funcionarios que incumplan las órdenes del Presidente relacionadas con orden público y autorizó la creación de fondos de seguridad en los departamentos y municipios donde no existían¹⁷².

También el Estado emitió el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994¹⁷³, por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual define el servicio especial de seguridad privada, considera como especial su ejercicio por los particulares con empleo de armas de fuego de uso restringido que deben tener aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional y cuyo servicio sería controlado de forma permanente por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:

CAPÍTULO V

Servicios especiales de vigilancia y seguridad privada

Artículo 39º.-Definición. Servicio especial de vigilancia y seguridad privada es aquella que en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad.

Parágrafo.-Se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, cuando debe emplear armas de fuego de uso res-

¹⁷² CÁMARA DE REPRESENTANTES, Exposición de motivos Proyecto acto legislativo No. 223-2003.

¹⁷³ DECRETO 356 DE 11 DE FEBRERO DE 1994, art. 39.

tringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos de los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada, debiendo obtener aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.

En razón a la naturaleza del servicio especial de vigilancia y seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá ejercer un control permanente con cargo al vigilado.

En el cuatrienio el énfasis en la lucha contra la violencia se llevó a cabo sobre los narcotraficantes, lo que dejó a la subversión en prioridad secundaria. Sin embargo, los resultados respecto a estos fueron visibles y, mediante el Decreto 213, entre el 25 y 26 de enero de 1991, se desmovilizó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el cual entregó ciento noventa armas que fueron arrojadas al mar en Cartagena; el 1 de marzo lo hizo el Ejército Popular de Liberación (EPL) con la desmovilización de 2425 hombres y la entrega de ochocientos noventa y tres armas; el 31 de mayo lo hizo también el Movimiento Indígena Quintín Lame con la entrega de cincuenta armas al Consejo Mundial de los Pueblos Indios, las cuales fueron fundidas.

Por el Decreto 1943 se indulta y amnistía a los Comandos Ernesto Rojas; por extinción de la acción penal y de la pena se desmoviliza, el 9 de abril de 1994, el movimiento Corriente de Renovación Socialista en Flor del Monte, municipio de Ovejas (Sucre), y se da la entrega de cuatrocientas cincuenta armas convertidas en campanas de iglesia en los Montes de María; asimismo, las Milicias Urbanas de Medellín y el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Nacional Guerrillera. También se desarrollaron los diálogos con las FARC en Caracas (1991) y Tlaxcala (1992), frustrados por el secuestro por parte del EPL y la muerte en cautiverio a causa de un ataque cardíaco, el 14 de marzo de 1992, del exministro Angelino Durán, a quien el presidente declaró

“Mártir de la patria” por decreto, y por cuya muerte se interrumpieron los diálogos con las guerrillas el 4 de mayo de 1992.

A pesar de estos logros, las FARC desarrollaron lo que denominaron “Campaña militar”, en la despedida de Gaviria, en la que manifiestan haber alcanzado los siguientes resultados, mas no explican de dónde se obtuvieron ni pueden verificarse en los archivos de entidades del Estado o en los medios de información:

Campaña militar “DESPEDIDA DE GAVIRIA”

-La Guerra integral: un completo fracaso-

15 AL 26 DE JULIO DE 1.994. FARC-EP. PARTE FINAL.

I.	Copamiento a bases militares: 2
II.	Tomas de puestos de policía: 3
III.	Asaltos a puestos de policías: 3
IV.	Ataque a sede del DAS: 1
V.	Hostigamientos y combates con la fuerza pública: 77
VI.	Retenes y acciones para dialogo con población: 103
VII.	Enemigos capturados en combate: 23
VIII.	Enemigos capturados en retén: 160
IX.	Muertos del ejército: 74
X.	Muertos de la policía: 18
XI.	Muerto del das: 1
XII.	Heridos del ejército: 47
XIII.	Heridos de la policía: 30
XIV.	Heridos del das: 3
XV.	Recuperados :
	Ametralladoras m-60: 4
	Morteros de 60 m.m. :2
	Lanzagranadas m-79: 2
	Fusiles: 65
	Carabinas: 2
	Granadas: 98
	Proveedores para fusil: 279
	Cartuchos: 9.607

	Dinamita (arrobas): 12
	Radio de comunicación: 4
	Armas cortas: 11
XVI.	Dinero recuperado: 151.180.000 pesos
XVII.	Guerrilleros muertos: 24
XVIII.	Guerrilleros heridos: 18
XIX.	Fusiles perdidos: 7

ESTADO MAYOR CENTRAL. FARC-EP

MONTAÑAS DE COLOMBIA, JULIO 30 DE 1.994¹⁷⁴

Al empezar el mandato del “Salto social”, el presidente Samper recurrió al estado de conmoción interior promulgado mediante el Decreto 1370 de 1995, pero fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-466 de 1995. Posteriormente, y como una reacción del Estado ante el asesinato del dirigente político, exconstituyente y excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, se declaró el estado de conmoción interior que, mediante dos prórrogas, se mantuvo hasta el 29 de julio de 1996, con normas ampliamente favorables a la acción militar pero también contradictorias con el Estado social de derecho, entre las cuales, de acuerdo con la exposición de motivos de la Cámara de Representantes, se identifican:

Los decretos legislativos expedidos contemplaron restricción de información, medidas tendientes a proteger a la población civil en los operativos militares, se regularon aspectos como la reserva de identidad del denunciante, interceptación o registro de comunicaciones, inspecciones o registros domiciliarios, aprehensión de personas respecto sobre las cuales se tuviera indicio sobre participación en los hechos que motivaron la declaración de estado de

¹⁷⁴ FARC-EP, Conflicto Armado, 30 de julio de 1994, Julio 1994-Campaña Militar, Despedida de Gaviria, www.farc-ep.co/conflicto-armado/julio-1994-campana-militar-despedida-de-gaviria.html

conmoción interior; recompensas para quienes sin haber participado en la comisión de hechos punibles, suministraran información eficaz en casos de delitos de competencia de los jueces regionales; también se dispuso que los sindicatos o condenados por homicidio con fines terroristas no podían recibir rebaja de penas ni cualquier otro beneficio de los establecidos en las normas penales y administrativas vigentes¹⁷⁵.

Sin evidencia de ningún cambio favorable en la grave situación del orden público en el país, con la Ley 241 de diciembre 26 de 1995 se extendió por otros dos años la vigencia de la Ley 104 de 1993 para la “búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia”, a la vez que se fortalecieron algunas de sus medidas. El Gobierno integró una Comisión Redactora del “Proyecto de Ley por el cual se adopta un Régimen Integral contra el Terrorismo”¹⁷⁶, el cual transformó en legislación ordinaria el Decreto Legislativo 180 del 27 de enero de 1988, por el cual se complementa algunas normas del Código Penal y se dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público, el Decreto Legislativo 181, por el cual se modifica la composición de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, se dictan nuevas competencias y se dictan otras disposiciones, y el Decreto Legislativo 182, por el cual se dictan disposiciones encaminadas al establecimiento del orden público; asimismo, el Decreto Legislativo 1857 de 1989, por el cual se dictan algunas normas de carácter penal conducentes al restablecimiento del orden público, el Decreto Legislativo 2790, o Estatuto de Defensa de la Justicia, el Decreto Legislativo 099, por el cual se modifica, adiciona y complementa el Estatuto de Defensa de la Justicia, el Decreto Legislativo 390, por el cual se modifica,

¹⁷⁵ CÁMARA DE REPRESENTANTES, Exposición de motivos Proyecto acto legislativo No. 223-2003.

¹⁷⁶ DECRETO EJECUTIVO 2271 DE 1995.

adiciona y complementa el Estatuto de Defensa de la Justicia, contenidos en los decretos legislativos 2790 y 099, y el Decreto Legislativo 1676, por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público, convirtiendo en legislación ordinaria medidas que se habían tomado en estado de conmoción interior¹⁷⁷.

Por causa de la naciente jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de legislación extraordinaria dejó de aprovecharse una oportunidad para expedir un estatuto antiterrorista con propuestas integrales, serias y coherentes, las cuales dotarían a las instituciones de las herramientas necesarias para enfrentar las diferentes manifestaciones terroristas que pudieran darse en un país como Colombia.

Con intención de contener la agresión subversiva contra agricultores y ganaderos víctimas constantes de extorsión y secuestro, y fundamentados en los artículos 25 y 33 de la Ley 48 de 1968, se dio legalidad, el 27 de abril de 1995, a los grupos de autodefensas campesinas como parte de servicios especiales de vigilancia y seguridad, inicialmente denominados "Convivir"¹⁷⁸.

Su gobierno prorrogó la vigencia, modificada y adicionada de la Ley 104 de 1993¹⁷⁹, y a pesar de todo este esfuerzo los resultados en la lucha contra el crimen fueron negativos, pues aunque hubo disminución en el ataque a poblaciones, hubo también un

¹⁷⁷ MINISTERIO DE JUSTICIA, Sistema Único de Información Normativa, <http://www.suin-juriscal.gov.co>

¹⁷⁸ Cfr. LA RESOLUCIÓN 368 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 1995, la cual fijó criterios técnicos y jurídicos para el desarrollo de los servicios de vigilancia y seguridad privada de los que trata el artículo 39 del Decreto 356 de 1994.

¹⁷⁹ LEY 241 DE 26 DE DICIEMBRE DE 1995.

aumento en la voladura de oleoductos, ataques a poblaciones y a unidades militares en movimiento y fijas en lugares apartados del país por parte de la subversión, así como asesinatos de líderes campesinos, enfrentamientos contra subversivos y masacre de población civil por parte de las autodefensas. Entonces, el 6 de julio de 1995, la Corte Constitucional declaró inexecutable el contenido que expresa “de guerra o de uso privativo de la fuerza pública”, en el artículo 9 del Decreto 2535 de 1993, porque en su sentir violaba el artículo 216 de la Constitución Política, ya que “en ningún caso los particulares pueden estar colocados en la posibilidad de sustituir a la fuerza pública”¹⁸⁰.

El 2 de abril de 1996 en Dosquebradas (Risaralda) fue secuestrado el arquitecto Juan Carlos Gaviria, hermano de Cesar Gaviria, entonces Secretario General de la OEA y expresidente de Colombia, por el grupo Jorge Eliecer Gaitán (JEGA), el cual pedía la renuncia del presidente Ernesto Samper y su vicepresidente Humberto de la Calle, a fin de que asumiera la presidencia la dirigente de la Anapo, María Eugenia Rojas. Pedía también que el Gobierno no impusiera más impuestos y se vetara a los políticos corruptos. Luego pidieron que la presidencia fuera asumida por Gabriel García Márquez. Entre ocho y once miembros del JEGA fueron excarcelados y acogidos por el Gobierno cubano, al igual que los secuestradores del señor Gaviria y el abogado Hugo Antonio Toro Restrepo alias *Bochica*, máximo líder de ese grupo y preso por homicidio, quien viajó junto con su esposa e hija¹⁸¹.

¹⁸⁰ Cfr. SENTENCIA C-296 emitida por de la Corte Constitucional colombiana el 6 de julio de 1995, párrafo 125.7 (expediente de observaciones a los af dávits, folio 5369).

¹⁸¹ HEYCK PUYANA Ana Caterina, (2010), Derecho internacional, acuerdo humanitario y resolución pacífica del secuestro, Universidad de Granada, <https://hera.ugr.es/tesisugr/18877205.pdf>

Por el ataque de Puerres (Nariño), que dejó treinta y un militares muertos¹⁸², sucedido el 15 de abril de 1996, el Consejo de Estado¹⁸³ profirió sentencia condenatoria contra el Estado colombiano en la que, además de inculpar a miembros de las Fuerzas Militares, hizo mención de las responsabilidades de los miembros de las FARC:

Las anteriores consideraciones se constituyen en razón suficiente para encontrar acreditado que las conductas de los Teniente Coronel Alberto Moreno Sánchez, del Mayor Juan Antonio Lalinde Gómez, del Capitán Ricardo Vásquez Ríos y del Teniente Darío Ernesto Coral Lucero miembros del Grupo Mecanizado Cabal, de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, constituyeron un acto de culpa grave y, por lo tanto, satisfacen el requisito del artículo 90 constitucional en consonancia con el 77 del Código Contencioso Administrativo, relativos a la calificación de la conducta de los servidores públicos a efectos de derivar la procedencia del llamamiento en garantía. Por tanto, se les condenará, solidariamente, al reembolso de las sumas de dinero que deba sufragar la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional como consecuencia de la condena que se dictará en esta providencia.

Con el ánimo de cumplir los mandatos de los artículos 93 de la Carta Política y 1.1., 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana se remite copia del expediente y la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación para que revise en la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario para que inicie, o reabra, y en dado caso, se pronuncie si procede su encuadramiento como

¹⁸² ECHANDÍA CASTILLA, Camilo y BECHARA GÓMEZ Eduardo, *Conduct of the guerrilla during the Vélez government Uribe: of the territorial control to the strategic control logics*, ana. polit. ago 2006.vol 19, N.o 57, págs. 31-54, ISSN 01221-4705.

¹⁸³ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, 3 de diciembre de 2014, Radicación: 52 001 23 31 000 1998 00175 01 (26737) CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

un caso que merece la priorización en su trámite, en los términos de la Directiva No. 01, de 4 de octubre de 2012 [de la Fiscalía General de la Nación], para investigar a la organización insurgente FARC y aquellos miembros que hayan participado en la comisión de presuntas violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario cometidas contra las víctimas del presente asunto, y consistentes en: a) violación de la dignidad humana, b) violación del libre desarrollo de la personalidad, c) violación del derecho a la familia, d) violación del derecho al trabajo, e) violaciones de las normas de los Convenios de Ginebra, f) uso de armas no convencionales, etc., y todas aquellas que se desprendan de los hechos ocurridos el 15 de abril de 1996 en jurisdicción del municipio de Puerres [Nariño].

También, el 11 de junio de 1996, miembros de las “Autodefensas Unidas de Colombia” atacaron el corregimiento de La Granja en Ituango (Antioquia), donde, según sentencia del Consejo de Estado,

el 11 de junio de 1996 cerca de 22 hombres fuertemente armados con fusiles y revólveres, miembros de grupos paramilitares, se dirigieron en dos camionetas al municipio de Ituango, específicamente al corregimiento de La Granja. El grupo paramilitar inició su recorrido en las cercanías del municipio de San Andrés de Cuerquia, donde pasaron a corta distancia de un comando de policía, sin que la fuerza pública adoptara medida alguna para detenerlos.

Asimismo, los paramilitares fueron divisados en varias ocasiones durante el transcurso del recorrido, primero por ocupantes de un bus de transporte público que recorría la ruta entre Medellín e Ituango, luego por los ocupantes del bus que realizaba dicha ruta en sentido inverso y por habitantes del sitio conocido como El Filo de la Aurora, donde el grupo permaneció por espacio de dos horas aproximadamente.

Al arribar al corregimiento de La Granja los paramilitares ordenaron el cierre de los establecimientos públicos. Una vez que los paramilitares tomaron control del corregimiento se inició una cadena de ejecuciones selectivas, sin que se encontrara oposición por parte de la Fuerza Pública y a la vista de los pobladores del corregimiento.

Una vez perpetradas las referidas ejecuciones selectivas, los paramilitares abandonaron el área de La Granja sin encontrar oposición alguna por parte de la Fuerza Pública.

Por su parte, las guerrillas de las FARC asaltaron con seiscientos guerrilleros de cinco frentes, el 30 y 31 de agosto de 1996, la Base Militar de Las Delicias, ubicada en La Tagua (Putumayo), con un saldo de cincuenta y cuatro militares muertos y sesenta secuestrados. El objetivo era defender sus fuentes de financiación, consistentes en el producto de los cultivos ilícitos, con el silencio cómplice de la población sujeta a su poder debido a su dedicación laboral como raspachines y operadores de laboratorios. Por dicha acción el Consejo de Estado exhortó al Ministerio de Defensa a adelantar medidas de reparación colectiva a las víctimas y pedir perdón públicamente por los errores cometidos, y además compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía para que investigara a la cúpula militar de la época. En fallo del Consejo de Estado, la Sentencia 1997-08789 de 25 de mayo de 2011 indicó:

Hay lugar a responsabilizar al Estado, porque no tomó las medidas para prevenir los hechos, no brindó apoyo oportuno a la base a pesar de que ya se conocía el inicio del ataque y, porque el Estado estaba en obligación de garantizar la seguridad de soldados a su servicio, a quienes no había preparado para afrontar esta clase de hechos y fueron dejados a merced del ataque subversivo.

Más adelante precisa en el fallo que los soldados estaban mal armados y hubo una negligencia injustificada “e insuficiente”

apoyo militar, el cual llegó un día después del ataque pese a la cercanía de la base de Tres Esquinas, los apoyos f uviales desde Puerto Leguízamo y el apoyo aéreo desde la Base Aérea de Apiay. Además, señaló que la ubicación de la base militar no fue estudiada estratégicamente ni se valoraron las vías de escape y penetración, lo que facilitó la acción subversiva de la guerrilla.

A pesar de los hechos anteriores, en la Base de la Carpa, zona rural de San José del Guaviare, el 6 de septiembre de 1996 murieron veintidós militares¹⁸⁴. La Carpa es una vereda que para aquella época albergaba grandes extensiones de cultivos de mata de coca, se calculan de más de 20 000 hectáreas. En los meses y semanas previos al ataque, en el Putumayo y el Guaviare se presentaron marchas cocaleras por parte de los campesinos como protesta a las operaciones de destrucción de cultivos ilícitos que realizaba el Ejército desde 1995. Acerca del ataque a la base militar, el diario *El Espectador*, en edición del 6 de septiembre de 2016¹⁸⁵, reseñó sobre los resultados de la investigación penal:

A las 6 de la mañana, los guerrilleros atacaron a los 48 miembros del ejército que estaba situado en un sitio conocido como Caño Caribe. En la refriega varios uniformados cayeron heridos, pero la mayoría de los militares logró resguardarse en la selva, en donde durante dos horas resistieron los ataques del grupo subversivo, los militares llamaron ayuda pero en los próximos instantes no recibieron respuesta por lo cual muchos de ellos murieron y queda-

¹⁸⁴ REVISTA SEMANA, (23 de septiembre de 2010), Las víctimas de Jojoy, <http://www.semana.com/nacion/articulo/las-victimas-jojoy/122373-3>

¹⁸⁵ EL ESPECTADOR, Redacción Judicial, (2016), 20 años de la emboscada de las FARC en la Carpa, Guaviare, <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/20-anos-de-emboscada-de-farc-carpa-guaviare-articulo-653385>

ron desmembrados y desfigurados por las explosiones, después del cruento ataque, los soldados sobrevivientes se internaron aún más en la selva para escapar de los guerrilleros. En ese momento, los guerrilleros soltaron a veinte perros doberman para localizar a los militares heridos. A medida que los cuerpos de los soldados muertos fueron apareciendo, varios presentaban mordidas de animal en distintas partes del cuerpo, como el caso del soldado Abel Saavedra Gutiérrez quien perdió la cabeza y los glúteos. Después de 11 horas sufriendo estas atrocidades, los militares recibieron refuerzos en la zona, dos helicópteros llegaron de la Brigada N.º 2, en este punto también se encontraron cuerpos devorados por cerdos.

Ernesto Samper ordenó el despeje y el cese de operaciones militares por treinta y dos días en 13,161 km² en Cartagena del Chairá (Caquetá) a partir del 20 de mayo de 1997, con el fin de buscar la liberación concertada de sesenta soldados y diez infantes de marina secuestrados tras el ataque a la base militar de Las Delicias producido en agosto de 1996, liberación que fue realizada el 15 de junio de 1997.

El 21 de diciembre de 1997 la Base de Patascoy (Nariño) fue asaltada y resultaron asesinados diez militares y secuestrados otros dieciocho. Aproximadamente cien guerrilleros de las FARC sorprendieron a un oficial, cuatro suboficiales y veintinueve soldados en un centro de comunicaciones ubicado en el cerro de Patascoy, con una temperatura media de -10°, a una hora de transporte en vehículo desde Pasto, más de ocho horas de camino hasta el corregimiento El Encano, tres horas de navegación por río y una ascenso de cinco horas hasta el cerro. Entre los cabos secuestrados, Pablo Emilio Moncayo Cabrera¹⁸⁶ per-

¹⁸⁶ EL TIEMPO, Archivo Digital de noticias, Perfil de Pablo Emilio Moncayo Cabrera-Archivo Digital de Noticias, www.eltiempo.com-archivo/documento/CMS-7422409

maneció doce años secuestrado, y Livio José Martínez Estrada después de catorce años de cautiverio fue asesinado con un tiro de gracia durante un intento de rescate por el Ejército Nacional.

El 3 de marzo de 1998 se produjo el ataque a un batallón de contraguerrillas en la quebrada El Billar en Cartagena del Chairá (Caquetá), con resultado de sesenta y tres militares muertos y cuarenta y tres secuestrados. Del “Caso táctico El Billar”, elaborado por la Decimoquinta Brigada de la V División del Ejército Nacional, el Consejo de Estado¹⁸⁷ concluyó:

A. Los errores del fracaso operacional se dieron en todos los niveles; en la parte táctica no hubo conducción de las unidades ni maniobra, fallas en las medidas de contrainteligencia y se subestimó al enemigo; en la parte operativa los comandantes no evaluaron el riesgo y la amenaza de un área táctica de primera prioridad, y se desconocieron las capacidades y antecedentes de los ataques efectuados por el bloque sur de las FARC en su área de influencia; así mismo la parte administrativa en la demora de abastecimientos, la no dotación de granadas de fusil, de iluminación, de humo y bengalas, se constituyeron en factores que incidieron en el fracaso operacional.

B. De igual forma fue un gran error debilitar el dispositivo al dejar solo 5 contra guerrillas (4 contra guerrillas salieron a licencia el 13 FEB-98) en el área, en un sector de absoluto control del bloque sur de las FARC, sin posibilidad de apoyo o refuerzo de una unidad cercana.

C. Una brigada móvil sin medios aero tácticos, terminan siendo mal empleadas sus unidades, al asignarle misiones de control mi-

¹⁸⁷ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, 28 de mayo de 2015, Radicación 18001-23-31-000-1999-00162-01(29842), C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero

litar de área como cualquier unidad fundamental de soldados regulares (se subraya).

El 22 de julio de 1997 los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia incursionaron en el municipio de Mapiripán, donde según consta en la demanda contra el Estado colombiano presentada por la Comisión Colombiana de Juristas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos¹⁸⁸,

Los hechos del presente caso se iniciaron el 12 de julio de 1997 cuando un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares y fueron recogidos por miembros del Ejército sin exigirles ningún tipo de control. El Ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta la localidad de Mapiripán.

-El 15 de julio de 1997, más de cien hombres armados rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control del pueblo, comunicaciones y oficinas públicas, y procedieron a intimidar a sus habitantes. Un grupo fue torturado y asesinado.

-La fuerza pública llegó a Mapiripán el 22 de julio de 1997, después de concluida la masacre y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, cuando los paramilitares ya habían destruido gran parte de la evidencia física. A pesar de los recursos interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.

Entre los días 31 de septiembre y 1 de octubre de 1997 se produjo el ataque a la base del Ejército en el cerro Montezuma, en

¹⁸⁸ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Caso de la Masacre de Mapiripán Vs Colombia.

Puerto Rico, Risaralda, con la muerte de quince militares en el ataque inicial y la posterior muerte de un teniente coronel comandante de batallón, de tres oficiales y de cuatro técnicos de la Fuerza Aérea durante las operaciones de apoyo cuando se estrelló un avión AC-47¹⁸⁹, que produjo, además —según informes militares—, la muerte de más de setenta guerrilleros.

De nuevo, el 25 de octubre de 1997 los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia atacaron en el municipio de Ituango la inspección de El Aro, donde, de acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado¹⁹⁰,

los paramilitares entraron a El Aro el 25 de octubre de 1997. Las elecciones estaban programadas para llevarse a cabo el domingo 26 de octubre de 1997. El sábado 25 de octubre se escucharon “ráfagas de fusil [y] muchas explosiones”. En la mañana de ese sábado “llegó un helicóptero blanco” que “hizo unas ráfagas de tiros” y “cogió rumbo al Cauca arriba”. Al llegar unos hombres armados, estos dijeron: “nosotros somos las Auto Defensas Campesinas y necesitamos que nos vengán a acompañar un poco al parque”. Los hombres armados acusaban a los residentes de El Aro de ser guerrilleros. Estos hombres agarraron a varias personas del pueblo y los llevaron al centro de la plaza, los insultaron e hicieron poner boca abajo, en donde procedieron a matar a varias personas.

La situación del orden público en el país se agravaba cada día debido a que las llamadas autodefensas se salieron de todo control y desataron contra la subversión, incluidos sus presun-

¹⁸⁹ CARACOL RADIO, Serían 70 muertos de la guerrilla en Montezuma, http://caracol.com.co/radio/2000/09/06/nacional/0968220000_094894.html

¹⁹⁰ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, 28 de mayo de 2015, Radicación 18001-23-31-000-1999-00162-01(29842), C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

tos simpatizantes, una guerra sin cuartel que evidenciaba la incapacidad del Estado de ejercer control sobre su territorio. La Corte Constitucional empezó a cuestionar al Gobierno en sus fallos por el mantenimiento de normas que no definían en sus propios cuerpos de seguridad el monopolio de las armas, tal como se evidencia en sus actitudes con respecto a la emisión del Decreto 356 de 1994:

El 7 de noviembre de 1997 la Corte Constitucional, al estudiar las normas del Decreto 356 de 1994, encontró que, en primer lugar, si bien el Estado puede delegar en los particulares la prestación del servicio público de seguridad y vigilancia, los llamados “servicios especiales de vigilancia y seguridad privada” no podían usar armas de uso restringido; en segundo lugar, que el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debería ser obligatorio y no facultativo; y, en tercer lugar, que no podían acudir a “técnicas y procedimientos distintos a los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada”¹⁹¹.

Los cuestionamientos de la Corte dieron lugar a que el Gobierno nacional, el 16 de diciembre de 1997, emitiera el Decreto 2974, el cual tuvo como finalidad establecer parámetros y criterios para el desarrollo de las actividades a cargo de los servicios especiales y los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, lo que permitiera a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejercer sobre ellas un control eficaz y oportuno¹⁹². Además, el 26 de diciembre de 1997 promulga la Ley 418,

¹⁹¹ Cfr. SENTENCIA C-572 emitida por de la Corte Constitucional colombiana el 7 de noviembre de 1997 (expediente de observaciones a los af dávits, folio 5373).

¹⁹² Cfr. DECRETO 2974 DE DICIEMBRE DE 1997, “por el cual se reglamentan los Servicios Especiales y los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada” (expediente de anexos al peritaje rendido por el señor Hernán Sanín Posada, folio 5224).

“por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”. Esta ley fue prorrogada mediante la Ley 548 de 23 de diciembre de 1999 y la Ley 782 de 23 de diciembre de 2002¹⁹³, en la que se fundamentó jurídicamente el proceso de paz que adelantó el Gobierno del presidente Pastrana.

Durante su gobierno se desarrollaron los diálogos en Maguncia (Alemania) con el ELN y EPL, y cuando se pretendía firmar el preacuerdo del Palacio de Viana (Madrid-España), en febrero de 1998, resultó filtrado a la prensa y no se firmó. Ese año se firmó el acuerdo de Puerta del Cielo (Maguncia-Alemania) para realizar una Convención Nacional que no logró avances. Se destituyó al general Harold Bedoya Pizarro¹⁹⁴ por razones de Estado, ya que este se había pronunciado contra el Gobierno por los continuos recortes al presupuesto de defensa, en 1995 se opuso a la desmilitarización de La Uribe (Meta) y luego también se opuso al nombramiento del fiscal Alfonso Gómez Méndez y del vicefiscal Jaime Córdoba Triviño, de clara línea antimilitarista.

Las FARC habían acumulado el armamento, la cantidad de miembros y la capacidad de concentrar fuerzas de forma rápida para efectuar ataques masivos sobre las unidades militares, de manera que sus mandos consideraron que estaban en ca-

¹⁹³ Cfr. LEY 418 emitida el 26 de diciembre de 1997 “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”; LEY 548 DE 23 DE DICIEMBRE DE 1999 “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”; y LEY 782 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2002 “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”.

¹⁹⁴ REVISTA SEMANA, La noche del General, <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-noche-del-general/33479-3>.

pacidad de desarrollar una guerra de movimientos. La ofensiva que desató a partir de ese año permitió conocer el desarrollo de algunas armas diseñadas por sus equipos técnicos, entre las cuales estaban los lanzadores de pipetas bomba, elaborados a partir de cilindros de 40 libras para transporte de gas con explosivos y residuos metálicos que actuaban como metralla, y en algunas ocasiones utilizados también con excremento humano para hacer más letal el daño ocasionado a quienes sufrían heridas por ellos, además de lanzagranadas de 60 y 81 mm para morteros artesanales. Con el empleo de estas nuevas dotaciones continuaron con ataques a la Fuerza Pública y el 3 de agosto de 1998 lo hicieron en Miraflores (Guaviare), luego de lo cual sus soldados sufrieron el secuestro durante más de treinta y cuatro meses por parte de las guerrillas. El Consejo de Estado (CP Hernán Andrade Rincón), sin embargo, puntualizó sobre la responsabilidad del Estado hecha por el Consejo de Estado en el fallo anterior por fallas en el servicio y expresó condena por el incumplimiento de las FARC a los protocolos del Derecho Internacional Humanitario que, como partícipes directos en el conflicto, manifestaron:

Ahora bien, como se acaba de reseñar, el reconocimiento de la condición de participantes directos en las hostilidades —equivalente a la de combatiente en los conflictos armados internacionales, según antes se explicó— a los miembros de las FARC que perpetraron el ataque, les imponía, correlativamente, un riguroso deber de acatamiento a las normas del DIH y, muy especialmente, al conjunto de prohibiciones derivadas tanto del artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra de 1949, como del Protocolo II de 1977, restricciones que, como previamente se indicó en este pronunciamiento, integran el denominado “núcleo duro” de la normatividad humanitaria.

Pues bien, a este respecto, algunos elementos demostrativos de los arrimados al expediente, particularmente la comunicación remitida por la Fiscalía General de la Nación al Tribunal Administrativo de Nariño, a la cual se adjuntaron las resoluciones de acusación proferidas dentro de distintos procesos penales iniciados a raíz de la toma de la Base militar de Las Delicias, ponen de presente que, de acuerdo con evidencia testimonial recaudada dentro de los respectivos procesos penales, una vez culminó el ataque, con la toma de la Base por parte de los miembros de las FARC que intervinieron en el asalto, éstos llevaron a cabo una selección entre los soldados a los cuales sometieron, de suerte que “los que se encontraban ile-sos o con leves heridas fueron los secuestrados, los que se encon-traban mal heridos fueron llevados al caserío para que los socorrie-ran, mientras que otros también mal heridos fueron rematados¹⁹⁵.

Las Fuerzas Militares lograron desplazar a las FARC de la región de Urabá en años anteriores, pero en un intento de recuperar el dominio de la zona lanzaron una ofensiva que inició con el ata-que del 4 de agosto de 1998 a la base militar del corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá (Antioquia)¹⁹⁶, en la que se custodiaba a desplazados de la región de Urabá, ocasionando la muerte de nueve soldados y el secuestro de siete más. El Ejér-cito lanzó la operación Furia para detener la ofensiva llevada a cabo por más de 1000 guerrilleros y buscar el rescate de los sie-te secuestrados. En la madrugada del 14 de agosto se produjo el combate entre una compañía de soldados contra miembros de las FARC con seiscientos hombres en primera línea y unos doscientos en retaguardia, lo que obligó a retroceder a las tro-

¹⁹⁵ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Radicación 520012331000199800580 01 (32.014) CP. Hernán Andrade Rincón.

¹⁹⁶ EL TIEMPO, Archivo Digital de noticias, infografías, www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-824985

pas que en su mayoría lograron cruzar el río Perancho y colocar así un obstáculo natural en su favor. Sin embargo, dejaron en situación de desventaja a sesenta y tres soldados que no alcanzaron el cruce del río y recibieron la muerte sesenta de ellos. Posteriormente, el 15 de agosto, en un acto de perfidia por parte de las FARC, un soldado secuestrado fue obligado a pedir por radio el auxilio de helicópteros para evacuación de heridos. Una vez verificada la identidad del soldado por parte del mando se autorizó mediante el envío de helicópteros Black Hawk que, al ubicarse cerca del suelo en lugar señalado para la trampa, fueron atacados con fuego de ametralladoras, de manera que resultó herida la tripulación que milagrosamente logró escapar de la emboscada.

En carta abierta al presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, el jefe subversivo alias Manuel Marulanda Vélez detalló el número de “prisioneros” en manos de la guerrilla de las Farc¹⁹⁷, tal como se presentan en la tabla 6.

El 25 de febrero del 2000 se emitió el Decreto 324, “por el cual se crea el centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensas ilegales y demás grupos al margen de la ley”¹⁹⁸, integrado por: 1) el ministro de Defensa Nacional, quien lo preside; 2) el ministro del Interior; 3) El ministro de Justicia y del Derecho; 4) El fiscal general de la nación; 5) el procurador general de la nación; 6) el comandante general de las Fuerzas Militares; 7) el director general de la Policía Nacional; 8) el director

¹⁹⁷ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1999, Hechos de paz II. Una política para el cambio, Andrés Pastrana Arango, Imprenta Nacional, págs. 119 a 127.

¹⁹⁸ Cfr. DECRETO 324 DE FEBRERO DE 2000, “por el cual se crea el Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensas ilegales y demás grupos al margen de la ley.”

Tabla 6. Número de prisioneros en manos de la guerrilla de las FARC

Lugar del ataque	Oficial	Suboficial	Soldado
De la base de Miraflores (Guaviare)	1	5	67
De Miraflores (Guaviare)	1 (PN)	3 (PN)	52 (PN)
De la Base de la Uribe (Meta)	1 (EJC)		6 (EJC)
De Puerto Príncipe (Vichada)	1 (PN)		5 (PN)
Del área de El Billar (Caquetá)		5 (EJC)	38 (VOL)
De la Base de Patascoy (Nariño)		2 (EJC)	16 (EJC)
En el Bloque José María Córdoba	1 (EJC)	5 (EJC) 1 (PN)	27 (EJC) 7 (PN)
En el Bloque Magdalena Medio		1 (PN)	
Total = 245 personas	5	22	218

Fuente: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1999. Hechos de paz II. Una política para el cambio, Andrés Pastrana Arango, Imprenta Nacional, págs. 119 a 127

del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); y 9) el consejero presidencial para la defensa y seguridad nacional. El objetivo del centro de coordinación se define, en el artículo primero, así:

ARTÍCULO 1o. Centro de coordinación de lucha contra los grupos de autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de la ley. Créase el centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de la ley, como una comisión intersectorial dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, y encargado de coordinar las políticas y acciones de persecución contra dichos grupos. Este Centro de Coordinación contará con una base de datos que se deberá construir a partir de la información de inteligencia que deben aportar todos los organismos del Estado, de manera que se facilite la captura y judicialización de los integrantes de dichos grupos, así como las recomendaciones sobre sistemas de reclusión aplicables.

Con fecha del 13 de agosto se aprobó la Ley 684 de 2001 sobre normas de seguridad y defensa nacional que la Corte Constitucional declaró inexecutable en su totalidad mediante la Sen-

tencia C-251 de 11 de abril de 2002¹⁹⁹, esencialmente porque consideró como una concepción totalitaria no acorde con la Constitución Política de 1991 la creación de un sistema de seguridad y defensa que comprendía el potencial total de los recursos del Estado y que estos fueran puestos bajo la dirección de una sola persona, del presidente de la República. Se han realizado varios proyectos de ley de seguridad y defensa sin que ninguno haya logrado aceptación del legislador. Este pronunciamiento de la Corte fue declarado por ella como garantista, y sirvió como base de la estrategia de reforma a la administración de justicia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se denominó “Seguridad Democrática”.

El gobierno de Andrés Pastrana adelantó un proceso de negociación con las FARC-EP, con un despeje militar de 42 000 km² denominado “Zona de distensión”, el cual debió dar por terminado de forma unilateral como reacción a los numerosos ataques de este grupo guerrillero contra la población civil y a su negativa a la propuesta de un cese de hostilidades.

La agenda de los diálogos contenida en diez puntos fue llamada “Política de paz para el cambio”, pero sin organización y falta de voluntad terminó el 20 de febrero de 2002 con el secuestro del excongresista Luis Eduardo Gechem Turbay en un vuelo comercial. Entre otros mecanismos, se estableció la organización y el funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual contó con recursos para la reconstrucción de bienes públicos afectados por actos terroristas. Se intentaron soluciones sociales como, por ejemplo, los programas y las soluciones de vivienda de las zonas afectadas por actos terroris-

¹⁹⁹ CÁMARA DE REPRESENTANTES, Exposición de motivos Proyecto de acto legislativo N.º 223-2003.

tas; se prorrogó la vigencia de la Ley 418 de 1997 con la Ley 548 de 1999; se expidió un nuevo Código Penal Militar siguiendo los planteamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional en materia de fuero militar, orientado a evitar y castigar los abusos que miembros de las Fuerzas Militares pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones.

El 2 de junio del 2001 representantes del Gobierno y de las FARC acordaron un intercambio de secuestrados enfermos por guerrilleros presos, por el que el Gobierno liberó catorce guerrilleros enfermos (uno de los quince solicitados por las FARC se negó a ser incluido y a salir), y la guerrilla devolvió a cuarenta y dos miembros de la Fuerza Pública que se encontraban enfermos, y a doscientos cuarenta y dos que no lo estaban. El acuerdo tuvo como base la Ley 548 de 1999 que autorizaba al Gobierno a firmar acuerdos con organizaciones armadas fuera de la ley a las que se les reconozca el carácter político. Sin embargo, en el acuerdo se hizo referencia a su contenido estrictamente humanitario y a la no alteración del estatus jurídico de las partes, así como se incluyó la condición de “no reincidencia” o no retorno a la condición de combatientes por los excarcelados, que finalmente no se cumplió²⁰⁰. Una vez más el Estado claudicó en sus obligaciones y, aunque el resultado fue altamente favorable, cedió ante las pretensiones de la fuerza.

En materia penal se expidió un nuevo código que entró en vigencia en julio del 2001, recogió las disposiciones penales dictadas durante los últimos años en relación con las conductas referidas al terrorismo y tipificó conductas internacionalmente

²⁰⁰ HEYCK PUYANA Ana Caterina, (2010), Derecho internacional, Acuerdo humanitario y Resolución pacífica del secuestro, Universidad de Granada, <http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/5633/1/18877205.pdf>, págs. 187, 188 y 189.

sancionadas como, por ejemplo, el genocidio y la desaparición forzada. También se expidió un nuevo Código de Procedimiento Penal asignando a los jueces penales de circuito, especializado en el conocimiento de los delitos de terrorismo y conexos, y decretó condiciones, competencias y procedimientos para acceder a los beneficios socioeconómicos por reincorporación de los violentos a la vida civil²⁰¹ que, posteriormente, complementó con otros beneficios por colaboración con la justicia²⁰².

Mientras en agosto del 2002 algunos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hicieron pública su intención de negociar términos para la desmovilización de sus fuerzas²⁰³, las Fuerzas Militares ejecutaban operaciones exitosas luego de realizar su reestructuración, iniciada en 1998, y ocasionaron duros golpes a la subversión en Puerto Rico (Caquetá) y Puerto Lleras (Meta), Hato Corozal (Casanare), Suratá (Santander), Sumapaz (C/ marca), la Operación Gato Negro en las selvas del sur del país y la operación Tanathos para la recuperación de la zona de distensión.

Pese a la generosa actitud del Gobierno en busca de acuerdos de paz, las guerrillas tomaron la población de Mitú²⁰⁴ (Vaupés),

²⁰¹ DECRETO 128 DE 22 DE ENERO DE 2003.

²⁰² DECRETO 2767 DE 21 DE AGOSTO DE 2004.

²⁰³ Cfr. INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA DE 17 DE FEBRERO DE 2004, E/ CN.4/2004/13, párr. 13; Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Diálogos y Negociación, Grupos de Autodefensa, en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autodefensa/dialogos.htm, e INFORME DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN EN COLOMBIA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2004, OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, párr. 75.

²⁰⁴ EL TIEMPO, Así registró el Tiempo la toma de Mitú, Vaupés, 3 de noviembre de 1998, www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7419487

el 3 de noviembre de 1998, mediante el ataque de mil quinientos guerrilleros a las instalaciones de la Policía Nacional, a la Caja Agraria, a la Gobernación y la Alcaldía Municipal, con un saldo de veintidós policías y ocho civiles muertos, y el secuestro del teniente coronel Luis Mendieta, quien permaneció en cautiverio por once años y siete meses, y el mayor Julián Ernesto Guevara Castro, asesinado años después cuando realizaba un intento de escape de sus captores. El objetivo de las FARC era desestabilizar al Gobierno colombiano y obtener ventaja psicológica de cara a las negociaciones por iniciar el del 7 de noviembre de 1998. Los refuerzos del Ejército para la recuperación del dominio territorial de la población debieron desplegarse a través del territorio brasileño mediante el desembarco de tropas en la pista llamada “Quererí”.

El 10 de abril del 2001 las FARC atacaron con trescientos hombres la base de comunicaciones ubicada en el cerro Tokio, del municipio de Dagua (Valle), custodiado por setenta y cinco infantes de marina, con el objetivo de facilitar el cerco militar sobre Cali y el tránsito de material de guerra traído por el océano Pacífico. En la acción resultaron muertos dieciséis infantes, heridos otros diecinueve y secuestrados cuarenta, de acuerdo con el video expuesto en las redes sociales por las propias FARC²⁰⁵.

El 22 de junio del 2001 repitieron ataque en la jurisdicción de Puerto Leguízamo (Putumayo) a la base militar de la Armada Nacional en La Tagua, ubicada en la vereda La Granja o Coreguaje, con resultado de treinta militares y veintiséis guerrilleros muertos, además de doce infantes heridos por acción de los cilindros y la metralla. El ataque fue considerado por la inteligen-

²⁰⁵ FARC, Operación Cerro Tokio-You Tube, <https://www.youtube.com/watch?v=Db2vIOCPAc>

cia militar como resultado de la retaliación por la destrucción de más de ochenta y cinco laboratorios de cocaína en la zona, fuente de financiación del grupo subversivo²⁰⁶.

El 30 de mayo de 1999 se produjo el secuestro de ciento ochenta personas en la iglesia de La María en Cali (Valle), por parte del Ejército de Liberación Nacional, grupo que negoció con el Gobierno la liberación de una parte de ellos como actitud “humanitaria” y dejó en su poder unos rehenes para negociar el cobro de un secuestro extorsivo. De acuerdo con el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali²⁰⁷, el Estado fue declarado responsable del hecho:

Por incompetencia del Estado colombiano de proteger la vida, la vida, la libertad y la integridad de los ciudadanos colombianos, como corresponde dentro de un Estado Social de Derecho, especialmente de las acciones desplegadas por los grupos alzados en armas.

El 23 de febrero del 2002 las FARC secuestraron, en San Vicente del Caguán (Caquetá), a la candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien pretendía hacer presencia para expresar su solidaridad con la población que había sido sede de los fracasados diálogos con el presidente Andrés Pastrana Arango. Betancourt permaneció en cautiverio en la selva por espacio de seis años, cuatro meses y nueve días, hasta su liberación por el Ejército Nacional el 2 de julio del 2008 mediante una operación denominada “Jaque”, con la que se logró su rescate no violento junto

²⁰⁶ EL TIEMPO, 26 de junio de 2001, Soldados de Coreguaje resistieron tres ataques de las FARC. <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-481889>.

²⁰⁷ TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, Sentencia T-683 de 1999.

con tres contratistas norteamericanos y once miembros de las Fuerzas Militares²⁰⁸.

El presidente Uribe Vélez asumió en el 2002 y aplicó de inmediato la política de defensa y seguridad democrática, con la que se confirmó además de lo consignado en el recorrido histórico anterior, que el presidente no participa activamente, sino que aprueba las políticas que en materia de defensa ha construido el ministro de Defensa, por el cual se ejerce la función de dirección y el mando militar; asimismo, que el Gobierno permite la participación de los militares en política. Esa participación está demostrada en las palabras de la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, con las que presenta la política de defensa y seguridad democrática:

La seguridad de los colombianos es un asunto que compete no solo al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública, sino a todo el Estado y a toda la sociedad. Desde el momento en que el presidente Uribe me encomendó la tarea de desarrollar las bases de la Seguridad Democrática en un documento que recoja tanto el marco conceptual como las políticas de seguridad del Gobierno, reuní un equipo del Ministerio de defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Escuela Superior de Guerra y la Policía Nacional para estudiar y estructurar las soluciones más adecuadas a los problemas del país en esta materia. El resultado de éste trabajo es el documento que aquí presentamos²⁰⁹.

Al igual que lo observado sobre la participación en política, podemos advertir además que la Ley 684 de 2001 de Seguridad y

²⁰⁸ EL TIEMPO, Así fue el secuestro de Ingrid Betancourt, Archivo Digital, www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1380000

²⁰⁹ MINISTERIO DE DEFENSA, *Política de defensa y seguridad democrática, presentación de la ministra de Defensa Nacional, Marta Lucía Ramírez de Rincón*, www.mindefensa.gov.co,

Defensa Nacional, declarada inexecutable por la Sentencia C-251 de 2002, lo que pretendía era hacer legal lo que en la práctica se realiza con respecto a la planeación de la defensa y la seguridad nacional. Ese mismo año se prorrogó la Ley 418 al convertirla en la Ley 782 a fin de facilitar los diálogos con las agrupaciones subversivas²¹⁰.

El 22 de enero del 2003 el Gobierno nacional emitió el Decreto 128, según el cual se establecen “beneficios jurídicos socioeconómicos” y de otra índole para las “organizaciones armadas al margen de la ley” que se hayan sometido al programa de desmovilización. El artículo 13 del decreto contempla:

Tendrán derecho al indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso, los desmovilizados que hubieren formado parte de organizaciones armadas al margen de la ley, respecto de los cuales el Comité Operativo para la Dejación de las Armas –CODA– expida la certificación [...].

A su vez, el artículo 21 de dicho Decreto excluye del goce de estos beneficios:

[a] quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados por delitos que de acuerdo a la Constitución Política, a la ley o a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia no puedan recibir esta clase de beneficios²¹¹.

El 24 de noviembre de 2003 el Gobierno nacional emitió el Decreto 3360, “por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, pro-

²¹⁰ LEY 782 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2002.

²¹¹ Cfr. DECRETO 128 DE ENERO DE 2003, “por el cual se reglamenta la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil”.

rrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002". De acuerdo con uno de sus considerandos, "es necesario fijar condiciones de procedimiento específicas para facilitar la desmovilización colectiva de grupos armados organizados al margen de la ley, en el marco de acuerdos con el Gobierno Nacional"²¹².

El 31 de agosto de 2004 emitió el Decreto 2767. De acuerdo con uno de sus considerandos, era,

necesario fijar condiciones, que de manera precisa y clara, permitan establecer competencias, asignar funciones y desarrollar los procedimientos para acceder a los beneficios a que se refiere la Ley [418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002], una vez iniciado el proceso de desmovilización voluntaria²¹³.

Entre diciembre del 2003 y agosto del 2006 se produjo el proceso de dejación de armas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por el cual se desmovilizó a 31 670 combatientes que entregaron 16 856 armas.

El 15 de julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el cual el Gobierno y las AUC convinieron la desmovilización total de las fuerzas de éstas antes del 31 de diciembre de 2005. En 2003 las AUC contaban con aproximadamente 13500 miembros. El 25 de noviembre de 2003 entregaron armas 874 integrantes del "Bloque Cacique Nutibara" de las AUC. A inicios de diciembre de 2004

²¹² Cfr. DECRETO 3360 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2003, "por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002".

²¹³ Cfr. DECRETO 2767 DE 31 DE AGOSTO DE 2004, "por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la vida civil".

fueron desmovilizados alrededor de 1400 miembros del Frente “Catatumbo” e, incluyendo este número, a finales de 2004 se había realizado la desmovilización de alrededor de 3000 miembros de la AUC. En el año 2005 aproximadamente 7000 integrantes de varios bloques de las AUC dejaron sus armas²¹⁴.

Con la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz se fijan beneficios para los desmovilizados que contribuyan con la consecución de la paz y se dictan disposiciones para el logro de acuerdos humanitarios²¹⁵; con las FARC solo se realizaron acercamientos medianamente acuerdos humanitarios para la liberación de secuestrados, y con el ELN se intentó acercamientos con resultados fallidos.

El 22 de junio de 2005 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley No. 975, llamada “Ley de Justicia y Paz”, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, la cual fue sancionada y publicada el 25 de julio de 2005²¹⁶.

²¹⁴ INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS FORT LAUDERDALE, Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2004/13, 17 de febrero de 2004, párr. 13; Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Diálogos y Negociación, Grupos de Autodefensa, en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autodefensa/dialogos.htm; INFORME DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN EN COLOMBIA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2004, OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, párrs. 56, 75 y 94, e INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005, introducción.

²¹⁵ LEY 975 DE 25 DE JULIO DE 2005.

²¹⁶ *Cfr.* LEY 975 DE 25 DE JULIO DE 2005 “, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a

Bajo el gobierno Uribe se recuperó la seguridad ante el asedio subversivo en el departamento de Cundinamarca con la Operación Libertad I, en junio del 2003, y del oriente antioqueño con la operación Marcial se desalojó a las milicias de Medellín. Asimismo, con el Plan Patriota se obligó a las FARC a volver a la guerra de guerrillas, primera fase de la guerra revolucionaria, se desvertebró su sistema de comunicaciones y se les arrebató, en el 2008, con la Operación Jaque, los secuestrados con los que pretendían negociar su exclusión de la lista de terroristas del mundo. También se alcanzó la desmovilización de cerca de 30 000 paramilitares, condición que habían manifestado las guerrillas era imperativa para iniciar diálogos de paz con el Gobierno, y desde el 2005 se desarrollaron diálogos infructuosos con el ELN.

En su gobierno también se presentaron la mayor cantidad de contactos armados durante los dos primeros años, lo que condujo al repliegue estratégico de las FARC que, a pesar de esto, realizaron secuestros y asesinatos selectivos, como se evidencia en los casos que a continuación se relacionan.

El secuestro del exministro de Defensa Gilberto Echeverri y del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, se produjo cuando realizaban una marcha exigiendo respeto por la vida y el término del atroz delito del secuestro. Sus muertes por asesinato cuando el Ejército Nacional intentó su rescate con la Operación Monasterio, en la cual murieron también ocho militares. La periodista Harriet Hidalgo, en su libro *Crónicas de secuestro*, recogió el testimonio de los tres sobrevivientes de la masacre

la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

de Urrao, los sargentos Agenor Viellard, Heriberto Aranguren y Pedro José Guarnizo:

El Paisa formó a sus hombres, como siempre que nos iba a mover. Pero esta vez la orden fue diferente. —Usted mata a este, usted mata a este. Trece con fusil contra trece sin fusil. El sargento Guarnizo vio que pasaron tres helicópteros del Ejército hacia el río como a unos cincuenta minutos a pie por la quebrada. El Paisa terminó de formar a un grupo de gente, se dirigió a este lado y, a escasos cinco metros, comenzó a botar ráfaga sobre la gente que estaba en el campamento. El sargento Aranguren se tiró al piso y se escondió debajo de la cama [...] Quedé inmóvil, todos gritaban —¡Hay Dios mío, Dios mío!, no nos maten. Pero nos estaban fusilando. Entonces don Gilberto empezó a gritar;—¡Auxilio, auxilio, estoy herido! El jefe guerrillero dio una nueva orden.—¡Devuélvanse y remátenlos²¹⁷!

El secuestro, realizado el 2 de abril del 2002, de once diputados del Valle²¹⁸, se produjo en una operación de tipo comando mientras desarrollaban su labor en las instalaciones de la Asamblea Departamental, de donde fueron sacados mediante un acto de perfidia y llevados a las montañas del Cauca donde fueron asesinados en cautiverio por las mismas FARC, el 18 de junio del 2007. A pesar de los logros de la política de seguridad democrática, los grupos paramilitares revivieron como bandas emergentes al servicio de narcotraficantes y aumentaron la producción de droga, mientras los cabecillas subversivos del Secretariado de las FARC y del Comando Central del ELN continuaron delinquiendo y tratando de conservar su fuerza para su empleo

²¹⁷ HIDALGO Harriet, 2007, *Crónicas de Secuestro*, Bogotá DC, Ediciones B, págs. 200 y 201.

²¹⁸ EL TIEMPO. Documentales. No los olvidamos, eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/secuestro-y-muerte-de-los-diputados-del-valle-99296

en momentos de mejores condiciones políticas. Los cabecillas del ELN adoptaron la estrategia de hacer exigencias imposibles de cumplir para dilatar el proceso de diálogo, en tanto que el Gobierno, luego de la exitosa Operación Jaque en el 2008, con la cual logró el rescate militar de quince secuestrados y desajustar los planes de exigencia de un acuerdo de intercambio de secuestrados por delincuentes presos, insistió en la rendición incondicional de las FARC sin conceder despejes territoriales ni determinar la seguridad jurídica para su juzgamiento, en la que aquellos pretendían que se incluyera la no extradición a los Estados Unidos. Estos aspectos pudieron tener los efectos contrarios y revivir la intensidad del conflicto dentro del contexto de la guerra de guerrillas con sistemas operacionales consistentes en golpear y huir, utilizar las trampas de explosivos contra el estamento militar y el sabotaje contra la infraestructura industrial y económica del Estado.

Los hechos, ocurridos entre 1957 y el 2002, en la historia de la nación colombiana pueden ser calificados como los más críticos para su supervivencia como Estado, y de ellos se puede concluir:

- Lo que inició como una guerra de guerrillas o insurgente, concluyó como una guerra contra terroristas y narcotraficantes que propició calificar a los sujetos sociales que se oponían al Estado como “narcoterroristas”.
- La ubicación de las fuerzas combatientes opositoras en las fronteras colocó al Estado colombiano en permanente condición de inminente conflicto con sus vecinos Ecuador y Venezuela; y la implementación del Plan Colombia completó la internacionalización del conflicto interno.

- Las fuerzas combatientes opositoras ignoraron el derecho internacional y presionaron su cumplimiento por parte del Estado, en una estrategia jurídica que, aunque fue ganada por este, debió resignarla a lo opuesto frente a la magnitud de delitos como el secuestro y su disyuntiva de la defensa de la vida.
- El Ejecutivo lanzó a las Fuerzas Militares a una guerra interna sin adecuar su fundamentación jurídica, colocándolas en condición de entidad gobernante con atribuciones de crear, modificar y extinguir derechos de los ciudadanos a quienes correspondía defender.
- La subestimación del enemigo contendiente por parte de las Fuerzas Militares, al que pretendió dominar mediante el patrullaje de tropas por el territorio y no mediante operaciones militares planeadas, facilitó su crecimiento y fortalecimiento con la entrada del narcotráfico en la escena y posibilitó el ejercicio de la guerra, lo que obligó a las Fuerzas Militares a su transformación organizacional y estratégica.
- La actitud reactiva del Estado en materia jurídica, que ante el agravamiento de la situación de conflicto iba endureciendo sus normas como si pretendiera acabar la confrontación mediante la ley, facilitó el refinamiento de los medios de ejecución de la guerra y la participación de terceros actores, como, por ejemplo, los paramilitares.
- La intervención paramilitar en el conflicto, además de la significativa degradación de las formas, significó también que una parte de la población advierte como único medio de subsistencia ante el abandono del Estado el narcotráfico, razón por la cual entró en disputa contra el otro actor de competencia en el negocio, es decir, los grupos insurgentes.

De nuevo la guerra de los representantes comunistas por el poder

- El fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la ejecución de operaciones militares conjuntas dieron como fruto la contención de la amenaza insurgente y su debilitamiento militar.

Del objetivo político al objetivo económico para alcanzar el poder

La transformación operativa de las Fuerzas Militares que facilitó propinar los golpes militares estratégicos más importantes a las guerrillas y las obligaron a retroceder de una pretendida guerra de movimientos a la fase de guerra de guerrillas, hizo ref exionar al liderazgo subversivo obligándolo a replantear sus objetivos. Si la toma del poder con las armas habría de ser una utopía, había que aprovechar la capacidad económica adquirida con el narcotráfico y otras capacidades ilegales para acceder al poder económico, con el cual se obtendría el dominio del Estado sin necesidad de poseer el poder político.

Con el provecho de las prácticas corruptas de los funcionarios del Estado desde la irrupción del narcotráfico y su decisión de hacer uso de todas las formas de lucha, y al entender que la sociedad fue deformada de tal manera que la ética pasó a tener las interpretaciones que cada momento le permitía para su

conveniencia, como, por ejemplo, la famosa disculpa de “todo fue a mis espaldas” de Ernesto Samper, o la manida de “el Gobierno no tenía conocimiento y se harán las investigaciones exhaustivas para dar con los responsables y hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley”, la subversión había puesto su objetivo en el poder económico con el fin de comprar el poder político.

Durante los diálogos en El Caguán con el presidente Pastrana Arango se advirtió que las FARC ya eran una organización económicamente poderosa, aunque administrara sus recursos en la clandestinidad, hecho demostrado en el hecho de que aún siendo considerada por los Estados Unidos y la Unión Europea como una organización narcoterrorista, el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Richard Grasso, y los vicepresidentes de Relaciones Internacionales y de Seguridad y Protección del mismo organismo, Alan Yves Morvan y James Esposito, respectivamente, intercambiaron ideas con Raúl Reyes, portavoz de las FARC, en la vereda La Machaca, jurisdicción de San Vicente del Caguán²¹⁹, visita que para cualquier observador tenía como objeto negociar la introducción en la economía internacional del capital ilegalmente obtenido.

La muerte natural o por causa de las operaciones de las Fuerzas Militares de varios de sus cabecillas, así como las negociaciones secretas con emisarios del Gobierno llevaron a las FARC a la mesa de negociaciones, en la cual habrían de proteger, antes que su poder militar, el económico, con el cual asegurarán la posibilidad de acceder al poder político en un país moralmente debilitado en sus estructuras de gobierno.

²¹⁹ MURILLO María Luisa, 1999, *El Tiempo*, Directivos de Wall Street en el Caguán, Edición de 27 de junio, <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-917182>

Con el propósito de quitarle capacidad económica a los violentos que en la época se nutrían del narcotráfico, el Gobierno creó, en el 2003, el programa de familias guardabosques, a fin de reemplazar los cultivos de coca por alternativas productivas mediante el ofrecimiento de incentivos económicos, con resultados discutibles tanto en la reducción del mercado ilícito como en la reducción de la violencia.

El asesinato de nueve concejales del municipio de Rivera, en el Huila, durante una reunión de trabajo, tuvo un doble propósito por parte de las FARC: primero reafirmar su presencia en la región como dominante, y segundo demostrar su capacidad militar y el alcance de sus intenciones de protección a sus intereses con el narcotráfico. Rutas del Conflicto narra los hechos en los siguientes términos:

Hacia las 2 de la tarde del 27 de febrero de 2006 cerca de 15 guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero del Bloque Sur de las FARC asesinaron a nueve concejales del municipio de Rivera, a 15 kilómetros de Neiva, Huila, e hirieron a cuatro personas más. Los subversivos entraron al centro recreativo Los Gabrieles, donde los funcionarios se encontraban en una reunión de trabajo, y dispararon durante cinco minutos, en el lugar murieron siete personas y las otras dos en el centro médico del poblado. Los concejales hacían parte del partido Liberal, Polo y Convergencia Popular Cívica. Las cuatro personas heridas fueron el secretario del cabildo, Saúl Rojas, el policía John Fredy Vargas y los concejales Gloria Milena Ortiz y Gil Trujillo Quintero. La Corte Suprema de Justicia condenó a 37 años de prisión al exconcejal Trujillo Quintero por su participación como cómplice del grupo guerrillero en el asesinato de sus compañeros. Además, un juzgado penal de Neiva sentenció a 39 años de prisión a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga alias 'El Paisa'

y a 31 años y medio a Wilkin Fernando Lugo alias 'Hernán', exjefes guerrilleros de la Teófilo Forero²²⁰.

La opinión pública hizo duros cuestionamientos al Gobierno por su debilidad frente a la responsabilidad de mantener y proteger la vida de los ciudadanos, y se realizaron propuestas de toda índole para rescatar a los miembros de la Fuerza Pública y a los civiles secuestrados. Carlos Moreno de Caro²²¹ presentó un proyecto de ley que constaba de dos artículos para decretar un acuerdo humanitario que permitiera: 1) la liberación de los secuestrados, con el compromiso de no secuestrar más y la garantía que los insurgentes sería trasladados a un país amigo fuera del alcance de cualquier retaliación; y 2) el Gobierno se comprometía a realizar inversión en las zonas de influencia insurgente.

Esta propuesta fue motivada en que, en el 2001, se logró mediante acuerdo entre las partes la liberación de una cantidad apreciable de secuestrados, ya que el acuerdo era posible en aplicación del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, con el propósito de lograr acercamientos hacia la paz con la insurgencia y en atención a que el Estado está obligado a buscar por todos los medios posibles la liberación de los secuestrados; además, al tener en cuenta las normas constitucionales, como, por ejemplo, el artículo 2, el cual señala como obligación del Estado la protección de las personas, el artículo 22 que otorga a

²²⁰ RUTAS DEL CONFLICTO, Masacre de los Concejales de Rivera, recuperado el 18 de diciembre de 2017, <http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=213>

²²¹ MORENO DE CARO Carlos, 6 de febrero de 2003, Acuerdo Humanitario, Proyecto de Ley 094 de 2004, <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2002-2006/2003-2004?format=html&reset=false&ordering=ASC&orderby=Estado&limit=25&start=75>

la paz el valor de derecho y el deber de obligatorio cumplimiento, el artículo 24 que señala el derecho de los colombianos de circular libremente por todo el territorio nacional, y el artículo 215 que concede atribución al Gobierno para declarar el Estado de emergencia, posible porque en concepto del procurador general de la nación el país se encontraba en grave perturbación del orden social por el accionar insurgente. Estas motivaciones y argumentos sirvieron como fundamento en los procesos de liberación de secuestrados pactados por el Gobierno y la insurgencia luego.

También se adoptó la fórmula de debilitar militarmente al enemigo para colocarlo en condiciones de negociar políticamente la paz, con exitosas operaciones militares como Fénix, en marzo, y Jaque en julio del 2008, Camaleón en junio del 2010 y Sodomía en septiembre del 2012. Además, se incrementó el programa de desmovilizaciones y se realizaron nuevas ofensivas militares que produjeron la muerte a importantes jefes subversivos como Luis Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, tras un bombardeo no consultado con las autoridades de dicho país, lo que ocasionó la ruptura de relaciones entre los dos Estados y tiene aún consecuencias vigentes, tales como el juicio por homicidio que se adelantó contra el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos por la muerte de un ciudadano ecuatoriano.

La Operación Fenix²²² se llevó a cabo en Ecuador a dos kilómetros de la frontera con Colombia el sábado 1 de marzo del 2008, y una vez realizado el bombardeo por aviones de la Fuerza Aérea colombiana, en el cual murieron Raúl Reyes y diecisiete

²²² CARDONA ANGARITA, Jorge Mauricio, (2014), *Históricas operaciones militares*, Ejército, pág. 82

guerrilleros más, incursionaron cuarenta y ocho unidades de fuerzas especiales quienes hicieron el levantamiento del cuerpo y recolectaron tres computadores, dos discos duros y cuatro memorias USB, que a la postre no pudieron ser empleadas como prueba judicial contra la organización. La Corte Suprema de Justicia se pronunció en el proceso 29.877²²³ y concluyó:

Dado que no se respetó el Convenio de Cooperación Judicial suscrito con el Ecuador —que ninguna salvedad trae respecto del tipo de delitos que comprende—, ni lo que la normatividad interna colombiana consagra al respecto, esa recolección de evidencia ocurrida en el curso de la Operación Fénix se reputa completamente ilegal, en seguimiento, por lo demás, de amplia, reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Constitucional y ésta corporación.

Con fecha del 7 de septiembre del 2009, el Comando General de las Fuerzas Militares emitió la Disposición 056 mediante la cual se dieron a conocer las normas de derecho operacional aceptadas por el mando y de obligatorio cumplimiento para todas las fuerzas, con adhesión a las leyes de la guerra y a la subordinación al poder civil de la nación, a fin de adecuar su comportamiento a la ley y evitar el daño moral que las acciones irresponsables de algunos de sus miembros, bajo la denominación de “falsos positivos”, entendida como la ejecución extrajudicial de civiles, causaron al Estado y a las Fuerzas Militares.

El comandante del Ejército Nacional hace público el documento “La hoja de ruta del Ejército Nacional”, y señala que es la orientación del actuar de los hombres y mujeres de la institución, y cómo su contenido expone generalidades sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, los

²²³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Proceso 29.877 de 01 de agosto de 2011

aportes del Ejército en tales materias y los desafíos que enfrenta la institución en la actualidad.

Cabe señalar que en el documento se reconoce la evolución del concepto de *soberanía* y manifiesta que en “el actual contexto internacional, la complejidad de los problemas mundiales y las amenazas diferentes al ataque militar contra el territorio, suponen cambios trascendentales de la noción básica de soberanía”²²⁴.

Acepta e incorpora en su doctrina la intervención militar en misiones de paz internacional al señalar:

Para proteger a la humanidad de la comisión de los crímenes más atroces, en caso que las autoridades nacionales no protejan su población, la comunidad internacional puede recurrir a un conjunto de medidas colectivas, en primera medida pacífica, y cuando los mecanismos alternativos mencionados en el ítem anterior resultan inadecuados, podrá recurrirse a medidas no pacíficas²²⁵.

Con esto hace referencia a que el crimen de agresión no ha sido definido y, por tanto, queda pendiente de su debate para aplicación²²⁶. Por último, trata de la complementariedad como principio de aplicación de la Corte Penal Internacional en evidente equivocación frente a su condición de justicia subsidiaria²²⁷. La “Hoja de ruta”, en una posición novedosa que el Gobierno considera casi retadora, respecto no solo al Ejército sino a las Fuerzas Militares en general, define al Ejército como una institución

²²⁴ EJÉRCITO NACIONAL, (2009), Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario: Hoja de Ruta del Ejército Nacional, Publicaciones del Ejército, pág. 31.

²²⁵ *Ibidem*, págs. 32, 33, 303.

²²⁶ *Ibidem*, pág. 73.

²²⁷ *Ibidem*, pág. 74

profesional²²⁸ y acepta el derecho de deliberar por parte de los militares al manifestar:

El principio de la democracia participativa acogido por la constitución supone un proceso político abierto y libre, a cuya realización deben contribuir también los particulares como todas las autoridades, incluida la fuerza pública,²²⁹ y también reconoce el carácter asimétrico de la guerra interna que los ocupa²³⁰.

En su contenido reconoce la realización de conductas punibles por sus miembros al señalar que “existen casos aislados en los niveles bajos del mando, en que se han presentado violaciones e infracciones a los mencionados marcos jurídicos”²³¹.

También reconoce la irregular participación de la fuerza en el conflicto interno cuando manifiesta que ella debía darse,

siempre y cuando se desborden las capacidades de la fuerza policial que es, en primera instancia, la llamada a atender este tipo de situaciones, [que] se debe hacer una diferenciación de las amenazas que deben combatir las fuerzas militares de las que enfrenta la policía nacional, sin que la separación funcional, legal, administrativa e institucional que se pretenden, perjudique la cooperación y coordinación puntual de ambas entidades en el cumplimiento de tareas superiores y excepcionales de interés nacional, [y que] lo ideal es impedir que se polaricen las conductas de los militares, para evitar la percepción negativa de las incompatibilidades que predispone a una acción destructiva, ya que se genera la mentalidad de ganar la guerra ante cualquiera que se oponga, confirmando nuestra teoría de la necesidad de mejorar la educación psico-

²²⁸ Ibídem, pág. 83

²²⁹ Ibídem, pág. 164

²³⁰ Ibídem, pág. 272.

²³¹ Ibídem, pág. 81

lógica de los hombres y replantear el contenido de los manuales y reglamentos de operaciones²³².

La “Hoja de ruta” contempla la realización de una propuesta de nuevas funciones para el Ejército que garanticen el pleno cumplimiento de la normatividad vigente²³³, la cual, a pesar de la intención, despierta serios interrogantes si se tiene en cuenta que se considera aún al Ejército como salvador de la nación cuando indica:

Desarrolla la política de seguridad y defensa de manera coordinada con la demás instituciones estatales dirigidas por el Presidente de la República; al tiempo, consolida y preserva la legitimidad de los elementos del Estado de Derecho como son, la división de poderes, la legalidad en la administración, el imperio de la ley, el respeto por los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario,²³⁴ o cuando a pesar de señalar que el terrorismo no tiene una definición clara, lo señala como una de las amenazas que está obligado a atender²³⁵.

Además, la nueva justificación con respecto a la participación sin el lleno de los requisitos constitucionales del Ejército en el conflicto interno determina:

Las solicitudes de apoyo de la Policía Nacional serán conocidas por un Grupo Asesor, presidido por el Comandante General de las Fuerza Militares, para autorizar el nivel de uso de la fuerza con respecto de tales solicitudes, de conformidad con el nivel de hostilidad y organización de las agrupaciones ilegales²³⁶.

²³² Ibídem, págs. 195, 273 y 261.

²³³ Ibídem, pág. 258.

²³⁴ Ibídem, pág. 257.

²³⁵ Ibídem, págs. 274 y 276.

²³⁶ Ibídem, pág. 285.

El CSSDN fue incluido dentro de la organización del Ministerio de Defensa²³⁷, y luego por Decreto 4748 de 2010 pasó a denominarse “Consejo de Seguridad Nacional”²³⁸. Con el Decreto 469 de 2015 se realizó su última modificación, en la cual se determinan como sus miembros al presidente de la República, los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa, Hacienda, el jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, el ministro consejero para el posconflicto, el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el comandante general de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional²³⁹.

Juan Manuel Santos ganó la presidencia con la propuesta de continuar el desarrollo de la política de seguridad democrática del gobierno anterior, y tras recibir las Fuerzas Armadas y policiales algunos golpes militares tácticos con la muerte de más de cincuenta agentes del Estado, pasó a la ofensiva golpeando las estructuras subversivas y dando muerte al jefe militar de la organización Víctor J. Suárez alias Mono Jojoy, en septiembre del 2010. Santos ofreció tratamiento humanitario y justo para las FARC si deciden su rendición, pero el cabecilla principal, Guillermo León Sáenz Vargas alias Alfonso Cano, respondió que no se rendirían y continuarían la lucha armada. El 4 de noviembre del 2011 el Gobierno nacional informó acerca de la muerte del jefe guerrillero Guillermo León Sáenz Vargas alias Alfonso Cano en el Cauca, en ejecución de la Operación Odiseo, hecho ante el cual asumió la jefatura de dicha guerrilla alias Timoleón Jiménez o Timochenko, quien a la postre tomó la decisión de dar continuidad a los diálogos exploratorios con el Gobierno nacional para la búsqueda de un acuerdo de paz.

²³⁷ DECRETO 1512 DE 11 DE AGOSTO DE 2000, ART. 6.

²³⁸ DECRETO 4748 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010, ART. 3.

²³⁹ DECRETO 469 DE 17 DE MARZO DE 2015, ART. 1.

Al reconocer que durante el gobierno anterior se produjo un debilitamiento significativo de la estructura y la capacidad militar de las FARC, a partir de la aceptación por parte del Gobierno de que existe un conflicto armado y que los subversivos tienen carácter político, se inició una fase exploratoria de negociaciones desde el 23 de febrero hasta el 26 de agosto del 2012 cuyo resultado generó una agenda del temario con las reglas, la composición de negociadores y veedores o acompañantes, etc., que se denominó “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que fue discutida en La Habana hasta el 24 de agosto del 2016 y firmada en acto solemne en Cartagena por el presidente Santos y alias Timochenko ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

Con el convencimiento de que la negociación política con los grupos armados podía acercarnos a la paz, pero no significaba alcanzarla, el Gobierno asumió las negociaciones con la premisa según la cual es más fácil y menos costoso vivir en un país en paz relativa que dentro de la guerra, de manera que así le presentó al pueblo los acuerdos bajo la disyuntiva de paz o guerra, requiriendo por aquel su aceptación incondicional de modo que debía ser necesario realizar el sacrificio económico para atender sus costos. Las premisas sobre las cuales discutió el Gobierno ante el pueblo la necesidad de lograr unos acuerdos fueron: el nivel de la violencia, los daños a las poblaciones y las incidencias del gasto militar en la economía, que se señalan en la tabla 7.

Las cifras de acciones violentas por año presentadas por el Centro de Memoria Histórica respaldan la actitud del Gobierno de adelantar las negociaciones, pues a pesar del incremento de la

Fuerza Armada y de los presupuestos para defensa los ataques subversivos persistieron.

Tabla 7. Cifras de acciones violentas, por característica

Acción	FARC	ELN	EPL	M1-9	CGSB	CNG	RF	DM19	QL	ERP	FUPAG	NE	Total
Ataque	717	228	55	15	34	12	4	4	4	2	-	71	1.146
Toma	389	95	33	33	28	7	2	1	1	-	1	19	609
Total	1,106	323	88	48	62	19	6	5	5	2	1	90	1755

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013), CNMH-IEPRI, Bogotá, Base de datos "IncurSIONes guerrilleras en cabeceras municipales y centros poblados 1965-2013", CNMH-IEPRI, 2016.

Durante el periodo, las incursiones a cabeceras municipales y poblaciones se realizaron como se expone en la tabla 8.

Tabla 8. Cifras de acciones violentas, por año

Año	Número	Año	Número	Año	Número	Año	Número	Año	Número
1965	6	1975	8	1985	42	1995	39	2005	40
1966	2	1976	10	1986	19	1996	84	2006	15
1967	3	1977	11	1987	84	1997	104	2007	10
1968	5	1978	13	1988	93	1998	119	2008	5
1969	8	1979	18	1989	58	1999	122	2009	19
1970	4	1980	11	1990	74	2000	91	2010	17
1971	7	1981	25	1991	106	2001	49	2011	38
1972	12	1982	16	1992	36	2002	95	2012	38
1973	3	1983	37	1993	12	2003	30	2013	21
1974	3	1984	45	1994	34	2014	14		

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013), CNMH-IEPRI, Bogotá, Base de datos "IncurSIONes guerrilleras en cabeceras municipales y centros poblados 1965-2013", CNMH-IEPRI, 2016.

Estos datos permiten verificar cómo incide en la economía nacional la acción de la subversión, de modo que se puede establecer que durante la fase de guerra de guerrillas, desde 1965 hasta 1982, el promedio de gasto del PIB en defensa fue del 2,10 %, con su gasto histórico más bajo durante el gobierno del

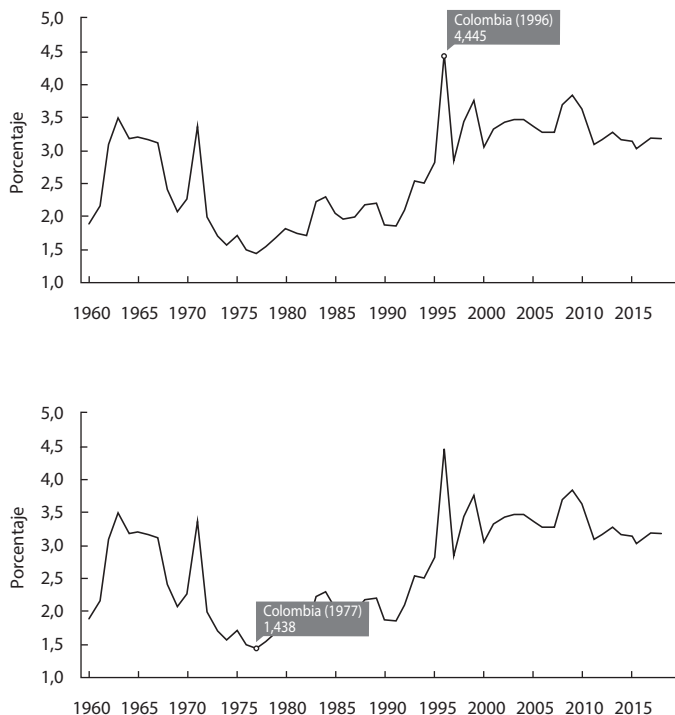
Tabla 9. Cifras de acciones violentas, por gastos

Año	Gasto militar % PIB	Año	Gasto militar % PIB	Año	Gasto militar % PIB	Año	Gasto militar % PIB	Año	Gasto militar % PIB
1960	1,8797	1972	1,9671	1984	2,3258	1996	4,4453	2008	3,7097
1961	2,1373	1973	1,6902	1985	2,0540	1997	2,8017	2009	3,8632
1962	3,0913	1974	1,5757	1986	1,9446	1998	3,4409	2010	3,6311
1963	3,5132	1975	1,7402	1987	1,9831	1999	3,7627	2011	3,0727
1964	3,1708	1976	1,4936	1988	2,1992	2000	3,0316	2012	3,1667
1965	3,1909	1977	1,4384	1989	2,1881	2001	3,3238	2013	3,2888
1966	3,1652	1978	1,5503	1990	2,2097	2002	3,4171	2014	3,1322
1967	3,1173	1979	1,6739	1991	2,2101	2003	3,4639	2015	3,1308
1968	2,3853	1980	1,8301	1992	2,4973	2004	3,4650	2016	3,3869
1969	2,0549	1981	1,7551	1993	3,0069	2005	3,3528		
1970	2,2595	1982	1,7138	1994	2,5084	2006	3,2761		
1971	3,3742	1983	2,2199	1995	2,8316	2007	3,2667		

Fuente: Banco Mundial, BIRF AIF (2017, Octubre 11) Datos-Indicadores. Disponible en: <https://datos.bancomundial.org/indicador>

presidente Alfonso López Michelsen. El gasto se vio incrementado con la entrada en escena del narcotráfico y la adopción de todas las formas de lucha por la subversión en el periodo de 1982 a 1996, lo que obligó a un gasto del 2,46 % con el histórico más alto justamente en 1996, con el presidente Ernesto Samper Pizano. Debido al incremento del poder armado de la subversión y su paso a la guerra de movimientos y grandes golpes militares entre 1996 y el 2010, el gasto militar debió ser incrementado nuevamente llegando a un promedio de 3,41 %, con el cual fue posible hacer retornar la guerra subversiva a la fase de guerrillas. Finalmente, el gasto militar no retornó a los niveles que imponía la guerra de guerrillas porque se entró en los procesos de diálogo con relativa disminución de la violencia, lo que facilitó alcanzar un nivel de estabilización del gasto en un promedio de 3,19 %.

Figura 1. Gráficas del gasto militar (% del PIB) desde 1960 hasta el 2016. Punto más bajo y punto más alto.



Fuente: Banco Mundial, BIRF AIF (2017, Octubre 11) Datos-Indicadores. Disponible en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018&locations=-CO&start=1960&view=chart>

El presidente decidió entonces presentar el acuerdo a una re-referendación por el pueblo mediante plebiscito convocado para el 2 de octubre del 2016 con la pregunta “¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?”. El resultado fue de 6 431 376 por el “No”, y 6 377 482 por el “Sí”, lo cual demostró que el pueblo continuaba

desconfiando de las FARC y el tratamiento pactado con el Gobierno no era aceptable. Derrotado en votación, el presidente pidió a los opositores expresar sus exigencias para modificar el acuerdo, y después de un breve tiempo de discusión, anunció que cumplidas las exigencias de los opositores y modificado el acuerdo, se declaraba definitivo e inmodificable su texto, firmado nuevamente en el Teatro Colón y refrendado por vía parlamentaria el 29 de noviembre.

La apreciación de las FARC, según la cual con su poder económico estaba lista para cambiar la estrategia de alcanzar el poder, nos llevó en este periodo a una situación nueva de triunfos militares y fracasos políticos que permiten concluir:

- El grupo subversivo FARC consideró que, con su poder económico, alcanzado mediante el narcotráfico y el secuestro, sumados a una organización militar de más de 20 000 hombres, había colocado al Estado en condición de igualdad y se dispuso a dialogar imponiendo condiciones de vencedor sin haber alcanzado la victoria militar.
- La transformación del Ejército se produjo al aprender de los errores e involucrar a la totalidad de las Fuerzas Militares, en un esfuerzo conjunto que tuvo como principal ingrediente la presencia del poder aéreo que desequilibró estratégicamente la guerra.
- Fracasados los diálogos en San Vicente del Caguán por la prepotencia de las FARC, quienes pretendieron pasar sin más preámbulos a gobernar fueron objeto de una ofensiva militar exitosa que destruyó el poderío militar subversivo, de modo que las guerrillas debieron volver a las etapas iniciales de la guerra insurgente.

- El acuerdo humanitario para rescatar secuestrados a cambio de devolver delincuentes fue una claudicación del Estado de derecho ante la violencia, con la acomodada visión internacional en la apreciación equivalente a que es mejor aceptar la vergüenza y evitar una sola muerte.
- El delito político que no tenía asidero jurídico porque no existía una oposición a un gobierno despótico o ilegítimo, volvió a ser aceptado para dar cabida a las exigencias de la subversión, lo que propició la posterior apertura de diálogos en La Habana, firmados por el Gobierno pero no aceptados por la mayoría de la población.
- Se ha pretendido convencer a los colombianos de que en este periodo, especialmente en el gobierno de Álvaro Uribe, se produjo el mayor crecimiento histórico de las Fuerzas Militares, constituyéndose esto en un gasto inusitado e injusto, sin atender a que precisamente la necesidad de terminar la guerra hacía necesario tal incremento de fuerza. En el periodo 1901-1902, durante la Guerra de los Mil Días, el Ejército pasó de 5000 efectivos a 50 000, que representaron un incremento del 1000%, mientras en el periodo 2002-2008 se pasó de 295 000 a 416 000 miembros, lo que representa un incremento del 141 %, apenas justo con la necesidad del periodo.

El inicio de la construcción de un nuevo Estado

El Gobierno nacional expidió los decretos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 de 2016, y 150 de 2017, por los cuales se establecieron zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y los puntos transitorios de normalización (PTN), cuyo objeto es “garantizar el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas (CFHBD-DA)”, e “iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social, de acuerdo con sus intereses.

Con las FARC en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), la implementación de los acuerdos de paz a normalizar por parte del Congreso se realizó vía *fast track* o “vía rápida de trámite”, con la aprobación de la Corte Constitucional que declaró exequible el Acto Legislativo N.º 1 de 2016, mediante el cual se faculta la reducción del número de debates requeridos para la aprobación de leyes y de reformas constitucionales. Los temas álgidos que reforman la Constitución como

son la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Ley de Amnistía se gestionan entonces con tres y no con ocho debates, sin realizar una discusión pormenorizada de los proyectos. Por esta vía se aprobaron los decretos que se relacionan en la tabla 10.

Tabla 10. Aprobación de normatividad, vía fast track

D. 902	Acceso y formalización (tierras)
D. 896	Sustitución de cultivos ilícitos
D. 893	Programas de desarrollo con enfoque territorial
D.892	Educación rural
D. 884	Plan de electrificación rural
D. 882	Docencia en zonas golpeadas por el conflicto
D. 671	Desvinculación de menores
D. 899	Reincorporación económica y social de las FARC
D. 901	Prórroga de las zonas veredales
D. 897	Agencia de reincorporación y normalización
D. 894	Acceso a los empleos públicos
D. 883	Incentivos tributarios a empresas que construyan infraestructura rural
D. 898	Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía
D. 889	Corte Constitucional podrá concentrarse en la paz
D. 900	Suspensión de ordenes de captura contra las FARC
D. 888	Unidad delegada para el posconflicto en la Contraloría
D. 903	Inventario definitivo de los bienes de las FARC
D. 154	Comisión Nacional de Garantías de seguridad
D. 885	Consejo Nacional de Paz-Reconciliación y Convivencia
D. 895	Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política

Fuente: elaboración propia a partir de decretos publicados.

Sin embargo, el 17 de mayo del 2017 la Corte Constitucional²⁴⁰ declaró inexecutable los literales h y j del artículo 1 del Acto Legislativo para la Paz, por violación al debido proceso: 1) que los proyectos solo podrán modificarse con el aval del Gobierno, pues no es posible suprimir la competencia deliberativa y deci-

²⁴⁰ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-332 de 2017.

soria del Congreso; y 2) que las votaciones realizadas en bloque no son democráticas pues excluyen la deliberación necesaria.

El Gobierno demandó la nulidad del fallo constitucional argumentando²⁴¹ que: 1) no habría mayoría para tomar decisiones, pues uno de los magistrados debía haberse declarado impedido para fallar; 2) la sentencia es incongruente en relación con la potestad del Congreso para incluir modificaciones contrarias al contenido del acuerdo final; 3) con la sentencia hubo un cambio de precedente porque venía considerando que las votaciones en bloque y restringir al Gobierno para introducir modificaciones a un proyecto de ley, en determinadas materias, no viciaba la ley ni sustituía la función legislativa; y 4) no habría existido deliberación suficiente porque uno de los magistrados votantes se posesionó solo un día antes de fallarse la demanda.

Los acuerdos de paz obligaron al Gobierno a realizar modificaciones a la Constitución Política, de manera que, en consecuencia, produjo los actos legislativos²⁴² que se relacionan a continuación:

- *Acto Legislativo 1 de 4 de abril de 2017*. En cuyo artículo transitorio 1 determina la conformación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de

²⁴¹ NASSAR Hassan, 16-jun-2017, @HassNassarpic.twitter.com/pbn-h3VcLBF

²⁴² PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Acto Legislativo 1 de 4 de abril de 2017, <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2001%20DE%204%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf>

reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición; y sobre la extradición, la participación en política, las normas aplicables a los miembros de la Fuerza Pública y la prevalencia del acuerdo.

- *Acto Legislativo 2 de 11 de mayo de 2017.* A este adiciona un artículo transitorio por el cual define que los contenidos del acuerdo final tendrán carácter obligatorio y tanto las instituciones como las autoridades del Estado las deben cumplir de buena fe.
- *Acto Legislativo 3 de 23 de mayo de 2017.* Este autoriza a: 1) reconocer la personería jurídica del partido que surja de las FARC-EP; 2) otorgar al partido iguales derechos y obligaciones que a los demás; 3) para su funcionamiento y hasta el 19 de julio del 2026 recibe financiación así: a) el partido recibirá una suma promedio a la de los demás partidos; b) recibirá el 7 % anual para el funcionamiento del Centro de Pensamiento y Formación Política; c) se proporcionará financiación estatal al candidato presidencial del partido, el 10 % a las campañas para el Senado, y la financiación no estará sujeta a devolución; d) de dará acceso igualitario a los medios de comunicación; e) podrán inscribir candidatos y listas; y d) pueden nombrar un delegado en la Comisión Nacional Electoral.

Mediante el Acto Legislativo 4 en curso, el proyecto contiene en su disposición la prohibición de carácter constitucional de constituir cualquier forma de organización ilegal cuya finalidad sea disputar, en todo o en parte, el monopolio de la fuerza del Estado. Sin embargo, deja en completa protección el derecho de rebelión.

Las Fuerzas Militares, por medio de su Comando General, emitió el “Manual de Derecho Operacional para las Fuerzas Milita-

res Manual FFMM 3-41”, que derogó la Disposición 056 de 2009, explicando que:

Las Fuerzas Militares en Colombia, continúan reconociendo la importancia del asesoramiento jurídico en las operaciones militares, escenarios donde confuyen diferentes obligaciones legales del orden nacional e internacional.

Consecuente con lo anterior, la segunda edición del Manual de Derecho Operacional 3-41 de 2009, hace una exposición metódica, detallada y actualizada de la normatividad aplicable a las operaciones militares, esto es, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), basados en el Derecho Internacional Público, fundamentos legales del Derecho Operacional en que se basa el manual.

Consecuente con la posición asumida por el alto mando militar, el comandante del Ejército, en agosto del 2016, dio un giro sin precedentes en la historia militar del país y puso en conocimiento general la denominada “Doctrina Damasco”, cuyo contenido, según sus autores, vela por el respeto de los Derechos Humanos (DD. HH.), el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la Constitución Política de Colombia, las leyes y demás regulaciones aplicables a la Fuerza (MFE 1.0 Ejército, pág. 3).

Esta doctrina constituye un triunfo del derecho militar desde el interior del Ejército, con el cual, sin contrariar la función principal de cualquier ejército del mundo, adecúa su misión a la disponibilidad de las normas constitucionales y legales en cuanto a la orientación de la fuerza militar, sin dejar de contemplar que su deber continuo ha de ser la derrota de las amenazas, pero enfocando la conversión de las dinámicas de los conflictos hacia procesos de cambio constructivos y positivos. Vale decir, más que antes, que los militares se disponen en absoluta neu-

tralidad ante el soberano (el pueblo) y ante el poder público, facilitando el entendimiento o el consenso, de modo que se aleje toda condición de inestabilidad o de violencia.

Las demás partes relevantes no actúan en consonancia, pues las FARC, incorporadas a la vida política del país toman para su partido la misma denominación que sus disidentes, y tanto los unos como los otros manifiestan públicamente que la organización FARC no ha desaparecido (“que están más vivos que nunca”), sin diferenciar una organización de la otra. Mientras tanto en el gobierno del Estado se descubren casos de corrupción por financiación de campañas tanto a presidencia como para congresistas por parte de empresas privadas comprometidas en negocios de contratos estatales multimillonarios que tampoco tienen la sanción judicial por estar involucrados también los jueces y los magistrados, puestos en sus cargos como fichas del juego corrupto de la política para asegurar la impunidad de sus actos.

El contenido de los acuerdos para el logro de la paz señala el compromiso de los miembros del grupo subversivo FARC de convertirse en un movimiento político mediante el cual les sea posible acceder al poder del Estado dentro de la lucha democrática, para lo cual debían previamente comparecer ante el Tribunal de Justicia Especial para la Paz que definiría su situación jurídica y proporcionaría con ello el aval para la participación en política.

La Jurisdicción Especial para la Paz se creó el 23 de septiembre del 2015 con competencia temporal respecto a conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final por participantes directos o indirectos, combatientes que dejen las armas,

agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto, los inmersos en financiación o colaboración con paramilitares, los terceros no parte de grupos pero en todo caso partícipes indirectos en el conflicto y en delitos en el contexto o que hayan contribuido a la comisión de delitos en el marco del conflicto, con los siguientes objetivos, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz²⁴³:

- Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia.
- Ofrecer verdad a la sociedad colombiana.
- Contribuir a la reparación de las víctimas.
- Contribuir a luchar contra la impunidad.
- Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, con relación a los hechos cometidos en el contexto y en razón de este.
- Contribuir al logro de una paz estable y duradera.

Con competencia material sobre:

los delitos no amnistiables ni indultables, como los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento

²⁴³ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, ABC Jurisdicción especial para la paz, <http://www.altocomisionadopalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/abc-jurisdiccion-especial-paz.html>

de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, en especial de los casos más graves y representativos.

En materia de la concesión de indultos y amnistías se regirá por las siguientes reglas:

De conformidad con el DIH “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible”.

La Constitución únicamente permite otorgar amnistías o indultos por el delito político de rebelión y otros delitos conexos con éste.

Una Ley de Amnistía determinará de manera clara los delitos amnistiables e indultables y los criterios de conexidad. En la Ley de Amnistía se determinarán las conductas tipificadas en la legislación nacional que no serán amnistiables.

La conexidad con el delito político comprenderá dos tipos de criterios:

Criterios de inclusión:

-Delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado.

-Delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente.

-Conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión.

Criterios de exclusión:

-No serán objeto de amnistía ni indulto, ni de tratamientos equivalentes, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia

sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

-Tampoco son amnistiables o indultables los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión.

A partir del 15 de agosto del 2017, las zonas veredales transitorias de normalización pasaron a ser espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), a efectos de continuar el proceso de reincorporación de los exmiembros de las FARC-EP²⁴⁴.

Con fecha del 26 de septiembre del 2017 se conoció la conformación de los Tribunales para la Justicia Especial para la Paz²⁴⁵, tal como se expone en la tabla 11.

Tabla 11. Conformación de los tribunales para la Justicia Especial para la Paz

Titulares del Tribunal para la Paz	Salas de Justicia	Suplentes para el Tribunal de Paz	Suplentes para las Salas de Justicia
Rodolfo Arango	Xiomara Balanta Moreno	Corina Duque Ayala	Gloria Marcela Abadía
Jesús Ángel Bobadilla Moreno	Heidi Baldosea Perea	José Edwin Hinestroza Palacios	Tania Gicela Bolaños Enríquez
Eduardo Cifuentes Muñoz	Juan José Cantillo	Teresa Jiménez López	Gina Cabarcas Macia
Zoraida Anyul Chalela	Sandra Castro Ospina	Manuel Lasso Lozano	Sandra Rocío Hernández Cruz
Sandra Rocío Gamboa	Catalina Díaz Gómez	Juan Ramón Martínez Vargas	Carlos Alberto Suárez López

(Continúa)

²⁴⁴ DECRETO 1274 DE 28 DE JULIO DE 2017.

²⁴⁵ EL ESPECTADOR, Esta es la lista de los magistrados para la JEP, Redacción judicial 26-Sep-2017, <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/esta-es-la-lista-de-los-magistrados-para-la-jep-articulo-715064>

Titulares del Tribunal para la Paz	Salas de Justicia	Suplentes para el Tribunal de Paz	Suplentes para las Salas de Justicia
Ana Caterina Heyck	Pedro Elías días Romero	Rafael Arturo Prieto Sanjuan	Diana María Vega Luna
Reinere de los Ángeles Jaramillo	Mauricio García Cadena		
Mirtha Patricia Linares Prieto	Marcela Giraldo Muñoz		
Claudia López Díaz	Iván González Amado		
Adolfo Murillo Granados	Nadiezhdha Natazha Henríquez		
Ana Manuela Ochoa Arias	José Miller Hormiga		
Alejandro Ramelli	Florentina Izquierdo Torres		
Yesid Reyes Alvarado	Julieta Lemaitre Ripoli		
Gloria Amparo Rodríguez	Pedro Julio Mahecha Ávila		
Danilo Rojas Betancourth	Oscar Javier Parra Vera		
Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez	Lily Andrea Rueda Guzmán		
Raúl Eduardo Sánchez	Claudia Saldaña Montoya		
Camilo Andrés Suárez	Alexandra Sandoval Mantilla		
María del Pilar Valencia García			
Roberto Carlos Vidal López			

Fuente: elaboración de de Daniel J. Vásquez H. con base en datos tomados del periódico *El Espectador*.

Aun cuando el Tribunal de la JEP no había sido seleccionado, eludiendo el ejercicio de su competencia material, el presiden-

te, por vía administrativa, concedió indulto a los mandos subversivos²⁴⁶, tal como lo informó la Presidencia:

Con la firma de este decreto, 13 días después de completada la entrega de las armas individuales de los guerrilleros, en total 7.400 miembros de las Farc han resuelto su situación jurídica, de los cuales 6.005 han sido amnistiados por decreto y 1.400 por la vía judicial.

El decreto firmado este lunes es el tercero de aplicación de la amnistía de iure **(exclusivamente para delitos políticos y conexos como porte ilegal de armas y de uniformes militares, sedición y asonada).**

Esta acción apresurada del Gobierno para asegurar a las FARC el cumplimiento de compromisos dejó abierto otro campo de confrontación con los amnistiados, porque consideran que ya no tienen ninguna obligación de enfrentar a la justicia, puesto que su situación jurídica se entiende resuelta, hecho que no comparten los ciudadanos que votaron “No” en la refrendación de los acuerdos, los miembros de la comunidad internacional y los que esperan que quienes cometieron crímenes paguen al menos una pena mínima.

Mientras un grupo de antiguos combatientes asumen su nuevo rol como actores políticos con un partido que denominaron “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”, algunos de ellos, calculados entre cuatrocientos y mil, conforman gru-

²⁴⁶ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Presidente Santos firmó decreto que otorga amnistía a 3.252 miembros de las Farc por delitos políticos, Bogotá, lunes, 10 de julio de 2017, <http://es.presidencia.gov.co/noticia/170710-Presidente-Santos-firmo-decreto-que-otorga-amnistia-a-3252-miembros-de-las-Farc-por-delitos-politicos>

pos armados denominados “disidencias” e identificados como “FARC-EP”.

Figura 2. Grupos disidentes de las FARC, presuntos y confirmados en el 2017.

Facción disidente confirmada	Unidades de las FARC involucradas en la fracción	Líder	Áreas de operación	Tamaño estimado
Frente Primero	1, 16 y Acacio y Medina	Iván Mordisco	Guaviare, Vaupés, Guainía, Vichada, sureste del Meta y Caquetá	300-400
Frente Séptimo	7, 14 y 62	Gentil Duarte	Sur del Meta, Caquetá, noroeste del Guaviare	70-100
Frente 40	40	Calarcá	Occidente del Meta	40-60
Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP)	Columna móvil Daniel Aldana	David	Nariño	250-350
Ejército Patria Libre	6	Previamente Simón el negro, asesinado en junio de 2017	Cauca	N/A
Columna móvil Jacobo Arenas	Columna móvil Jacobo Arenas	Pija	Norte del Cauca	80-100
Frente 29	29	Previamente Vaca, asesinado por sus propias tropas en agosto	Nariño	N/A

(Continúa)

Facción disidente confirmada	Unidades de las FARC involucradas en la fracción	Líder	Áreas de operación	Tamaño estimado
Frente Che Guevara	ELN y 29	N/A	Nariño	N/A
Grupo Guacho	Columna móvil Daniel Aldana	Guacho	Tumaco	N/A
Previamente confirmada, ahora presunta	Frente	Líder	Área de operación	Tamaño estimado
Frente 32	32	Caballo	Putumayo	N/A
Columna móvil Miller Perdomo	CMMP	N/A	Norte del Cauca	N/A
Frente 17	17	Benjamín	Huila	10
Columna móvil Teofilo Forero	CMTF	N/A	Norte del Caquetá	N/A
Reportada pero no confirmada	Frente	Líder	Área de operación	Tamaño estimado
Frente 57	57	N/A	Norte del Chocó	N/A
Frente 21	21	N/A	Tolima	N/A
Frente 48	48	N/A	Sur del Putumayo	N/A
Frente Tercero	3	N/A	Norte del Cauca	N/A

Fuente: Crisis Group, 2017. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace>

Sin el cumplimiento de los compromisos ante un Gobierno con una débil imagen ante los ciudadanos, los recién llegados asumieron su capacidad para cogobernar, exigiendo la aprobación sin discusiones ni condicionamientos de lo acordado según su interpretación y conveniencia, al punto de convertir a las FARC desmovilizadas en zonas veredales autorizadas por un término

de seis meses en intocables, fuera del control del Estado, pero gozando de todos sus beneficios con extensión de su vigencia por término indefinido.

Tampoco permitieron las FARC perder su poder sicológico y de dominación sobre las masas campesinas e indígenas, controladas con milicias denominadas “guardias campesinas e indígenas” que, al mismo tiempo, desconocen la autoridad de la Fuerza Pública, a la que de facto reemplazan en acto de deslegitimación del gobierno democrático del Estado.

Conclusión general

Legislar es la tarea del poder Legislativo y mucho se ha dicho acerca de la gran cantidad de normas que en el país se expiden para la administración de la justicia, al punto que se cree que existen leyes para todo. Asimismo, se critica una legislación que pareciera corresponder a un país en situación de paz absoluta, mientras en realidad se han vivido doscientos años de permanente conflicto. De esta manera, mientras la política se judicializa y la misma Corte Constitucional ha manifestado que en materia penal el país se ha constitucionalizado, se puede observar, sin embargo, el carácter reactivo de los legisladores en la elaboración de las normas, evidente cuando a medida que cambian las modalidades delictivas lo hace también la legislación con la aparición de nuevos tipos penales, la variación de los procedimientos y las sanciones y con la velocidad que le imponen los actores de la violencia, lo cual crea cada día nuevas dificultades a la administración de la justicia.

Debe reconocerse, además, que el legislador no tiene discrecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales porque la Constitución le impone límites, ya que debe respetar los derechos. Sabemos también que la teoría no es aplicable a la realidad, por lo que el legislador está

obligado a generar condiciones que hagan posible al Estado encontrar caminos claros hacia la seguridad, aun cuando las organizaciones subversivas y de delincuencia organizada sean muy flexibles en sus acciones.

La violencia guerrillera se acepta incluso sin la existencia de un régimen opresor (delito político), a lo que se suma la facilidad de adaptar su paso al narcotráfico (delito común) y de allí al terrorismo (delito de lesa humanidad), en pretensión de demostrar que se abandona una práctica para retornar a la violencia guerrillera, lo que genera confusión entre el Gobierno y la justicia cuando se intenta implementar acuerdos de paz y se sitúa así al Estado ante la opinión pública en situación de opositor al diálogo y de agresor en lugar de agredido.

Puede decirse que el Ejecutivo no ha contado con políticas de Estado para acabar con la violencia, pues estas han provenido de las propias Fuerzas Militares cuando evidenciaron que los grupos armados ilegales ya no eran solo una amenaza, sino que habían pasado a ser un enemigo capaz de alcanzar el poder de manera violenta. La solución de la confrontación armada, que es una consecuencia de antagonismos políticos, no encuentra solución entre los ejecutores de la política que permanecen en sus diferencias políticas e ideológicas, con pretensión de alcanzar el dominio y no de compartirlo mediante el empleo de los mecanismos democráticos.

La política de seguridad democrática fue una creación del Ejecutivo en consenso con sus generales, que si bien —según la jurisprudencia de la Corte Constitucional— se determina como una clara participación militar en política, no es óbice para reconocer que generó los mejores resultados en la reducción de la violencia de los últimos cincuenta años. Entonces, también

vale decir que las políticas de los gobernantes no han podido sustituir las operaciones militares como medio para terminar la guerra, por lo que la milicia se ha constituido en juez y parte.

Human Rights Watch, el 18 de enero de 2018, manifiesta que “el acuerdo promueve más la impunidad que la justicia”²⁴⁷, en una crítica que se suma a lo expresado por los opositores políticos al Gobierno y por una parte de la población que considera injusto y abusivo conceder indulto a los exsubversivos por crímenes de lesa humanidad, además de otorgarles facilidades para integrarse al Gobierno sin el cumplimiento de los compromisos pactados y sin participar ni ganar democráticamente tal distinción.

Finalmente, debemos manifestar que en coincidencia con nuestro planteamiento en esta investigación, el Comando del Ejército en la “Hoja de ruta” se ha expresado sobre su misión en la defensa del pueblo²⁴⁸, la cual debe hacerse manteniéndose lejos de la rama política del poder, pero siempre subordinado al poder público.

La tabla 12 permite ver, en forma resumida, la relación existente entre la participación militar en las decisiones políticas del Estado y los resultados operacionales.

²⁴⁷ EL TIEMPO, 18-ENE-2018 www.elespectador.com/noticias.

²⁴⁸ *Ibíd*em, pág. 266.

Tabla 12. Participación militar en decisiones políticas del Estado vs. resultados operacionales

Año	Organismo y funcionarios	Actividad	Gasto militar % PIB	Situación
1951 1965	C.S.D.N Presidente Ministro de Guerra EM General	Preside Preside (R) Funciones políticas Órgano de mando	2.8	1951-1953 Guerra de Corea 1953 Acuerdo paz guerrilla liberal 1953-1960 Conformación enclaves comunistas 1964 Inicio de la guerra de guerrillas
1965 1971	C.S.D.N Presidente Ministro de Defensa Comandante General	Preside Preside (R) Elabora APEN-PG-PDSI	2.7	Desarrollo de la guerra de guerrillas.
1971 1975	C.S.D.N Presidente JEM Conjunto	Preside aprueba documentos Secretario-prepara documentos	1.7	Se hace visible el narcotráfico. Se presenta acumulación de medios por las guerrillas.
1975 1984	C.S.D.N Presidente Ministro de Defensa	Preside- documentos primarios y secundarios	1.7	Participación del Partido Comunista en la actividad Armada.
1984 1992	C.S.D.N Presidente Comandante general	Preside Documentos primarios y secundarios	2.1	Crecimiento de las organizaciones guerrilleras Golpes a las Fuerzas Militares
1992 2010	C.S.S.D.N Presidente Consejero Presidencial	Secretario-prepara documentos	3.3	Guerra de movimientos Transformación militar Golpes a las guerrillas y debilitamiento

(Continúa)

Año	Organismo y funcionarios	Actividad	Gasto militar % PIB	Situación
2010 2017	C.S.N Presidente Consejero Presidencial	Secretario -prepara documentos	3.2	Cambio de estrategia para toma del poder por guerra económica Acuerdos de paz

Fuente: elaboración propia a partir de decretos publicados.

Referencias

Libros

ARCHILA Aristóbulo, (1922), *Memorias del Ministro de Guerra*, Bogotá, Publicaciones del Ministerio.

ARTEAGA HERNÁNDEZ, Manuel y ARTEAGA CARVAJAL, Jaime (1999): *Historia política de Colombia*, Planeta, págs. 41 a 44; 123 a 143; 157 a 162; 166 a 171; 175 a 178; 211 a 213; 223 a 228; 290 a 293; 314 a 318; 327 a 328.

ATEHORTÚA CRUZ Adolfo León y VELEZ RAMÍREZ Humberto, (1994), *Estado y Fuerzas Armadas en Colombia*, TM Editores, Universidad Javeriana Cali, pág. 56-75, 103, 124, 126-147.

BRICEÑO Manuel, (1880), *Los Comuneros*, Primera Edición Imprenta de Silvestre y Compañía, editado por Carlos Valencia Editores, Litografía Paloquemao, Marzo de 1977, Segunda Edición, págs. 2-3.

BUSHNELL, David (2006) *Colombia una nación a pesar de sí misma*, Planeta, Quinta edición, págs. 62 a 70; 151 a 155; 205 a 213; 292 a 301; 345 a 346.

CARDONA ANGARITA, Jorge Mauricio, (2014), *Históricas operaciones militares*, Ejército, pág. 82.

CENTRONACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (2016), *Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013)*, CNMH-IEPRI, Bogotá, pág. 84.

DÍAZ Francisco, (1934), *El Ejército que Colombia necesita*, Bogotá, Imprenta de Juan Casís.

EJÉRCITO DE COLOMBIA, Memorias de la I División del Ejército, 1914, original en la Biblioteca Luis Ángel Arango.

EJERCITO NACIONAL, (2009), Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario: Hoja de Ruta del Ejército Nacional, Publicaciones del Ejército, pág. 31.

ESTEVES GONZÁLEZ Edgar, Los libros de El Nacional (2004), Batallas de Venezuela desde 1810 hasta 1830, Colección Ares N.o 46.

FERNÁNDEZ ANDRADE Elsa María, El narcotráfico y la descomposición política y social. El caso de Colombia, 2002, pág. 204.

HERNANDEZ de Alba, Guillermo (1978) Banco de la República, Cómo nació la república de Colombia, Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, págs. 33 a 36.

HERNÁNDEZ De Alba Guillermo, (1981) Cómo nació la República de Colombia, Talleres Gráficos Banco de la República págs. 72 a 88.

HEYDICK PUYANA Ana Caterina (2004), Si al acuerdo humanitario. Razones históricas, políticas y jurídicas para realizarlo, Bogotá, Ediciones La Silueta, pág. 174-176; 187 a 189.

HIDALGO Harriet, 2007, Crónicas de Secuestro, Bogotá DC, Ediciones B, págs. 200 y 201.

LEAL BUITRAGO, Francisco (1994): El oficio de la guerra, TM Editores, pág. 56.

LIÉVANO Aguirre Indalecio, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. La revolución de los comuneros, Capítulo XVI, www.banrepcultural.org

LUQUI-LAGLEYZE, Julio Mario-El ejército realista en la guerra de la independencia-Instituto Nacional Sanmartiniano/Fundación Mater Dei, Buenos Aires, 1995, pág. 45.

- MORALES Agustín, (1931), Informe del Ministro de Guerra, Bogotá, Publicaciones del Ministerio.
- PARDO RUEDA, Rafael, (2004): *Historia de las guerras*, Ediciones B Colombia S.A., págs. 77 a 88; 180 a 182; 214 a 244; 257 a 290; 304 a 366.
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1999, Hechos de paz II. Una política para el cambio, Andrés Pastrana Arango, Imprenta Nacional, págs. 119 a 127.
- RAMÍREZ QUINTERO Clímaco, (2012) El conflicto colombiano: Génesis de decisiones políticas de Colón a Juan Manuel Santos Calderón, Universidad Militar Nueva Granada, pág. 196; 206.
- RAMSEY W., Russell (2000): *Guerrilleros y Soldados*, TM Editores, Segunda edición, pág. 59, 67 a 68; 75 a 82; 96, 100, 118, 158, 161, 191.
- RUEDA Santos Rigoberto, La rebelión de los Comuneros, Biblioteca Nacional de Colombia–Ministerio de Cultura, www.bibliotecanacional.gov.co
- UGARRIZA J. E. y PABÓN AYALA N., 2017. Militares y guerrillas. La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958-2016. Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, pág. 156.

Revistas

- IBÁÑEZ SÁNCHEZ José Roberto, Centenario de la Escuela Superior de Guerra, Revista Estudios en Seguridad y Defensa, Edición, 6 Noviembre de 2008.
- MELÉNDEZ CAMARGO Juan David, “Colombia y su participación en la Guerra de Corea: una reflexión tras 64 años de iniciado

el conflicto", *Historia y Memoria* N.º10 (enero-junio, 2015), págs. 199-239.

PINZÓN CAICEDO ARMANDO, *La segunda reforma militar*, *Revista Tribuna del Infante*, ISSN 24223964, edición 111 de agosto de 2017, pág. 19.

TARAPUÉS Diego Fernando, *El delito político en la Constitución de 1991: una herencia constitucional como herramienta en la búsqueda de la paz*, *Papel Político Bogotá (Colombia)*, Vol. 16, N.º 2, julio-diciembre 2011, pág. 387.

Publicaciones electrónicas

Academic, *Tratado Salomón-Lozano*,

<http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1166626>

ARCHILA Mauricio, (1999) *Masacre de las bananeras*: diciembre 6 de 1928, *Revista Credencial Historia*, Biblioteca Virtual Luis Ángel Árago, Septiembre de 1999 N.º 117, www.banrepcultural.org.

ARCHILA Mauricio, (2013) *Movimiento obrero y protesta social en Colombia, 1920-1950*, https://www.researchgate.net/publication/263845251_Movimiento_obrero_y_protesta_social_en_Colombia_1920-1950, pág. 177.

ARRIETA MÉNDEZ Jorge Armando, (2016), *Fracasos operacionales de la Fuerza Pública. El liderazgo promueve la modernización de las Fuerzas Militares*, <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14583/3/ArrietaMendezJorgeArmando2016.pdf>

AVILÉSPINO EFRÉN, *Enciclopedia del Ecuador, Tratado Muñoz Vernaza-Suarez*, <http://www.encyclopediaelecuador.com/historia-del-ecuador/tratado-munoz-vernaza-suarez/>

- BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO, Ospina Pérez Mariano, www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/ospimari.htm
- BANCO DE LA REPÚBLICA, Protocolo de Río de Janeiro, www.banrepcultural.org/sites/default/files/83078/brblaa856184.pdf
- BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO, Ficha bibliográfica, Título Alfonso López Pumarejo y la revolución en marcha, Credencial Historia N.o 192, www.banrepcultural.org, consultada 07-oct-2016.
- CAICEDO GARZÓN Armando, El Tiempo, Clave 1928. Masacre de las bananeras, 28 de noviembre de 1991, www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-198424
- CAMACHO Roldán Salvador, Mis Memorias, Banco de la República, Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, www.Banrepcultural.org/blaavirtual/
- CANCILLERÍA, Frontera terrestre Colombia-Panamá, <https://www.cancilleria.gov.co/colombia/sovereignty/boundary/panama>
- CARACOL RADIO, Serían 70 muertos de la guerrilla en Montezuma, http://caracol.com.co/radio/2000/09/06/nacional/0968220000_094894.html
- CARDONA Jorge, El Espectador, El comienzo de un huracán de violencia llamado extradición, <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-comienzo-de-un-huracan-de-violencia-llamado-extradicion-articulo-708730>
- CARVAJAL RESTREPO Estefanía, (2016), El Colombiano, ¿Por qué Colombia tiene un batallón en el Medio Oriente?, 27-May-2016, www.elcolombiano.com

CASTILLO Freddy, La guerra de los supremos (2013), gradooctavo-2.blogspot.com.co

CUT, Masacre de las bananeras. Diciembre 6 de 1928, cut.org.co/wp-content/uploads/2013-12/MASACRE-DE-LAS-BANANERAS.pdf

DE MOSQUERA Tomás Cipriano, Memoria sobre la vida del general Bolívar, http://bdigital.unal.edu.co/4/154/capitulo_7.pdf

DOMÍNGUEZ CANCELADO José Fernelly, 2011, Las Farc-ep: de la guerra de guerrillas al control territorial, Universidad del Valle, <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bits-tream/10893/3805/4/CB-0450141.pdf>

EL ESPECTADOR, Antioquia bajo el yugo paramilitar, 1987, http://www.elespectador.com/sites/default/files/static_specials/87/1987/index.html

EL ESPECTADOR, Esta es la lista de los magistrados para la JEP, Redacción judicial 26-Sep-2017, <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/esta-es-la-lista-de-los-magistrados-para-la-jep-articulo-715064>

EL ESPECTADOR, Redacción Judicial, (2016), 20 años de la emboscada de las FARC en la Carpa, Guaviare, <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/20-anos-de-emboscada-de-farc-carpa-guaviare-articulo-653385>

EL TIEMPO, Archivo Digital de noticias, infografías, www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-824985

EL TIEMPO, Archivo Digital de noticias, Perfil de Pablo Emilio Moncayo Cabrera-Archivo Digital de Noticias, www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7422409

- EL TIEMPO, Así fue el secuestro de Ingrid Betancourt, Archivo Digital, www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1380000
- EL TIEMPO, Así registró el Tiempo la toma de Mitú, Vaupés, 3 de noviembre de 1998, www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7419487
- EL TIEMPO, Clave 1928. Masacre de las bananeras, 28 de noviembre de 1991, www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-198424
- EL TIEMPO. Documentales. No los olvidamos, <https://www.eltiempo.com/política/proceso-de-paz/secuestro-y-muerte-de-los-diputados-del-valle-99296>
- EL TIEMPO, Otros que hablaron duro y se fueron, www.eltiempo.com, edición del 27 de julio de 1997, <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-622299>
- EL TIEMPO, 26 de junio de 2001, Soldados de Coreguaje resistieron tres ataques de las FARC. <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-481889>.
- EL TIEMPO, Tormentoso retiro del General Ruíz Novoa, www.eltiempo.com, edición del 24 de agosto de 1997, <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-635484>
- FARC, (21 de marzo de 2011, Ataque a la base militar Girasoles, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=9QC7Znz5NLY>
- FARC-EP, Conflicto Armado, 30 de julio de 1994, Julio 1994-Campaña Militar, Despedida de Gaviria, <https://www.farc-ep.co/conflicto-armado/julio-1994-campana-militar-despedida-de-gaviria.html>

FARC, Operación Cerro Tokio-YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=Db2vIOCPhAc>

FLÓREZ MARÍA, El Espectador, 12 de septiembre de 2015, Las Farc no son terroristas ni narcos: Fiscalía.

<https://www.elespectador.com/noticias/nacional/farc-no-son-terroristas-ni-narcos-fiscalia-articulo-585689>

GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA, VICEPRESIDENCIA, Hoy se cumplen 204 años de la “Primera Batalla de Carabobo, <http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/05/28/hoy-se-cumplen-204-anos-de-la-primera-batalla-de-carabobo/>

GÓMEZ LATORRE Armando (1991), La reforma del plebiscito, 1957, El Tiempo, <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-48326>

IBAÑEZ Jose Roberto, El río Magdalena en la guerra de independencia, Banrepcultural, <http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-291/el-rio-magdalena-en-la-guerra-de-independencia>

IBAÑEZ Sánchez José Roberto (2010), Panorama militar de la guerra de independencia, Banco de la República, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Revista Credencial-Historia, Edición 244, abril de 2010, <https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-244/panorama-militar-de-la-guerra-de-independencia>

INFORME21.COM, (2016), Hace 202 años la Batalla de San Mateo inmortalizó lucha de Antonio Ricaurte, <https://informe21.com/actualidad/hace-202-anos-la-batalla-de-san-mateo-inmortalizo-lucha-de-antonio-ricaurte>

- LAS2ORILLAS, Lamasacre de las bananeras 88 años de impunidad, www.las2orillas.co/la-masacre-las-bananeras-88-años-impunidad-2/
- MINISTERIO DE DEFENSA, Política de defensa y seguridad democrática, presentación de la ministra de Defensa Nacional, Marta Lucía Ramírez de Rincón, www.mindefensa.gov.co
- MINISTERIO DE JUSTICIA, Sistema Único de Información Normativa, <http://www.suin-juriscol.gov.co>
- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Arreglo de límites entre la República de Colombia y la República de los Estados Unidos del Brasil, https://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_evolucion/documentos/arreglo_limites_colombia_brasil.pdf
- MURILLO María Luisa, 1999, El Tiempo, Directivos de Wall Street en el Caguán, Edición de 27 de junio, <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-917182>
- OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, ABC Jurisdicción especial para la paz, <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/abc-jurisdiccion-especial-paz.html>
- PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, *Enrique, Olaya Herrera, un liberal visionario*, www.partidoliberal.org.co, consultada el 24-May-2008.
- PEREZ Silva Vicente, Revolución de los comuneros, Credencial Historia, Edición 240 Diciembre de 2009, www.banrepcultural.org
- PRESIDENCIA, Así es Colombia, Presidentes de la República de Colombia, Alfonso López Pumarejo, wsp.presidencia.gov.co

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Acto Legislativo 1 de 4 de abril de 2017, <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2001%20DE%204%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf>

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Presidente Santos firmó decreto que otorga amnistía a 3.252 miembros de las Farc por delitos políticos, Bogotá, lunes, 10 de julio de 2017, <http://es.presidencia.gov.co/noticia/170710-Presidente-Santos-firmo-decreto-que-otorga-amnistia-a-3252-miembros-de-las-Farc-por-delitos-politicos>

REDONDO Barraza Lourdes Paola, Historia política y constitucional de Colombia, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 2001, www.todacolombia.com/historia-de-colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA, Laureano Gómez Castro 1950-1953, http://wsp.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/rc_53.html

REVISTA SEMANA, La noche del General, <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-noche-del-general/33479-3>.

REVISTA SEMANA, La verdadera historia, Sección Nación, edición 277, Septiembre 21 de 1987, www.semana.com/nacion/articulo/la-verdadera-historia/9372-3

REVISTA SEMANA, (23 de septiembre de 2010), Las víctimas de Jojoy, <http://www.semana.com/nacion/articulo/las-victimas-jojoy/122373-3>

REYES CÁRDENAS, Ana Catalina, La independencia en las provincias de Antioquia y Chocó, Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, Revista Credencial, <http://www.ban-repcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/marzo2010/antioquia.htm>

RODRÍGUEZ GÓMEZ Juan Camilo, (2010) La independencia del Socorro en la génesis de la emancipación colombiana, Revista Credencial, Edición 242 febrero 2010, <http://www.ban-repcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2010/socorro.htm>

RUTAS DEL CONFLICTO, Masacre de los Concejales de Rivera, recuperado el 18 de diciembre de 2017, <http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=213>

SALAZAR CÁCERES Carlos Gabriel (2016), Revista Principia Iuris, ISSN Impreso 0124-2067/ISSN (En línea) 2463-2007, Julio-Diciembre 2016, Vol. 13, N.º 26, pág. 37, 40; 41 a 44.

SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA, Tratado, www.sogeo-col.edu.co/documentos/arreglo_limites_colombia_venezuela1.pdf

Jurisprudencia

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, 3 de diciembre de 2014, Radicación: 52 001 23 31 000 1998 00175 01 (26737) CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, 28 de mayo de 2015, Radicación 18001-23-31-000-1999-00162-01(29842), C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Radicación 520012331000199 800580 01 (32.014) CP. Hernán Andrade Rincón.

CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-296, de 6 de julio de 1995, párrafo 125.7 (expediente de observaciones a los af - dávit, folio 5369).

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-332 de 2017, de 17 de mayo de 2017, MP. Antonio José Lizarazo Ocampo.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-542, de 24 de noviembre de 1993, MP. Jorge Arango Mejía.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-572, de 7 de noviembre de 1997 (expediente de observaciones a los af dávits, folio 5373).

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Caso de la Masacre de Mapiripan Vs Colombia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Proceso 29.877 de 01 de agosto de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, Sentencia T-683 de 1999.

Resoluciones, leyes, decretos e informes

CÁMARA DE REPRESENTANTES, Exposición de motivos Proyecto acto legislativo No. 223-2003.

CONSTITUCIÓN DE CUNDINAMARCA DE 30 DE MARZO DE 1811 PROMULGADA EL 4 DE ABRIL DE 1811, articulado tomado de <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-de-cundinamarca-30-de-marzo-de-1811-y-promulgada-el-4-de-abril-de-1811--0/html/>

CONSTITUCIÓN de 1821, Art. 117, 120., del 30 de agosto de 1821, articulado tomado de <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/Colombia%201821.htm>

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE NUEVA GRANADA DE 1853. Artículo 5

- DECRETO LEGISLATIVO 3398 del 24 de diciembre de 1965. Red jurista, Avance jurídico Casa Editorial Ltda.
- DECRETO 102 del 31 de diciembre de 1944.
- DECRETO 128 DE 22 DE ENERO DE 2003.
- DECRETO 0180 DE 27 DE ENERO DE 1988.
- DECRETO 213 DE 23 DE ENERO DE 1991.
- DECRETO 324 DE FEBRERO DE 2000.
- DECRETO 356 DE 11 DE FEBRERO DE 1994, art. 39.
- DECRETO 416 de 1991.
- DECRETO 469 de 17 de marzo de 2015, Art. 1.
- DECRETOS LEGISLATIVOS 666, 667, 668, 669 Y 670 de 1983.
- DECRETO 813 DE 1989.
- DECRETO 814 DE 1989.
- DECRETO 815 DE 19 DE ABRIL DE 1989.
- DECRETO 835 del 16 de abril de 1951, Art. 3, 12.
- DECRETO 970 DEL 15 DE ABRIL DE 1942, expedido en uso de facultades extraordinarias recibidas por Ley 128 de 1942, Art. 16.
- DECRETO 1155 DEL 10 DE JULIO DE 1992.
- DECRETO 1194 DE 8 DE JUNIO DE 1989.
- DECRETO 1274 DE 28 DE JULIO DE 2017.
- DECRETO 1512 de 11 de agosto de 2000, Art. 6.
- DECRETO 1793 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1992.

DECRETO 1923 de 1978.

DECRETO 1943 DE 12 DE AGOSTO DE 1991.

DECRETO 2134 de 1992.

DECRETO 2218 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1984.

DECRETO 2266 DE 4 DE OCTUBRE DE 1991.

DECRETO EJECUTIVO 2271 DE 1995.

DECRETO 2335 de 9 de diciembre de 1971.

DECRETO 2535 DE DICIEMBRE DE 1993.

DECRETO 2767 DE 21 DE AGOSTO DE 2004.

DECRETO 2790 DE 1990.

DECRETO 2974 DE DICIEMBRE DE 1997

DECRETO 3030 DE 14 DE DICIEMBRE DE 1990.

DECRETO 3360 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2003.

DECRETO 4748 de 23 de diciembre de 2010, Art. 3.

INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA DE 17 DE FEBRERO DE 2004, E/CN.4/2004/13, párr. 13; Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Diálogos y Negociación, Grupos de Auto-defensa, en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autodefensa/dialogos.htm, e INFORME DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN EN COLOMBIA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2004, OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, párr. 75.

LEY 2 DEL 1 DE ENERO DE 1983.

LEY 4 de 1991.

LEY 35 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1982.

LEY 40 DEL 19 DE ENERO 1993

LEY 49 DEL 4 DE JUNIO DE 1985.

LEY 48 de 1968.

LEY 77 de 1989, reglamentada por el Decreto 206 del 22 de enero de 1990.

LEY 200 DE 1936.

LEY 241 DE 26 DE DICIEMBRE DE 1995.

LEY 418 DE 26 DE DICIEMBRE DE 1997.

LEY 548 DE 23 DE DICIEMBRE DE 1999.

LEY 782 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2002.

LEY 975 DE 25 DE JULIO DE 2005.

MORENO DE Caro Carlos, 6 de febrero de 2003, Acuerdo Humanitario, Proyecto de

Ley 094 de 2004, <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2002-2006/2003-2004?format=html&reset=false&ordering=ASC&orderby=Estado&limit=25&start=75>

RESOLUCIÓN 368 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 1995.

Sitios web

HISTORIADELPERU.CARPETAPEDAGOGICA.COM, Guerra con La Gran Colombia (1828-1829).

NASSAR Hassan, 16-jun-2017, @HassNassarpic.twitter.com/pb-nh3VcLBFPETIONHISTORIADEVENEZUELA.BLOGSPOT.COM.
CO, Disolución de La Gran Colombia.

WWW.COLOMBIA.COM, Patria Boba (1810-1815).

WWW.VENELOGÍA.COM, La Cosiata: La revolución de los morrocoyes (1826).

*Este libro se terminó de imprimir y encuadernar
en Proeditor, en mayo de 2020. Fue publicado
por la Fundación Universitaria del Área Andina.
Se empleó la fuente tipográfica Myriad Pro.*

Este libro plantea una aproximación a la historia política de la Colombia signada por la violencia, inicialmente para librarnos de la dominación económica española, luego para conformar la República y después para definir la posesión del poder. La nación siempre ha estado en armas e inconforme con los gobernantes, de modo que las armas de la República han ejercido la fuerza para imponer la ley, y la nación armada para incumplirla. Normatividad y fuerza han caminado en paralelo, intentando controlarse una a otra, dando como resultado una mutación que nos ha conducido a una convivencia tal, que como lo evidenciamos, la norma es una respuesta adecuada a los imperativos de la violencia. Culmina esta visión en el Acuerdo de Paz entre gobierno y subversión, sin la seguridad de haber cambiado la forma de construir nuestra historia futura.

Daniel José Vásquez Hincapié es abogado, Administrador de Empresas y Profesional Militar. Doctorado con tesis laureada Sobresaliente Cum Laude por la Universidad San Pablo CEU de Madrid (España), con maestría y especialización en derecho administrativo en la Universidad Sergio Arboleda. Administrador con especialización en Finanzas y Administración Pública en la Universidad Militar Nueva Granada y Profesional Militar con grado de coronel en retiro y con especialización en Gerencia Logística en la Escuela de Logística del Ejército. Se ha desempeñado en la academia como director de programa, director del centro de investigaciones, docente del área de derecho público e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada; docente de derecho público en la Escuela Militar de Cadetes José María Cordova; docente del área de Logística Militar e investigador en la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes. Conferencista invitado internacional en la Universidad de Michoacán (México) y autor de trabajos de investigación publicados en revistas indexadas en Colombia.

ISBN: 978-958-5539-93-8



AREANDINA